GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

AÑO CXLI — MES VIII Caracas, miércoles 28 de mayo de 2014 Número 40.421

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 1.010, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, al Presupuesto de Gastos vigente del Consejo Federal de Gobierno.

Decreto Nº 1.011, mediante el cual se nombra como Miembros de la Junta de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), a los ciudadanos y a la ciudadana que en él se señalan.

Decreto Nº 1.012, mediante el cual se nombra como representantes de la República Bolivariana de Venezuela ante el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, a los ciudadanos y a la ciudadana que en él se mencionan.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto Nº 828, de fecha 17 de marzo de 2014.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

Resolución mediante la cual se delega en la ciudadana Yalitza Coromoto García Montiel, en su condición de Directora General de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública, adscrita al Despacho de la Viceministra de Planificación Social e Institucional, las atribuciones y firma de los actos que en ella se señalan.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA

Resolución Conjunta mediante la cual se establece que el titular del Despacho del Viceministro o Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, queda designado para culminar la transferencia efectiva y material de los activos no liquidados de los extintos Fondo Nacional del Café (FONCAFÉ) y del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP).

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, PARA VIVIENDA Y HÁBITAT, PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA

Resolución Conjunta mediante la cual se establece que el titular del Despacho del Viceministro o Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, queda designado para culminar la transferencia efectiva y material de los activos no liquidados del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano General de División José Alejandro Montero Flores, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada, sin delegación de firma, que en ella se señala.

Acta.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

Fundación Bosque Macuto

Providencia mediante la cual se constituye, con carácter permanente, la Comisión de Contrataciones de esta Fundación, integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS

CIARA

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Alberto Daniel Galindo Rodríguez, como Director del Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable para la Seguridad Alimentaria de las Zonas Semiáridas de los estados Falcón y Lara (PROSALAFA III), en calidad de Encargado, ejecutado por dicha Fundación.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS

Resolución Conjunta mediante la cual se autorizan los Actos Jurídicos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ABAE

Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana Érika Jakeline Roldán Restrepo, como Directora (E) de la Oficina de Gestión Administrativa, de este Organismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Transitorio de la Estructura Organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sala Constitucional

«Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija interpretación vinculante relativa a la limitación del derecho a la libertad de expresión en medios impresos de libre acceso al público en protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes».

«Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la nulidad de los Artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en materia del recurso especial de juridicidad».

«Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la nulidad absoluta de los Artículos 12.14 y 117 parágrafo único de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del estado Bolívar y los Códigos de Actividades nros. 22-15 y 22-16, del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del estado Bolívar, así como la nulidad parcial del Artículo 6 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del estado Bolívar».

«Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ordena, con carácter vinculante, que las solicitudes efectuadas para el ejercicio unilateral de la patria potestad, conforme al Artículo 262 del Código Civil, deben tramitarse conforme a lo establecido en el Artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes».

Avisos

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 1.010 27 de mayo de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 13 del artículo 236 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 3° de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigente, y previa autorización concedida por la Asamblea Nacional, en Consejo de Ministros.

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de la misma fecha.

DECRETA

Artículo 1º. Se acuerda un Crédito Adicional por la cantidad de **TRES MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000.000),** al Presupuesto de Gastos Vigente del **CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO,** de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria:

CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO			**Bs.**	**3.000.000.000**
Proyecto:	**639999000**	**"Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados"**	"	**3.000.000.000**
Acción específica:	**639999001**	**"Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos del Ente Fondo de Compensación Interterritorial"**	"	**3.000.000.000**
Acción específica:	**639999001**	**"Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos del Ente Fondo de Compensación Interterritorial"**	"	**3.000.000.000**
Partida:	**4.07**	**"Transferencias y donaciones"** (Otras fuentes)	"	**3.000.000.000**
Sub-Partida Genérica, Específica y Sub-Específica:	03.03.02	"Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales"	"	3.000.000.000
	A0249	Fondo de Compensación Interterritorial	"	3.000.000.000

Artículo 2º. El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y El Director Ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno quedan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno
(L.S.)

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(L.S.)

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)

ELÍAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Planificación
(L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para la Defensa
(L.S.)

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Comercio
(L.S.)

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA

Refrendado
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias
(L.S.)

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Turismo
(L.S.)

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

YVÁN EDUARDO GIL PINTO

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria
(L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Educación
(L.S.)

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para la Salud
(L.S.)

FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre
(L.S.)

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)

HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
(L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)

RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L.S.)

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)

VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas
(L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Central
(L.S.)

LUIS ALFREDO MOTTA DOMINGUEZ

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Occidental
(L.S.)

LUIS RAMÓN REYES REYES

Refrendado
La Ministra de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Los Llanos
(L.S.)

NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA

Refrendado
La Ministra de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Oriental
(L.S.)

MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Refrendado
La Ministra de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Guayana
(L.S.)

NICIA MARINA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral de la Zona Marítima
y Espacios Insulares
(L.S.)

MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI

Refrendado
El Ministro de Estado para la Región
Estratégica de Desarrollo Integral
Los Andes
(L.S.)

CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA

Decreto Nº 1.011 28 de mayo de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 *ejusdem*, y de conformidad con lo previsto en la Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe.

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto Nº 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.126 de fecha 11 de Marzo de 2013.

DECRETA

Artículo 1º. Nombro al ciudadano **SIMON ALEJANDRO ZERPA DELGADO,** titular de la Cédula de Identidad Nº **V- 16.544.324,** Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), como **Gobernador Principal** ante la Junta de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).

Artículo 2º. Nombro a la ciudadana **VERÓNICA VALENTINA GUERRERO RODRÍGUEZ**, titular de la Cédula de Identidad Nº **V-11.227.380,** Viceministra para América Latina y El Caribe, como **Gobernadora Alterna,** ante la Junta de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).

Artículo 3º. Nombro al ciudadano **SANTIAGO ARMANDO LAZO ORTEGA**, titular de la Cédula de Identidad Nº **V-16.034.796,** Vicepresidente del Banco de Desarrollo

Económico y Social de Venezuela (BANDES), como **Director** ante la Junta de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).

Artículo 4º. Nombro al ciudadano **RAÚL LI CAUSI**, titular de la Cédula de Identidad N° **V-14.991.160,** Director para América Latina y El Caribe, como **Director Alterno** ante la Junta de Gobernadores del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).

Artículo 5º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Decreto Nº 1.012 28 de mayo de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236 *ejusdem*, y de conformidad con lo previsto en la Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA.

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Vicepresidente Ejecutivo de la República
Por delegación del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, según Decreto N° 9.402 de fecha 11 de Marzo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.126 de fecha 11 de Marzo de 2013.

DECRETA

Artículo 1º. Nombro como representantes de la República Bolivariana de Venezuela ante el **FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA, FIDA**, en los cargos que se indica, a los ciudadanos que se mencionan a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº C.I	CARGO
SIMÓN A. ZERPA DELGADO	V- 16.544.324	GOBERNADOR
SANTIAGO LAZO ORTEGA	V- 16.034.796	REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA EJECUTIVA

Artículo 2º. De acuerdo a los nombramientos efectuados conforme al artículo anterior, la representación de la República Bolivariana de Venezuela ante el **FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA, FIDA**, es la siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº C.I	CARGO
SIMÓN A. ZERPA DELGADO	V- 16.544.324	GOBERNADOR
GLADYS URBANEJA	V- 3.737.731	GOBERNADORA SUPLENTE
SANTIAGO LAZO ORTEGA	V- 16.034.796	REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA EJECUTIVA

Artículo 3º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AVISO OFICIAL

Por cuanto, en el Decreto N° 828 de fecha 17 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.373 de la misma fecha, mediante el cual se crea la Universidad Territorial de Amazonas, en el marco de la Misión Alma Mater, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual tendrá su sede principal en Picatonal, sector Provincial, Municipio Altures, en el estado Amazonas, se incurrió en el siguiente error material:

En el Artículo 11.

Donde dice:

"**Artículo 11.** La Universidad Politécnica Territorial de Amazonas, se articulará en red con otras instituciones (...)".

Debe decir:

"**Artículo 11.** La Universidad Territorial de Amazonas, se articulará en red con otras instituciones (...)".

Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, manteniéndose el número, fecha del Decreto y demás datos a que hubiere lugar.

Dado en Caracas, a los quince (15) días del mes de mayo de 2014. Año 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Comuníquese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Vicepresidente Ejecutivo

Decreto Nº 828 17 de Marzo de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y la refundación del Estado venezolano; basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 226 y 236, numerales 2 y 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 10 de la Ley de Universidades; en concordancia con lo previsto en los artículos 109 y 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6, 27 y 34 de la Ley Orgánica de Educación; 74, y 76 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el artículo 3, literal c, del Decreto N° 6.650 de fecha 24 de marzo de 2009, mediante el cual se formaliza la creación de la Misión Alma Mater; oída la opinión favorable del Consejo Nacional de Universidades, emitida mediante decisión Nº 005 en sesión del 13 de mayo de 2010, refrendada por la Resolución Nº 399 del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, de fecha 28 de mayo de 2010, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que, la educación universitaria es un derecho humano fundamental y un deber del Estado Docente, y que para profundizar el proceso de independencia y soberanía de nuestro país; así como, para fortalecer el Estado democrático y social de derecho y justicia, resulta indispensable la formación integral, colectiva, de calidad y permanente, de hombres y mujeres, con un enfoque humanístico y social, teniendo como objetivo estratégico la generación, sistematización y apropiación social del conocimiento y la innovación como procesos que contribuyan al desarrollo soberano, humano, integral y sustentable de la Nación,

CONSIDERANDO

Que, el Plan de la Patria (Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013, busca dar continuidad a la construcción del Socialismo del Siglo XXI, mediante una sociedad igualitaria y justa, profundizando la política de territorialización y pertinencia de la gestión para el desarrollo de la educación universitaria, que garantice el ingreso a los jóvenes a través de la Misión Sucre y la Misión Alma Mater,

CONSIDERANDO

Que, la Amazonía es una región geohistórica y natural de carácter estratégico, de alto valor para conservar la vida en el planeta y donde confluyen numerosos pueblos indígenas, la biodiversidad y las fuentes de agua dulce de mayor dimensión en la Madre Tierra, para el nacimiento y preservación de la vida humana y de las especies que en ella habita, espacio natural de riquezas incomparables, cuya naturalidad y virginidad proporciona el escenario perfecto para la confluencia de los pueblos hermanos de Suramérica,

CONSIDERANDO

Que, el Estado Amazonas cuenta con una amplia superficie territorial, es un estado fronterizo con los países hermanos de Brasil y Colombia, hogar ancestral de 21 pueblos indígenas, nacimiento de nuestro principal río, el Orinoco; es parte de la Amazonía y con una extraordinaria diversidad biológica, y que el pueblo amazonense requiere de una institucionalidad universitaria propia que le permita empoderarse, ampliar su autoconocimiento, preservar, enriquecer y garantizar la apropiación social de su patrimonio histórico y natural; así como, asumir su desarrollo económico, social y cultural, con base en el equilibrio en la naturaleza, el Poder Popular, la justicia, la igualdad, la interculturalidad, la educación intercultural multibilingüe y la educación propia,

CONSIDERANDO

Que, la Misión Alma Mater tiene entre sus objetivos generales, el establecimiento de una nueva red institucional en la educación universitaria venezolana; para así garantizar la participación de todas y todos en la generación, transformación y difusión del conocimiento; reivindicar el carácter humanista de la educación universitaria; fortalecer un nuevo modelo académico comprometido con la inclusión y la transformación social; profundizar la municipalización de la educación universitaria vinculada a la vocación y necesidades productivas, sociales y culturales de los espacios territoriales; así como, potenciar la educación universitaria como proyecto estratégico de la Nación,

CONSIDERANDO

Que, en este marco es necesario la creación de nuevas instituciones y la transformación de la educación universitaria existente, generando nuevos modelos de gestión, formación, generación y socialización de conocimientos vinculados a nuestras comunidades.

DECRETO

Creación

Artículo 1°. Se crea la Universidad Territorial de Amazonas, en el marco de la Misión Alma Mater, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual tendrá su sede principal en Picatonal, sector Provincial, Municipio Atures, en el estado Amazonas.

Objeto

Artículo 2°. La Universidad Territorial de Amazonas, desarrollará proyectos y programas académicos de formación,

creación intelectual, desarrollo tecnológico, innovación, asesoría y vinculación social en toda la Amazonía, en estrecha relación con la Misión Sucre y, a través de alianzas con otras instituciones de educación universitaria. La creación de programas y proyectos responderá a los requerimientos del desarrollo territorial integral y estará en correspondencia con las necesidades planteadas por el Poder Popular, previa aprobación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el cumplimiento de los trámites legales respectivos.

Naturaleza

Artículo 3°. La Universidad Territorial de Amazonas es un instrumento del pueblo de la Amazonía para contribuir a su desarrollo integral y sustentable, en el marco de la construcción del socialismo bolivariano, a través de la formación integral de alto nivel, la generación y apropiación social del conocimiento y la vinculación activa con proyectos de desarrollo, empresas socialistas, las comunas y el Poder Popular, en función del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.

Encargo Social

Artículo 4°. La Universidad Territorial de Amazonas tiene como encargo social contribuir activamente al desarrollo endógeno integral y sustentable de la Amazonía, con la participación activa y permanente del Poder Popular, abarcando múltiples campos de conocimiento, bajo enfoques inter y transdisciplinarios, para contribuir al abordaje de los problemas y retos de su área de influencia territorial, de acuerdo con las necesidades y potencialidades del pueblo, a partir de las realidades geohistóricas, socioterritoriales, interculturales, *lingüísticas,* culturales, sociales y productivas, contribuyendo a conformar una nueva geopolítica nacional.

Objetivos Estratégicos

Artículo 5°. La Universidad Territorial de Amazonas tiene como objetivos estratégicos los siguientes:

1. Desarrollar una formación integral de alto nivel, en estrecha relación con las comunidades, sensibilizada y vinculada a los problemas, retos y proyectos en el contexto territorial, comprometida con el pueblo venezolano, el desarrollo integral de la Amazonía y los valores de igualdad, justicia, paz, libertad, solidaridad, cooperación, respetuosa de la diversidad cultural y lingüística, y que actúe en equilibrio con la naturaleza, en la lucha por la erradicación de todas las formas de opresión, explotación, dominación, subordinación y discriminación.

2. Garantizar la universalización del derecho a una educación universitaria de calidad en su área de influencia territorial, mediante la articulación con la Misión Sucre y otras instituciones universitarias, bajo los principios de cooperación solidaria y complementariedad.

3. Dinamizar el desarrollo endógeno integral y sustentable de la Amazonía, como eje puntal para la transformación social y productiva del territorio, mediante la formación integral, la interacción, el intercambio y el aprendizaje, en un proceso enriquecedor permanente con los saberes ancestrales de los pueblos, ayudando a la conformación de la nueva geopolítica nacional, el fortalecimiento de la conciencia colectiva y el Poder Popular.

4. Contribuir activamente a fortalecer la soberanía y proteger las especies, su diversidad y los elementos genéticos que la integran para contribuir con el desarrollo de nuevos paradigmas, científicos y tecnológicos de la Nación, a través del estudio, la investigación y el trabajo creador en múltiples campos de conocimiento, enfocados en el abordaje de los problemas en su área de influencia territorial, de acuerdo con las necesidades del pueblo.

5. Fortalecer la participación popular en la vida social, las capacidades productivas en manos del pueblo y la gestión directa de la producción y distribución de bienes y servicios por parte de las y los trabajadores y las comunidades, bajo criterios de sustentabilidad social y ambiental.

6. Abordar los problemas éticos, culturales, interculturales, sociales, políticos, socio-productivos, lingüísticos y ambientales en su área de influencia territorial, con perspectiva nacional y de integración latinoamericana y caribeña.

7. Desarrollar una gestión institucional participativa y transparente al servicio del pueblo venezolano, promoviendo el protagonismo popular en la vida universitaria y la presencia activa de la universidad en las comunidades.

8. Contribuir activamente a la conformación de un subsistema nacional de educación universitaria y al trabajo integrado y solidario con instituciones universitarias de América Latina, el Caribe y demás pueblos del Sur.

Campos de Conocimiento

Artículo 6°. La Universidad Territorial de Amazonas abordará las áreas de conocimiento necesarias para el desarrollo de la Amazonía, la vitalización y fortalecimiento de los pueblos indígenas, atención de las dinámicas fronterizas, preservación y estudio de la biodiversidad, ecosistemas, recursos naturales, conservación de la fauna silvestre, vegetación, recursos hídricos, suelos, minerales, generación de energías alternativas y limpias.

Desarrollará tecnologías apropiadas asociadas a técnicas para la siembra y procesamiento de alimentos, técnicas ancestrales de cultivo y control ecológico de plagas. Creará temáticas enmarcadas en procesos de organización y producción para la promoción y fortalecimiento de la organización del Poder Popular.

Actuará directamente en el reconocimiento, rescate y preservación de los Pueblos Originarios, considerando elementos de territorialidad asociados a la interculturalidad y la producción sustentable. Profundizará en las ciencias de la salud, recursos genéticos, rescate de la medicina autóctona, ancestral y tropical, preservando el genoma de los seres vivos que no podrá ser patentando ni enajenado.

Desarrollará áreas asociadas a lo estratégico de la Amazonía, con estudios introspectivos y prospectivos, con proyección local, nacional y global. Contribuirá con el desarrollo de las políticas de integración latinoamericana y de los pueblos del Sur. Y todos aquellos campos necesarios para garantizar la mayor suma de felicidad posible para el pueblo amazónico.

Patrimonio

Artículo 7°. El patrimonio de la Universidad Territorial de Amazonas, estará integrado por:

1. La sede principal ubicada en Picatonal, sector Provincial, Municipio Atures, en el estado Amazonas.

2. Los bienes muebles e inmuebles propiedad de la República Bolivariana de Venezuela que le sean transferidos.

3. Los aportes ordinarios que se le asignen mediante las leyes anuales de presupuesto y los recursos extraordinarios otorgados, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

4. Los aportes provenientes de otros entes públicos y aquellos establecidos en leyes especiales.

5. Las donaciones que reciba de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia.

6. Los recursos provenientes de convenios, acuerdos y actos suscritos de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

7. Los bienes que adquiera por cualquier título lícito.

Presupuesto Participativo

Artículo 8°. La Universidad Territorial de Amazonas establecerá los mecanismos necesarios para que en la elaboración, ejecución y control social de su presupuesto y en la administración de su patrimonio participen las y los estudiantes, las y los profesores, las y los trabajadores administrativos, las y los obreros, voceras y voceros del Poder Popular, para garantizar la ética y la transparencia en el manejo de sus recursos.

Organización y Funcionamiento

Artículo 9°. La organización y funcionamiento de la Universidad Territorial de Amazonas se establecerán mediante reglamento dictado por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. La organización y funcionamiento deberán adaptarse al encargo social de la Universidad, para desarrollar modelos de gestión, formación, generación y socialización de conocimientos estrechamente vinculados a las comunidades, así como, para facilitar el trabajo cooperativo, solidario y articulado con otras instituciones.

Previsiones jurídicas y administrativas para el desarrollo de la vinculación social de la Universidad

Artículo 10. La organización y funcionamiento de la Universidad Territorial de Amazonas, estarán dirigidos a asegurar el mayor aporte institucional al desarrollo territorial en todas sus dimensiones. En tal sentido, se establecerán las previsiones jurídicas y administrativas para que, en el cumplimiento de sus fines académicos y sociales, la Universidad desarrolle, entre otras actividades: asesoramiento a organizaciones sociales, gobiernos regionales, locales y empresas socialistas; desarrollo y mejoramiento de productos y procesos productivos; desarrollo de innovaciones y tecnologías; transferencia de bienes tecnológicos; proyectos de investigación conjunta entre la Universidad y las empresas socialistas; desarrollo de empresas de propiedad social; fomento para que las empresas, centros de servicios y comunidades se constituyan en espacios de formación, así como, la participación en proyectos comunitarios que conduzcan al fortalecimiento de las actividades socioproductivas, educativas, políticas, culturales y económicas, en el proceso de consolidación del Poder Popular.

Articulación con la Red Universitaria Alma Mater

Artículo 11. La Universidad Territorial de Amazonas, se articulará en red con otras instituciones de educación universitaria en función de:

1. Construir comunidades de conocimiento y aprendizaje, dirigidas a la generación, transformación y apropiación social del conocimiento, en beneficio de la Nación.

2. Desarrollar programas de formación, creación intelectual y vinculación social compartidos.

3. Facilitar el intercambio de saberes y experiencias, la movilidad de las y los estudiantes, profesoras y profesores; así como, el uso y desarrollo de recursos educativos, bases de información e infraestructura que puedan ser aprovechados por distintas instituciones.

4. Coordinar esfuerzos con organismos y entes del Estado, empresas y organizaciones de participación popular.

5. Generar modelos de gestión alternativos, basados en una cultura de trabajo compartido, bajo los principios de la cooperación, solidaridad y complementariedad.

Disponibilidad de Recursos Presupuestarios

Artículo 12. Los Ministros o las Ministras del Poder Popular para la Educación Universitaria y de Economía, Finanzas y Banca Pública ejecutarán las acciones que sean necesarias para asegurar los recursos presupuestarios requeridos para el cumplimiento del presente Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. El Ministro o la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria designará un Consejo Directivo Provisional, que ejercerá en forma colegiada la autoridad académica y administrativa de la Universidad, hasta tanto éste promulgue el reglamento de organización y funcionamiento de la misma. En un plazo de noventa (90) días a partir de su nombramiento, el Consejo Directivo Provisional presentará ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria el plan de trabajo para el inicio de las actividades de la Universidad.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El Ministro o la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, queda encargado o encargada de la ejecución del presente Decreto; así como, de la resolución de las dudas y controversias que pudieren suscitarse durante su ejecución.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil catorce. Año 203º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la Republica.
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)

HUGO CÉSAR CABEZAS BRACAMONTE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para las Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES

Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)

ELÍAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Economía, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

DANTE RAFAEL RIVAS QUIJADA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Industrias
(L.S.)

WILMER OMAR BARRIENTOS FERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

YVÁN EDUARDO GIL PINTO

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

FRANCISCO ALEJANDRO ARMADA PÉREZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre
(L.S.)

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)

HEBERT JOSUE GARCÍA PLAZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Vivienda y Hábitat
(L.S.)

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)

RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

MIGUEL LEONARDO RODRIGUEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Innovación
(L.S.)

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

FÉLIX RAMÓN OSORIO GUZMÁN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

FIDEL ERNESTO BARBARITO HERNÁNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
Para la Energía Eléctrica
(L.S.)

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)

VÍCTOR JOSÉ CLARK BOSCÁN

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Transformación Revolucionaria
de la Gran Caracas
(L.S.)

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Central
(L.S.)

DIEGO ANTONIO GUERRA BARRETO

Refrendado
EL Ministro de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Occidental
(L.S.)

LUIS RAMÓN REYES REYES

Refrendado
La Ministra de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Los Llanos
(L.S.)

NANCY EVARISTA PEREZ SIERRA

Refrendado
La Ministra de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Oriental
(L.S.)

MARIA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral Guayana
(L.S.)

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

Refrendado
La Ministra de Estado para
la Región Estratégica de Desarrollo
Integral de la Zona Marítima
y Espacios Insulares
(L.S.)

MARLENE YADIRA CÓRDOVA DE PIERUZZI

Refrendado
El Ministro de Estado para la Región
Estratégica de Desarrollo Integral
Los Andes
(L.S.)

CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de Planificación
Despacho del Ministro

Caracas, 08 de abril de 2014

RESOLUCIÓN Nº 07
203º, 155º y 15º

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 26 del artículo 77 y 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; el numeral 2 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; artículo 3 del Decreto No. 237 de fecha 15 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.213, de fecha 23 del mismo mes y año y el artículo 1 del Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, se delega, a tenor de lo previsto en el literal "m" del artículo 34 del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación, se delega en la ciudadana **YALITZA COROMOTO GARCÍA MONTIEL**, titular de la cédula de identidad **Nº 5.808.242**, en su condición de Directora General de Seguimiento y Evaluación de la Función Pública adscrita al Despacho de la Viceministra de Planificación Social e Institucional, de conformidad con la Resolución Nº 011 de fecha 13 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40.299, de fecha 21 de noviembre de 2013, las atribuciones y firmas de los actos que a continuación se señalan:

1- Suscribir las certificaciones de cargos desempeñados en la Administración Pública.
2- Certificar los datos y documentos contenidos en los expedientes que cursan en el Registro Nacional de Funcionarios y Funcionarias Públicos.

El presente acto de delegación no entraña la facultad de subdelegar las atribuciones conferidas.

El funcionario objeto de la presente delegación presentará al Ministro, en la forma que éste indique, una lista detallada de los actos y documentos sobre los cuales ejerza la presente delegación.

Los actos y documentos que constituyan ejercicio de la presente delegación, deberán indicar bajo la firma del funcionario delegado, la fecha y el número de esta Resolución, así como la fecha y el número de la Gaceta Oficial donde hubiere sido publicada.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y deja sin efecto la Resolución Nº 003 de fecha 26 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.261, de fecha 30 de septiembre de 2013.

Comuníquese y Publíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
DESPACHO DEL MINISTRO

JORGE ANTONIO GIORDANI CORDERO
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN
Decreto Presidencial Nº 002 de fecha 22 de Abril de 2013
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151
de fecha 22 de abril de 2013

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/Nº 026/2014. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/Nº 164. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/Nº 044. CARACAS, 28 DE ABRIL DE 2014.

204º, 155º y 15º

Los Ministros del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para Economía, Finanzas y Banca Pública, designados los dos primeros mediante Decreto Nº 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha, y el último, mediante Decreto Nº 738 de fecha 16 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.335 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en los numerales 1, 3, 4 y 27 del artículo 77 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2.008; artículo 14 numerales 1 y 18 del Decreto Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de fecha 2 de junio de 2009, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009; el artículo 3 numerales 1 y 19 del Decreto Nº 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011 mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, hoy para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.644 de la misma fecha; el artículo 2 numerales 1 y 24 del Decreto Nº 737 de fecha 15 de enero de 2014 mediante el cual se modifica la denominación del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por la de Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y se establecen sus competencias, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.335 de fecha 16 de enero de 2014,

Por cuanto, mediante el artículo 1º del Decreto Nº 6.863 de fecha 11 de agosto de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.239 de la misma fecha, se designó al entonces Viceministro o Viceministra de Desarrollo Rural Integral del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para que culminara la transferencia efectiva y material de los activos no liquidados de los extintos Fondo Nacional del Café (FONCAFÉ) y del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), en los términos y condiciones contenidos en dicho Decreto,

Por cuanto, los Ministros del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; del Poder Popular para Economía y Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública; y para Relaciones Interiores y Justicia, hoy Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, quedaron encargados conforme se indicó en el artículo 11, de la ejecución del precitado Decreto Nº 6.863,

Por cuanto, mediante el artículo 1º numeral 10, sub-numeral 10.2 del Decreto Nº 730 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.330 de la misma fecha, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.337 de fecha 20 de enero de 2014, se creó el Despacho del Viceministro o de la Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras,

Por cuanto, mediante el 1º numeral artículo 9, sub-numeral 9.2 del Decreto Nº 739 de fecha 20 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.337 de la misma fecha, se efectuó el nombramiento del titular del Despacho del Viceministro o Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras,

Por cuanto, como resultado del proceso de liquidación del Fondo Nacional del Café (FONCAFÉ) y del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), subsisten derechos y obligaciones, los cuales deben ser asumidos para su efectivo ejercicio, y es obligación del Ejecutivo Nacional adoptar las medidas a que hubiere lugar y estime pertinentes, para que se verifique la culminación de la transferencia efectiva y material de los activos no

liquidados de los extintos Fondo Nacional del Café (FONCAFÉ) y del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP),

RESUELVEN

Artículo 1. El titular del Despacho del Viceministro o Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, queda designado para culminar la transferencia efectiva y material de los activos no liquidados de los extintos Fondo Nacional del Café (FONCAFÉ) y del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP).

Artículo 2. El funcionario o la funcionaria designado podrá efectuar los actos y suscribir todos los documentos necesarios para perfeccionar y formalizar la tradición efectiva de los activos no liquidados de los extintos Fondo Nacional del Café (FONCAFÉ) y del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), comprobar y declarar los pasivos resultantes del proceso de liquidación, otorgar finiquito o remisión de créditos u obligaciones y liberación de gravámenes y, en general, suscribir todos aquellos actos que fueren necesarios hasta la efectiva culminación y ejecución conforme a lo previsto en el Decreto Nº 6.863 de fecha 11 de agosto de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.239 de la misma fecha.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

RAFAEL EDUARDO GIL PINTO
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES
Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Ministro del Poder Popular
de Economía, Finanzas y Banca Pública

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, PARA VIVIENDA Y HÁBITAT, PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 025/2014. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 26 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ. DESPACHO DEL MINISTRO DM/N° 163. Y MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMIA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 045. CARACAS, 28 DE ABRIL DE 2014.

204°, 155° y 15°

Los Ministros del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para Vivienda y Hábitat, para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para Economía, Finanzas y Banca Pública, designados los tres primeros mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha, y el último, mediante Decreto Nº 737 de fecha 16 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.335 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en los numerales 1, 3 y 27 del artículo 77 y numerales 1, 2 y 8 del artículo 119 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2.008; artículo 14 numerales 1 y 18 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de fecha 2 de junio de 2009, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009; el artículo 3º numerales 1 y 16 del Decreto Nº 7.513 de fecha 22 de junio de 2010, mediante el cual se crea y establecen las atribuciones del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat; el artículo 3 numerales 1 y 19 del Decreto Nº 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011 mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, hoy para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.644 de la misma fecha; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 numerales 1 y 24 del Decreto N° 737 de fecha 15 de enero de 2014 mediante el cual se modifica la denominación del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, por la de Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, y se establecen sus competencias, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.335 de fecha 16 de enero de 2014,

Por cuanto, mediante el artículo 1º del Decreto Nº 6.390 de fecha 02 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.010 de fecha 5 de septiembre de 2008, se designó al entonces Viceministro o Viceministra de Desarrollo Rural Integral del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, para que culminara la transferencia efectiva y material de los activos no liquidados del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN), en los términos y condiciones contenidos en dicho Decreto,

Por cuanto, los Ministros del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; del Poder Popular para Economía y Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública; para Relaciones Interiores y Justicia, hoy Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz; y para la Vivienda y Hábitat quedaron encargados conforme se indicó en el artículo 18, de la ejecución del precitado Decreto Nº 6.390,

Por cuanto, mediante el artículo 1º numeral 10, sub-numeral 10.2 del Decreto Nº 730 de fecha 09 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.330 de la misma fecha, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.337 de fecha 20 de enero de 2014, se creó el Despacho del Viceministro o de la Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras,

Por cuanto, mediante el 1º numeral artículo 9, sub-numeral 9.2 del Decreto Nº 739 de fecha 20 de enero de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.337 de la misma fecha, se efectuó el nombramiento del titular del Despacho del Viceministro o Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras,

Por cuanto, como resultado del proceso de liquidación subsisten derechos y obligaciones, los cuales deben ser asumidos para su efectivo ejercicio, y es obligación del Ejecutivo Nacional adoptar las medidas a que hubiere lugar y estime pertinentes para que se verifique la culminación de la transferencia efectiva y material de derechos y obligaciones del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN),

RESUELVEN

Artículo 1. El titular del Despacho del Viceministro o Viceministra de Producción Agrícola Pecuaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, queda designado para culminar la transferencia efectiva y material de los activos no liquidados del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN),

Artículo 2. El funcionario o la funcionaria designado podrá efectuar los actos y suscribir todos los documentos necesarios para perfeccionar y formalizar la tradición efectiva de los activos no liquidados del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN), otorgar finiquito o remisión de créditos u obligaciones y liberación de gravámenes y, en general, suscribir todos aquellos actos que fueren necesarios para el efectivo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Nº 6.390 de fecha 02 de septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.010 de fecha 05 de septiembre de 2008.

Artículo 3. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional,

RAFAEL EDUARDO GIL PINTO
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras

RICARDO MOLINA PEÑALOZA
Ministro del Poder Popular
para Vivienda y Hábitat

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES
Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Ministro del Poder Popular
de Economía, Finanzas y Banca Pública

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DESPACHO DE LA MINISTRA

Caracas, 27MAY2014

204º, 155º y 15º

RESOLUCIÓN Nº 004835

La Ministra del Poder Popular para la Defensa, ALMIRANTA EN JEFA CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS, nombrada mediante Decreto Nº 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 34 y 77 numerales 19 y 26 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, en concordada relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de fecha 09 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 6.020 de fecha 21 de marzo de 2011 y lo señalado en los artículos 47 y 51 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario,

RESUELVE

ÚNICO: Designar a partir del 02 de abril de 2014, al General de División **JOSÉ ALEJANDRO MONTERO FLORES,** C.I. Nº **8.585.469,** como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 402 y 403), que se giren a la Unidad Administradora Desconcentrada sin delegación de firma, **"COMANDO DE VIGILANCIA COSTERA",** Código Nº **59311.**

Comuníquese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
Almiranta en Jefa
Ministra del Poder Popular para la Defensa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

*** MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA ***

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL

Municipio Libertador, 8 de Mayo del Año 2014

Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado MARIBEL ESPERANZA BUSTAMANTE PEREZ IPSA N.: 82613, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: **158,** TOMO **-22-A SDO.** Derechos pagados **BS: 0,00** Según Planilla RM No. , Banco No. Por **BS: 0,00.** La identificación se efectuó así: **MARIBEL ESPERANZA BUSTAMANTE PEREZ,** C.I: **V-10.353.041.**
Abogado Revisor: **ELEIXED GONZALEZ MARQUEZ**

Registrador Mercantil Segundo Encargado
FDO. Abogado EVER ENRIQUE REYES PINEDA

ESTA PÁGINA PERTENECE A:
EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A
Número de expediente: **221-42013**
CONST

Entre, la empresa del Estado **CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, CONSTRUFANB, C.A.,** Sociedad Anónima, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, constituida conforme a lo dispuesto en el Decreto Nro. 668 de fecha 10 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.314 de fecha 12 de diciembre de 2013 e inscrita ante el Registro Mercantil II del Distrito Capital, bajo el Nro.146, Tomo 111-A SDO, en fecha 27 de Diciembre del año 2013, con Registro de Información Fiscal (RIF) **Nro. G200108517,** representada en este acto por su **Presidente** ciudadano: **GENERAL DE DIVISIÓN JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINTT,** venezolano, casado, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº. V.- 5.548.747, debidamente autorizado por la ciudadana Almiranta en Jefa **CARMEN TERESA MELENDEZ RIVAS,** venezolana, de este domicilio, mayor de edad y titular de la cédula de identidad **Nº V- 8.146.803,** Ministra del Poder Popular para la Defensa, designada mediante Decreto Nº 214 de fecha 05 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.204 de fecha 10 de julio de 2013, por una parte, y por la otra la empresa Mercantil **CANTERA CORDON, C.A. (CANCORCA),** domiciliada en el Estado Sucre y Sede en el Municipio Rivero, Cerro El Cordón, Cariaco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 24 de Abril de 1996, bajo el Nro. 94, Tomo A-50, siendo su última modificación por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, según Acta de Asamblea Extraordinaria registrada en fecha 16 de Diciembre de 2013, bajo Nro. 6, Tomo 44-A RM424, expediente Nro. 13964, con número de Registro de Información Fiscal (RIF) Nro. J-30337840-4, representada en este acto por el ciudadano **SALVADOR ANTONIO TERMINI GUZMAN,** mayor de edad, soltero, domiciliado en el Estado Sucre, venezolano, y titular de la cédula de identidad **Nº V-9.284.531,** en su condición de Director Principal, cargo para el cual fue ratificado conforme se evidencia del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **CANCORCA** (Punto Dos) celebrada el día veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, en fecha 25 de mayo del mismo año, bajo el Nro. 55, Tomo 15-A RM424, e igualmente en su carácter de Apoderado General, tal y como se evidencia de Instrumento Poder debidamente autenticado por ante la Notaría Primera de la ciudad de Maturín, Estado Monagas, en fecha 03 de febrero del año 2014, bajo el Nº. 29, Tomo 35 de los Libros de Autenticaciones debidamente llevados por esa Notaría, documentos esos que se producen anexos a la presente Acta Constitutiva – Estatutaria, formalmente declaramos: De conformidad a lo dispuesto por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela **NICOLAS MADURO MOROS,** mediante Decreto de creación **Nro. 900** de fecha 08 de Abril del 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela **Nro. 40.389,** de la misma fecha, procedemos a constituir, como en efecto lo hacemos en este acto una empresa mixta del Estado bajo la forma de Sociedad Anónima, la cual se regirá por la presente Acta Constitutiva - Estatutaria, por las disposiciones del Código de Comercio, por la Ley Orgánica de la Administración Pública, en lo que respecta a las disposiciones relacionadas con las Empresas del Estado y por las cláusulas que a continuación se mencionan:

TÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
CAPÍTULO I
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

CLÁUSULA PRIMERA: La Sociedad Anónima se denominara **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A.",** con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República y estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

CLÁUSULA SEGUNDA: La **"EMPRESA MIXTA CANCORFANB, S.A.",** tendrá su domicilio en la Ciudad de Caracas, Distrito Capital, pudiendo establecer oficinas o dependencias en cualquier lugar de la República y en el exterior, previa autorización de su órgano de Adscripción, aprobación de la Asamblea General de Accionistas y cumplimiento de la normativa legal o reglamentaria aplicable.

CLÁUSULA TERCERA: La **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A",** tendrá por objeto social la ejecución de todas aquellas actividades inherentes o propias para las construcciones en general; así como la explotación, de canteras y venta de los productos primarios y sus derivados, tanto en el país como en el exterior y todas aquellas actividades relacionadas con el objeto prenombrado que sean de lícito comercio, así mismo podrá realizar convenios y/o alianzas estratégicas con empresas nacionales y/o extranjeras, así como obtener divisas de la banca nacional e internacional pública y/o privada, manufacturar, comprar, vender; en general, negociar con cualquier otro producto o bien relacionado con las actividades aludidas. Para el cumplimiento de su objeto La **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A",** orientará su actividad al logro de los fines y objetivos del Estado y deberá acoger los lineamientos y las políticas que dicte el Ejecutivo Nacional.

CLÁUSULA CUARTA: La Sociedad tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento por ante la Oficina del Registro Mercantil correspondiente, pudiendo ser prorrogada o disminuida su duración por voluntad de la Asamblea General de Accionistas y con la correspondiente aprobación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y por los motivos previstos en el Código de Comercio, previo el cumplimiento, en cada caso, de las formalidades legales exigidas.

CAPÍTULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

CLÁUSULA QUINTA: El Capital Social de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, será de Cien Millones de Bolívares con Cero Cero Céntimos (Bs. 100.000.000,00), representado en Cien Mil acciones nominativas no convertibles al portador con un valor nominal de Un Mil Bolívares exactos (1.000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas de la siguiente forma: La empresa **CONSTRUCTORA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, CONSTRUFANB, C.A.**, suscribe la cantidad de Cincuenta y Un Mil (51.000) acciones, que representan el Cincuenta y Uno por cierto (51%) del Capital Social y paga en este acto la cantidad de Cincuenta y Un Millones de Bolívares con Cero Cero Céntimos (Bs. 51.000.000,00), por concepto del total de las referidas acciones, conforme se evidencia de la copia del Cheque N° 08490024 emitido por el mismo monto, de la Cuenta Corriente BANFANB 01770005751100000319, que se anexa al presente documento. La **EMPRESA CANTERA CORDON, C.A.**, suscribe la cantidad de Cuarenta y Nueve Mil (49.000) acciones, que representan el Cuarenta y Nueve por ciento (49%) del Capital Social, y paga en este acto la cantidad de Cuarenta y Nueve Millones de Bolívares con Cero Cero Céntimos (Bs. 49.000.000,00), por concepto del total de las referidas acciones, conforme se evidencia de la copia del Cheque N° 29250264 emitido por el mismo monto, de la Cuenta del Banco Corriente Bicentenario N° 01750490880071492162, que se anexa al presente documento.

CLÁUSULA SEXTA: El Capital Social de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, podrá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo unánime en Asamblea General de Accionistas, observando las formalidades y disposiciones que prevén los artículos 280 y 282 del Código de Comercio y previa aprobación por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros. En caso que se acuerde un aumento del Capital social, la Asamblea General de Accionistas determinará las condiciones de emisión y suscripción de las nuevas acciones y los Accionistas tendrán derecho de adquisición preferente sobre las nuevas acciones, (que como consecuencia de ello se emitan), en proporción a su participación accionaria o al número de acciones que representa el capital total de la Compañía. Todas las acciones son nominativas y de igual valor comercial, no convertibles al portador y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Las acciones de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, podrán ser transferibles previa aprobación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros. Dado el caso la Compañía reconocerá a un sólo propietario por cada acción.

CLÁUSULA OCTAVA: La **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."** percibirá los aportes financieros correspondientes para su funcionamiento, además de los ingresos propios generados por sus actividades y de donaciones de personas jurídicas de carácter público y/o privado, o de cualquier liberalidad de las previstas en el ordenamiento jurídico.

TITULO II

ASAMBLEA Y ADMINISTRACIÒN

CAPÍTULO I

DE LAS ASAMBLEAS

CLÁUSULA NOVENA: La Asamblea General de Accionistas, es el órgano supremo de dirección de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."** con las más amplias facultades conforme a la Ley y a este documento, quienes también darán cumplimiento al articulo 244 del Código de Comercio Venezolano vigente.

CLAUSULA DÉCIMA: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias serán celebradas una vez al año, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico y fiscal, y en ella se discutirá los mencionados puntos de conformidad con los artículos 221, 275, 276 y 282 del Código de Comercio.

1.- Nombramiento de la junta directiva;
2.- Conocer, deliberar, aprobar o improbar el informe anual de la junta directiva relativa al ejercicio anual inmediato anterior.
3.- Discutir, aprobar o improbar el o los balances, estados de ganancias y pérdidas, con vista del o los informes del comisario.
4.- Disponer sobre la distribución de utilidades a que haya lugar y determinar los apartados que se considere conveniente o necesario crear.
5.- Nombrar y/o ratificar el comisario y fijar su remuneración.
6.- Conocer, deliberar y resolver sobre cualquier otro asunto incluido en la respectiva convocatoria o que se considere conveniente tratar.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas Extraordinaria, se celebrará en el momento que se requiera, para tratar y decidir sobre asuntos que convenga al interés de la empresa, de conformidad con los artículos 221, 276 y 282 de Código de Comercio.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Tanto la Asamblea General de Accionistas ordinaria como extraordinaria, se celebraran en la sede social de la empresa o en cualquier lugar dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, será convocada de manera escrita por la Ministra o Ministro del Poder Popular Para La Defensa o por el presidente o presidenta de la junta directiva, por lo menos veinticinco (25) días hábiles de anticipación a la fecha de celebrarse la asamblea; en la misma, deberá expresar la fecha, hora, lugar y puntos a tratar en la asamblea. Se prescindirá de la convocatoria cuando esté representada la totalidad del capital social. Las decisiones tomadas en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, son obligatorias para todos los miembros de la sociedad.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: La Asamblea General de Accionistas, será presidida por la Ministra o Ministro del Poder Popular para la Defensa.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La Asamblea General de Accionistas podrá considerarse válidamente constituidas para deliberar, siempre y cuando se encuentre representada la totalidad del capital social y sus decisiones sean aprobadas por igual porcentaje.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: De toda Asamblea se levantará Acta suscrita por todos los concurrentes, haciendo constar la representación que ejercen, la cual contendrá los acuerdos y decisiones que se hayan tomado. El Secretario o Secretaria estará facultado o facultada para la Certificación de Actas y de las Resoluciones acordadas por la asamblea, sin perjuicio que dichas Certificaciones pueda hacerlas la Presidenta o Presidente de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: El Secretario o Secretaria de la Junta Directiva, será designado o designada por la Asamblea General de Accionistas.

CAPITULO II

DE LA JUNTA DIRECTIVA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: La junta directiva es la instancia administrativa y operativa de la empresa, quien tendrá la más amplias facultades de administración y disposición, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes y en la presente acta constitutiva. La misma estará integrada por siete (07) miembros principales, conformada de la siguiente manera: Un (01) Presidente o Presidenta, un (01) Vicepresidente o Vicepresidenta y cinco (05) directores o directoras y sus respectivos suplentes, designados por la Asamblea General de Accionistas previa aprobación del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las faltas temporales del Presidente o Presidenta, serán suplidas por el Vicepresidente o Vicepresidenta y contará con Un (01) Secretario sin voz ni voto.

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: Los integrantes de la Junta Directiva serán designados por un periodo de dos (02) años, pudiendo ser ratificados o removidos de sus cargos en cualquier momento. En todo caso, permanecerán en el ejercicio de los cargos hasta tanto sean nombrados sus sustitutos.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: La Junta Directiva sesionará dos (02) veces al año, la primera dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal y la segunda en el último trimestre de cada año, pudiendo celebrarse juntas extraordinarias cuando se considere conveniente. Tanto las asambleas de juntas directivas ordinarias o extraordinarias serán convocadas por el presidente o presidenta de la empresa. La Junta Directiva sesionará con la concurrencia de por lo menos cinco (05) de sus miembros, los votos salvados y las abstenciones de los miembros de la Junta Directiva, en las reuniones de las mismas, deberán ser motivados, a fin de dejar la debida constancia en la correspondiente acta de la Junta Directiva. En caso de ocurrir desacuerdo en las decisiones y no se presente una mayoría en la votación, el voto del Presidente o Presidenta de la Junta Directiva o de quien lo supla, tendrá valor decisorio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA:: La Junta Directiva ejercerá las más amplias facultades de administración de los negocios de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, y en particular tendrá las siguientes atribuciones:

1. Velar por el cumplimiento de los fines y objetivos de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**,
2. Aprobar la convocatoria de las Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias, de Junta Directiva.
3. Elaborar las modificaciones de los Estatutos que serán sometidos a consideración de los accionistas, siempre y cuando no modifique lo establecido en el Decreto que autoriza la creación de la Empresa del Estado.
4. Proponer, los aumentos del Capital.
5. Proponer la apertura o cierre de Sucursales en el interior o exterior del país.
6. Establecer, organizar, regular y evaluar el sistema de Control Interno, de conformidad con la Normativa especial que rige la materia.
7. Conocer y decidir sobre los Informes que presente el Auditor Interno o Auditora Interna.
8. Conocer y resolver sobre el informe anual de la gestión de la Junta Directiva.
9. Aprobar el presupuesto para el giro comercial de la empresa.
10. Cualesquiera otras no atribuidas expresamente a la Asamblea de Junta Directiva de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**.
11. Autorizar al Presidente o Presidenta de la Empresa para que realice las actividades previstas en los numerales 6 y 7 de la Cláusula Vigésima Tercera.
12. Velar por el cumplimiento de los aportes que realizara la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, previstos en el decreto de creación de la

Empresa Gran Misión Negro Primero, a los fines de coadyuvar al fortalecimiento del poder defensivo nacional.

13.- Determinar lo correspondiente a la estructura y funciones del personal de la Empresa y fijar su remuneración. Así como las funciones de los Directores de la Empresa.

CAPITULO III

DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Los negocios de la Empresa estarán a cargo de su Presidenta o Presidente, quien ejerce la representación legal de la Empresa, es su máxima autoridad administrativa y ejecutiva. Además, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de las Asambleas Generales.

2.- Convocar las Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias, de accionistas y de la Junta Directiva.

3.- Firmar en nombre y representación de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, todos los actos relativos a la adquisición, transmisión o enajenación de bienes muebles y servicios, los poderes, documentos privados o públicos, contratos de cualquier naturaleza previo acuerdo de la Junta Directiva.

4.- Dirigir los negocios de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, y las Políticas Administrativas, Financieras, de Inversión, Riesgos y Contables.

5.- Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y las decisiones de la Junta Directiva.

6.- Realizar convenios y/o alianzas estratégicas con empresas nacionales y/o extranjeras, así como obtener divisas de la banca nacional e internacional pública y/o privada, manufacturar, comprar, vender y en general negociar con cualquier otro producto o bien relacionado o no con las actividades referidas, previa aprobación de la Junta Directiva.

7.- Concretar, explorar y organizar toda clase de industrias, establecimientos, fabricar, importar y exportar toda clase de productos de actividad industrial; adquirir muebles e inmuebles de toda clase, administrarlos, enajenarlos, celebrar contratos de opción, arrendamientos y gravarlos en cualquier forma, dar y tomar dinero en préstamo, efectuar todos los actos, contratos y negocios directa o indirectamente relacionados con sus objetos sociales, previa aprobación de la Junta Directiva de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**

8.- Cualquier otra no atribuida expresamente a la Asamblea de Junta Directiva, que fuere necesario para el cumplimiento de los fines y/o funciones de la Sociedad, pero dando cuenta a ésta última en la reunión siguiente, con relación al ejercicio de esta atribución.

CAPÍTULO IV

DEL VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:

El Vicepresidente o Vicepresidenta, tendrá las siguientes facultades:

1.- Asistir y apoyar al Presidente o Presidenta de la Empresa, en las actividades de éste(a) esta como máxima autoridad ejecutiva de la Empresa.

2.- Dirigir y coordinar las actividades inherentes a la gestión de negocios y de soporte administrativo en materia de negocios corporativos, operaciones, administración, inversiones, finanzas y tecnología.

3.- Coordinar el desarrollo, establecimiento y ejecución programática y presupuestaria de los diferentes niveles organizativos de la Empresa, de acuerdo con las Políticas y Programas que sirven de marco referencial a mediano y largo plazo para el desarrollo de la gestión de la Empresa.

4.- Dirigir y coordinar la ejecución de los Planes, programas y cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y soporte administrativo.

5.- Velar por el estricto cumplimiento de las Políticas Administrativas y Contables de control de gastos de la Empresa.

6.- Cumplir las decisiones e instrucciones de la Junta Directiva o el Presidente o Presidenta de la Empresa.

7.- Firmar en representación de la Empresa, los documentos o correspondencias que le sean delegadas por la Junta Directiva o por el Presidente o Presidenta de la Empresa.

8.- Las demás atribuciones que le otorgue la Junta Directiva.

CAPÍTULO V

DEL REPRESENTANTE JUDICIAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: La Representación Judicial de la Empresa corresponderá ejercerla a los apoderados designados o apoderadas designadas al efecto por la Junta Directiva y tendrán las atribuciones que ésta les fije, entre ellas:

1.- Darse por citado en nombre de la Empresa ante cualquier Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en los juicios que contra ella se intentaren.

REVISADO

2.- Reconvenir, intentar y contestar demandas, Acciones, Recursos o Reclamos.

3.- Convenir, desistir, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho.

4.- Transigir, hacer posturas en remates judiciales o extrajudiciales.

5.- Absolver posiciones juradas, y en general, seguir los juicios en todas sus instancias, incidencias y recursos.

En el Acta de Junta Directiva donde se designe al Representante Judicial, el Presidente o Presidenta de la Empresa autorizará el otorgamiento del respectivo Poder con las facultades que señale la Junta Directiva, el cual se remitirá al Registro Mercantil para su inscripción y publicación. Igual procedimiento se cumplirá para la revocatoria del Poder.

CAPÍTULO VI

DE LOS COMITÉS

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: La Junta Directiva podrá crear y/o reglamentar el funcionamiento de los Comités, Comisiones o Grupos de Trabajo, creados por disposición Legal o Reglamentaria o por decisión de ésta, mediante la emisión de la Normativa Organizativa Interna respectiva.

CAPÍTULO VII

DEL COMISARIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: La **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, tendrá un (01) Comisario o Comisaria Principal, quien deberá reunir las condiciones exigidas por la Ley, será designado por la asamblea de accionistas conforme a las disposiciones legales correspondientes. El Comisario o Comisaria durará cuatro (04) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto y tendrán las atribuciones previstas en el Código de Comercio. Toda la documentación correspondiente a los Balances se entregará al Comisario o Comisaria, con treinta (30) días de anticipación al de la respectiva Asamblea General de Accionistas. El Balance y el Informe del Comisario o Comisaria se depositarán en la Sede Principal de la Empresa, con veinticinco (25) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea que conocerá de ellos.

CAPITULO VIII

DEL AUDITOR INTERNO

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: La Empresa tendrá un (01) Auditor Interno designado por la Junta Directiva conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y permanecerá en ejercicio de su cargo hasta tanto sea reemplazado. El Auditor Interno es el encargado de verificar y cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones y resoluciones emanadas de la Asamblea de Accionistas de la Junta Directiva y del Presidente o Presidenta de la Empresa. En general, le corresponde verificar el fiel cumplimiento del presente documento constitutivo estatutario sin menoscabo de las funciones propias del Comisario conforme a lo previsto en el Código de Comercio. Sus principales atribuciones son las siguientes:

1.- Velar por el cumplimento de las leyes, reglamentos y procedimientos legales vigentes que le sean inherentes a la empresa.

2.- Verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa de la empresa y ejercer la auditoría interna de la compañía, a fin de salvaguardar los recursos de la misma.

3.- Hacer cumplir los manuales de Organización y de procedimientos de la Empresa que fuesen autorizados por la Junta Directiva.

4.- Asistir a las reuniones de la Junta Directiva cuando sea invitado para ello, con voz pero sin voto.

5.- Rendir cuenta de su gestión a la Junta Directiva y al Presidente o Presidenta de la Empresa, cada vez que le sea requerido.

6.- Abrir y sustanciar los procedimientos administrativos para el establecimiento de responsabilidad administrativa, según corresponda.

7.- Cualquier otra función que al efecto le sea asignada por la Junta Directiva y por el Presidente o Presidenta de la Empresa.

8.- Certificar las copias de los documentos inherentes al ejercicio de sus funciones.

9.- Todas aquellas funciones establecidas por la legislación vigente que regule la materia de control fiscal.

TÍTULO III

DEL BALANCE, LAS UTILIDADES Y LAS RESERVAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: El primer ejercicio económico comenzará el día de su inscripción por ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente y concluirá el día treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año. Los siguientes ejercicios económicos comenzarán el día primero (1ro.) de enero y terminarán el día treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: La **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A."**, hará mensualmente un balance ordinario de su situación patrimonial y realizará el corte de sus cuentas los treinta (30) de junio y treinta y uno (31) de diciembre de cada año, y se formará el Inventario, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa, con determinación de las utilidades del semestre. Es acuerdo entre las partes que conforman la sociedad, que los dividendos, utilidades y/o ganancias que se generen a favor de cada una de ellas, puedan ser repartidas y distribuidas entre las mismas de acuerdo a su porcentaje accionario en especie, es decir, con el producto a extraer del lote de terreno que explotaran y así cada uno podrá utilizarlo para fines legales que le interesen a sus representadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: Una vez determinada la utilidad en operaciones, hechos los apartados que disponen las leyes y la materia impositiva, se separarán en la forma siguiente:

1.- Otras Reservas del Capital.

2.- Las Utilidades no distribuidas, cuyo destino, normas y oportunidades las dispondrá la Junta Directiva, así como los aportes a ser efectuados a la Empresa Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S. A., de acuerdo a la normativa interna del Ministerio de Adscripción.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Una vez concluida la duración de la Empresa o declarada su disolución, se debe proceder a la liquidación de conformidad con la normativa legal aplicable.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: En todo lo no previsto en este Documento Constitutivo Estatutario, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil y de las demás Leyes Especiales que resulten aplicables.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Para el primer ejercicio económico, y hasta tanto se reúna la más próxima Asamblea General de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, la **JUNTA DIRECTIVA** queda integrada de la manera siguiente: **Presidente: JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINT,** venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº. V.- 5.548.747; **Vicepresidente: SALVADOR ANTONIO TERMINI GUZMAN,** venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.284.531; **Director Principal: JORGE DÍAZ ANGULO,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 14.401.223; Director Suplente: **LEYOA ALEJANDRA GUERRERO VIELMA,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 13.676.145; **Director Principal: KATHERINE DEL CARMEN TERMINI GUZMAN,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 12.156.809; Director Suplente: **ROBERTO XAVIER CUAHONTE GARCIA,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 11.227.447; **Director Principal: CRISTOBAL FLETCHER PEREZ,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 9.170.547; **Director Suplente: JOSÉ RAMÓN MARCANO ALFONZO,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 6.438.682; **Director Principal: ANGEL ENRIQUE GONZALEZ SALAZAR,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 6.496.467; **Director Suplente: JOSÉ MONSALVE MALDONADO;** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 10.632.123; **Director Principal: ALVARO HYLDEGARD GUTIÉRREZ FALCON,** titular de la cédula de identidad Nº. V.- 7.088.433; **Director Suplente: OSMARO LUIS CHIQUITO AGUIRRE,** titular de la cédula de identidad Nº. V.-17.835.874; y **Comisario Principal: Lic. JOSEFINA BEATRIZ SALAZAR MONTANER,** venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.006.967, inscrita en el colegio de contadores públicos con el Nº. 67.172, quienes aceptaron los cargos para lo cual fueron nombrados. Todos los designados iniciaran el ejercicio de sus respectivos cargos, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Se autoriza a la ciudadana **MARIBEL ESPERANZA BUSTAMANTE PEREZ,** venezolana, mayor de edad, de este domicilio, abogada en ejercicio inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 82.613 y titular de la cédula de Identidad V- 10.353.041, para que realice la correspondiente participación de la constitución de esta sociedad mercantil del Estado Bolivariano, al Registro Mercantil que corresponda, a los fines de su inscripción y publicación. Forma parte integrante de la presente Acta Constitutiva-Estatutaria, el Decreto Nº 900 de fecha 08 de Abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.389 de fecha 08 de Abril de 2014, mediante el cual el ciudadano **Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,** autorizó la creación de la **"EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A".**

En Caracas, a la fecha de su presentación.

JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINT
GENERAL DE DIVISIÓN
C.I. Nº V- 5.548.747
Presidente de la Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CONSTRUFANB C. A.)

SALVADOR ANTONIO TERMINI GUZMAN
C.I. Nº V-9.284.531
Presidente de la Cantera el Cordon, C. A. (CANCORCA)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO
FUNDACIÓN BOSQUE MACUTO
PROVIDENCIA Nº DBM-0007-14
BARQUISIMETO, 02 DE MAYO DE 2014.
AÑOS 204º, 155º y 15º

Quien suscribe, **RICARDO RÍOS CALDERON,** venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. **V.- 13.856.694,** en mi condición de **PRESIDENTE (E) DE LA FUNDACIÓN BOSQUE MACUTO,** designado mediante Resolución Nº 110 de fecha 23 de diciembre de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40322 de fecha 26 de diciembre de 2013, corregida por error material mediante Resolución Nº 023 de fecha 28 de marzo de 2014 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40392 de fecha 11 de abril de 2014 y de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones Públicas y 15 de su Reglamento, y previa autorización de la Junta Directiva mediante punto de cuenta Nº BM- 0002-2014, y en aras de cumplir con los requerimientos establecidos en la ley para procurar la preservación del patrimonio público se dicta la siguiente

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Se constituye con carácter permanente la Comisión de Contrataciones de la Fundación Bosque Macuto, la cual tendrá como atribuciones, ejecutar los procedimientos regulados en la Ley de Contrataciones Públicas, para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras

Artículo 2. La Comisión de Contrataciones estará integrada por tres (3) miembros principales y sus suplentes, en la cual estarán representadas el área jurídica, económico-financiera y técnica, conforme se especifica a continuación:

COMISIÓN DE CONTRATACIONES		
MIEMBRO	PRINCIPAL	SUPLENTE
ECONÓMICO-FINANCIERA	MARIA EUGENIA BERNAL C.I. V-7.447.999	JESSICA RODRÍGUEZ C.I. V.- 18.485.993
JURIDICO	ESTHER HERNÁNDEZ C.I. V-11.856.102	OLGA ALTUVE C.I. V- 12.540.070
TECNICO	RAÚL RIVAS C.I. V.- 18.105.903	ANTONIO MELÉNDEZ C.I. V.- 13.264.497

Artículo 3. Los ciudadanos designados para conformar la Comisión de Contrataciones, deben cumplir y hacer cumplir la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Artículo 4. Se designa como Secretaria de la Comisión de Contrataciones a la ciudadana **LILIAN VARGAS,** titular de la cedula de identidad **Nº V- 13.785.645.,** que cumplirá las siguientes funciones:

a) Coordinar las reuniones de la Comisión de Contrataciones y velar por la elaboración del acta correspondiente y la entrega oportuna a cada uno de los miembros de la Comisión.

b) Convocar para las reuniones a los miembros de la Comisión de Contrataciones.

c) Formar los expedientes de los procesos de selección de contratista, levantar el acta que a cada acto corresponda y llevar el control de su archivo.

d) Suscribir los oficios y correspondencia interna y externa cuya atención sea competencia de la Comisión de Contrataciones.

e) Certificar copias de los documentos cuyos originales reposan en el archivo de la Comisión de Contrataciones.

Artículo 5. La Comisión de Contrataciones, podrá solicitar la participación de asesores técnicos y especialistas, como también designar subcomisiones de trabajo, en atención a la complejidad de las obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios de que se trate.

Artículo 6. Esta providencia entrará en vigencia a partir del primero (01) de marzo de 2014.

Comuníquese y publíquese,

RICARDO RÍOS CALDERON
Presidente (E) de la Fundación Bosque Macuto
Según Resolución Nº 110 de fecha 23 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.322, de fecha 26 de diciembre de 2013.
Corregida mediante Resolución Nº 023 de fecha 28 de marzo de 2014 y publicado en gaceta Oficial Nº 40392 de fecha 11 de abril de 2014

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA). PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 007/2014. CARACAS, 22 DE MAYO DE 2014.

AÑOS 204°, 155° Y 15°

Quien suscribe, **BRUT OSWALDO LINARES GONZÁLEZ,** titular de la Cédula de Identidad N° **V-10.343.843,** en mi carácter de Presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para

Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), carácter que consta en Resolución DM/N° 031/2013 de fecha 26 de abril de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155, de la misma fecha, en ejercicio de las funciones que me fueron debidamente conferidas en el numeral 6 del artículo 20 de los Estatutos de la Fundación CIARA, publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.467 de fecha 16 de julio de 2010, procedo a dictar la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Se designa al ciudadano **ALBERTO DANIEL GALINDO RODRÍGUEZ**, titular de la cédula de identidad número **V-3.373.282**, como **DIRECTOR DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS ZONAS SEMIÁRIDAS DE LOS ESTADOS FALCÓN Y LARA (PROSALAFA III), EN CALIDAD DE ENCARGADO** ejecutado por la **FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA).**

Artículo 2. La presente Providencia Administrativa, tendrá vigencia a partir del dieciséis (16) de mayo de 2014.

Comuníquese y publíquese.

BRUT LINARES
Presidente de la Fundación de Capacitación
e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria
Según Resolución DM/Nº 031/2013 de fecha 26 de abril de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de fecha 26 de abril de 2013.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Y PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ. DESPACHO DEL MINISTRO DM/N° 195 . MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. DESPACHO DEL MINISTRO. DM/N° 030/2014. CARACAS, 20 DE MAYO DE 2014.

204°, 155° y 15°

Los Ministros del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, designados mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; en los numerales 1, 3 y 27 del artículo 77 y numerales 1, 2 y 8 del artículo 119 del Decreto Nº 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 31 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2.008; artículo 14 numerales 1 y 18 del Decreto N° 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de fecha 2 de junio de 2009, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.202 de fecha 17 de junio de 2009; el artículo 3 numerales 1 y 19 del Decreto N° 8.121 de fecha 29 de marzo de 2011 mediante el cual se establecen las competencias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, hoy para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.644 de la misma fecha, en concordancia con el artículo 5° del Decreto N° 6.265 de fecha 22 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.891 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008,

Por cuanto la Disposición Final Décima de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario contempla el otorgamiento de autorización por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), como requisito previo, para que los Registradores y Registradoras, Notarios y Notarias procedan a protocolizar, reconocer o autenticar los actos jurídicos que impliquen el gravamen de la propiedad de las tierras con vocación agrícola o de las bienhechurías fomentadas en las mismas,

Por cuanto el alto volumen de solicitudes de autorización presentadas por los administrados y las administradas ha generado demoras en la tramitación de los financiamientos para la producción agrícola primaria, lo cual incide en la producción y distribución de alimentos y otros rubros de origen vegetal y animal, siendo que el Estado se fundamenta en principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia, así como en principios legales de simplicidad, transparencia, coordinación, competencia, y legalidad,

Por cuanto es deber del Ejecutivo Nacional promover la producción nacional de alimentos, a fin de contrarrestar los factores que atentan contra la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación, y para ello es necesario dar celeridad a la celebración de actos jurídicos que dinamicen la producción de alimentos, bajo el principio de celeridad y de simplificación de los mismos,

Resuelven dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN CONJUNTA MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZAN LOS ACTOS JURIDICOS QUE EN ELLA SE INDICAN

Artículo 1. Se autoriza a partir del momento de la publicación de la presente Resolución conjunta y hasta tanto la misma sea modificada o dejada sin efecto, la autenticación, reconocimiento y protocolización de los actos jurídicos que impliquen:

a) El gravamen de la propiedad de las tierras con vocación agrícola o de las bienhechurías fomentadas en las mismas, a tenor de lo establecido en la Disposición Final Décima de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuando dicho gravamen haya de constituirse para garantizar las obligaciones derivadas de financiamientos destinados a la Cartera Agrícola obligatoria.
b) La constitución de prenda sobre la cosecha en las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras a que se contrae el artículo 11 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
c) La Solicitud, tramitación y registro de Títulos Supletorios de propiedad, respecto de bienhechurías fomentadas sobre tierras con vocación agrícola.

Artículo 2. Los demás actos contemplados en la Disposición Final Décima de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante los cuales se efectúe la constitución de sociedades, celebración de contratos de mandato, arrendamiento, comodato, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo, o en general, cualesquiera documentos o negocios jurídicos, que impliquen el aprovechamiento de predios rurales con vocación agrícola de forma indirecta, requerirán de la autorización previa otorgada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) para formalizar su protocolización o autenticación ante Notaría u Oficina de Registro Público.

Artículo 3. Todas aquellas personas que realicen actos jurídicos, conforme a la autorización conferida en el artículo 1 de la presente Resolución, deberán consignar en forma inmediata al Instituto Nacional de Tierras (INTI) copia simple de los documentos correspondientes al trámite realizado.

Artículo 4. Se instruye a los Registradores y Registradoras, Notarios y Notarias, no solicitar las autorizaciones cuya exigencia se suspende mediante la presente Resolución, durante la vigencia de la misma.

Artículo 5. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese
Por el Ejecutivo Nacional,

JUAN EDUARDO GIL PINTO
Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras

MIGUEL EDUARDO RODRÍGUEZ TORRES
Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
AGENCIA BOLIVARIANA PARA ACTIVIDADES ESPACIALES (ABAE)

Fecha: 21/05/2014 **N° ABAE-008/2014**

204° y 155°
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

El Presidente (E) de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), designado mediante el Decreto N° 9.376 de fecha 06 de febrero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.106 de la misma fecha, en ejercicio de la atribución conferida en los numerales 1 y 8 del artículo 11 de la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.796 de fecha 25 de octubre de 2007 y en la Delegación de la Junta Directiva de la ABAE, contenida en la Providencia Administrativa N° 0010/2013 de fecha 22 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.160 de fecha 06 de mayo de 2013; en concordancia con lo establecido en los artículos 12, 26, 34 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, y en los artículos 5, numeral 2; 19 en su último aparte y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002; y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 51 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con lo establecido en los artículos 8 numeral 1; 47, 48 y 51 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Sobre el Sistema Presupuestario; este Despacho,

RESUELVE

Artículo 1.- Designar a la ciudadana **ERIKA JAKELINE ROLDAN RESTREPO,** titular de la cédula de identidad N° **V-13.087.828,** como Directora (E) de la Oficina de Gestión Administrativa de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE).

Artículo 2.- Designar como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Central para el Ejercicio Fiscal 2014 de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), a la mencionada ciudadana:

Unidad Administradora	Código de Unidad Administradora Central	Nombres y Apellidos	C.I.
Oficina de Gestión Administrativa	A1301	ERIKA JAKELINE ROLDAN RESTREPO	V-13.087.828,

Artículo 3.- Delegar en la ciudadana **ERIKA JAKELINE ROLDAN RESTREPO,** en su condición de Directora (E) de la Oficina de Gestión Administrativa de la ABAE, las atribuciones y firmas de los actos y documentos que a continuación se especifican:

1. Coordinar y supervisar las actividades administrativas, contables y financieras de la ABAE.

2. Llevar a cabo la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos y elaborar los registros correspondientes.

3. Supervisar que las operaciones administrativas de la ABAE se rijan por las normas establecidas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública.

4. Supervisar la adquisición, custodia, registro, suministro y mantenimiento de bienes y servicios, para garantizar el buen funcionamiento de la ABAE.

5. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones con fundamento en los proyectos de las Unidades Ejecutoras Locales de la ABAE y garantizar su remisión al órgano competente en materia de contrataciones del sector público.

6. Dirigir y coordinar los servicios de mantenimiento y transporte de la ABAE.

7. Dirigir y coordinar todas las actividades contables relacionadas con los bienes nacionales.

8. Rendir cuentas sobre las materias de su competencia a los órganos de control interno y externo competentes.

9. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos y otros actos normativos.

La referida funcionaria presentará una relación detallada de los actos y documentos que hubiera firmado en virtud de esta delegación.

Los actos y documentos firmados de acuerdo a lo establecido en la presente Providencia Administrativa, deberán indicar inmediatamente, bajo la firma de la funcionaria delegada, la fecha y número de la Providencia Administrativa y la Gaceta Oficial en la cual haya sido publicada.

El Presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) podrá discrecionalmente, firmar los actos y documentos indicados en la presente Providencia Administrativa.

Artículo 4.- La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del 26 de mayo del 2014.

Comuníquese y Publíquese,

VÍCTOR HUGO CANO PACHECO
Presidente (E) de la
Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales
Decreto N° 9.376 de fecha 06 de febrero de 2013
Gaceta Oficial N° 40.106 de fecha 06 de febrero de 2013

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO
DESPACHO DE LA MINISTRA
204°, 155° y 15°

N° MPPSP/DGD/ 14/05 /2014 FECHA:

Quien suscribe, MARÍA IRIS VARELA RANGEL, titular de la cédula de identidad N°V.9. 242.760, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, designada mediante Decreto N° 02 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.151 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 4, 5,6,12 y 86 del Decreto N° 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo establecido en el Artículo 4 del Decreto N° 730 de fecha 09 de enero del 2014, mediante el cual los Ministros podrán en ejercicio de su rectoría, dictar Resoluciones de carácter transitorio que determinen la estructura y organización del Ministerio.

RESUELVE

REGLAMENTO TRANSITORIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

En el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que confieren los artículos 226 y 236 numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 46, 58, 61, 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 53 del Estatuto de la Función Pública, 2, 31 y 32 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, así como el artículo 7° del Decreto N° 8.266 de fecha 26 de julio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de fecha 26 de julio de 2011, dicta lo siguiente

REGLAMENTO TRANSITORIO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto del Reglamento Orgánico

Artículo- 1. El presente Reglamento Transitorio tiene por objeto determinar la estructura orgánica y funcional del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, así como establecer la distribución de competencias y funciones de las diferentes unidades que lo integran.

Finalidad del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

Artículo- 2. Corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el supremo compromiso y voluntad de crear la mayor eficacia política y la mayor calidad revolucionaria en materia Penitenciaria, el cual está al servicio de la población privada de libertad y de sus familiares. Su actuación se encuentra dirigida a la atención de sus requerimientos, satisfacción de sus necesidades y al cumplimiento de sus derechos humanos para lograr la transformación social del privado y privada de libertad y las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de la incorporación de sus familiares, consejos comunales, organizaciones sociales y cualquier otra forma de organización del Poder Popular en las actividades pertinentes al servicio penitenciario.

Competencias de la Ministra o Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

Artículo- 3. Son competencias de la Ministra o Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario:

1. Ejercer la suprema dirección del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario;
2. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar políticas sectoriales, estrategias, planes y programas que garanticen los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas privadas y privados de libertad, en su condición de procesadas y procesados, penadas y penados , y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal;
3. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar políticas sectoriales que permitan la transformación de los ciudadanos y ciudadanas privadas y privados de libertad, en su condición de procesadas y procesados, penadas y penados, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal; para lograr su transformación social;
4. Diseñar, formular, desarrollar, evaluar, ejecutar y supervisar programas Socio Educativos para la ejecución de medidas o sanciones para las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, de privación de libertad y medidas cautelares de prisión preventiva de la población penitenciaria y de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal;
5. Regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario, mediante el control del cumplimiento de las penas, elaborando un registro actualizado de las sentencias judiciales que impongan medidas preventivas privativas de libertad, o medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial de libertad, para garantizar la inmediata libertad de quienes fueren objeto de éstas y de las personas que ya cumplieron sus penas;
6. Planificar, construir, remodelar y mantener sedes penitenciarias de calidad, aptas, adecuadas y dotadas, en cantidades apropiadas a la población penitenciaria, que garanticen espacios dignos para el alojamiento, trabajo, recreación, educación, prácticas deportivas y artísticas, y la convivencia pacífica de la población penitenciaria, aplicando con carácter preferente los avances científicos, tecnológicos y artísticos existentes en cada una de éstas áreas;
7. Garantizar el funcionamiento permanente y adecuado del sistema de salud penitenciaria, así como el mantenimiento y dotación de sus instalaciones y servicios;
8. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar políticas públicas sectoriales que garanticen el régimen penitenciario de las procesadas y procesados, penadas y penados y de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal;
9. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar políticas sectoriales y proyectos que garanticen la atención integral a las procesadas y procesados, penadas y penados y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal en las áreas de educación, trabajo, salud, cultura, deportes, formación técnico-productiva y alimentación;
10. Garantizar a la población penitenciaria el derecho al estudio, al trabajo y llevar un registro permanente y actualizado de la población privada de su libertad y de los sitios donde están cumpliendo la pena, a los fines de que sean valorados oportunamente para el otorgamiento de los beneficios procesales;
11. Tramitar indultos para ser presentados ante el Presidente de la República y velar por el cumplimiento efectivo de las penas y de los convenios de conmutación de penas y otros beneficios procesales;
12. Aplicar el protocolo de expulsión en coordinación con el respectivo Consulado y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a fin de dar cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por la República;
13. Promover la participación de los familiares de las procesadas y procesados, penadas y penados, y de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, por intermedio de las organizaciones del poder popular, en correspondencia con las políticas públicas sectoriales y programas de atención integral;
14. Planificar, organizar y ejecutar planes para la seguridad interna y la custodia de los establecimientos penitenciarios;
15. Planificar, organizar y ejecutar el régimen penitenciario aplicable a los ciudadanos y las ciudadanas privadas y privados de libertad;
16. Planificar, organizar y ejecutar las sanciones con finalidad socio-educativa dirigido a los adolescentes y las adolescentes en conflicto con la ley penal;
17. Ordenar la creación y supresión de establecimientos penitenciarios, entidades de atención, entidades de formación socio-educativas, centros de pernoctas, centros de residencia supervisada y unidades técnicas de supervisión y orientación;
18. Articular con la Comisión de Justicia Penal, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública y Defensoría del Pueblo, la efectiva y pronta realización de los juicios a la población adulta y adolescentes que se encuentren procesados;
19. Formar al personal penitenciario en materia de Derechos Humanos, para lo cual podrá establecer convenios de

cooperación educativa con instituciones nacionales e internacionales;

20. Brindar atención psicológica individual y grupal a la población penitenciaria a través del tratamiento progresivo y diferenciado;
21. Aplicar métodos de revisión y validación continua de los programas y proyectos y su observancia a los derechos humanos de los adolescentes y las adolescentes y de sus familiares;
22. Suscribir convenios nacionales e internacionales en el área penitenciaria y supervisar su seguimiento y control;
23. Establecer programas de atención primaria de salud de primer nivel, prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y transformación dirigidos a la población penitenciaria;
24. Implementar programas y proyectos de capacitación laboral y programas socio productivos que beneficien a la población penitenciaria;
25. Garantizar la seguridad y el régimen penitenciario dentro de los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, entidades de formación socio-educativas, centros de pernoctas, centros de residencia supervisada y unidades técnicas de supervisión y orientación, a los fines de que se ejecuten todos los procesos de atención integral en la población privada de libertad;
26. Implementar procedimientos de seguridad y control en los establecimientos penitenciarios;
27. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar los procesos de agrupación y clasificación de la población penitenciaria;
28. Generar políticas públicas a través del diseño, formulación, evaluación, ejecución y supervisión de sistemas de investigación y monitoreo de los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, entidades de formación socio-educativas, centros de pernoctas, centros de residencia supervisada y unidades técnicas de supervisión y orientación, con la finalidad de erradicar la asociación delincuencial interna y externa;
29. Efectuar intervenciones ordinarias y extraordinarias en materia de seguridad en los establecimientos penitenciarios;
30. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar sistemas eficientes de capacitación del recurso humano;
31. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar programas de desarrollo de la carrera funcionarial;
32. Celebrar los contratos colectivos del personal funcionarial, administrativo y obrero del Ministerio;
33. Diseñar, formular, evaluar, ejecutar y supervisar procesos y procedimientos del uso eficiente de la tecnología de punta en las áreas de trabajo;
34. Diseñar políticas para la construcción, rehabilitación y puesta en funcionamiento de establecimientos penitenciarios, entidades de atención, entidades de formación socio-educativas, centros de pernoctas, centros de residencia supervisada y unidades técnicas de supervisión y orientación, tomando en cuenta los preceptos de clasificación, agrupación y tratamiento, a fin de agilizar la realización de los procesos judiciales, atención integral y orden interno;
35. Designar a los miembros de la Comisión de Contrataciones y la Comisión de Bienes Públicos;
36. Cualquier otra que le instruya el Presidente de la República.

Principios Rectores del Servicio Penitenciario

Artículo- 4. Los principios rectores de la función penitenciaria son el cabal cumplimiento del principio de legalidad, la progresividad y el respeto a los derechos humanos, el comportamiento ético; la proporcionalidad de las medidas disciplinarias, transparencia, respeto, honestidad, confidencialidad, participación del poder popular, colaboración entre los órganos y entes del Estado y objetividad en el trato con la población de los ciudadanos y ciudadanas privados de libertad y las adolescentes o los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Principio de corresponsabilidad

Artículo- 5. La corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad en el tratamiento progresivo y formativo del individuo para la transformación social, es el principio de cuya ejecución propicia en el contacto permanente de la ciudadana o ciudadano privado de libertad y las adolescentes o adolescentes en conflicto con la ley penal, con su familia y el grupo social del cual proviene, y su objeto es lograr su conversión en ciudadanos y ciudadanas capaces de participar en la construcción de la sociedad socialista.

Integración del Ministerio

Artículo- 6. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario está integrado por los siguientes niveles de gestión: nivel superior, nivel de asesoría y apoyo, nivel sustantivo, nivel desconcentrado territorial, y el nivel descentralizado funcional.

Integración del Nivel Superior

Artículo- 7. El Nivel Superior del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario está integrado por el Despacho de la ciudadana Ministra o Ministro y la Junta Ministerial.

Integración del Nivel de Asesoría y Apoyo

Artículo- 8. El nivel de Asesoría y Apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario está integrado por las siguientes dependencias: Dirección del Despacho, Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Consultoría Jurídica, Auditoría Interna, Oficina de Seguridad Institucional, Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización y Oficina de Atención al Ciudadano y al Poder Popular.

Integración del Nivel Sustantivo

Artículo- 9. El Nivel Sustantivo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario está integrado por los siguientes Despachos de Viceministros o Viceministras:

1. Despacho del Viceministro o Viceministra para la Atención al Privado y Privada de Libertad conformado por: Dirección General de Registro y Control Penal, Dirección General de Atención Integral, Dirección General de Régimen Penitenciario y la Dirección General de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales.
2. Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Atención al Adolescente en Conflicto conformado por: la Dirección General de Asistencia Legal al Adolescente, Dirección General de Atención al Adolescente y la Dirección General de Inclusión Socialista.
3. Despacho del Viceministro o Viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales conformado por: Dirección General de Integración Social a la Familia del Privado y Privada de Libertad, Dirección General de Salud, Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte y la Dirección General de Formación Educativa y Participación Protagónica.

Integración del Nivel Desconcentrado Territorial

Artículo- 10. El Nivel Desconcentrado Territorial está integrado por: la Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema Penitenciario, Dirección General de Regiones para la Asistencia a los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal y la Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Integración del Nivel Descentralizado Funcional

Artículo- 11. El Nivel Descentralizado Funcionalmente del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario está integrado por los entes siguientes:

1. Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario; y
2. Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias.

Estructura de cargos

Artículo- 12. La estructura de cargos del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es la siguiente:

1. Cargos de Alto Nivel: Ministra o Ministro, Viceministras o Viceministros, Directoras o Directores Generales y Directoras o Directores de Línea.
2. Cargos de Confianza: Asistente Adjunto, Adjunto al Viceministro o Viceministra, Adjunto al Director, Coordinador o Coordinadora, Jefe o Jefa de División, Supervisor o Supervisora, Escoltas, Chofer – Escolta, Delegados o Delegadas de Derechos Humanos, Ecónomos, Custodios o Custodias, Socializador o Socializadora, Inspector o Inspectora Regional, Orientador u Orientadora Integral e integrantes del Grupo de Respuestas Inmediatas de Custodios (GRIC).

CAPÍTULO II
DE LA ATRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

Competencias del Nivel Superior

Artículo- 13. Son atribuciones del Nivel Superior del Ministerio del Poder Popular para El Servicio Penitenciario:

1. Ejercer la máxima autoridad en la rectoría de las políticas públicas sectoriales del Ministerio; y
2. Planificar, coordinar y evaluar las políticas públicas sectoriales en materia de servicio penitenciario.

Despacho de la Ministra o Ministro

Artículo- 14. El Despacho de la Ministra o Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es la sede física de la ciudadana Ministra o Ministro y el nivel superior del Ministerio, del cual emanan las Resoluciones Ministeriales y las altas decisiones de la gestión política, financiera, de personal y de función sectoriales. Es la dependencia desde donde se ejerce la alta dirección de los niveles superior, de asesoría o de apoyo, sustantivo, desconcentrado territorial y descentralizado funcional. Sus instrucciones son de obligatorio acatamiento para todos los entes del Ministerio y su incumplimiento genera responsabilidad personal civil, penal y administrativa.

Junta Ministerial

Artículo- 15. La Junta Ministerial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es la encargada de ejercer la rectoría del Ministerio respecto al diseño de las políticas y las directrices estratégicas de la planificación sectorial del área penitenciaria. Su objeto es diseñar y asegurar el desarrollo de los planes y proyectos del Ministerio.

Integración de la Junta Ministerial

Artículo- 16. La Junta Ministerial está integrada por la Ministra o Ministro, los Viceministros y los Viceministras; la ciudadana Ministra o Ministro podrá invitar a Directoras y Directores Generales y las máximas autoridades de los entes adscritos cuando a su juicio, la naturaleza del asunto a tratar así lo requiera.

Competencias de la Junta Ministerial

Artículo- 17. Las competencias de la Junta Ministerial son:

1. Ejercer la máxima autoridad en la rectoría de las políticas públicas del Ministerio y sus entes adscritos y tutelados, para la toma de decisiones correspondientes al sector.
2. Formular el Plan Nacional del Desarrollo Sectorial respectivo, en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo Anual Nacional.
3. Evaluar el impacto de la ejecución de los planes, y el cumplimiento de los objetivos, con el fin de introducir los correctivos que sean necesarios.
4. Analizar los planes y programas del Ministerio y sus respectivos entes adscritos y así asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los mismos.
5. Planificar y promover los principios de rendición de cuentas para dar muestra de la transparencia de la gestión administrativa del sector.
6. Evaluar y aprobar las resoluciones ministeriales suscritas en las juntas.
7. Informar por intermedio de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales las políticas sectoriales y los objetivos de la gestión institucional del sector, a fin de mantener informada a la población.
8. Cualquier otra que instruya la Ministra o Ministro.

CAPÍTULO III
DEL NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

Atribuciones del nivel de Asesoría o Apoyo

Artículo- 18. Compete a las dependencias del nivel de Asesoría y Apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, facilitar el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos sustantivos que administra el Ministerio, los cuales son los siguientes:

1. Procesos de dirección, cuya finalidad es la ejecución de las labores directivas y administrativas coordinadas y supervisadas por la ciudadana Ministra o Ministro;
2. Procesos de planificación, relativos a la formulación, ejecución, seguimiento y planeación de las políticas y planes operativos del Ministerio a corto y mediano plazo;
3. Procesos estratégicos de seguimiento y evaluación de políticas públicas, cuyo objeto es la evaluación y análisis de los procesos técnicos y políticos, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas del sector penitenciario;
4. Procesos de organización, consistentes en el diseño e instrumentación de los componentes organizativos, sistemas administrativos y metodológicos de los procesos medulares del Ministerio;
5. Procesos presupuestarios, referidos a la formulación, programación y modificación de los recursos económicos del Ministerio;
6. Procesos de auditoría y consultoría jurídica, consistentes en la articulación y apoyo dirigidos a uniformar el funcionamiento operativo, administrativo y financiero del Ministerio para garantizar la transparencia en el manejo de sus recursos;
7. Procesos administrativos y financieros, cuyo objeto es procurar la uniformidad, transparencia y legalidad en la administración de los procesos financieros y administrativos del Ministerio;
8. Procesos comunicacionales e informativos, consistentes en el diseño y ejecución de las actividades comunicacionales y divulgativas del Ministerio, así como de susentes adscritos;
9. Procesos de recursos humanos, referidos a la administración, registro y control del personal de alto nivel, funcionarial, administrativo y obrero del Ministerio, así como las actividades referidas a los programas de desarrollo y adiestramiento del recurso humano; y
10. Procesos de sistemas y tecnologías de la información, relativos al control, diseño y mejoramiento progresivo de las actividades informáticas, de sistemas de información, tecnológicos y de telecomunicaciones.

Dirección del Despacho

Artículo- 19. La Dirección del Despacho del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario es la dependencia de apoyo directo de la Ministra o Ministro, y le compete:

1. Supervisar el cumplimiento de las instrucciones que imparta la ciudadana Ministra o Ministro, facilitando el flujo de información a los Despachos de los Viceministros o Viceministras, Direcciones Generales, Oficinas del Ministerio y Entes adscritos.
2. Realizar el registro y seguimiento de las audiencias, reuniones, presentación de cuentas, asuntos de interés y demás actividades de la ciudadana Ministra o Ministro, con el objeto de administrar la agenda de actividades.

3. Apoyar a la ciudadana Ministra o Ministro y a los Viceministros o Viceministras en la preparación de los asuntos que deban someterse a la consideración del Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, del Consejo de Ministros, Juntas Ministeriales o de las Comisiones Presidenciales o interministeriales de las que forme parte el Ministerio, y a su vez, mantener informados a los Viceministros o Viceministras y a las Directoras o Directores Generales y Entes adscritos al Ministerio, acerca de las Resoluciones y Puntos de Cuenta de carácter general y particular, presentados a consideración del titular del Despacho.
4. Presentar y coordinar las actividades relacionadas con la Junta Ministerial, los asesores de la ciudadana Ministra o Ministro y las Directoras o Directores Generales y Entes adscritos al Ministerio, así como llevar las actas correspondientes, con la finalidad de hacer seguimiento de las decisiones que allí se tomen.
5. Realizar seguimiento de la rendición de cuenta de la ciudadana Ministra o Ministro al Presidente de la República, al Consejo de Ministros, así como las que han de ser consideradas en las Juntas Sectoriales en los cuales la ciudadana Ministra o Ministro forme parte.
6. Supervisar los servicios secretariales y de apoyo administrativo, así como recibir y tramitar toda la correspondencia enviada al Despacho de la ciudadana Ministra, con la finalidad de dar respuesta adecuada y oportuna a las comunicaciones recibidas.
7. Establecer las condiciones necesarias para el adecuado almacenamiento de los fondos documentales del Ministerio, en coordinación con las demás dependencias del Ministerio.
8. Aplicar mecanismos para garantizar la conservación y custodia de la documentación escrita, impresa, gráfica, fotográfica y audiovisual del Ministerio.
9. Diseñar la política para la organización, conservación, valoración, selección y desincorporación de los fondos documentales de la institución, de conformidad con los lineamientos emanados del órgano rector en la materia y diseñar programas para la restauración de los documentos del fondo histórico.
10. Facilitar el acceso a la documentación e información necesaria al personal del Ministerio en su labor administrativa diaria, con el fin de apoyar sus trabajos de estudios e investigación.
11. Establecer mecanismos que permitan proveer a los ciudadanos el derecho de acceso a la información y, a su vez, preservar el derecho a la intimidad y la reserva de los documentos privados, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
12. Elaborar los instrumentos de descripción y clasificación que aseguren el control, el acceso y la recuperación rápida y eficiente de la información contenida en el archivo, de acuerdo con los lineamientos del órgano rector de la materia, y a la vez, asesorar en materia de organización, clasificación y conservación de documentos a las distintas dependencias organizativas de la Institución.
13. Implementar conjuntamente con la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información, la instalación de sistemas informáticos que faciliten la digitalización, clasificación y resguardo de los fondos documentales de la Oficina.
14. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
15. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Artículo- 20. Corresponde a la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas:

1. Ejercer la actuación como unidad administrativa de apoyo de la Junta Ministerial con el fin de presentar resultados y propuestas de las investigaciones y seguimiento de los análisis de las políticas públicas del sector.
2. Analizar y evaluar la ejecución y el impacto de las políticas públicas que están bajo la responsabilidad del Ministerio y someter el resultado de sus estudios a la consideración de la Junta Ministerial, para que ésta adopte las decisiones a que haya lugar.
3. Establecer y verificar la compatibilidad con las políticas públicas sub-sectoriales generadas en los Despachos de los Viceministros y Viceministras con el objeto de lograr la armonización de las políticas sectoriales.
4. Realizar las actividades de seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales del Ministerio, a partir de los insumos suministrados por los Despachos de los Viceministros y Viceministras para analizar los resultados e impactos de las mismas y presentar informes a la Junta Ministerial con el objeto de alcanzar los objetivos y metas planteados.
5. Analizar y recomendar cursos de acción relativa a la evaluación del funcionamiento, desempeños y resultados de la gestión de los entes descentralizados funcionalmente adscritos y tutelados en el marco de las directrices, estrategias, planes y proyectos bajo la competencia del Ministerio.
6. Diseñar los escenarios de la dinámica del sector y proponer a la Junta Ministerial cursos alternativos de acción como resultado de la evaluación de las políticas sectoriales tomando en cuenta los vínculos interinstitucionales necesarios para lograr los acuerdos intersectoriales que le otorguen viabilidad a las políticas, planes y proyectos del Despacho.
7. Efectuar los análisis del entorno que permitan mejorar el diseño y ejecución de las estrategias sectoriales.
8. Presentar mecanismos de articulación con las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio con los otros Despachos Ministeriales, con el objeto de armonizar objetivos, metas, recursos y demás acciones involucradas en su ejecución.
9. Establecer mecanismos que permitan mantener actualizado el sistema de información publico existente en el Despacho sobre las políticas, planes, y proyectos del sector, incluyendo el impacto de la ejecución de los mismos a objeto de tomar decisiones.
10. Presentar a consideración y evaluación de la Junta Ministerial las materias objeto de su competencia.
11. Elaborar estudios de prospectiva a los fines de estimar escenarios sobre el desarrollo del sector a mediano y largo plazo.
12. Presentar indicadores de gestión de la evaluación de los objetivos estratégicos establecidos de las dependencias del Ministerio, a los fines de informar continuamente del desarrollo y funcionamiento de las políticas trazadas.
13. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
14. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Consultoría Jurídica

Artículo- 21. Corresponde a la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para El Servicio Penitenciario:

1. Asesorar jurídicamente a las Direcciones Generales y entes del Ministerio, con el fin de defender sus derechos, bienes e intereses; así como coordinar todo planteamiento jurídico sometido a su consideración por el Despacho de la Ministra o Ministro, los Despachos de los Viceministros o Viceministras, Directores o Directoras Generales y demás funcionarios, así como también los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio.
2. Instruir al Ministerio en la elaboración de las causas laborales y funcionariales, con el fin que sean sustanciados de conformidad con los procedimientos establecidos en la normativa legal correspondiente.

3. Realizar seguimiento de todas las causas judiciales o extrajudiciales en donde el Ministerio sea parte como demandante o demandado para defender sus intereses o de los entes adscritos.
4. Facilitar y colaborar con la Procuraduría General de la Republica cuando ésta requiera información, documentos o cualquier otro instrumento para la formación del criterio jurídico de las causas del Ministerio de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República
5. Presentar expeditamente los informes de las causas en las que la Procuraduría General haya otorgado sustitución, tal y como lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.
6. Establecer mecanismos de articulación con la Procuraduría General de la República, a los fines de solicitar opinión previa, expresa y favorable de todos los actos de convenimiento, desistimiento de compromisos en árbitros, de conciliación o transacción, relacionados directa o indirectamente con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela.
7. Diseñar anteproyectos de Ley, reglamentos, decretos, resoluciones, circulares, los cuales tengan competencia jurídica con el Ministerio
8. Evaluar y dar respuesta a las consultas que le sean formuladas por las diversas dependencias del Ministerio en materia administrativa, laboral, civil y de cualquier otra materia jurídica de interés para el mejor funcionamiento del Ministerio
9. Presentar opiniones sobre la pertinencia o no de los procedimientos de destitución de los Funcionarios que sean amparados por el ordenamiento jurídico que rige la Función Pública.
10. Evaluar y dictaminar sobre los recursos jerárcuicos interpuestos contra los actos administrativos emanados del Ministerio.
11. Establecer mecanismos para uniformar el funcionamiento operativo, administrativo y financiero del Ministerio, a fin de garantizar la transparencia en el manejo de sus recursos.
12. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
13. Las demás atribuciones que le designe la máxima autoridad del Ministerio.

Oficina de Auditoría Interna

Artículo- 22. Corresponde a la Oficina de Auditoría Interna:

1. Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.
2. Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en el Ministerio, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.
3. Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades del Ministerio, para evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, deberá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.
4. Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que opera el Ministerio.
5. Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el Ministerio a otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estimen convenientes.
6. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y condiciones establecidos por el Contralor o Contralora General de la República en la Resolución dictada al efecto.
7. Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, hechos, u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos del Ministerio.
8. Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por el Ministerio y sus dependencias, para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría o de cualquier actividad de control, tanto por la Contraloría General de la República como por la Unidad de Auditoría Interna.
9. Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicos del Ministerio, antes de la toma de posesión del cargo.
10. Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás directores o autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo del Ministerio.
11. Participar, cuando se estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a voto, en los procedimientos de contrataciones públicas realizados por el Ministerio.
12. Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública del Ministerio, sin menoscabo de las funciones que le corresponda ejercer a la Oficina de Atención al Ciudadano y al Poder Popular.
13. Ejercer potestad investigativa de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.
14. Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, a objeto de formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa o imponer multas, cuando corresponda.
15. Remitir a la Contraloría General de la República los expedientes en los que se encuentren involucrados funcionarios de alto nivel o en quién o quienes delegue responsabilidades en el ejercicio de sus cargos, cuando existan elementos de convicción o prueba que puedan comprometer su responsabilidad.
16. Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición del desempeño de la Unidad de Auditoría Interna.
17. Promover el uso y actualización de Manuales de Normas y Procedimientos que garanticen la realización de procesos eficientes, así como el cumplimiento de los aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos del Ministerio.
18. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Contraloría General de la República o cualquier órgano o ente legalmente competente para ello, según el caso; las denuncias recibidas las áreas estratégicas, así como la situación administrativa, importancia, dimensión y áreas críticas del Ministerio.

19. Elaborar su proyecto de presupuesto anual con base a criterios de calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad jerárquica, lo incorpore al presupuesto del Ministerio.
20. Las demás funciones que le señale la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento y demás instrumentos legales y sublegales aplicables de control fiscal interno, así como las asignadas por la máxima autoridad del Ministerio, en el marco de las competencias que les corresponde ejercer a los órganos de control fiscal interno.

Oficina de Atención al Ciudadano y al Poder Popular

Artículo- 23. Compete a la Oficina de Atención al Ciudadano y al Poder Popular:

1. Establecer mecanismos para promover la participación ciudadana, a fin de realizar eventos, charlas, seminarios y cualquier otra actividad que permita alcanzar dicho objetivo.
2. Supervisar y atender las iniciativas de la ciudadanía, vinculadas con el ejercicio de su participación para el control de la gestión pública.
3. Realizar propuestas de programas pedagógicos e informativos y toda actividad que fortalezca los valores, virtudes y derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4. Implementar estrategias para promover el ejercicio del Derecho a la Participación Ciudadana en el control de la gestión pública, para dar cumplimiento a las Normas.
5. Establecer espacios de debate público, a fin de dar a conocer a la ciudadanía experiencias exitosas y buenas prácticas sobre la Participación Ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública.
6. Establecer mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto económico, financiero y social, que conlleven a una eficiente ejecución de los mismos.
7. Diseñar e implementar con las dependencias del Ministerio actividades tendentes a incorporar a los ciudadanos a las labores de control sobre la gestión pública, de conformidad con lo previsto en el contenido de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana.
8. Realizar investigaciones orientadas a generar proyectos y normas relacionados con la Participación Ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública.
9. Establecer un registro de las comunidades organizadas de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública, que permita identificar los actores sociales para la implementación de planes, programas y proyectos diseñados por el Ministerio para las comunidades aledañas a los recintos de reclusión
10. Informar a la ciudadanía sobre la estructura organizativa y utilización de los recursos asignados al Ministerio a través de un Informe de fácil manejo y comprensión, que se publicarán y se pondrán a disposición de los ciudadanos y ciudadanas que acudan a la institución.
11. Informar a la ciudadanía sobre los trámites administrativos que deben realizar para la solicitud de algún proceso a efectuar en el Ministerio.
12. Asesorar, atender, orientar y apoyar a los ciudadanos que acudan al Ministerio para solicitar información, requerir documentos o interponer denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones de forma física o electrónica, con el fin de darles oportuna respuesta.
13. Establecer un sistema que permita llevar un registro automatizado de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones, para modernizar de forma eficiente los procedimientos, políticas y administración de servicio, con atención rápida, oportuna y confiable.
14. Informar sobre hechos denunciados, a la Consultoría Jurídica o la Oficina de Auditoría Interna a fin adoptar las medidas inmediatas tendentes a impedir o corregir deficiencias o la producción de daños al patrimonio público, de ser el caso, preservando, en todo momento, la identidad del denunciante, para la protección de su integridad física y que el órgano competente tome medidas que permitan mejorar el servicio.
15. Presentar ante a la Oficina de Auditoría Interna, una relación mensual de todas las denuncias recibidas a los fines de que se inicien los procedimientos que hubiere lugar, garantizándole al denunciante celeridad en la corrección de la deficiencia denunciada.
16. Presentar periódicamente, reportes estadísticos de las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones atendidas, a fin de comparar y analizar los datos para la toma de decisiones.
16. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
17. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales

Artículo- 24. Compete a la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales:

1. Diseñar la estrategia comunicacional e informativa del Ministerio, siguiendo los lineamientos del Despacho de la Ministra o Ministro, y del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información como órgano rector en la materia.
2. Implementar y Ejecutar el Sistema Integral de Comunicación e Información de los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional en el Ministerio, con la finalidad de desarrollar, fomentar y promover las políticas integrales de comunicación e información del Ministerio, en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
3. Asesorar y recomendar la acción informativa del Ministerio y de sus entes adscritos, conforme a los lineamientos impartidos por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, para la difusión de la información.
4. Efectuar y difundir las informaciones generadas por las distintas dependencias administrativas que conforman el Ministerio, a fin de mostrar los logros del organismo.
5. Diseñar y realizar documentales, micros y reportajes de carácter divulgativo del material escrito o audiovisual que se produzca a nivel nacional sobre la gestión que ejecuta el Ministerio, en coordinación con la Dirección del Despacho.
6. Analizar el entorno de opinión pública nacional e internacional, y las matrices de información generadas por los medios de comunicación social sobre la gestión del Ministerio, en coordinación con la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, a fin de informar a la Junta Ministerial.
7. Informar al Despacho de la Ministra o Ministro sobre el impacto de sus declaraciones y propuestas de políticas públicas en la opinión pública nacional y en los factores políticos del país.
8. Presentar y difundir avisos, notas de prensa, comunicados, notificaciones, documentales, micros y otros servicios escritos y audiovisuales, dirigidos al público en general sobre la gestión del Ministerio en coordinación con el Despacho de Ministra.
9. Programar y ejecutar el protocolo a seguir para los actos y ceremonias que cuenten con la participación de los Despachos de la Ministra o Ministro, los Viceministros o Viceministras y los Directores y Directoras Generales.
10. Presentar información sobre los servicios que presta el Ministerio, y los trámites que debe realizar la ciudadanía para acceder a los mismos, conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano y al Poder Popular.
17. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de

Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.

11. Presentar indicadores de gestión sobre el impacto comunicacional interno y externo del Ministerio a nivel nacional.
12. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Oficina de Seguridad Institucional

Artículo- 25. Corresponde a la Oficina de Seguridad Institucional del Ministerio del Poder Popular para El Servicio Penitenciario:

1. Apoyar y dar acompañamiento exclusivo y preciso para la defensa y protección de vida e integridad física de las personas que tengan función de autoridad en el Ministerio y las que determine la ciudadana Ministra o Ministro.
2. Establecer mecanismos y políticas de protección para la ciudadana Ministra o Ministro, Viceministros o Viceministras, visitantes, personalidades y trabajadores del Ministerio, a fin de prevenir cualquier situación de riesgo.
3. Evaluar en coordinación con la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información, lo concerniente a la seguridad de los datos informáticos del Ministerio, así como el sistema de telecomunicaciones y los dispositivos de seguridad implementados.
4. Supervisar el funcionamiento y operatividad del sistema de seguridad interna del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, de acuerdo a lo indicado en los Manuales de Seguridad, con la finalidad de coordinar e implementar acciones que garanticen la seguridad e integridad de las personas, bienes e instalaciones a cargo del Ministerio.
5. Implementar dispositivos relacionados con la seguridad de los datos informáticos del Ministerio, así como el sistema de telecomunicaciones en coordinación con la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información.
6. Establecer normas para el control de acceso del personal y visitantes a las diferentes áreas del Ministerio, a fin de minimizar riesgos y mantener el reguardo y control de los espacios.
7. Establecer mecanismos de control de permanencia del personal administrativo y obrero, dentro de las dependencias del Ministerio, fuera de las horas y días laborales, con el fin de mantener el debido registro y control de acceso.
8. Realizar investigaciones por supuestas anomalías de la conducta de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, que pueda implicar inobservancia de sus deberes, ya sea por denuncia o de oficio.
9. Establecer mecanismos de articulación con todas las dependencias del Ministerio a nivel nacional, que le permitan conocer las quejas y denuncias, incluso anónimas; con motivo de faltas administrativas o infracciones disciplinarias cometidas.
10. Diseñar normas internas y procedimientos que contribuyan al establecimiento de controles de prevención de riegos y accidentes laborales, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
11. Informar y ejecutar programas educativos, divulgativos e informativos para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio, relacionados con la seguridad institucional y seguridad laboral, con el fin de dar respuesta ante accidentes, riesgos y enfermedades profesionales que atenten contra la estabilidad del órgano.
12. Presentar informes que indiquen la situación en los aspectos de higiene, ambiente, seguridad y salud laboral, a fin de notificar avances, dificultades y alcance de metas, estadísticas, incidentes, entre otros.
13. Establecer el enlace y coordinación con las autoridades correspondientes y con los particulares que sean necesarios, para el cumplimiento de las misiones generales de la ciudadana Ministra o Ministro.
14. Supervisar, y coordinar las acciones necesarias para la creación, organización y activación de brigadas de emergencias integradas por personal de la institución, distribuidos en las distintas sedes del país.
15. Realizar los trámites necesarios ante la máxima instancia del Ministerio para la realización de planes de adiestramiento al personal integrante de las Brigadas de Emergencias y personal de la Dirección de Seguridad a través de entes públicos y privados especializados en materia de protección física, industrial o de prevención de riesgos.
16. Supervisar la puesta en práctica de campañas de difusión de adiestramiento en materia de atención de emergencias de personal de la institución.
17. Presentar estadísticas e informes técnicos mensuales, en relación a todos los procedimientos llevados por la oficina.
18. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
18. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Oficina de Administración y Finanzas

Artículo- 26. Compete a la Oficina de Administración y Finanzas:

1. Efectuar la ejecución presupuestaria y financiera del presupuesto de gastos e inversiones del Ministerio y elaborar los registros correspondientes, conjuntamente con las demás dependencias administrativas responsables.
2. Ejecutar y supervisar que las operaciones administrativas del Ministerio se rijan por las normas generales de contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República y siguiendo las normas y metodologías establecidas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública.
3. Programar y supervisar los servicios administrativos requeridos por el Ministerio para el desarrollo de las actividades de sus dependencias.
4. Supervisar, ejecutar y controlar la adquisición, custodia, registro contable, suministro y mantenimiento de bienes y servicios para garantizar el funcionamiento del Ministerio.
5. Supervisar la ejecución de los contratos y convenios suscritos por el Ministerio, para la adquisición de materiales, bienes o la prestación de servicios.
6. Establecer e impartir lineamientos e instrucciones, en el ámbito de su competencia, a las demás unidades administrativas del Ministerio, a los fines de unificar los procedimientos.
7. Realizar conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Seguridad Institucional, todas las actividades necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e higiene laboral.
8. Realizar conjuntamente con las demás unidades administrativas del Ministerio las actividades propias para el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e higiene industrial.
9. Establecer mecanismos a fin de hacer cumplir las normas, registros y controles internos, que en materia de sus competencias, sean necesarios para el buen funcionamiento del Ministerio.
10. Realizar las adquisiciones de materiales, suministros, bienes y servicios que se requieran, por su monto y naturaleza, a través de los procesos de contrataciones establecidos en la Ley que rige la materia, en coordinación con la Comisión de Contrataciones.
11. Presentar cuentas sobre las materias de su competencia a los órganos de control interno y externo competentes.
12. Planificar y dirigir la ejecución oportuna del presupuesto de gastos, a los fines de realizar los pagos correspondientes en cortos períodos de tiempo.
13. Planificar y dirigir las acciones tendientes al registro y control contable de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio.

14. Establecer los mecanismos necesarios para que los proveedores cumplan con los términos de las contrataciones en la adquisición de materiales, bienes y servicios en cuanto a la calidad y cantidad.
15. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos existentes para la ejecución de las funciones en cuanto al plan anual de compras, registro de proveedores, control administrativo, Bienes Públicos, registro y soportes de los pagos, dando así cumplimiento a lo establecido en las leyes, como responsables de dichos procesos.
16. Apoyar a la Comisión de Contrataciones en todo lo relacionado al proceso de selección de los proveedores, como responsables de mantener y actualizar la base de datos de los mismos, para dar cumplimiento a las normas implementadas por el Servicio Nacional de Contratistas (SNC).
17. Establecer los vínculos y relaciones necesarias con los órganos rectores en las materias de su competencia.
19. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
18. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información

Artículo- 27. Compete a la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información;

1. Formular planes estratégicos para la incorporación de sistemas y tecnologías de información dentro del Ministerio, de acuerdo con las directrices del órgano rector en la materia.
2. Supervisar y evaluar las tendencias y avances, en cuanto a la tecnología y equipos de informática, para asesorar y apoyar la adquisición de equipos y servicios tecnológicos requeridos por las dependencias del Ministerio.
3. Planificar estratégicamente el desarrollo y mantenimiento de los componentes más generales de la infraestructura informática de la organización a saber: la arquitectura de datos de información, la arquitectura de sistemas y aplicaciones, la arquitectura de servicios de información y la arquitectura tecnológica.
4. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo, instalación e implementación de sistemas y aplicaciones administrativas, contratadas o adquiridas a operadores de software, exigiendo su adecuación a los estándares de diseño y operación establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.
5. Establecer y mantener la arquitectura de datos e información adecuada para la organización.
6. Desarrollar y mantener la arquitectura tecnológica necesaria para la organización, adecuada a las arquitecturas de datos, sistemas y aplicaciones, y de servicios, mediante el uso de tecnologías de información de vanguardia.
7. Definir políticas y estándares de informática de acuerdo con las directrices del órgano rector, así como los mecanismos necesarios para el uso e incorporación de los sistemas y tecnologías de información a nivel organizacional.
8. Actualizar el inventario de equipos y tecnologías de información de la organización, a los fines de velar por la actualización y mantenimiento de los dispositivos tecnológicos.
9. Planificar, ejecutar la evaluación, instalación y desincorporación del equipamiento de los sistemas automatizados de información necesarios para el Ministerio.
10. Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento integral preventivo y correctivo, a fin de mantener en óptimas condiciones de operatividad todos los sistemas automatizados de información.
11. Supervisar la ejecución de los contratos que suscriba el Ministerio en materia de adquisición de bienes o prestación de servicios, en el campo de tecnología de información.
12. Realizar e implementar sistemas administrativos en materia de recursos humanos, administración, planificación, presupuesto, distribución, dotación y almacén, a fin de optimizar los procesos y garantizar el resguardo de la información.
13. Sistematizar los formularios establecidos en los Manuales de Normas y Procedimientos aprobados por la máxima autoridad para su implementación.
14. Establecer los mecanismos necesarios para el resguardo y revisión periódica de las bases de datos, a fin de evitar que sufran posibles alteraciones.
15. Establecer controles para la recepción y almacén de los equipos tecnológicos del Ministerio.
16. Programar con la Oficina de Recursos Humanos la ejecución de planes de adiestramiento y capacitación del personal del Ministerio en materia tecnológica a fin de fortalecer la cultura informática del personal, promoviendo el uso eficiente de todos los componentes de la infraestructura informática instalada del Ministerio.
17. Informar a la ciudadanía de los proyectos que ejecuta el Ministerio y su estructura organizativa, así como los procedimientos administrativos y servicios que presta, a través de la página web, entre otros.
20. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
18. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

Artículo- 28. Compete a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización:

1. Establecer enlace entre el Ministerio y los Órganos rectores de los Sistemas Nacionales de Planificación, Presupuesto y Organización y Sistemas, con el fin de obtener lineamientos técnicos en las materias consideradas, para ser aplicados en la formulación de los planes, proyectos y presupuestos relativos a las áreas antes mencionadas que prevea desarrollar el Ministerio.
2. Revisar permanentemente la estructura organizativa y los procesos del Ministerio, así como realizar los ajustes pertinentes, con la finalidad de fortalecerlos oportunamente, en conformidad con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular de Planificación.
3. Apoyar el diseño, análisis e instrumentación de los sistemas administrativos y metodologías de trabajo de las dependencias administrativas del Ministerio que lo requieran en coordinación con la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información.
4. Establecer y mejorar continuamente los componentes de la organización necesarios para establecer un sistema gerencial eficiente en el Ministerio.
5. Diseñar los diferentes manuales administrativos, de organización, de normas y procedimientos y técnicos, así como también organigramas, formularios y diagramas de flujo de los diferentes procesos que conforman las unidades administrativas del Ministerio y mantenerlos debidamente actualizados.
6. Diseñar e implementar junto con las dependencias involucradas el plan de simplificación de trámites administrativos del Ministerio.
7. Evaluar la ejecución presupuestaria de todas las dependencias ejecutoras del Ministerio, para determinar las posibles reformulaciones e insubsistencias en coordinación con las mismas, en función de las bases de cálculos presentadas.
8. Realizar conjuntamente con las dependencias del Ministerio: el Plan Operativo Anual, Presupuesto, Memoria y Cuenta Anual, Informes de Gestión y Mensaje Presidencial, así como el hacer seguimiento a fin de verificar el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
9. Diseñar, implantar y coordinar el sistema de control de gestión y evaluación para la gestión institucional de acuerdo a la normativa legal vigente.

10. Planificar y coordinar la producción de información estadística generadas por la gestión del Ministerio conjuntamente con las demás dependencias y en correspondencia con las pautas establecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
11. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Oficina de Recursos Humanos

Artículo- 29. Compete a la Oficina de Recursos Humanos:

1. Formular el plan del personal de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública y directrices que emanen del Ministerio del Poder Popular de Planificación, a fin de dirigir, evaluar y controlar su ejecución.
2. Presentar informes relacionados con la ejecución del plan de personal al Ministerio del Poder Popular de Planificación, y cualquier otra información que fuese solicitada.
3. Establecer lineamientos para la administración de personal, según señalado por la Ley del Estatuto de la Función Pública.
4. Aplicar los programas de desarrollo y capacitación del personal de conformidad con las políticas que establezca el Ministerio del Poder Popular de Planificación.
5. Aplicar los procesos necesarios para la evaluación del personal.
6. Realizar los concursos que se requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios o funcionarias de carrera en coordinación con la Comisión de Evaluación designado por la ciudadana Ministra o Ministro, según las bases y baremos aprobados por Ministerio del Poder Popular de Planificación.
7. Presentar ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación los movimientos de personal a que hubiere lugar y el Manual Descriptivo de Cargos en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, a los fines de su aprobación.
8. Presentar los expedientes a la Consultoría Jurídica para que dictamine los casos de hechos que pudieren dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Contra la Corrupción, Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y demás leyes penales.
9. Establecer enlace con el órgano o ente respectivo y el Ministerio del Poder Popular de Planificación, que permitan la óptima utilización del talento humano, con la finalidad de garantizarle continuidad y desarrollo dentro de la organización.
10. Supervisar programas de evaluación de rendimiento y actuación del personal, así como asesorar en materia de transferencia, comisiones de servicio y promociones con miras a fortalecer la motivación y el desarrollo de los mismos.
11. Establecer y supervisar el mejoramiento, bienestar y desarrollo del personal que presta sus servicios en el Ministerio, con la finalidad de garantizar los beneficios laborales y contractuales, previstos en la Ley.
12. Supervisar los programas de desarrollo y capacitación del personal de conformidad con las políticas que establezca el Ministerio.
13. Formular y coordinar el ante-proyecto de presupuesto de las dependencias del Ministerio en cuanto al gasto del personal, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización del Ministerio y la Oficina Nacional de Presupuesto para su ejecución.
14. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto, solicitar las cuotas de compromiso o desembolso, así como los traspasos en caso de ser necesario a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización, a los fines de efectuar su ejecución.
15. Informar sobre las posibles insuficiencias presupuestarias y presentar las bases de cálculo para la solicitud de créditos adicionales.
21. Elaborar su Plan Operativo Anual tomando en consideración las solicitudes y los lineamientos que le formule la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización para la asignación de los recursos de los gastos de funcionamiento.
16. Las demás que se establezcan en la Ley del Estatuto de la Función Pública y su Reglamento; y cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

CAPÍTULO IV
DEL NIVEL SUSTANTIVO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

Atribuciones del Nivel Sustantivo del Ministerio del Poder Popular para El Servicio Penitenciario

Artículo- 30. El objeto del nivel sustantivo es el diseño y gestión de los procesos medulares del Ministerio, y está integrado por los Despachos de Viceministros o Viceministras para la Atención al Privado y Privada de Libertad, de Formación Educativa y Asuntos Sociales y para la Atención al Adolescente en Conflicto. Los procesos medulares son:

1. Procesos de políticas públicas y lineamientos para la atención del privado y privada de libertad y egresados del sistema, orientados a: la atención integral; asistencia jurídica, seguridad y garantía de los derechos humanos, dirigida a la población privada de libertad en los establecimientos penitenciarios, centros de pernocta, centros de residencia supervisada y unidades técnicas de supervisión y orientación;
2. Procesos de políticas públicas y lineamientos para la formación educativa y asuntos sociales del privado y privada de libertad, adolescente en conflicto con la Ley y egresados del sistema, orientados a la satisfacción de sus necesidades sociales y formativas así como el brindar apoyo a la integración familiar;
3. Procesos de políticas públicas y lineamientos para la atención integral de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, que aseguren la protección y tratamiento socio-educativo de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como la interrelación con órganos e instituciones que conforman la protección integral del niño, niña y adolescente y del sistema penal paralas adolescentes y los adolescentes; y
4. Procesos ejecutores regionales, consistentes en la ejecución, fortalecimiento e implementación de las políticas sectoriales y programas diseñados por los despachos de Viceministros o Viceministras, con la finalidad de incorporar la atención integral, médica, legal y social en los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Pernocta, Centros de Residencia Supervisada, Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación, Entidades de Atención y Entidades de Formación Socio-Educativa.

SECCIÓN I
DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O VICEMINISTRA PARA LA ATENCIÓN AL PRIVADO Y PRIVADA DE LIBERTAD

Competencias del Despacho del Viceministro o Viceministra para la Atención al Privado o Privada de Libertad

Artículo- 31. El Despacho del Viceministro o Viceministra para la Atención al Privado o Privada de libertad estará dirigido por un Viceministro o Viceministra, quién formula la política en materia de atención al privado y privada de libertad y actúa por lineamientos de la ciudadana Ministra o Ministro y rinde cuentas de su actuación y ejecuta sus instrucciones directas. Sus competencias son:

1. Asistir al Despacho de la ciudadana Ministra o Ministro, en la elaboración y seguimiento de políticas y estrategias en materia de atención a la población penitenciaria.
2. Diseñar las propuestas legislativas que permitan la elaboración de anteproyectos de leyes, convenios, tratados, acuerdos internacionales, reformas y actualización legislativa en la materia de su competencia, en coordinación con la Consultoría Jurídica del Ministerio.
3. Diseñar políticas para la clasificación y el tratamiento de los privados y privadas de libertad durante el proceso de penados o penadas.
4. Diseñar políticas para la agrupación de los privados y privadas de libertad en calidad de procesados o procesadas.

5. Diseñar políticas que garanticen la atención integral del privado y privada de libertad, a través del tratamiento en las áreas de cultura, deporte y recreación para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida.
6. Diseñar políticas para la atención integral de los procesados y procesadas.
7. Registrar y tomar decisiones de los informes técnicos y reportes periódicos que se reciben de las Direcciones Generales adscritas, sobre los resultados que se deriven de las acciones emprendidas.
8. Diseñar programas de tratamiento individual y colectivo para la población privada de libertad.
9. Establecer políticas de seguridad y custodia que brinden un sistema de control dentro de los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Pernoctas y Centros de Residencia Supervisada (CRS).
10. Realizar informes de indultos y presentar a la máxima autoridad para el trámite correspondiente ante él Presidente de la República.
11. Supervisar el cumplimiento de convenios de conmutación de pena y otros beneficios para la población del sistema penitenciario.
12. Establecer alianzas con órganos y entes del estado con competencia en el ámbito de seguridad ciudadana para el desarrollo de proyectos de intervención y estabilización en los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Pernoctas, Centros de Residencia Supervisada (CRS) y las Unidades Técnicas de Supervisión Orientada (UTSO).
13. Asesorar al Despacho de la Ministra o Ministro en la formulación de planes, programas y políticas relativas a la promoción, preservación y defensa de los Derechos Humanos del privado y privada de libertad en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
14. Diseñar políticas para la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de la población privada de libertad en los establecimientos penitenciarios.
15. Establecer políticas para la aplicación del régimen penitenciario en concordancia con los planes de atención integral.
16. Establecer programas para los privados y privadas de libertad en donde se propicie el desarrollo de una cultura de paz y actitudes positivas en los individuos, enmarcada en los Derechos Humanos.
17. Formular planes, programas y políticas relativas a la promoción, preservación y defensa de los derechos humanos de acuerdo al ámbito de su competencia en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
18. Facilitar desde una perspectiva de seguridad, el diseño y seguimiento de las políticas de Estado para los Establecimientos Penitenciarios.
19. Establecer estrategias para la articulación con los órganos de justicia a fin de velar por el debido proceso de los privados y privadas de libertad.
20. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
21. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los objetivos estratégicos establecidos, a los fines de informar continuamente del desarrollo y funcionamiento de las políticas trazadas.
22. Establecer estrategias de seguimiento y sistemas de evaluación para el control de la gestión programática institucional en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
23. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Dirección General de Registro y Control Penal

Artículo- 32. Las competencias de la Dirección General de Registro y Control Penal son:

1. Planificar, supervisar y evaluar el registro de ingreso y egreso, de los procesados y procesadas y, penados y penadas, a fin de generar un sistema de control físico y automatizado de la data.
2. Establecer mecanismos para la agrupación de Procesados y Procesadas de acuerdo a: género, edad, perfil conductual, naturaleza del delito imputado, salud mental y física, conducta pre delictual, y los establecidos en las normas legales vigentes, en coordinación con la Dirección General de Atención Integral y la Dirección General de Salud.
3. Diseñar, planificar y dar seguimiento a mecanismos, para la clasificación de los penados y penadas de acuerdo al grado de seguridad máxima, media y mínima, en coordinación con Dirección General de Atención Integral, a fin de mantener la estadística actualizada para la información veraz y oportuna de las autoridades del nivel superior del Ministerio.
4. Planificar y diseñar programas para el traslado de los procesados y procesadas a los Tribunales de Justicia en conjunto con las Direcciones Generales correspondientes.
5. Supervisar el cumplimiento de los derechos civiles y políticos de los procesados y procesadas, a fin de velar por los derechos fundamentales.
6. Establecer mecanismos de articulación con los órganos integrantes de la administración de justicia, con la finalidad de garantizar el debido proceso para los procesados y procesadas y reducir el retardo procesal.
7. Diseñar y planificar actividades de asesoría jurídica para los procesados y procesadas, penados y penadas, a fin de velar por el cumplimiento del debido proceso en coordinación con los órganos de administración de justicia.
8. Analizar el estado de la causa de los procesados y procesadas, a fin de impedir el retardo procesal y tramitar las solicitudes de revisión de la medida por una menos gravosa, medidas cautelares sustitutiva de la privación de libertad o medidas humanitarias.
9. Evaluar y dar seguimiento a los penados y penadas para el otorgamiento oportuno de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena, suspensión condicional de la ejecución de la pena, medidas humanitarias, y la redención de la pena por el trabajo y el estudio.
10. Supervisar el cumplimiento de las normas e instrucciones emanadas del Despacho del Viceministro o Viceministra para la atención al Privado o Privada de Libertad, para el debido registro y control de la población privada de libertad.
11. Establecer un sistema de información que permita llevar el registro y control de los expedientes en los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Pernocta, Centros de Residencia Supervisada (CRS) y las Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación (UTSO).
12. Establecer lineamientos para el registro y reguardo de los expedientes de la población penitenciaria en los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Pernocta, Centros de Residencia Supervisada (CRS) y las Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación (UTSO).
13. Establecer un registro detallado de los privados y privadas de libertad, implementado el uso de nuevas tecnologías para un mayor resguardo y control de la información.
14. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
15. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.

16. Establecer estadísticas e indicadores de eficiencia y eficacia que permitan evaluar los resultados del proceso de ingreso, permanencia y egreso de los privados y privadas de libertad del sistema penitenciario, así como el desempeño del personal responsable del proceso.
17. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
18. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Régimen Penitenciario

Artículo- 33. Las competencias de la Dirección General de Régimen Penitenciario son:

1. Diseñar, implementar y supervisar los mecanismos de seguridad y custodia adecuados para los procesos de ingreso, permanencia, egreso, traslados y permisos de los privados y privadas de libertad, acorde con los requerimientos y la normativa legal vigente.
2. Planificar, hacer seguimiento y evaluar las políticas relacionadas con la intervención en los Establecimientos Penitenciarios, en correspondencia con la política emanada del Viceministro o Viceministra de Atención al Privado o Privada de Libertad y asuntos sociales.
3. Diseñar políticas y estrategias para salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de la población penitenciaria, sus familiares, visitas y personal adscrito a los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Residencia Supervisada (CRS) y las Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación (UTSO).
4. Diseñar planes para la atención de contingencias en situaciones de eventos en los Establecimientos Penitenciarios.
5. Establecer normas y procedimientos para el control y uso de los equipos antimotines y otros medios técnicos en los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Residencia Supervisada (CRS) y las Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación (UTSO).
6. Diseñar lineamientos de seguridad para las áreas externas a los Establecimientos Penitenciarios en conjunto con los organismos militares y policiales, a fin de reguardar las adyacencias de los establecimientos.
7. Diseñar, supervisar y controlar los procedimientos del Grupo Especial de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC), en eventualidades y cualquier otra circunstancia en los Establecimientos Penitenciarios.
8. Establecer lineamientos que permitan mantener la formación y adiestramiento constante y diferenciado en el Grupo Especial de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC).
9. Evaluar y actuar a través del Grupo Especiales, cuando las circunstancias así lo requieran y sea debidamente justificado y autorizado por la máxima autoridad del Ministerio.
10. Diseñar normativas para el cumplimiento de los roles de guardia en los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Residencia Supervisada (CRS) y las Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación (UTSO).
11. Diseñar los servicios de guardia del personal de seguridad y custodia en correspondencia con las particularidades existentes para cada Establecimiento Penitenciario.
12. Diseñar, evaluar y organizar la atención y prestación del servicio del apoyo canino para los Establecimientos Penitenciarios y eventos que así lo requieran.
13. Diseñar e implementar mecanismos de registro, control, seguimiento, distribución y equipamiento y medios técnicos para los Establecimientos Penitenciarios, atendiendo los requerimientos previstos en la Ley que regula la materia en articulación con el órgano competente.
14. Establecer normas y lineamientos para las acciones de seguridad e inteligencia, así como coordinar y supervisar el cumplimiento de las mismas en los establecimientos penitenciarios.
15. Formular propuestas de formación para el personal de custodia y seguridad para la capacitación, actualización y especialización en medios técnicos y seguridad penitenciaria, en concordancia con el régimen aplicado.
16. Supervisar el cumplimiento de las normas e instrucciones emanadas del Despacho del Viceministro o Viceministra para la atención al Privado o Privada de Libertad, en lo relativo al régimen y seguridad en los Establecimientos Penitenciarios para la ejecución de los planes y programas.
17. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
18. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
19. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
20. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Atención Integral

Artículo- 34. Las competencias de la Dirección General de Atención Integral son:

1. Diseñar planes para la clasificación de los privados y privadas de libertad en mínima, media y máxima seguridad según el ordenamiento jurídico y demás documentos rectores.
2. Diseñar planes, programas, proyectos para la ejecución de acciones en cuanto al tratamiento en correspondencia con la clasificación del individuo, a fin de contribuir a su transformación social.
3. Diseñar el plan de tratamiento a través del sistema de fases progresivas a fin de incidir en la conducta de los privados y privadas de libertad para transformación social.
4. Diseñar el plan de tratamiento para la integración del privado y privada de libertad con sus familiares en coordinación con la Dirección General de Integración Social a la Familia del Privado y Privada de Libertad, así como también, los dirigidos a la reeducación en conjunto con la Dirección General de Formación Educativa y Participación Protagónica.
5. Diseñar planes, proyectos y programas que garanticen el tratamiento de los privados y privadas de libertad en las áreas de recreación, cultura, deporte, y asuntos religiosos para asegurar su continua transformación.
6. Supervisar las políticas, directrices y lineamientos implementadas para la atención integral a los privados y privadas de libertad en los Establecimientos Penitenciarios, Centros de Pernocta y Centros de Residencia Supervisada.
7. Establecer mecanismos de control y seguimiento al proceso de progresividad de los privados y privadas de libertad dentro del régimen penitenciario para su transformación social.
8. Establecer y promover el desarrollo de modelos de gestión que favorezcan la atención integral de la población privada de libertad en los Establecimientos Penitenciarios.
9. Evaluar el uso de los recursos materiales destinados para el desarrollo de los programas de atención integral de los privados y privadas de libertad en los Establecimientos Penitenciarios.
10. Supervisar el desarrollo de las actividades para la presentación de informes técnicos, de acuerdo con las instrucciones emanadas por el Despacho de la Ministra o Ministro.
11. Establecer los lineamientos necesarios que permitan durante el proceso evaluativo de los privados y privadas de libertad, en el tránsito por el sistema, asegurar el otorgamiento de la fórmula alternativa del cumplimiento de la pena y la redención.

12. Planificar y supervisar las actividades de tratamiento progresivo en cuanto a: cultura, deporte y asuntos religiosos, atendiendo a los principios de clasificación y agrupación según corresponda.
13. Diseñar y planificar el proceso de suministro de materiales culturales, deportivos y religiosos, relacionados con el régimen penitenciario necesarios para la población penitenciaria en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas.
14. Diseñar, planificar y supervisar la atención especializada para la población vulnerable en el Sistema Penitenciario.
15. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
16. Diseñar la política y los procesos para el desarrollo y organización de los equipos de atención integral para los planes individuales de los privados y privadas de libertad.
17. Diseñar programas para la atención especializada desde el punto de vista conductual del privado y privada de libertad.
18. Diseñar planes y programas para la restitución, mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar para el logro de la integración social del privado y privada de libertad y en coordinación con la Dirección General de Integración Social a la Familia del Privado(a) de Libertad.
19. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
20. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
21. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales

Artículo- 35. Corresponde a la Dirección General de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales:

1. Diseñar las políticas para la atención de la población vulnerable de privados de libertad, tales como: extranjera, con discapacidad física y mental, femenina, adultos mayores e indígena; así como el resto de la población penitenciaria, a los fines de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.
2. Diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario para la población penitenciaria.
3. Diseñar programas que permitan la promoción y difusión en materia de derechos humanos al personal que labora en los establecimientos penitenciarios, a fin de garantizar el cumplimiento de los mismos en la población penitenciaria.
4. Verificar el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales de la población penitenciaria.
5. Supervisar actividades programadas y ejecutadas por los Delegados de Derechos Humanos, a fin de garantizar el disfrute de los derechos de las y los privados de libertad.
6. Diseñar y conducir la política que en el área internacional desarrolla el Ministerio, a fin de coordinar las relaciones de cooperación con otros países.
7. Supervisar el seguimiento de los casos de la población penitenciaria vulnerable en el país, a fin de mantener un registro que permita brindar respuesta oportuna en materia integral.
8. Diseñar y presentar respuestas a los organismos internacionales en materia penitenciaria para dar cumplimiento a las solicitudes hechas por los mismos.
9. Procesar con las Embajadas y Consulados acreditados en el territorio Nacional, las visitas y cualquier otra actividad diplomática, en cumplimiento con lo estipulado en las normas y convenios internacionales suscritos por la República en coordinación con la Cancillería.
10. Realizar informes para difundir los avances de la revolución en materia penitenciaria, los cuales servirán a los representantes diplomáticos de Venezuela en otros países y, ante organismos internacionales a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
11. Participar en las negociaciones internacionales referentes al tema penitenciario para aportar y difundir los logros de la República en materia penitenciaria.
12. Efectuar actividades con el Ministerio del Poder popular para las Relaciones Exteriores, en pro de captar e intercambiar con otros países experiencias en programas y proyectos en materia penitenciaria.
13. Supervisar las condiciones de vida de los privados y privadas de libertad, a los fines de dar cumplimiento a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
14. Diseñar la política de Traslados Internacionales de los privados de libertad con el fin de que culminen el cumplimiento de la pena interpuesta en su país de origen, atendiendo a los traslados y convenios internacionales.
15. Aplicar el Protocolo de Expulsión del territorio nacional a aquellos privados de libertad extranjeros que hayan cumplido con la pena.
16. Presentar indicadores en materia de derechos humanos de la población vulnerable, a los fines de señalar el respeto de los derechos humanos de la población penitenciaria.
17. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
18. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
19. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
20. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

SECCIÓN II
DESPACHO DE LA VICEMINISTRA O VICEMINISTRO PARA LA ATENCIÓN AL ADOLESCENTE EN CONFLICTO

Despacho de la Viceministra o Viceministro para la Atención al Adolescente en Conflicto

Artículo- 36. El Despacho del Viceministro o Viceministra para la Atención al Adolescente en Conflicto, está dirigido por un Viceministro o Viceministra, quien formula la política en materia de atención al adolescente en conflicto con la ley y actúa por lineamientos de la ciudadana Ministra o Ministro y rinde cuentas de su actuación y ejecuta sus instrucciones directas. Sus competencias son:

1. Apoyar al Despacho del Ministro o Ministra en todo lo relacionado con la elaboración de políticas y estrategias en materia de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, para el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, en coordinación con los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente como integrantes del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.
2. Establecer interrelaciones con los organismos del sector público y privado a nivel nacional, estadal y municipal,

involucrados en la materia de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a fin de promover el disfrute de sus derechos y lograr su adaptación en su entorno social.

3. Establecer métodos para articular y promover la relación intersectorial y así aumentar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en materia de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal; a fin de garantizar el interés superior del adolescente de conformidad con la Ley.
4. Formular propuestas que permitan la elaboración de anteproyectos de leyes, en la materia de su competencia en coordinación con la Consultoría Jurídica del Ministerio.
5. Diseñar y planificar las estrategias de administración para las Entidades de ejecución de medidas privativas y no privativas de libertad al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, en la aplicación de los programas socio-educativos, inclusión socialista, asistencia médica integral al adolescente y asistencia legal.
6. Establecer estrategias de seguimiento y sistemas de evaluación para el control de la gestión programática institucional en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
7. Planificar el egreso de las adolescentes y los adolescentes extranjeros de las Entidades de Atención y Entidades de Formación Socio-educativos, en coordinación con el respectivo Consulado y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a fin de dar cumplimiento a los convenios internacionales suscritos por la República.
8. Diseñar planes y proyectos para que el adolescente logre incorporarse en la comunidad, en un rol positivo y coherente con la formación recibida durante el tratamiento.
9. Establecer estrategias para la aplicación de la Justicia Restaurativa para promover la participación de la comunidad y familia en los procesos de diálogo, así como el realizar propuestas para el cumplimento entre las partes.
10. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población de adolescentes en conflicto con la ley, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
11. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los objetivos estratégicos establecidos, a los fines de informar continuamente del desarrollo y funcionamiento de las políticas trazadas.
12. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Dirección General de Asistencia Legal al Adolescente

Artículo- 37. Las competencias de la Dirección General de Asistencia Legal al Adolescente son:

1. Supervisar el cumplimiento del debido proceso establecido en la ley, para garantizar los derechos de las adolescentes y los adolescentes, durante su permanencia en las Entidades de atención.
2. Planificar y evaluar el proceso de registro de las adolescentes y los adolescentes al momento de su ingreso en las Entidades de Formación Socio-educativos, a los fines de cumplir con las normativas legales establecidas en la materia.
3. Evaluar el proceso de registro y clasificación de las adolescentes y los adolescentes al momento de su ingreso y estadía en las Entidades de Atención como medidas privativas de libertad, a fin de cumplir con las normativas legales establecidas por el tribunal.
4. Establecer mecanismo de seguimiento para el debido proceso penal de las adolescentes y los adolescentes y Jóvenes Adultos que incurran en hechos punibles en la etapa de Procesados.
5. Establecer lineamientos para velar por el debido proceso penal de las adolescentes y los adolescentes y jóvenes adultos que incurran en hechos punibles en la etapa de sancionados.
6. Establecer mecanismos de articulación con el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público y Defensa Pública, con la finalidad de facilitar el desarrollo del debido proceso penal y de las decisiones judiciales y disciplinarias, para velar por la información oportuna de las adolescentes y los adolescentes o jóvenes adultos.
7. Presentar proyectos que permitan promover la Justicia Restaurativa en las diferentes etapas de los procesos judiciales, con la finalidad de reparar el daño individual y social causado por el delito cometido.
8. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
9. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
10. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población de adolescentes en conflicto con la ley, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
11. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Atención al Adolescente.

Artículo- 38. Las competencias de la Dirección General de Atención al Adolescente son:

1. Formular planes, programas y proyectos de desarrollo para las actividades de asistencia social, psicológica, religiosa, recreacional y de deportes en las entidades atención para el adolescente.
2. Formular planes, proyectos y programas de asistencia social que coadyuven a la modificación de la conducta del adolescente, con grado de exigencia personal para conseguir una mejora de su autoestima y auto concepto.
3. Formular planes, programas y proyectos de intervención psicológica, que posibilite que las adolescentes y los adolescentes puedan solventar las carencias que han ido acumulándose en su desarrollo personal, en coordinación con la Dirección General de Integración Social a la Familia.
4. Supervisar y evaluar las actividades asistenciales de índole social que contribuyan en los cambios de la conducta del adolescente.
5. Formular planes y proyectos que permitan agrupar y clasificar al adolescente al ingreso en las entidades de atención.
6. Supervisar y evaluar los planes, programas y proyectos formulados, a los fines de establecer mejoras continuas para el desarrollo y aprendizaje del adolescente durante el cumplimiento de la medida interpuesta en la Entidad de Atención.
7. Elaborar y proponer normas y lineamientos para las acciones de seguridad a ejecutarse en las entidades de atención en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario.
8. Diseñar normas para la convivencia en acuerdo con los familiares y educadores de manera grupal e individual como parte del tratamiento del adolescente en las Entidades de Atención.
9. Diseñar planes y programas para el acompañamiento pos-institucional a fin de disminuir los índices de reincidencia en coordinación con la Dirección General de Inclusión Socialista.
10. Diseñar planes y programas para la ejecución de las sanciones socio-educativas a las adolescentes y los adolescentes en coordinación con Dirección General de Formación Educativa y Participación Protagónica.
11. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a

los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.

12. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
13. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
14. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Inclusión Socialista.

Artículo- 39. Las competencias de la Dirección General de Inclusión Socialista son:

1. Formular planes y programas para la inclusión y participación de las adolescentes y los adolescentes y familiares en la sociedad a través de los consejos comunales.
2. Establecer estrategias para articular con las adolescentes y los adolescentes según los programas de Apoyo al desarrollo biopsicosocial, de acuerdo a las características particulares y demandas de su desarrollo de conformidad a la gestión de la red comunal.
3. Formular planes, proyectos y programas que permitan incorporar a los Consejos Comunales en el desarrollo de programas para las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley.
4. Establecer estrategias de articulación, seguimiento y control de los programas como parte de la formación en el tratamiento del adolescente en conflicto.
5. Establecer lineamientos para la constitución de consejos de adolescentes como retribución del buen comportamiento en las Entidades de Formación Socio-Educativa, a fin de fomentar y propiciar el liderazgo positivo, a través de la implementación del nuevo régimen disciplinario.
6. Formular planes, proyectos y programas que aborden terapéuticamente de manera individual al adolescente que se encuentra bajo la medida socio-educativa con el fin de desarrollar conductas asertivas en el campo laboral.
7. Diseñar programas orientados al fortalecimiento del ámbito personal y reestructuración de la dinámica familiar y laboral, a fin de enfrentar la integración social y consolidar un proyecto de vida nuevo en familia.
8. Diseñar programas de reconocimiento de las capacidades y potencialidades del adolescente para incorporarse voluntariamente, tanto en la Entidad de Formación Socio-Educativa como en espacios comunitarios, que potencie esos recursos favoreciendo su incorporación constructiva y crítica en la sociedad.
9. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
10. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población de adolescentes en conflicto con la ley, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
11. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
12. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

SECCIÓN III
DESPACHO DEL VICEMINISTRO O VICEMINISTRA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y ASUNTOS SOCIALES

Despacho del Viceministro o Viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales

Artículo- 40. El Despacho del Viceministro o Viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales está dirigido por un Viceministro o Viceministra, quien formula la política en cuanto a asistencia social y formación educativa y actúa por lineamientos de la ciudadana Ministra o Ministro y rinde cuentas de su actuación y ejecuta sus instrucciones directas. Sus competencias son:

1. Formular y asesorar al Despacho de la Ministra o Ministro en todo lo relacionado con la elaboración de políticas y estrategias en materia de integración social de la Familia con los privados y las privadas de libertad; para el disfrute de los derechos y el cumplimiento de sus deberes; así como la ejecución de las medidas de seguridad dictadas a la población vulnerable.
2. Establecer mecanismos para promover la creación e integración de comunidades organizadas en consejos comunales para materializar la transformación social de los procesados y procesadas y penados y penadas, y del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.
3. Establecer estrategias de orientación al momento de ingreso de los privados y privadas de libertad y familiares, con el fin de brindar información sobre el régimen de vida en los Establecimientos Penitenciarios y Entidades de Atención y la labor de los servicios asistenciales de tratamiento en coordinación con la Direcciones Generales Regionales.
4. Establecer líneas estratégicas para la dotación y distribución de las necesidades de las distintas Direcciones Generales Regionales para los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención, Entidades de Formación Socio-Educativo, Centros de Pernocta y Centros de Residencia Supervisada.
5. Diseñar políticas para la prevención, promoción y atención de la salud integral de la población privada de libertad en los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, centros de pernocta y centros de residencia supervisada, a fin de evitar y controlar brotes de epidemias o cualquier tipo de enfermedad.
6. Diseñar políticas para el tratamiento interno-familiar en coordinación con el Despacho del Viceministro o Viceministra para la Atención al Adolescente en Conflicto y el Despacho del Viceministro o Viceministra para la Atención al Privado y Privada de Libertad como parte del tratamiento progresivo para la transformación social.
7. Formular políticas para la intervención educativa y formativa de amplio contenido en escolarización y formación profesional, a fin de mejorar el desarrollo personal de la población privada de libertad y reforzar valores.
8. Diseñar políticas para la investigación penitenciaria de los Servidores Públicos, en materia de técnicas y actividades propias del Ministerio interesados en la ejecución penal y penitenciaria, para el buen desempeño de sus funciones y conocimientos.
9. Establecer estrategias educativas para el personal penitenciario que coadyuven al ascenso, así como fomentar e identificarlos con los valores institucionales, filosofía de gestión y el plan estratégico institucional.
10. Formular políticas de planes educativos y socio-educativos que propicien la transformación del privado de libertad y el adolescente en conflicto con la Ley Penal, durante el cumplimiento de una medida privativa de libertad, no privativa o bajo algún beneficio del sistema penal.
11. Formular políticas de planes educativos enmarcados en el reentrenamiento del personal custodio, a los fines de mantenerlos en formación continua en el desarrollo de sus actividades en los establecimientos penitenciarios.
12. Establecer estrategias relativas al seguimiento y evaluación de los proyectos de ampliación, recuperación y construcción de

edificaciones penitenciarias, a los fines de velar por unos espacios dignos para la ejecución de los programas de seguridad, atención integral y de reguardo.

13. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los objetivos estratégicos establecidos, a los fines de informar continuamente sobre el desarrollo y funcionamiento de las políticas trazadas.
14. Formular políticas para la aplicación de medidas sanitarias en los establecimientos penitenciarios, relacionadas al mantenimiento preventivo, correctivo e higiene dentro de las instalaciones.
15. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
16. Establecer estrategias de seguimiento y sistemas de evaluación para el control de la gestión programática institucional en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
17. Cualquier otra que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

Dirección General de Integración Social a la Familia del Privado y Privada de Libertad

Artículo- 41. Corresponde a la Dirección General de Integración Social a la Familia del Privado y Privada de Libertad:

1. Establecer planes y programas que permitan articular la tramitación de posibles soluciones a las solicitudes de los familiares de las personas privadas de libertad y de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
2. Diseñar programas orientados a la participación y vinculación de los familiares de la población privada de libertad que coadyuven a la atención integral, la transformación social, y restablecer los lazos familiares, en estrecha coordinación con la Dirección General de Atención Integral y la Dirección General de Atención al adolescente.
3. Establecer mecanismos que sirvan de enlace con la Dirección General de Registro y Control Penal y la Dirección General de Asesoría Legal, a los fines de que se brinden a los familiares de la población privada de libertad, la asesoría en el dominio e interpretación de la base jurídica y normativa como vía para coadyuvar en los procesos del tratamiento penitenciario.
4. Establecer planes especiales o específicos para el tratamiento familiar, que sean vinculantes a las características particulares de determinados grupos, a los fines de lograr resultados en la integración familiar-interno y la solución de conflictos.
5. Establecer estadísticas e indicadores de gestión que permitan evaluar los resultados de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazados, y el desempeño de los funcionarios encargados de su aplicación e implementación.
6. Diseñar programas para brindar asistencia a los familiares de las y los privados de libertad, durante las visitas en los Establecimientos Penitenciarios y Entidades de Atención, a fin de evitar conflictos y disminuir la violencia en dichas actividades.
7. Diseñar y planificar el registro de datos a los familiares de las personas privadas de libertad y de los Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, a fin de desarrollar las estadísticas que faciliten los procesos de toma de decisiones.
8. Analizar y gestionar a través de los enlaces públicos o privados, los casos que sean remitidos por el Despacho del Viceministro o Viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales, con la finalidad de asistir a la familia de los privados y privadas de libertad y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
9. Diseñar programas para la Atención del tratamiento diferenciado y lograr la integración familiar con el privado y privada de libertad y restablecimiento de los lazos familiares.
10. Establecer lineamientos para brindar asistencia social a la familia de las y los privados de libertad, en coordinación y seguimiento de los procesos con las Direcciones Generales de: Atención Integral y Asistencia a los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal.
11. Diseñar programas, planes y estrategias para la atención de los familiares de la población privada de libertad, a fin de prepararlos para su transformación social e integración familiar, en coordinación con la Dirección General de Atención Integral, Dirección General de Atención al Adolescente y la Dirección General de Asistencia a los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal.
12. Implementar un sistema de información centralizada, automatizada, de fácil acceso que apoye los servicios de atención al público en coordinación con la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información para brindar información.
13. Efectuar la atención, orientación y registro de las necesidades del privado y privada de libertad y familiares, a fin de llevar un seguimiento a través de indicadores del servicio prestado.
14. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria adulta y adolescente, atendiendo a las leyes, reglamentos y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
15. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Salud

Artículo- 42. Corresponde a la Dirección General de Salud:

1. Evaluar las condiciones de salud de los privados y privadas de libertad, las adolescentes y los adolescentes y de las y los egresados del sistema penitenciario venezolano, a fin de evitar enfermedades y brotes epidemiológicos.
2. Establecer los mecanismos de articulación con los entes del estado en materia de salud, para establecer alianzas estratégicas que favorezcan la atención de los privados y privadas, las adolescentes y los adolescentes y de los egresados del sistema penitenciario venezolano.
3. Diseñar jornadas de atención médica y odontológica, para la prestación integral de salud en los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención, Centros de Pernocta y los Centros de Residencia Supervisadas.
4. Formular programas y proyectos en salud, para el desarrollo de actividades de asistencia médica, odontológica, mental y nutricional.
5. Diseñar, planificar y supervisar periódicamente el proceso de suministro de una dieta balanceada, a fin de brindar una alimentación adecuada a la población privada de libertad, así como el inspeccionar los economatos existentes en los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención y los Centros de Residencia Supervisadas.
6. Realizar despacho de medicamentos, insumos y equipos médicos odontológicos, con la finalidad de abastecer a los servicios de enfermería en todos los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención y los Centros de Residencia Supervisadas.
7. Establecer estudios médico, odontológico, mental y nutricional de todos los individuos que ingresan al Sistema Penitenciario Venezolano.
8. Diseñar y verificar la implementación de programas odontológicos con el fin de fomentar la salud bucal en todo el ámbito penitenciario.
9. Formular planes y proyectos de salud para la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de la población privada de libertad, en concordancia con el marco normativo nacional e internacional.
10. Establecer estrategias de alianzas con el Ministerio del Poder Popular para la Salud a los fines de prevención y control de

brotes epidemiológicos en los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención y Centros de Residencia Supervisada.

11. Determinar la población vulnerable que este infectado de enfermedades como: tuberculosis, HIV, H1N, entre otras, a los fines de establecer las medidas y cuidados necesarios.
12. Presentar estadísticas e informes técnicos del manejo de la información estadística, en materia de atención a la salud y presencia de diferentes patologías en los diferentes establecimientos penitenciarios.
13. Desarrollar un sistema de salud para la atención de los privados y privadas de libertad y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
14. Diseñar programas específicos dirigidos a las necesidades de salud detectadas en la población penitenciaria: salud mental, promoción y educación para la salud y enfermedades infecciosas.
15. Desarrollar programas nutricionales para ser dirigidos a la población penitenciaria.
16. Planificar y supervisar las actividades necesarias para la provisión de alimentos en los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención, Centros de Pernocta y Centros de Residencia Supervisadas, sobre la base nutricional diseñada en coordinación con la Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte para su suministro.
17. Elaborar y llevar el control de las solicitudes de alimentos, utensilios, insumos médicos, mobiliario y medicinas, requeridos para los Establecimientos Penitenciarios y las Entidades de Atención, para la adecuada planificación y dotación en los tiempos estipulados.
18. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
19. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población privada de libertad adulta y adolescente, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
20. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte.

Artículo- 43. Corresponde a la Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte:

1. Establecer un sistema de inventarios de los artículos e insumos para dotar a los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, centros de pernoctas y centros de residencia supervisada, con el fin de mantener un registro de todos los equipos que se encuentran en las regiones y llevar un control de las existencias para optimizar la distribución.
2. Supervisar la calidad y el estado de los insumos distribuidos, a fin de elaborar informes técnicos para establecer controles de cuidado y mantenimiento.
3. Establecer normas de control, organización y funcionamiento de los almacenes y provisión del economato, distribución de los alimentos y la reposición que aseguren las reservas mínimas para el desenvolvimiento de los procesos logísticos en los Establecimientos penitenciarios, Entidades de Atención, Centros de Pernoctas y Centros de Residencia Supervisada en coordinación con la Dirección General de Salud.
4. Realizar informes y llevar un registro contable de los insumos distribuidos en los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención y Centros de residencia Supervisada (CRS), a fin llevar un control y dar respuestas oportunas.
5. Presentar ante la Oficina de Administración y Finanzas de manera trimestral el inventario de entradas y salidas de materiales e insumos, a los fines de mantener un registro y control en el almacén general del Ministerio.
6. Supervisar y controlar el mantenimiento del parque automotor adscrito a los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, centros de pernocta, centro de residencia supervisada y unidad técnica de supervisión y orientación, a fin de vigilar e inspeccionar el buen uso de los mismos.
7. Supervisar y controlar el mantenimiento de equipos así como también las instalaciones eléctricas de los mismos para el desarrollo de las actividades.
8. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de las actividades realizadas, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
9. Formular el presupuesto de dotación y mantenimiento de vehículos, insumos y materiales para los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, entidades de formación socio-educativas, centros de residencia supervisada (CRS) y unidades técnicas de supervisión y orientación.
10. Establecer un sistema de inventario de la flota vehicular asignada a las Direcciones Generales Regionales, a los fines de llevar un control del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
11. Formular y proponer criterios, normas y procedimientos generales de los vehículos asignados a los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, centros de residencia supervisada y unidades técnicas de supervisión y orientación, a los fines de mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento y conservarlos conforme a lo dispuesto en la Ley de Bienes Públicos.
12. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
13. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

Dirección General de Formación Educativa y Participación Protagónica.

Artículo- 44. Corresponde a la Dirección General de Formación Educativa y Participación Protagónica:

1. Diseñar planes y programas que brinden apoyo educativo, académico y laboral, así como gestionar con otras instituciones que favorezcan la implementación de los proyectos como parte del tratamiento de la población privada de libertad.
2. Diseñar y establecer mecanismos de participación del grupo familiar y la comunidad organizada, con el fin de hacer seguimiento y evaluación de los programas educativos y socio-productivos.
3. Evaluar la aplicación y el impacto de los planes y programas en los Establecimientos Penitenciarios, Entidades de Atención y Entidades de Formación socio-educativa, en coordinación con la Dirección General de Regiones correspondientes, a fin de realizar los cambios que sean necesarios.
4. Supervisar el cumplimiento del principio de corresponsabilidad atinente al Estado, Familia y Comunidad, para garantizar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los programas educativos y socio-productivos.
5. Diseñar y supervisar el cumplimiento del Plan Individual aplicable al adolescente y al adulto, con el fin de fomentar los vínculos familiares, conciencia de clase, a través de la aplicación de la normativa legal vigente, para el logro de su transformación social, en coordinación con la Dirección General de Integración Social a la Familia.
6. Diseñar y evaluar Planes y Programas educativos y socio-productivos para la población vulnerable perteneciente a pueblos y comunidades indígenas, así como también a la población con discapacidad.
7. Supervisar el cumplimiento de los programas socio-educativos y de capacitación laboral y de formación del nuevo ser

socialista, con la finalidad de verificar la eficiencia de los mismos.

8. Establecer mecanismos de articulación con las Instituciones Públicas y Privadas y el Poder Popular a través de los Consejos Comunales que les permitan participar en el proceso de transformación de la población privada de libertad en el campo laboral.
9. Diseñar y aplicar un sistema de indicadores para la evaluación de los planes y programas educativos y socio-productivos, así como también medir su influencia en la transformación de la población privada de libertad.
10. Diseñar planes y proyectos para la implementación de las unidades socio-productivas en las Entidades de Atención y Establecimientos Penitenciarios en coordinación con el Instituto Autónomo de Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP), como parte de la formación de la población privada de libertad.
11. Diseñar planes y programas que permitan formar y capacitar el recurso humano penitenciario, a fin de dar continuidad al proceso de formación con base en méritos excelencia profesional.
12. Ejecutar los programas de formación, capacitación, profesionalización, actualización y evaluación permanente del personal penitenciario a servicio de los establecimientos penitenciarios, entidades de atención, destacamentos de trabajo, centros de residencia supervisada y unidades técnicas de supervisión y orientación en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.
13. Establecer estrategias que permitan llevar un registro que detecte las potencialidades en los privados y privadas de libertad que puedan participar como facilitadores pedagógicos.
14. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
15. Implementar y velar por el cumplimiento de los Manuales de Normas y Procedimientos diseñados para los procesos correspondientes, a fin de garantizar el debido control interno.
16. Implementar estrategias que permitan fomentar la formación educativa de los privados de libertad, a fin de propiciar el estado docente.
17. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población privada de libertad adulta y adolescente, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
18. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones, otros actos normativos y las que le asigne el Viceministro o Viceministra de adscripción.

CAPÍTULO V
DEL NIVEL DESCONCENTRADO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

Objeto del Nivel Desconcentrado Territorial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

Artículo- 45. El objeto del Nivel Desconcentrado es ejercer la supervisión, ejecución y evaluación permanente en el desarrollo de las actividades operativas en los Establecimientos Penitenciarios, para dar cumplimiento a las políticas, directrices, programas y proyectos, asegurando la gestión penitenciaria.

Integración del Nivel Desconcentrado Territorialmente

Artículo- 46. El Nivel Desconcentrado Territorialmente está integrado por:

1. La Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema Penitenciario; y
2. La Dirección General de Regiones para la Asistencia de los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal.
3. La Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.

SECCIÓN I
DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DE ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema Penitenciario

Artículo- 47. Las competencias de la Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema Penitenciario son:

1. Ejercer la dirección ejecutiva sobre las dependencias adscritas a nivel nacional, a fin de garantizar la administración y dirección, política de cuadros y preparación de las fuerzas, control y seguimiento de sus capacidades.
2. Efectuar el seguimiento de los programas que materialicen las políticas penitenciarias, a fin de comprobar su eficaz implementación en los Establecimientos Penitenciarios.
3. Planificar y supervisar la ejecución e implementación de los programas de: registro y control penal, régimen penitenciario, atención integral y asistencia médica integral, así como el seguimiento y evaluación que generan sobre la población privada de libertad en los Establecimientos Penitenciarios.
4. Realizar visitas periódicas en los Establecimientos Penitenciarios con la finalidad de verificar las áreas laborales con el Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciaria (IACTP), como ente con competencia en la materia.
5. Proponer planes de contingencia para resolver los conflictos originados por los privados y privadas de libertad en los Establecimientos Penitenciarios de su región, a fin de alcanzar y/o establecer soluciones.
6. Planificar visitas de control integral, así como actividades encaminadas a verificar la ejecución de la gestión en los distintos niveles organizativos que se le subordinan.
7. Supervisar y controlar el sistema de inventarios en coordinación con la Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte, para así asegurar la eficiencia de la gestión penitenciaria.
8. Supervisar el cumplimiento de los planes y procesos de régimen penitenciario en los Establecimientos Penitenciarios para el resguardo la integridad física de las personas, bienes e infraestructuras.
9. Elaborar informes técnicos y reportes al Despacho dela Ministra o Ministro con la finalidad de coadyuvar en la toma de decisiones.
10. Supervisar el cumplimiento de los convenios suscritos entre el Ministerio y otros órganos públicos y privados en las regiones y los Establecimientos Penitenciarios.
11. Establecer enlace con la Oficina de Recursos Humanos, para agilizar los trámites relacionados con la administración del personal en los Establecimientos Penitenciarios.
12. Establecer los mecanismos administrativos necesarios, a fin de coordinar con: la Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte, Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información, el suministro de inventarios, equipos tecnológicos, dotaciones y demás requerimientos que garanticen el adecuado funcionamiento de la Dirección General y los Establecimientos Penitenciarios.
13. Establecer enlaces con los diferentes institutos y entes del estado, así como empresas públicas y privadas para la implementación y supervisión de los convenios y acuerdos establecidos por el Ministerio.
14. Supervisar el estado de las infraestructuras de los establecimientos penitenciarios en coordinación con el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP), a fin de velar por el mantenimiento e higiene de las instalaciones penitenciarias.
15. Presentar estadísticas e indicadores de gestión, a los fines de medir la eficiencia, eficacia, economía e impacto de los procesos llevados a cabo en las Direcciones Regionales y Establecimientos Penitenciarios.

16. Supervisar la administración de los establecimientos penitenciarios, a los fines de mantener un seguimiento de los planes, proyectos y programas que se ejecutan.
17. Establecer estrategias de seguimiento y sistemas de evaluación para el control de la gestión programática institucional en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
18. Establecer y mantener un registro de datos estadísticos de todas las operaciones realizadas en los establecimientos penitenciarios, de acuerdo a los planes, programas y proyectos ejecutados.
19. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
20. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
21. Las demás que le instruya la ciudadana Ministra o Ministro.

SECCIÓN II
DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES PARA LA ASISTENCIA DE LOS EGRESADOS Y CON BENEFICIOS DEL SISTEMA PENAL

Dirección General de Regiones para la Asistencia de los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal

Artículo- 48. Las competencias de la Dirección General de Regiones para la Asistencia de los Egresados y con Beneficios del Sistema Penal son:

1. Diseñar programas, planes y estrategias a implementar a los egresados del Sistema Penal con Beneficios, a fin de prepararlos para su transformación social e integración familiar, en coordinación con la Dirección General de Atención Integral y la Dirección General de Integración Social a la Familia de las y los Internos.
2. Planificar y supervisar la atención médica para la población vulnerable egresada del Sistema Penitenciario en coordinación con la Dirección General de Salud.
3. Diseñar conjuntamente con los organismos del sector público y privado en coordinación con la Dirección General de Formación Educativa y Participación Protagónica, las estrategias a implementar en materia de educación, capacitación y ocupación laboral.
4. Evaluar y abordar terapéuticamente de manera individual a los egresados de los establecimientos penitenciarios, con el fin de diseñar herramientas necesarias que le permitan desarrollar conductas asertivas en el campo laboral.
5. Implementar programas educativos y laborales como herramientas orientadas al fortalecimiento de su ámbito personal y restructuración de la dinámica familiar y laboral, a fin de afrontar la integración social y consolidar el proyecto de vida del post-penitenciario.
6. Ejercer el Recurso de Habeas Data ante el Tribunal Supremo de Justicia, a fin de lograr la reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificada; así como controlar, proteger y/o rectificar la información inexacta o errónea, y exigir legalmente la confidencialidad, evitando la circulación de información considerada sensible, en protección a las personas afectadas.
7. Realizar seguimiento y evaluación de las Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación (UTSO) y Centros de Residencia Supervisada (CRS) y Centros de Pernocta, con la finalidad de informar de manera clara y precisa, a través de informes estadísticos semanales y mensuales de novedades relevantes que se susciten en dichas Unidades.
8. Establecer mecanismos de seguimiento en los establecimientos penitenciarios en coordinación con la Dirección General de Registro y Control Penal, a fin de llevar un registro de la población próxima a egresar bajo la fórmula alternativa del sistema.
9. Establecer lineamientos de investigación que permitan analizar y evaluar la validez y confiabilidad del modelo de intervención integral durante el cumplimiento de la pena, medidas cautelares y beneficios procesales.
10. Establecer lineamientos en materia de atención integral en coordinación con otras dependencias del Ministerio, entes del Estado, organizaciones gubernamentales y empresas privadas, para los egresados del sistema penitenciario, a fin de consolidar y controlar su proceso de integración a la sociedad.
11. Establecer planes y programas de seguridad en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario, a los fines de mantener régimen en los Centros de Pernocta y los Centros de Residencia Supervisada (CRS).
12. Establecer los mecanismos administrativos necesarios, a fin de coordinar con: la Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte, Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información, el suministro de inventarios, equipos tecnológicos, dotaciones y demás requerimientos que garanticen el adecuado funcionamiento de Destacamento de Trabajo (Centros de Pernocta), CRS y UTSO.
13. Supervisar el estado de las infraestructuras de los Centros de Pernocta, Centros de Pernocta y los Centros de Residencia Supervisada y Unidades Técnicas de Supervisión y Orientación, en coordinación con el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP), a fin de velar por el mantenimiento e higiene de las instalaciones.
14. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
15. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
16. Establecer estrategias de seguimiento y sistemas de evaluación para el control de la gestión programática institucional en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
17. Las demás que le instruya la ciudadana(o) Ministra(o).

SECCIÓN III
NIVEL DESCONCENTRADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE

Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente

Artículo- 49. Las competencias de la Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente son:

1. Diseñar mecanismos de articulación interinstitucional y con los órganos del sistema judicial, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las medidas socioeducativas y cautelares.
2. Diseñar planes dirigidos a las entidades de atención y las entidades de formación socio-educativas, para la aplicación de las medidas socio-educativas y cautelares en el ámbito nacional.
3. Implementar lineamientos para la ejecución de los planes, proyectos y programas diseñados para brindar asistencia integral a las adolescentes y los adolescentes con medidas: privativas de libertad y formación socio-educativas.
4. Formular los mecanismos necesarios que garanticen las condiciones y herramientas que permitan el desarrollo de las potencialidades y capacidades de las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, de esta manera mejorar sus posibilidades de transformación social.

5. Diseñar planes que aseguren la alimentación, vestido y calzado de las adolescentes y los adolescentes durante el cumplimiento de la sanción en coordinación con la Dirección General de Dotación, Distribución y Transporte, así como también la atención médica en casos de emergencia cuando se encuentre comprometida la salud de los mismos.
6. Establecer acciones y estrategias que permitan fortalecer los lineamientos, directrices programáticas socio-educativas y disciplinarias, a los fines de ajustarlos a las realidades humanas y exigencias sociales y realidades locales de la población adolescente en conflicto con la Ley Penal, en coordinación con la Dirección General de Formación Educativa y Participación Protagónica.
7. Establecer métodos para promover políticas activas para la promoción y defensa de los derechos humanos de las adolescentes y los adolescentes y su familia.
8. Establecer lineamientos para recibir las solicitudes de las entidades de atención a nivel nacional y tramitarlas ante las oficinas de administrativas del Ministerio, con la finalidad de que las necesidades sean cubiertas en las entidades de atención y las entidades de formación socio-educativas.
9. Establecer los mecanismos administrativos necesarios, a fin de coordinar con: la Dirección General de Distribución, Dotación y Transporte, Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información, el suministro de inventarios, equipos tecnológicos, dotaciones y demás requerimientos que garanticen el adecuado funcionamiento de todas las dependencias.
10. Supervisar el estado de las infraestructuras de las Entidades de Atención y Entidades de Formación Socio-Educativas, en coordinación con el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (FONEP), a fin de velar por el mantenimiento e higiene de las instalaciones.
11. Establecer estrategias de seguimiento y sistemas de evaluación para el control de la gestión programática institucional en coordinación con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización.
12. Formular el anteproyecto de presupuesto según las necesidades y en el marco de sus competencias de la población penitenciaria, atendiendo a las leyes, reglamento y lineamientos vigentes para tal fin, con el objetivo de garantizar para en el ejercicio fiscal el cumplimiento de las metas, objetivos y funciones.
13. Presentar estadísticas e indicadores de gestión de la evaluación de los programas, planes y proyectos formulados, a los fines de informar continuamente del desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de las metas trazadas.
14. Las demás funciones que asigne el Despacho del Ministra o Ministro.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS, FINALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias que colidan con el presente Reglamento Transitorio de la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los Despachos de los Viceministros o Viceministras, las Direcciones Generales y las demás dependencias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario deberán prestarse, en el ejercicio de sus atribuciones, una mutua y adecuada colaboración para la mejor realización de las funciones y cumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos llevados por el Ministerio.

SEGUNDA.- La Junta Ministerial, previo estudio respectivo, elevará recomendación motivada a la ciudadana Ministra o Ministro con respecto a la creación o supresión de establecimientos penitenciarios o de formación integral de formación socialista, quien oirá la propuesta y de considerarla pertinente la presentará al Consejo de Ministros.

TERCERA.- Una vez se apruebe la creación o supresión de un establecimiento penitenciario o de formación integral socialista, la ciudadana Ministra o Ministro dictará la Resolución respectiva, ordenando el cumplimiento de tal decisión. En la Resolución se indicará la circunscripción territorial en la que será construido, en caso de creación; o el régimen de liquidación, el destino y régimen del terreno y cualquier otro particular de interés, en caso de supresión.

CUARTA.- El presente Reglamento Transitorio de la Estructura Organizativa del Ministerio del servicio Penitenciario entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial.

DISPOSICION TRANSITORIA

ÚNICA.-Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° del Decreto N° 730, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.330, de fecha 09-01-2014, el despacho de la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en uso de sus atribuciones legales, procede a dictar con carácter transitorio la presente Resolución, que regirá como Reglamento Transitorio de la Estructura Organizativa del Ministerio de Servicios Penitenciarios a su cargo, hasta tanto sea presentado y aprobado por el ciudadano Presidente en Consejo de Ministros el Reglamento Orgánico del Ministerio de Servicio Penitenciario

Dado en Caracas, a los 14 días del mes de mayo de 2014. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese.

(L.S.)

MARIA IRIS VARELA RANGEL
MINISTRA

Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, según Decreto N° 2 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en Gaceta Oficial N°40.151 de la misma fecha

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

N° 359

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SALA
CONSTITUCIONAL
Exp. 09-0066

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 14 de enero de 2009, el ciudadano **GILBERTO RÚA**, titular de la cédula de identidad N° 24.796.710, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.862, actuando en representación de sus menores hijos (cuyas identidades se omiten en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 de la

Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) y de todos los niños, niñas y adolescentes del país, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, interpuso acción de amparo constitucional por intereses difusos en contra del Diario Meridiano a *"FAVOR DE HACER CESAR LAS PUBLICIDADES DE CLASIFICADOS PORNO EN PERIODICOS* (sic) *Y REVISTAS PARA EL PUBLICO* (sic) *EN GENERAL"*.

El 22 de enero de 2009, se dio cuenta en la Sala y se designó como ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 15 de mayo de 2009, la Sala mediante sentencia N° 589, admitió la presente acción previa recalificación de la misma; ordenó notificar al Director del Diario Meridiano, al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, al Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, al Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, a la ciudadana Fiscal General de la República y a la ciudadana Defensora del Pueblo; ordenó el emplazamiento de los interesados mediante cartel; y negó la medida cautelar solicitada.

El 22 de junio de 2009, se entregó boleta de notificación N° 09-0098, a la Fiscal General de la República; y boleta de notificación N° 09-0097, a la Defensora del Pueblo.

El 23 de junio de 2009, se entregó boleta de notificación N° 09-0095, al Ministro del Poder Popular para la Salud y Protección Social.

El 3 de julio de 2009, se entregó boleta de notificación N° 09-0093, al Ministro del Poder Popular para la Participación y Protección Social; y boleta de notificación N° 09-0096, a la Directora del Diario Meridiano.

El 13 de julio de 2009, se entregó boleta de notificación N° 09-0094, al Presidente del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente de la República Bolivariana de Venezuela.

El 29 de julio de 2009, la Secretaría de la Sala emitió auto ordenando corregir las boletas de notificaciones, debido a un error material cometido en la calificación de la acción.

El 3 de agosto de 2009, fue entregada la boleta de notificación N° 09-123, a la Defensora del Pueblo; y la boleta de notificación N° 09-124, a la Fiscal General de la República.

El 6 de agosto de 2009, fue entregada la boleta de notificación N° 09-125, al Ministro del Poder Popular para la Salud y Protección Social.

El 14 de agosto de 2009, fue entregada la boleta de notificación N° 09-126, al Presidente del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente.

El 22 de septiembre de 2009, fue entregada la boleta de notificación N° 09-127, al Ministro del Poder Popular para la Participación y Protección Social.

El 24 de septiembre de 2009, fue entregada la boleta de notificación N° 09-128, al Director del Diario Meridiano.

El 16 de noviembre de 2009, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado Gilberto Rúa, solicitó se haga entrega del edicto a los fines de su publicación.

El 3 de junio de 2010, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado Alfredo Abou-Hassan, actuando en su carácter de apoderado judicial del Diario Meridiano C.A., presentó escrito de contestación a la demanda.

El 7 de junio de 2010, el ciudadano Gilberto Rúa consignó la publicación del edicto en el periódico Últimas Noticias del 20 de mayo de 2010, en su página 28.

El 21 de junio de 2010, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado Alfredo Abou-Hassan, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Diario Meridiano C.A., contestó la demanda y solicitó que se declare la extinción de la causa por falta de interés y expuso sus defensas.

El 23 de junio de 2010, la Defensoría del Pueblo, a través de la abogada Lucelia Castellanos Pérez, inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 145.484, manifestó su interés de participar en el presente proceso judicial.

El 24 de noviembre de 2010, se dictó la decisión N° 1183, mediante la cual se declara no ha lugar la solicitud efectuada por la representación judicial del Diario Meridiano C.A., referida a la perención de la instancia.

Visto que en sesión del 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.569, del 8 del mismo mes y año, se produjo la designación de los Magistrados Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado, por la Asamblea Nacional, el 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

El 1 de febrero de 2011, mediante diligencia el abogado Gilberto Rúa, solicitó copias certificadas.

El 2 de febrero de 2011, la Sala Constitucional mediante auto negó la copia certificada solicitada por el abogado Gilberto Rúa.

El 10 de abril de 2012, mediante sentencia N° 426, la Sala reiteró su competencia y ordenó la continuación del proceso según los artículos 156 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 11 de abril de 2012, inició el lapso de diez (10) días de despacho para promover pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:

El 26 de abril de 2012, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, el abogado Javier Antonio López Cerrada actuando en su condición de Defensor III adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, consignó delegaciones de los abogados Alejandra Bonalde Colmenares, Lucelia Castellanos Pérez, Jesús Antonio Mendoza y otros.

El 8 de mayo de 2012, se presentó escrito ante la Secretaría de la Sala, mediante el cual el abogado Alfredo Abou-Hassan actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil Meridiano C.A., promovió pruebas y suministró el domicilio procesal. Igualmente, en esta fecha venció el lapso para la promoción de pruebas.

El 9 de mayo de 2012, comenzó a transcurrir el lapso de tres (03) días de despacho para la oposición a la admisión de las pruebas.

El 15 de mayo de 2012, venció el lapso de oposición a la admisión de las pruebas promovidas.

El 19 de julio de 2012, mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, la abogada Dolimar Lárez Rojas, actuando con el

carácter de Defensora Adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, promovió pruebas y solicitó pronunciamiento en cuanto a la prueba del experto testigo anunciada por la representación judicial del Diario Meridiano.

El 10 de agosto de 2012, a través de escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado Gilberto Rúa solicitó se le notifique vía telefónica a los fines de convocarlo a la audiencia oral y pública.

El 31 de octubre de 2012, la Sala Constitucional dictó el auto N° 1438, en el que se admitieron las pruebas documentales de la parte demandante y la prueba de testigo perito de la parte demandada, así como se rechazaron y negaron las pruebas documentales de la Defensoría del Pueblo por extemporáneas.

El 9 de noviembre de 2012, se fijó el auto que estableció la audiencia pública para el martes 13 de noviembre de 2012 a las 10:30 AM.

El 13 de noviembre de 2012, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado Gilberto Rúa consignó documentos relacionados con la causa. En esa misma fecha se dictó el Acta de audiencia pública.

El 19 de febrero de 2013, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la presente causa, e igualmente lo hizo la representación de la Defensoría del Pueblo los días 30 de abril y 11 de junio del mismo año.

El 8 de mayo de 2013, se constituyó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Mediante diligencia del 15 de octubre de 2013, el abogado Nizar El Fakih, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°175.573, solicitó copia digital en disco compacto de la audiencia celebrada el 13 de noviembre de 2012, lo cual le fue acordado por auto del 31 de octubre de 2013.

En sesión de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, se reconstituyó la Sala Constitucional, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Juan José Mendoza Jover, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos.

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este Máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN POR INTERESES DIFUSOS

El accionante señaló los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que busca proteger los intereses y derechos colectivos y difusos de todos los niños, niñas y adolescentes contra el Diario Meridiano C.A., fundamentándose en los artículos 26, 27 y 51 de la Constitución y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón que se "(...) *vulnera a todo evento artículos 17 letra E pacto* (sic) *de San José de Costa Rica y artículos 46, 58, 75 y 108 de la constitución* (sic) *vigente, en concordancia con normas bíblicas cual repudia el exhibicionismo Génesis .9.21-* (sic) *y la prostitución DT .23.17-18* (sic) *por ser ofensivo a Dios* (...)".

Que con ocasión de sus estudios sobre la "*porno suave*" creó un proyecto de Ley Especial Contra la Porno, en virtud de que al analizar la música del reggaeton o regetón, que tiene letras con expresiones de la intimidad sexual, que pueden ser aceptadas prematuramente por los niños y adolescentes, y que del estudio de la psiquiatra Yolimar Vacaro, del Hospital Mental de Ciudad Bolívar, se concluye que se induce a este grupo vulnerable a tener relaciones sexuales prematuras y en consecuencia al embarazo precoz.

Que igualmente se estudiaron las salas de internet y video juegos, en donde se permiten espacios reservados para adultos que manejan material pornográfico que puede imprimirse en una impresora general que está a la vista de niños, niñas y adolescentes.

Que las fotos de personas desnudas efectuadas por Spencer Tunick en la Plaza Caracas, alrededor de la estatua del Libertador y que fueron exhibidas en el Ateneo de Caracas y periódicos, como hecho cultural, son realmente actos inmorales.

Que los clasificados de los periódicos con avisos solicitando lindas jovencitas para ganar mucho dinero, induce a las adolescentes con apremios económicos a prostituirse y a efectuar "*trata de blancas*".

Que las publicidades de los periódicos en general despiertan e inducen a la curiosidad sexual en los niños y adolescentes, al ofrecer objetos sexuales obscenos.

Que otro mecanismo de "*depravación sexual*" son las fotos y grabaciones que se envían los adolescentes a través de sus celulares, aunado al "*hecho reprobable*" que algunas instituciones del Estado entregan preservativos a niños y adolescentes en escuelas y liceos.

Que en razón de todo lo anterior y la manera en que se utilizan dichos medios para inducir a la pornografía, que es adictiva y dañina, es que elaboró el proyecto de ley, antes mencionado, para restablecer los valores morales.

Que el Diario Meridiano C.A., comercializa con las llamadas porno a través de las revistas españolas GTI Tuning, Max y Max Tuning y que son vendidas al público en general, las cuales tienen unas portadas llamativas para sus defendidos y que sirven de "*veneno y trampa*" para inducirlos en la pornografía, siendo que estas revistas tienen concursos (de diseños "tuning" de carros) para jóvenes artistas en las que se encuentran dibujos de menores de edad, lo que los atrae tal como ocurre con su menor hijo de catorce años. Indica que incluso, el periódico en sí mismo publica este tipo de imágenes, coloca clasificados de este tipo y tiene enlaces para páginas de tipo pornográfico.

Finalmente, estima que los medios impresos están para contribuir a la formación ciudadana y no para enfermar la psiquis, por lo que solicita que la Sala Constitucional ordene no publicar clasificados de contenido porno, se "(...) *revise el proyecto de ley especial contra la porno* (...) [y] *remitirla con copia certificada de la presente acción a la Asamblea Nacional a su consideración para posible* (sic) *sanción* (...)"; y solicita medida cautelar de suspensión de toda publicación de este tipo de materiales.

II

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

El 13 de noviembre de 2012, se celebró la Audiencia Constitucional, en la que estuvieron presentes la parte accionante y los representantes judiciales de la parte demandada, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público.

En dicha oportunidad, la parte **actora**, reiteró los mismos argumentos expuestos en su libelo de demanda, además señaló que en su criterio existe una ley natural e inmutable que establece conductas morales, tanto así que en el Congreso de Angostura el Libertador propuso un Poder Moral. También señaló un conjunto de normas internacionales que establecen las obligaciones del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Explicó que con las nuevas tecnologías y los teléfonos celulares, aumentó la pornografía al alcance de los niños y adolescentes y que al tener libre acceso a las revistas y periódicos están expuestos a todas las imágenes e información que se encuentran en ellas, incluyendo las que son objeto de la presente acción. En tal sentido, afirmó que llamó por teléfono a una de las "*líneas calientes*" y le provocó escuchar, por lo que concluyó que eso puede tener más influencia en un niño o un joven, lo cual, a su vez, redunda en el embarazo precoz y la inducción a la prostitución.

Finalmente, consignó un ejemplar del proyecto de "*Ley Especial de Delitos a los Valores Morales*".

Por su parte, el abogado de la parte **demandada**, Alexander Preziosi, reiteró sus argumentos expuestos en la contestación de la demanda y señaló que el Diario Meridiano C.A., no edita, no importa y no posee ningún tipo de relación comercial o de otra índole con las revistas que son objeto de la demanda. Adicionalmente, manifestó que en todo caso, en la demanda no se identificó a las personas naturales o jurídicas que las importan y distribuyen, por lo tanto, carecen de representación en este proceso.

Indicó que este tipo de acción no es el mecanismo idóneo para obtener las pretensiones que se exponen, sino que existen otras vías adecuadas, por lo que solicitó que se declare improcedente la acción.

En otro orden de ideas, sostuvo que no cabe a lugar la cita y referencia a legislaciones de otros países y de otras épocas, en razón de que nos encontramos en Venezuela y es con nuestra legislación patria que debemos resolver el presente caso.

Que el Diario Meridiano publica algunos anuncios de chat o videos, pero que no es material que se pueda calificar de pornográfico, de desnudez o de relaciones sexuales, ni como información ni como publicidad.

Que en Venezuela hay libertad de expresión y de información, estando prohibida la censura, existiendo una regulación vinculada a los hechos sexuales como el Código Penal o la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la "*Ley Contra el Crimen Organizado*", la "*Ley Contra Delitos Informáticos*", con lo que se evidencia que no está prohibido publicar anuncios que estén vinculados con actividades sexuales, ya que el sexo es parte del ser humano, de su libertad sexual y de su derecho a la información. Asimismo, señaló que los niños y adolescentes también tienen esos derechos siempre que estén debidamente guiados y evitando ciertos daños a personas.

Que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece las condiciones de su comercialización y no las prohíbe expresamente. Al respecto destacó que no pretende defender a la pornografía o establecer juicios de valor, solamente señalar que no está prohibida sino regulada y que el Diario Meridiano nunca ha publicado ni lo hará, algún anuncio que se considere "*de alto contenido sexual*" y mucho menos de pornografía.

Que en algunos anuncios que aparecen en el diario, cuando el que coloca el anuncio considera que existe un contenido sexual explícito está obligado según la ley a colocar que está dirigido a mayores de diez y ocho años, como ocurre con algunos de ellos, y el diario no tiene relación con esas empresas que se anuncian, además de existir otros tipos de chats como de horóscopos o de amistad.

Que la acción se basa en opiniones personales del demandante y su inclinación religiosa, más que por hechos científicos comprobables y comprobados.

Que la censura en general está prohibida y sólo se justifica si hay una prueba contundente de que la difusión de una información puede producir un daño a la colectividad y en el presente caso no existe ningún elemento probatorio que demuestre que este tipo de anuncios pueda o cause un daño a la población.

Que, en todo caso, es un tema que requiere investigación, donde se analicen los puntos de vista científicos, religiosos, morales y sociales y no solo la opinión de una persona, pues se requiere de un debate generalizado y público sobre el tema, que se hagan estudios de especialistas en varias áreas, tomando en cuenta que la comunicación e información es libre en el país.

Por su parte, el abogado Jesús Mendoza, en representación de la **Defensoría del Pueblo**, sostuvo que en los anuncios clasificados de las últimas páginas del Diario Meridiano aparecen unos avisos que tienen un alto contenido sexual, incluyendo cuerpos desnudos, semidesnudos o en ropa interior con posiciones sugerentes, lo cual se puede observar en las ediciones del 12 y 13 de noviembre de 2012, por lo que, a su decir, es innegable que las imágenes con el contenido de los "*anuncios altamente eróticos*" son de contenido sexual, con lo cual se le informa a los niños y adolescentes que hay chats, videos, teléfonos o páginas web en los que se especializan en sexo.

Que es falsa la afirmación de que no está prohibida en nuestra legislación la pornografía o la información de esta naturaleza, toda vez que la Constitución establece la protección integral e interés superior del niño, y los trata como sujetos de derechos. Adicionalmente ello se desprende cuando se concatenan los otros derechos como lo son el derecho a la salud, el derecho a la integridad psíquica, física y moral.

Que existe libertad de prensa, pero que esa información en relación a los niños y adolescentes está condicionada a que sea adecuada con su edad, en donde la sociedad, padres y Estado, incluyendo los medios de

comunicación tienen corresponsabilidad en la formación de los niños. De allí que si bien tienen derecho a la información sexual, esta debe ser cónsona con su edad.

Que frente a las imágenes evidentemente sexuales no puede desprenderse que su objeto sea formar adecuadamente a los "niños", sino que tiene un mero fin comercial para "*enganchar*" a todas las personas de cualquier edad, incluyendo a los "niños y adolescentes", que obtienen así una información para la que no están preparados.

Que no hace falta la opinión de un experto para saber que los "niños y adolescentes" están en proceso de formación y desarrollo físico, psicológico y emocional y la simbología de las imágenes que se encuentran presentes ante un "niño" que aún no tiene un pensamiento concreto y está formando su simbología y sentido de las cosas, se le está acercando de esta manera al sexo de forma comercial, percibiendo que vender su cuerpo o exhibirse es digno y válido. En cuanto a los adolescentes que están en etapa de reforzar los principios y valores que adquirieron en primaria y secundaria en educación sexual, que los videos sexuales que se promocionan son buenos, porque, además, éstos se anuncian sin advertencia alguna como lo indicó la parte demandada.

Que el Diario Meridiano tiene más de cuarenta años publicándose y –en su criterio- es conocido el interés que tiene todo "niño y adolescente" en los deportes, de lo que se deduce que el periódico es de interés para ellos. Por ello, considera que este tipo de imágenes de alto contenido sexual debe ser prohibida no sólo para la demandada sino también para los demás medios impresos.

En su intervención, el **Ministerio Público**, actuando a través de Néstor Luis Castellano Molero, Fiscal Primero del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que eran impertinentes las alegaciones del accionante en contra de las salas de internet y de video juegos, la música del reggaetón, las fotos de personas desnudas efectuadas por Spencer Tunick en la Plaza Caracas y las fotos y grabaciones que se envían los adolescentes a través de sus celulares, al considerar que el punto central de la acción es la prohibición de la publicación de clasificados de presunto contenido pornográfico por la sociedad mercantil Diario Meridiano, C.A., a lo cual se ciñe.

Que lo relevante es el daño moral que se puede generar con estas publicaciones a los niños, niñas y adolescentes ante su exposición a la pornografía, que se debe entender como una "*cruda y explícita exhibición de genitales y actos sexuales de toda índole, donde abundan las imágenes sadomasoquistas, la pedofilia y otras aberraciones, individuales o en grupo*", tratándose de una actividad comercial "*que deforma, enferma y empobrece la psiquis humana*", indicando que "*se dice que existe una relación entre delitos de agresión sexual (...) con la adicción a la pornografía en los criminales que lo cometen*" y que su impacto negativo se evidencia más en las mentes menos formadas como las de los "niños y la juventud", por lo que sería bueno restringir su promoción comercial, mientras se educa sobre sus peligros.

Que no comparte los argumentos de la demandada respecto a que no existen estudios científicos que avalen o determinen que la publicidad pornográfica influya negativamente en el desarrollo conductual de los niños, niñas y adolescentes, aunque reconoce que en la causa no existe ningún peritaje a favor o en contra de dicho criterio, pero que los mismos se conocen por los informes anuales publicados por la Organización Mundial de la Salud.

Que la publicidad desempeña un importante papel en la dinámica social como eje del comercio mundial, buscando a través de los medios de comunicación masivos tocar los sentimientos y "*fibras personales*", para llegar a la mayor cantidad de personas posibles, lo cual se manifiesta por medio de un afán informativo, pero que esta actividad no puede traspasar los límites legales, morales y religiosos que regulan las formas de comportamiento social, ya que lo contrario iría en detrimento de los derechos constitucionales y supraconstitucionales.

Que los medios de comunicación llegan al seno familiar y sirven como guía o patrón de formación de sus integrantes, complementando la dada por los progenitores, por lo que la información suministrada por ellos debe ser la más veraz posible, educadora, formadora y servir como canal de afianzamiento de valores y principios de moralidad humana, por lo que si se aparta de este camino, se convierte en un conducto de antivalores sin distinguir edades, género o condición social, en donde los más afectados son los niños, niñas y adolescentes y los que por patología mental o deficiencia de entendimiento, no logren internalizar cabalmente lo bueno o lo malo de la información recibida.

Que la demandada en su contenido rotativo "*incluye supuesto material pornográfico*" que afectaría a los grupos vulnerables señalados, siendo que por ello el derecho comparado contempla como ilícitos publicitarios los que se relacionan usualmente con la imagen de la mujer como objeto del deseo. En este sentido señaló que Anxo Tato Plaza, profesor de la Universidad de Vigo, España, sostiene que el ilícito se produce cuando: a) se utiliza el cuerpo femenino como parte "*captatoria*" de la publicidad, b) como mero objeto y c) con la desconexión total y absoluta entre la imagen utilizada y el producto promocionado, siendo que abarca desde la promoción de un producto alimenticio hasta la promoción de estímulos sexuales, que serían todos ilegales y el último encuadraría en la pornografía.

Que los investigadores de la Fundación Nacional para la Investigación y Educación de la Familia concluyeron que quienes están expuestos a la pornografía tienen más probabilidades de desarrollar tendencias sexuales anormales; igualmente, Victor Cline, profesor de la Universidad de Utah, Estados Unidos, indica que la contemplación de material pornográfico puede reducir el deseo del individuo de mantener relaciones con su pareja e impedir que ésta la satisfaga. Por ello, a su decir, algunos médicos sostienen que la pornografía crea en ocasiones una adicción mucho más difícil de vencer que la adicción a las drogas, ya que no hay manera de desintoxicarse.

Que con las pruebas documentales aportadas y que no fueron desconocidas, controvertidas o desmentidas, se evidencia que el Diario Meridiano expone a la vista de los lectores, que pueden ser menores de edad, imágenes explícitas de personas de "sexo femenino" mostrando sus partes íntimas voluptuosas y con escasa ropa que, en su criterio, causan interés sexual en cualquier lector, tratándose de imágenes subliminales y el mensaje no está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años, sobre todo al considerar que al tratarse de un diario deportivo interesa a personas de cualquier edad.

Ante ese contenido sexual que calificó de impropio, indicó que existen numerosas normativas en derecho comparado e internacional, tales como el Convenio Internacional para la Represión de la Circulación y Tráfico de las Publicaciones Obscenas, con su Protocolo Facultativo, en el que las partes se comprometen en evitar que circulen imágenes obscenas; el

Reglamento sobre Publicación y Revistas Ilustradas de 1981, en México, entre otros, que sirven de referencia para la regulación de la publicidad impresa, a tenor del contenido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de la Constitución.

Que el Estado debe garantizar una integridad psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes, junto con la familia y la sociedad, para estar informados adecuadamente de su salud sexual y reproductiva, así como obtener una educación acorde, por lo que las publicaciones y soportes impresos deben cumplir con ciertos requisitos cuando tienen contenido sexual. De allí que, se deben controlar dichas publicaciones impropias del Diario Meridiano, C.A. y por lo tanto solicita se declare con lugar la presente acción en cuanto a dichas publicaciones y que los efectos de tal declaratoria deben ser extensivos a todos los medios impresos. Asimismo, solicita se declare improcedente la aprobación del proyecto de Ley Contra la Porno.

En su réplica, el **demandante** señaló que la parte demandada defiende la pornografía y realizó referencias históricas respecto al origen de la misma para concluir que ahora existe la "*pornografía blanda*" que es un nuevo tipo de pornografía y que es lo que ofrece el demandado con los sitios de chat o telefónicos "*que producen erecciones y con eso ya se da el porno*", lo cual, a su decir, es sumamente lucrativo y gran negocio, que afecta a los "niños y adolescentes".

Por otra parte, en la réplica de la representación judicial de la parte **demandada**, ésta refirió que en Venezuela existen limitaciones expresas a las publicidades de cigarrillos y licores, previo estudio profundo de los efectos de estos productos en la sociedad para luego mediante una legislación prohibirlo.

Que los medios de comunicación publicitan alimentos (gaseosas y chucherías) y no se puede comenzar a prohibir indiscriminadamente cosas que puedan tener algún efecto nocivo, salvo que ese efecto nocivo se compruebe que afecte a la sociedad, lo cual sólo se puede saber a través de un estudio e investigación de carácter político y social de fondo, siendo que ninguno de los presentes en la audiencia tiene conocimientó profundo de la materia.

Que se tiene como un tabú la masturbación pero ésta es "necesaria" según estudios médicos, especialmente en los adolescentes, pero con estos argumentos no pretende defender la pornografía porque no es exhibida por su cliente ni tampoco es su labor, ya que no existen imágenes sexuales explícitas en ninguna de sus ediciones para excitar sexualmente a la persona, solamente hay algunos anuncios de unos chat aparentemente de contenido erótico y otros de contenido de amistad.

Que este tema requiere un foro de investigación mucho más abierto y profundo del que se está efectuando en la audiencia constitucional, especialmente con las escasas y casi nulas pruebas que hay en el expediente. En tal sentido, si bien es un tema que debería debatir la sociedad, éste debe ser más extenso y profundo de lo que se presenta en este proceso judicial, para dictar una censura general como la que se pretende y que ahora quieren que se extienda a otros medios impresos, por lo que se pide se declare sin lugar la acción.

En la réplica de la **Defensoría del Pueblo**, su representante adujo que la parte demandada asegura que no publica información de contenido sexual, igualmente señala que se requieren estudios para sentar con certeza científica que se produce un efecto psicológico, pero que hay algo que es claro y es que la intención de esos mensajes no es educar sino comercializar, donde el problema no es si un "niño o adolescente" debe tener información sexual y poder masturbarse, sino que el problema es que se trata de "*engancharlos*" con unas imágenes que no tienen como finalidad primordial la orientación sino el comercio, lo cual es tergiversar lo que se pretende, si bien son aptas para un adulto que puede discriminar no lo son para niños, niñas y adolescentes, sobre todo al ver que es un diario de gran interés para este grupo poblacional al tratarse la materia deportiva.

Que el mismo demandado ha señalado y reconocido en el proceso que efectivamente las imágenes que tienen esos chat son de pornografía como en las páginas 14, 15 y 16 de su contestación a la demanda, en las que indica que esa información es pornográfica, por lo que así se le informa al "niño" dónde conseguir esta información y eso es "*divorciarse*" de lo que es su función social y no obedece a la Constitución, sobre todo al tomar en cuenta que él es responsable junto con los padres y el Estado en la formación de esos "niños" y esas imágenes no contribuyen con su educación, contrariando así el artículo 3 de la Constitución.

Que la educación sexual es otra cosa y que el "*sentido común*" nos indica que esas imágenes tienen otra finalidad distinta a la formación, en donde esta Sala en su sentencia "Juan Garantón contra Radio Caracas Televisión" en la que estableció que las imágenes presentadas en televisión sobre líneas calientes tenían alto contenido pornográfico y a pesar de transmitirse a altas horas de la noche y en horario para adulto, ofendían valores morales del Estado y de la sociedad, degenerando a los mismos. Además, calificó de falacia el hecho que se señale que no está prohibido expresamente, ya que a través de otras normas se prohíbe ese tipo de contenido, en tanto que la única información sexual permitida es la de contenido educativo, por lo que reitera la solicitud de que se declare con lugar la demanda y se extienda al resto de los periódicos.

De igual forma, en la réplica del **Ministerio Público**, se indicó que la parte demandada arguyó que no se ha establecido ningún peritaje que acredite si la pornografía atenta contra el sano desarrollo intelectual y psíquico de los niños, niñas o adolescentes, pero afirmar y acoger tal postura es desconocer los informes anuales de la Organización Mundial de la Salud referidos a la pornografía y a su injerencia en los niños, niñas y adolescentes.

Que es un hecho público y notorio que todos los días los Estados mundiales luchan contra la pornografía, porque ésta salió del sexo para convertirse en un negocio que ha hecho a muchas personas convertirse en "*sexoadictos*", con la diferencia de que este tipo de vicio no tiene una desintoxicación. Tal como lo hacen publicidades famosas que quedan en la mente, la pornografía también queda en la mente, para lo cual al ver los anuncios se ven las fotos y las palabras en las que se coloca "XXX" que es la forma internacional de reconocer la pornografía. Ante esto hay que preguntarse ¿cómo un "niño" internaliza esta información que se le está ofreciendo a su alcance? como la página web "*matrixhot*" que posee imágenes pornográficas explícitas y en donde la Organización Mundial de la Salud lo censura y por ello lo censura también el Ministerio Público.

Que no se está proponiendo censurar la libertad de expresión, sino que ésta debe tomar en consideración los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en ese sentido por conducto de los medios de comunicación masivos se debe hacer extracción de la obligación que establece el artículo 108 de la Constitución de tener un fin educativo conjuntamente con el Estado y la familia, por lo que ratifica todos sus alegatos y pide se declare

con lugar la acción y en consecuencia se censure y evite a partir de la publicación del fallo "*según el artículo 236 de la LOPNNA*", la publicación de este tipo de invitación de favores sexuales sin ningún tipo de control y de manera indiscriminada, que además se debe extender a todos los demás periódicos del país.

Posteriormente la representación de la **Defensoría del Pueblo**, a efecto de demostrar sus argumentos contrarios a lo alegado por la demandada, consignó dos ejemplares del Diario Meridiano de los días 12 y 13 de noviembre de 2012. Se llamó a las partes para ejercer el control de la prueba y la parte demandada señaló que ya había precluído la oportunidad procesal para consignar pruebas, aunque reconoció que se trataba de publicaciones del Diario Meridiano en las que existen imágenes eróticas, mas no pornográficas. El representante del **Ministerio Público**, por su parte, consideró que debían ser admitidas, dada la trascendencia de la materia debatida y lo que se evidencia de la misma que coadyuva al presente caso.

Sobre la promoción de las presentes pruebas, la Sala ha de señalar que las mismas fueron consignadas de manera extemporánea, de conformidad con lo previsto en los artículos 147 y 156 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, motivo por el cual las inadmite. Así se decide.

De seguidas, se procedió a oír a la testigo perito promovida por la parte demandada, la ciudadana María Stella Solórzano, quien afirmó ser socióloga de la Universidad Central de Venezuela con mención en sociología de la comunicación. Así, la Sala juramentó a la testigo e instó a la parte promovente a que interrogara a la misma, dentro de un lapso de cinco minutos, formulando las siguientes preguntas:

Abogado Alexander Preziosi: "*¿Puede usted decirme su experiencia profesional y dónde trabaja actualmente?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*mi experiencia profesional es en la Fundación del Niño hoy Niños Simón y en los centros para niños CECODAP, con experiencia trabajando con las comunidades de padres o representantes un poco en la orientación de lo que son las tareas no formales o extracurricular para la formación de los niños. Actualmente me desempeño en la parte de derechos humanos en el Ministerio del Poder Popular para la Salud*".

Abogado Alexander Preziosi: "*¿Puede decir desde su experiencia y punto de vista sociológico qué es la pornografía?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: la pornografía tiene muchas acepciones y conceptos por lo que sería un debate muy extenso, "*para mí la pornografía es el hecho explícito de un acto sexual sin tener para ello, si se quiere un motivo, nada más que el de excitar sexualmente a la persona. Es un concepto el más cercano para mí de lo que es la pornografía*".

Abogado Alexander Preziosi: "*¿Usted ha visto los anuncios a chat o llamadas que se contiene en el Diario Meridiano, ha leído las actas del expediente o ha leído el Diario Meridiano por su cuenta?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*he leído el acta, he leído el escrito del señor, he leído Meridiano y siento que no hay explícita pornografía en el anuncio, los anuncios como tal son, como hemos visto, están expresados en la publicación...*".

La presidenta de la Sala: "*se le agradece a la testigo mirar hacia el presidio*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*¡ah disculpe!. Estas imágenes no creo que expresan explícitamente pornografía, no hay gestos, no hay una presencia si se quiere, ni siquiera de desnudez completa y creo que para mí eso en ninguna parte es pornografía*".

Abogado Alexander Preziosi: "*¿considera usted que esos anuncios a los cuales hizo alusión serían dañinos a los niños, niñas y adolescentes?*"

Testigo perito María Stella Solórzano: "*yo pienso que en principio no es un diario de niños, niñas y adolescentes; yo pienso es un tiraje o diario dedicado o si se quiere al público que está hecho, habría que estudiarlo, habría que verlo, es un público de menores. ¡Ah! ¡uh! No sé puede decir menores. Jóvenes entre 18, 20 y 25 años en adelante. Este, para mi si un diario entra en la casa nuestra, nosotros somos los que debemos estar con el control de lo que sucede con esos diarios. Por lo que yo he visto, lo que yo creo y creo que el tiraje es...*".

La presidenta de la Sala: "*se le ha convocado a la testigo como testigo experto, no para dar opiniones propias, entonces se le agradece que actúe con opiniones de testigo experto*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*sí disculpe. Este bueno, el tiraje, para mí en un estudio sociológico de la comunicación, o sea, hay que contar las imágenes, tenemos que hacer un conteo de imágenes, tenemos que ver el tiraje para quien está destinado ese documento o ese periódico o esa emisión de ese diario, o sea, como experto, o sea, no creo que sea un diario ni de niños, ni de niñas, ni de adolescentes. Entonces se sale, para mí, por los estudios que hemos hecho y que se hacen en la universidad, no da lugar a que hablemos de niños, niñas y adolescentes*".

Abogado Alexander Preziosi: "*En su experiencia profesional y como socióloga, ¿cree usted o considera usted que debe limitarse el acceso a las personas, específicamente a los niños, niñas y adolescentes a informaciones sobre temas conflictivos, agresivos o sexuales?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*no creo y creo que nuestra Constitución y en nuestra LOPNNA, los niños uno de los artículos más importantes es que la personalidad se crea en libertad, o sea, en la medida en que nosotros estemos coartando la libertad de los niños, los niños no tienen poder decisión y lo que tenemos es un niño que tenga poder de decisión, que sea participativo, que sea protagónico y más en estos momentos cuando no debemos perder la visión de ese, de esa...*".

La presidenta de la Sala: "*ya terminó el tiempo de interrogatorio y las partes tienen derecho a repreguntar al testigo. Se le da lugar a la parte accionante*".

Accionante Gilberto Rúa: "*¿qué diferencia hay entre un sociólogo y un psiquiatra?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*mucha, un sociólogo te estudia lo que es la sociedad, los fenómenos que pueden influir en la sociedad, este, un psiquiatra se dedica a la mente humana de manera individual. No con ello quiero decir que todo eso no converja y sea un mismo, o sea, este tocado, sea, estemos si se quiere en sinergia para los estudios de casos, pero un sociólogo estudia muchos más los fenómenos a nivel social de muchas personas, lo que puede influir en muchas personas, como un fenómeno de la sociedad*".

Accionante Gilberto Rúa: "*una última pregunta ¿usted cree que no es muy parecido que yo le diga a un niño vaya a robar que le diga a un niño vaya a hacer actos sexuales y pague para ello?, ¿hay alguna diferencia en cuanto a lo delicado?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*por supuesto que no*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*la testigo señaló que los anuncios comentados no tienen pornografía explícita. Disculpe, ¿podría mostrársele a la testigo las imágenes que salen en el periódico de hoy?. En primer lugar se observa la imagen de una joven que está desnuda, ¿no?, ¿la vé?*".

La presidenta de la Sala: "*se agradece a la testigo responder la pregunta*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*no la veo desnuda*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*en segundo lugar, usted observa que en esas imágenes además de contener un cuerpo femenino, puede observar que hay una serie de lenguaje escrito*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*sí*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*¿ese lenguaje escrito invita a las personas a ver unos videos calientes?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*no necesariamente*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*hay en uno, dos, tres, cuatro, cinco donde se invita expresamente que son videos calientes*".

La presidenta de la Sala: "*se le recuerda a la testigo que está declarando bajo juramento y tiene ante ella una imagen objetiva y se le agradece referirse a esa imagen y no a asuntos subjetivos*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*me estoy refiriendo a lo que estoy viendo, a lo que estoy leyendo y no veo lo que el señor quiere que yo vea*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*las imágenes, no, este, todas las imágenes tienen un sentido*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*uju*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*una intencionalidad*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*por supuesto*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*podría usted decir cuál es la intencionalidad de las imágenes donde se dice, 'sácala de jonrón con tu gochita sexi', 'Brenda 666'*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*no, no podría decirlo porque...*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*¿cuál es la intencionalidad?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*que puede ser sacarla de jonrón*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*¡Ahhh!, está bien. Esta podría usted decirme, cuál es la intencionalidad de esta otra imagen 'Carmen te da lo mejor del Kamasutra', 'Carmen 4516' y en la posición que está esa joven, ¿cuál sería la intención de esa imagen?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Mire yo me estoy moviendo tal cual como está esa imagen y yo no le estoy expresando a usted nada de lo que usted está diciendo*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*Me refiero a esta que está acá, ésta, que esta acostada*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Es que tampoco ni la que está acostada*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*¡Ahhh! Perfecto*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Yo lo veo así...*".

La presidenta de la Sala: "*Se le va a agradecer a la testigo que responda de manera asertiva, si o no*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*No, no me parece*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*Igualmente, 'Libia Días recibe el contenido más hot en tu celular', donde aparece de espaldas agarrándose su ropa interior, ¿eso tampoco o qué intención tiene esa foto?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*No me parece que tenga la intencionalidad que usted...*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*no, yo estoy preguntando ¿qué intencionalidad tiene?*"

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Que reciba sus fotos más calientes en el celular*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*¡Ahhh!, eso es solamente lo que se desprende de allí ¿no?. Sí. Podría decir usted con sus conocimientos de Teoría de Sociología de la Comunicación que las imágenes tienen muchos sentidos*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Las imágenes tienen muchos sentidos y para hacer un estudio de esas imágenes usted no me puede preguntar a mí en el momento...*"

La presidenta de la Sala: "*Se le recuerda a la testigo que debe responder asertivamente*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Pero es que eso no es, no es....*".

La presidenta de la Sala: "*Se le agradece a la testigo que se recuerde que, ha sido promovida ante esta Sala del Tribunal como testigo experto, no para emitir comentarios de otra naturaleza*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Las expresiones, las imágenes tienen muchas expresiones, es cierto*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*¿Usted podría decir si esas imágenes tienen un contenido educativo?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*No*".

Jesús Mendoza por la Defensoría del Pueblo: "*Esas imágenes efectivamente no tienen un contenido educativo, es todo*".

La presidenta de la Sala: "*El Ministerio Público va a repreguntar a la testigo, nuevamente se le recuerda a la testigo que está bajo juramento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la obligación que tiene de guardar la compostura y de responder de manera asertiva*".

Néstor Luis Castellano Molero por el Ministerio Público: "*Muy buenas tardes. Usted indicó bajo juramento, que usted considera que el tiraje del Diario Meridiano, está dirigido a un grupo de jóvenes que va de los 18 a los 25 años. Solicita el Ministerio Público indique la base científica, las diligencias de campo, las entrevistas, que fundaron el dictamen que usted ha acertado en esta audiencia, y si lo tiene por favor consígnelo a los fines de poder controlar si ciertamente esos resultados responden o no a la imparcialidad que como experto debe asumir en esta Sala*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*No las tengo, no las tengo pero ese tiraje existe seguramente en el Diario y es un tiraje que sé, por lo que se infiere es para un público de 18 a 25 años en adelante*".

Néstor Luis Castellano Molero por el Ministerio Público: "*¿hay alguna limitante dentro del Diario?, ¿si es que tiene conocimiento, que la lleva a indicar, pese a que no ha hecho ningún estudio ciertamente sociológico, en cuanto a la destinación demográfica de este periódico que lleve a determinar o a aseverar, que este tipo de publicidad va dirigida a mayores de 18 años?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Si el tiraje es para 18 años en adelante, sí*".

Néstor Luis Castellano Molero por el Ministerio Público: "*¿De dónde asevera usted que el Diario Meridiano es exclusivamente para ser dirigida a mayores de 18 años?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Inferí que es un diario, usted me preguntó si yo tenía el estudio, no, no lo tengo, pero es un tiraje que evidentemente es para niños, perdón, para jóvenes mayores de 18 años*".

Néstor Luis Castellano Molero por el Ministerio Público: "*¿Cómo queda un niño que practique el deporte de fútbol en la modalidad sub15 y quiera enterarse de los resultados deportivos de ¡eeeh!, o seguir el campeonato venezolano de fútbol?. ¿Puede o no puede adquirir este periódico en cualquier kiosco?*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Puede adquirirlo*".

Néstor Luis Castellano Molero por el Ministerio Público: "*pese a que tenga 15 años*".

Testigo perito María Stella Solórzano: "*Puede adquirirlo*".

Néstor Luis Castellano Molero por el Ministerio Público: "*es todo*".

La presidenta de la Sala: "*Los magistrados van a efectuar preguntas. La testigo puede retirarse*".

Ante la testimonial efectuada por la ciudadana María Stella Solórzano, esta Sala observa que dicha ciudadana fue traída al juicio como perito experto, que aunque es un testigo, su testimonio puede tener más valor, atendida su mayor capacidad de percepción y de comprensión de determinados hechos (Cfr. MONTERO AROCA, *La Prueba en el Proceso Civil*. 3° Edición. Madrid. Editorial Civitas, 2002, p.p. 263 y 282). En el presente caso, la opinión se corresponde con un análisis posterior de las imágenes y anuncios, propia de un experto en el marco de la prueba de experticia y no de una percepción previa de los hechos debatidos y de los cuales pueda rendir declaración. Aunado a lo anterior, es menester señalar que a pesar de que le fue expresamente requerido por la Sala, no consta en autos ninguna documentación que acredite su pericia o conocimiento sobre la materia objeto de análisis, más allá de sus propias declaraciones en cuanto a ser socióloga y su presunto desempeño profesional, por lo que su testimonio, de esta forma, resulta inconducente, motivo por el cual se desecha la prueba promovida. Así se decide.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La Sala pasa a decidir sobre la acción incoada, con fundamento en las consideraciones siguientes:

En la presente causa, la pretensión original de la parte accionante estaba dirigida a que, primero, se ordene al Diario Meridiano no publicar clasificados de contenido pornográfico. Posteriormente, en la celebración de la audiencia oral, extendió sus pretensiones, no solo contra el Diario Meridiano sino contra todas las publicaciones periódicas para el público en general, que se revise su proyecto de "*Ley Especial Contra la Porno*" y se remita a la Asamblea Nacional para su consideración y posible sanción, así como otras solicitudes, que por fines prácticos serán determinadas y resueltas *infra*.

En cuanto a la primera pretensión de la parte actora, es decir, que se impida la divulgación de anuncios publicitarios de contenido pornográfico en publicaciones periódicas a las cuales pueden acceder libremente niños, niñas y adolescentes, observa esta Sala que se presenta, al menos en principio, un conflicto entre derechos constitucionales que debe ser resuelto.

En efecto, los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libre empresa se encuentran delimitados por –entre otros- el derecho de niñas, niños y adolescentes de ser protegidos integralmente por parte del Estado, también previsto en nuestro texto fundamental, siendo todos ellos de igual jerarquía jurídica, debiendo por tanto la Sala hacer una ponderación de la situación concreta, de modo de garantizar la mayor efectividad del texto constitucional sin sacrificar el contenido esencial de ninguno de los derechos constitucionales antes mencionados.

En este sentido, los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen, dentro del elenco de los derechos civiles consagrados en la Carta Fundamental, los derechos a la libertad de expresión y a la información, en los siguientes términos:

> "*Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.*
> *Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.*
>
> *Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.*"

Sobre las anteriores disposiciones constitucionales, se ha pronunciado esta Sala en diversas sentencias - entre otras, N° 1.013 del 12 de junio 2001 caso: *"Elías Santana"*; N° 1.342 del 14 de julio de 2004 caso: "*Carlos José Pinto Acosta*"; N° 344 del 24 de febrero de 2006 caso: "*Alberto Blanco-Uribe Quintero"*, N° 2.182 del 16 de noviembre de 2007, caso "*Tarek William Saab"* y N° 278 del 12 de marzo de 2012 caso: "*Editorial Aguilar, C.A.*"-, destacando que "*el derecho a la libre expresión de pensamiento y el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, y sin censura, permite a toda persona expresar libremente su pensamiento, sus ideas u opiniones, de forma oral, en lugares públicos o privados, por escrito o por cualquier otra forma, haciendo uso para ello de cualquier medio de comunicación, ante lo cual, asumen plenamente la responsabilidad tanto al sujeto que emitió el pensamiento, la idea o la opinión como el medio a través del cual se produjo, sin que sea excluyente una de la otra* (...)".

En particular, se ha pronunciado esta Sala sobre el ejercicio del derecho a la libre expresión en el ámbito de la publicidad comercial, al

señalar en la sentencia N° 1.092 del 13 de julio de 2011 caso "*Corporación Industrial Class Light, C.A.*", lo siguiente:

> "*Tal como se desprende de la norma transcrita,* (artículo 57 de la Constitución) *el constituyente de 1999 reconoce en el marco del principio de libertad y de autonomía de la voluntad, el derecho a la libertad de expresión como una de las facultades personales a través de las cuales una persona puede exteriorizar sus procesos intelectuales de acuerdo a sus aspiraciones y capacidades. En otras palabras, la posibilidad que tiene un sujeto de comunicar y compartir libremente sus temores y esperanzas (Duchacek citado por De Esteban J. González-Trevijano P. (1993). Curso de Derecho Constitucional Español II. Madrid. Pág. 136).*
> *De esta forma, el derecho in commento le otorga dimensión social y política a los pensamientos (Torres del Moral. 1996. Introducción al Derecho Constitucional. Madrid: Universidad Complutense) y, a su vez, les permite a los sujetos expresar sus puntos de vista de manera omnicomprensiva, es decir, a través de cualquier vía y, por ende, en su concepción más extensa.*
> *De allí que, la libertad de expresión no se circunscriba a la exteriorización del pensamiento, la idea o la opinión que tiene una persona en un momento determinado, sino que se extienda a la utilización de los mecanismos idóneos para hacerla conocer, lo cual, determina lo que Bronfman. A. et al., (1998) Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Universidad Europea de Madrid-Cees. Pág. 81), concibe como la doble concepción del derecho a la libertad de expresión, esto es, que el derecho in commento se encuentra integrado por varios elementos que lo componen y que pueden ser observados de manera individual.*
> *Por una parte, encontramos el acto de exteriorización de lo que la persona ha desarrollado intelectualmente y, por otra parte, el derecho a comunicarlo a través de cualquier mecanismo en ejercicio de lo que se conoce como el derecho a la pluralidad de fuente. Precisamente, una de las fuentes que ha adquirido mayor importancia como parte del derecho a la libertad de expresión, es el fenómeno publicitario que en los últimos dos siglos ha demostrado ser una de las manifestaciones más trascendentales en lo económico, político y cultural.*
> *En efecto, la actividad publicitaria, entendida como el proceso técnico destinado a atraer la atención del público, para informarlo de un producto, un servicio o una acción con el objetivo de convencer a una persona que adquiera o utilice algo, constituye una de las vías o formas específicas de expresión que, por su especificidad y, como afirma De Esteban J., y González-Trevijano (Ob. Cit. Pág. 142), debe ser regulada especialmente en razón de la propia naturaleza de la publicidad para evitar lesiones al bien común o a la salud.*
> *Así, igualmente lo afirma López Á., (et al. 1998. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Universidad Europea de Madrid-Cees. Pág. 90), al señalar que la actividad publicitaria, en cuanto a manifestación del derecho a la libertad de expresión, presenta una especificidad que exige la adopción de medidas destinadas a la protección de la moral pública, la juventud y la infancia, frente a expresiones de contenido sexual, violento o incluso ante mensajes que pudieran ser lesivos de la salud y la seguridad ciudadana.*
> *La citada doctrina deja claro que una cosa es la libre posibilidad de exteriorizar un pensamiento, una idea o una opinión de contenido publicitario y, otra cosa, son las condiciones de modo, lugar y tiempo que debe imponer el Estado, en el marco de su poder regulatorio, para que la expresión publicitaria se desarrolle de manera legítima sin afectar el interés general.*
> *Entonces, corresponde analizar si en Venezuela tiene cabida la tesis expuesta de limitación a la libre expresión publicitaria, para aquellos casos distintos a los que taxativamente prohíbe el citado artículo 57 del Texto Fundamental, según el cual, los únicos límites del referido derecho son la proscripción de mensajes anónimos, los que hagan propaganda de guerra, los discriminatorios o los que promuevan la intolerancia religiosa.*
> *La respuesta está en la doctrina que esta Sala ha desarrollado sobre el principio de interpretación constitucional (Vid. sentencia N° 23, del 22 de enero de 2003, caso: Harry Gutiérrez Benavides y otro), en la cual, se estableció que la actividad interpretativa del derecho debe realizarse de un modo sistemático, donde las normas deben ser analizadas a la luz de todo el ordenamiento jurídico, cuyo significado no resulta aislado de éste, ni tampoco del caso planteado a partir del cual debe afirmarse la interpretación para atender al significado de la norma y del caso*
> *En la referida sentencia, se recoge tanto el principio de unidad o integridad del Texto Fundamental, como el principio de concordancia práctica según el cual, la estructura constitucional (preámbulo, parte orgánica y parte dogmática), no puede observarse como si se tratase de disposiciones autónomas y descoordinadas, sino como el andamiaje jurídico-político que tiene carácter preceptivo en su totalidad.*
> *Así lo ratificó la Sala el 12 de julio de 2005, en la decisión N° 1581 (caso: Ángel Rafael Ávila y otros), en la cual reconoció que un Texto Fundamental, '...es un conjunto sistemático de valores, principios y normas racionalmente entrelazados, informados por una filosofía política determinada, según la cual se organizan los Poderes Públicos, se atribuyen competencias a los órganos del Estado y se fijan las metas de su actuación. Por ello, ninguno de sus preceptos debe considerarse de manera aislada, ni independiente de los demás, ya que su sentido y alcance se encuentra conectado con los restantes preceptos constitucionales. De este modo, la interpretación intrasistemática de la Constitución obliga a entender sus normas en armonía, sin magnificar el sentido de algunos preceptos, ni minimizar el de otros, con el propósito de compatibilizarlos positivamente para garantizar su homogeneidad, cohesión y coherencia'.*
> *Significa entonces, que las disposiciones constitucionales deben ser armonizadas como un todo, en el sentido de no poder hacer abstracción unas de otras y, de allí, que el operador jurídico no deba limitarse a contemplar la norma aislada y aséptica, sino en el contexto general de la Constitución.*
>
> *Ello así, la libertad de expresión en materia publicitaria no se limita a la mera exteriorización de una idea o pensamiento, sino que constituye una verdadera manifestación del ejercicio a la libertad económica, en cuanto que la expresión publicitaria es, de ordinario y salvo la publicidad oficial, una actividad mercantil que, como tal, se encuentra sujeta a las restricciones que el artículo 112 de la Carta Magna impone a los derechos económicos.*
> *Efectivamente, la libertad de expresión publicitaria se concretiza en un hecho comercial que como se estableció supra, está sometido a las limitaciones que el legislador puede imponer legítimamente por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social, de acuerdo a lo establecido en el anteriormente analizado artículo 112 de la Carta Magna.*" (Sic, negrillas del original y subrayado de este fallo).

Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, observa esta Sala que en el presente caso existe una manifestación de publicidad comercial, que a juicio de la parte actora sería ofensiva del pudor y contraria al deber que tiene el Estado de resguardar los intereses de los niños, niñas y adolescentes por su alto contenido sexual.

Así las cosas, el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcado en el capítulo relativo a los derechos sociales y de las familias, dispone:

> "*Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las Familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.*"

También se ha pronunciado esta Sala, en cuanto a la delimitación del derecho de libertad de expresión, al interrelacionarlo con el derecho de niñas, niños y adolescentes a obtener una información adecuada para su desarrollo integral (sentencia N° 1.566 del 4 de diciembre de 2012: *caso Gilberto Rúa*):

> "(...) *esta Sala ha delimitado el contenido del derecho de libertad de expresión y el derecho a la información en cuanto a su forma de expresión y los medios empleados, así como a la no restricción de éste mediante la censura de la información, en virtud de una responsabilidad ulterior; sin embargo, es de destacar que dicho derecho tiene un efecto de irradiación mayor cuando es ejercido a través de los medios de comunicación, en función de ello si bien la protección a los referidos derechos es mayor por el grado de participación de los comunicantes, es proporcionalmente consecuencial la protección de los derechos de los receptores de la información y su grado de afectación por la expresiones vertidas.*
> *El resultado de lo expuesto, implica una tridimensionalidad en cuanto a los efectos, por cuanto para garantizar la protección de los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información, el Estado debe crear los medios y las condiciones materiales para el ejercicio del derecho, así como garantizar o no impedir el igual ejercicio de los mismos derechos en la protección de éstos, a través de mecanismos restrictivos a su ejercicio a ciertos núcleos, pero a su vez, ello conlleva a una protección de los efectos de proporcionalidad del fin logrado por medio de la información y su colisión o confrontación con otros derechos constitucionales y a la responsabilidad generada por ello.*
> *Así pues, si bien el Estado debe garantizar una libertad plena del derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información, por cuanto dichos derechos se generan y despliegan en el ámbito de individualidad del ser humano, en el seno y desarrollo de su conciencia personal o social, por cuanto cada quien escoge internamente la información requerida así como lo indispensable para su disfrute y desenvolvimiento personal, lo cual puede variar indefinidamente sin establecer una regla de límites o máximos de tolerancia de los contenidos requeridos o permitidos, no es menos cierto que aun cuando ello pudiera colidir con la regla de las minorías y las mayorías, resulta de difícil desconocimiento que la información es uno de los medios más importantes de influir en la conciencia del ser humano y por tanto en la formación del colectivo.*
> *En razón de ello, si bien se puede afirmar que dichos derechos gozan de un grado especial de protección del Estado por cuanto ello implica a su vez el libre desarrollo de la personalidad sobre qué o cuál opinión o no se quiere adscribir o cuál información es relevante a un determinado ciudadano o conglomerado, en ejercicio incluso del derecho a la participación política, es indispensable mencionar que la mencionada libertad no es absoluta por cuanto el ámbito de protección se encuentra restringido a la vulnerabilidad de otros derechos que bajo ciertas circunstancias pueden requerir una protección incluso mayor a los referidos derechos.*
> *En referencia al grado de libertad que se encuentra inmiscuido en el ejercicio de dicho derecho conviene reflexionar lo expuesto por Stuart Mill, en adición a la vulnerabilidad o mutabilidad de la regla de las mayorías y las minorías, y a libertad de conciencia que implica el ejercicio activo y pasivo del derecho a la información, cuando expresa brevemente que: 'Si toda la humanidad, menos una persona, fuera de la misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad sería tan injusta impidiendo que hablase como ella misma lo sería si teniendo poder bastante impidiera que hablase la humanidad' (Vid. John Stuart Mill, Sobre la libertad, Edit. Alianza, Madrid, 1970, p.77).*
> *Sin embargo, si bien dicho derecho posee límites en cuanto a su ejercicio, su restricción y mecanismos de responsabilidad deben atender a circunstancias de oportunidad proporcionalidad y razonabilidad, las cuales pueden variar de*

acuerdo a las circunstancias fácticas de cada caso concreto, y la misma debe derivar en primer lugar, de un fundamento legal que otorgue ámbitos de protección, ya que la noción de orden público no es un concepto etéreo que pueda aplicarse discrecionalmente por las leyes, por lo que, en consecuencia, tal potestad debe encontrarse establecida y concebir la posibilidad que dicha limitación no afecte en mayor medida otro derecho constitucional, mediante el examen de análisis de proporcionalidad que faculte la misma, en la cual se pondere entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla a quien se le impone, a los efectos de medir si la finalidad perseguida no es más restrictiva a la protección que el ejercicio del derecho en si mismo.

Con relación al ejercicio de proporcionalidad como mecanismo de valoración para determinar o no la constitucionalidad de las sanciones estatales, cabe destacar la sentencia de esta Sala n.° 379/2007, en la cual se expuso:

(...) omissis (...)

(...) debe recalcarse el deber de todos los ciudadanos de propender al respeto de dicho derecho a la información, y asimismo, el deber del Estado de asegurar mediante la adopción de cualquier medida que asegure la eficacia de su ejercicio en su aspecto positivo o negativo y en su incidencia interna o externa, con la finalidad de garantizar la igualdad en dignidad, así como los derechos de los individuos y grupos humanos, como mecanismo de atención especial a los grupos vulnerables socialmente desfavorecidos para protegerlos con las leyes y medidas en vigor con la finalidad de facilitar su promoción e integración social y profesional, en particular mediante la educación de los ciudadanos propugnando la tolerancia de la expresión de ideas, pensamientos e ideologías atendiendo a la diversidad cultural existente, en aras de contribuir a la paz nacional, la justicia social y la amistad entre los ciudadanos.

En función de ello, el Estado así como los órganos jurisdiccionales están obligados a garantizar no sólo la protección del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información sino también a proteger las lesiones que se causen por el ejercicio exacerbado o desproporcional de dicho derecho ya que el Texto Constitucional consagra una serie de valores objetivos que deben ser garantizados ponderando los valores fundamentales contrapuestos según la medida de protección y desnaturalización del derecho ejercido y el derecho controvertido.

En consecuencia, debe analizarse si en el caso concreto la publicación de fotos que reflejan el deceso de personas en primeras páginas o en la última página del periódico bajo condiciones de derramamiento de sangre visible, atentan contra el derecho a la salud y el derecho de los niños, niñas y adolescentes, así como el derecho al honor de las familias de las personas fallecidas ilustradas en los medios de prensa cuestionados.

En este sentido, se aprecia que el derecho a la salud fue desarrollado por el Constituyente en el artículo 83 del texto constitucional, el cual expone: 'Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República'.

En este orden de ideas, es de destacar que el derecho a la salud forma parte del derecho a la vida, por cuanto es intrínseco a la vida misma la condición de salud que pueda tener cada ciudadano o una colectividad determinada siendo una obligación del Estado garantizar su aseguramiento, y no restringiéndose éste a la salud física sino que ésta abarca y se extiende a la salud mental y psíquica de cada ser humano. Dicha concepción no es extraña al mismo, ya que en el plano internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, en su preámbulo que la salud es '(...) un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades (...)'.

Asimismo, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se incluye el derecho a la salud, cuando se contempla que 'Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (...)'.

Por último, se aprecia que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12.1 reafirma esa concepción amplia del derecho a la salud, la cual no abarca la salud física sino incluye igualmente a la salud mental de las personas, al efecto, el mencionado artículo dispone: 'Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental'.

De la disposición citada establecida en el artículo 83 del Texto Constitucional, así como las normas de derechos humanos que regulan el derecho a la salud, se desprende que el derecho a la salud no implica solo la atención médica por parte de los órganos del Estado sino que ello envuelve otros derechos como el derecho a la prevención y el tratamiento médico de enfermedades, acceso a medicamentos, acceso igual a los servicios de salud, oportunidad en su atención, acceso a la información sobre tratamientos así como las enfermedades que puedan alterar la salud del ser humano o de un colectivo, la participación en las decisiones relacionadas con la salud, la no discriminación en la prestación como en la atención del servicio, entre otros.

Esa amplitud de implicaciones en el ejercicio del referido derecho depende incluso de otros derechos humanos, por ser parte esencial del derecho a la vida como expresamente lo cataloga el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se reafirma en los valores superiores del ordenamiento jurídico consagrados en el artículo 2 del Texto Constitucional, cuando consagra que: 'Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político'.

En razón de ello, el derecho a la salud se encuentra plenamente interrelacionado con el derecho a una alimentación sana, el acceso al agua, a una vivienda adecuada, a la no discriminación y a la igualdad, derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, acceso a la información, a la participación, entre otros, ya que la satisfacción de dichos derechos y su interrelación mediata o inmediata entre ellos, es acorde con uno de los fines esenciales del Estado es la '(...) promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución'.

Si bien, la Ley Orgánica de Salud no contempla una definición expresa sobre el contenido de lo que debe entenderse por salud mental, resulta innegable su reconocimiento en el artículo 2, cuando dispone: 'Se entiende por salud no sólo la ausencia de enfermedades sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental'.

En relación al presente caso, la parte demandante alega en primer lugar, la afectación de su salud mental, como consecuencia, de la publicación de "fotos sangrientas", en los Diarios "El Progreso" y "El Luchador", los cuales causan impacto social así como zozobra en el individuo, en atención a ello, se aprecia que la salud mental es un término amplio que implica factores emocionales del individuo y del entorno social como la aflicción o conductas más extremas como la violencia, tales factores pueden desencadenar ante la ausencia de control o tratamiento en la desmejora progresiva de la salud colectiva o individual, la cual puede ser afectada por agentes endógenos o exógenos al individuo, los endógenos pueden ser considerados como las preocupaciones propias del ser humano o de éste en su entorno familiar mientras que los exógenos pueden ser variables e indeterminados como la situación económica de un país que no asegure trabajo, estabilidad social, inseguridad, entre otros o de agentes exógenos particulares, entre ellos, sin duda, los medios de comunicación pueden tanto como favorecer o desfavorecer la tranquilidad y paz social aun cuando el grado de afectación al mismo atenderá al nivel de tolerancia de cada individuo y sus efectos los cuales pueden ser apreciados de manera ulterior.

Así, el concepto sobre la salud mental se encuentra en continuo desarrollo en atención a los avances científicos en la neurociencia, ya que como bien lo expresa el Informe General de la Salud realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 2001, sobre la Salud Mental expuso 'La integración de los resultados de las investigaciones neuroimaginológicas y neurofisiológicas con los de la biología molecular debería ampliar nuestros conocimientos sobre las bases de la función mental normal y patológica, así como contribuir al desarrollo de tratamientos más eficaces' (vid. Informe de la Salud en el Mundo; OMS, 2001); no obstante ello, lo que no cabe duda incluso para la Organización Mundial de la Salud es que a grandes rasgos ésta debe definirse como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y, es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

Esa integración expuesta previamente entre la salud física y mental y su afectación mutua en ciertas circunstancias, son las que pueden requerir de tutela inmediata por parte del Estado, ya que es indeterminado el cálculo del factor de reacción del cerebro humano ante presiones sociales, o aflicciones del ser humano, como pueden ser el sentimiento de las víctimas del holocausto nazi ante la burla de los hechos acaecidos o la publicación de imágenes ofensiva a la religión en ciertas culturas. Así, sobre la integración de la salud física y mental, expuso el referido Informe de la Organización Mundial de la Salud, lo siguiente:

'No sólo se ha avanzado en la comprensión del funcionamiento de la mente, sino también en el conocimiento de la influencia de estas funciones en la salud física. La ciencia moderna está descubriendo que, si bien para debatir sobre la cuestión resulta práctico distinguir entre salud mental y salud física, esa división no deja de ser una ficción creada por el lenguaje. Se considera que en la mayoría de las enfermedades «mentales» y «orgánicas» influye una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Se reconoce además la importante repercusión de los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento sobre la salud física. A la inversa, se reconoce también la influencia de ésta sobre la salud mental y el bienestar.

...omissis...

Aunque la vía fisiológica es distinta de la conductual, no son independientes la una de la otra, ya que el comportamiento en materia de salud puede afectar a la fisiología (por ejemplo, el consumo de tabaco y la vida sedentaria reducen la actividad del sistema inmunitario), y a su vez las funciones fisiológicas pueden influir en dicho comportamiento de salud (por ejemplo, el cansancio conduce a olvidarse de los tratamientos médicos). De todo ello resulta un modelo integrado de salud física y mental en el que los diversos componentes están relacionados y se influyen mutuamente a lo largo del tiempo'. (vid. Informe de la Salud en el Mundo; OMS, 2001; consultado en http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_es.pdf)

(...) omissis (...)

(...) si bien los medios de comunicación contribuyen al fortalecimiento de la conciencia social del colectivo por el grado de incidencia que tienen éstos en la formación de la sociedad, no es menos cierto que existen límites a su ejercicio y que no existe una insolvencia en su ejercicio puro, resguardada ésta en la protección de la libertad de expresión ya que lo relevante para apreciar el grado de tolerancia y afectación del derecho a la información, puede verificarse en atención a la proporcionalidad del fin ejercido el cual no es otro, en el presente caso, que la información del deceso de una persona.

Sin embargo, cuando dicha información es acompañada con reportajes gráficos que son expuestos sin la debida advertencia o el más mínimo decoro y respeto de los derechos humanos ni los derechos de un número indeterminado de ciudadanos que no quieren apreciar el deceso de un ser humano en el cual se aprecian visiblemente las circunstancias de la muerte o en posiciones no cónsonas con la normalidad del cuerpo sino producto de la rigidez post-mortem del cuerpo humano, y en las cuales resulta plenamente identificable los rostros de las personas acaecidas, ciertamente constituye un hecho de salud pública que no solo vulnera los derechos de los familiares sino la objetividad y la oportunidad de la información reseñada, la cual si bien atiende a criterios de apreciación subjetivos por quien los evalue existen unos

elementos objetivos y éticos que deben regir la actuación de los medios de comunicación.
En consonancia con ello, el artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: 'Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley' (Resaltado de esta Sala):
Asimismo, el artículo 1 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, establece que el periodista debe sujetarse a las normas éticas en el ejercicio de su profesión, así como ajustar su profesión al respeto de los principios de la ética profesional, al respeto y a la defensa de los derechos humanos, tal como lo establece el artículo 34.1 eiusdem, al efecto, disponen los referidos artículos:
(...) omissis (...)
En este sentido, se aprecia como se ha expuesto, que la publicación de dichas imágenes constituye una deformación del periodismo que pudiera atentar contra el derecho a la información y que resulta denigrante de la condición del ser humano al mostrar fotos de cadáveres indiscriminadamente, en páginas principales de los periódicos sin realizar la previa advertencia sobre la severidad de su contenido o ser una publicación especializada en la materia, lo cual permite al usuario el conocimiento de su contenido previamente (vgr. Publicaciones médicas o en otro campo publicaciones pornográficas), lo cual permite al consumidor en acceso de su derecho a la información escoger el medio que cubra las necesidad básicas para la satisfacción de su derecho constitucional sin sufrir un menoscabo en sus otros derechos.
Por ello, se observa que las referidas publicaciones deben ser divulgadas bajo una advertencia previa a su reseña en páginas internas donde no se identifique gráficamente los rostros de las referidas personas, ya que ello no solo atenta contra los derechos de los familiares sino de otras personas que puedan resultar afectadas por la información publicada en la cual se excede la finalidad de la información y se dirige a un sensacionalismo que puede atentar contra los derechos de otros ciudadanos, así como vulnera los límites de la tolerancia así como la ética periodística.
Todo ello, resulta cónsono con la protección de los niños, niñas y adolescentes, garantizada en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra: (...) omissis (...)
En desarrollo de la mencionada disposición constitucional, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece en su artículo 74 que: 'Los soportes impresos o audiovisuales, libros, publicaciones, videos, ilustraciones, fotografías, lecturas y crónicas que sean inadecuados para los niños, niñas y adolescentes, deben tener una envoltura que selle su contenido y una advertencia que informe sobre el mismo. Cuando las portadas o empaques de éstos contengan informaciones o imágenes pornográficas, deben tener envoltura opaca'.

Asimismo, el artículo 79 de la referida ley, consagra una serie de prohibiciones para garantizar el derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes, en virtud del grado de protección que debe asegurar al Estado sobre dichos ciudadanos, consagrándose expresamente, que:

'Se prohíbe:
...omissis...
b) Vender o facilitar de cualquier forma a niños, niñas y adolescentes o exhibir públicamente, por cualquiera de los multimedia existentes o por crearse, libros, revistas, programas y mensajes audiovisuales, información y datos en redes que sean pornográficos, presenten apología a la violencia o al delito, promuevan o inciten al uso de tabaco, sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas o que atenten contra su integridad personal o su salud mental o moral'.

En consecuencia, se aprecia que las referidas publicaciones no solo puede atentar contra los derechos de los familiares, así como de los consumidores, sino que ello, vulnera las disposiciones establecidas en los artículos 74 y 79 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al publicarse una serie de informaciones e imágenes que atentan contra la integridad personal y la salud mental de los niños, sin que previamente se cumplan con las previsiones establecidas en la referida Ley."

De esta manera, siguiendo el criterio jurisprudencial de esta Sala, debe afirmarse que si bien el derecho de libertad de expresión posee límites en cuanto a su ejercicio, su restricción y mecanismos de responsabilidad, estos límites deben atender a circunstancias de oportunidad, proporcionalidad y razonabilidad, las cuales pueden variar de acuerdo a las circunstancias fácticas de cada caso concreto y la misma debe derivar en primer lugar, de un fundamento legal que otorgue ámbitos de protección, ya que la noción de orden público no es un concepto etéreo que pueda aplicarse discrecionalmente por las leyes, por lo que, en consecuencia, tal potestad debe encontrarse establecida y concebir la posibilidad de que dicha limitación no afecte en mayor medida otro derecho constitucional, mediante el examen de análisis de proporcionalidad que faculte la misma, en la cual se pondere entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla a quien se le impone, a los efectos de medir si la finalidad perseguida no es más restrictiva a la protección que el ejercicio del derecho en sí mismo (Vid. Sentencia N° 379/03.03.2007).

En este orden de ideas, se observa que el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes es uno de los límites intrínsecos de la libertad de expresión, entendiendo que el ejercicio de tal derecho civil a través de los medios de comunicación social implica para estos últimos especiales responsabilidades, como la de garantizar su correcto y cabal ejercicio, así como de contribuir con el efectivo desarrollo de los derechos culturales y educativos de la población en general, tal como lo establece el artículo 108 del texto constitucional:

> *"Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio y televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley."*

Por otra parte, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en desarrollo de las previsiones constitucionales respecto a la defensa y protección de este grupo de personas, a quienes el constituyente otorgó un especial énfasis en el resguardo de sus derechos, expresamente prohíbe la difusión de material pornográfico o no adecuado a su desarrollo intelectual y garantiza el derecho a una información sexual veraz, oportuna y cónsona con su desarrollo:

> *"Artículo 50.- Salud sexual y reproductiva.*
> *Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e informadas y educados o educadas, de acuerdo a su desarrollo, en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos.*
> *El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños, niñas y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes y respetar su libre consentimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los y las adolescentes mayores de catorce años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir estos servicios.*
> *(...) omissis (...)*
> ***Artículo 68. Derecho a la información.***
> *Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde con su desarrollo y a seleccionar libremente el medio y la información a recibir, sin más límites que los establecidos en la ley los derivados de las facultades legales que corresponden a su padre, madre, representantes o responsables.*
> *Parágrafo Primero. El Estado; la sociedad y el padre, la madre, representantes o responsables tienen la obligación de asegurar que los niños, niñas y adolescentes reciban información veraz, plural y adecuada a su desarrollo.*
> *(...) omissis (...)*
> ***Artículo 74. Envoltura para los medios que contengan informaciones e imágenes inadecuadas para niños, niñas y adolescentes.***
> *Los soportes impresos o audiovisuales, libros, publicaciones, videos, ilustraciones, fotografías, lecturas y crónicas que sean inadecuados para los niños, niñas y adolescentes, deben tener una envoltura que selle su contenido y una advertencia que informe sobre el mismo. Cuando las portadas o empaques de éstos contengan informaciones o imágenes pornográficas, deben tener envoltura opaca.*
> ***Artículo 79. Prohibiciones para la protección de los derechos de información y a un entorno sano.***
> *Se prohíbe:*
> *(...) omisis (...)*
> *b) Vender o facilitar de cualquier forma a niños, niñas y adolescentes o exhibir públicamente, por cualquiera de los multimedia existentes o por crearse, libros, revistas, programas y mensajes audiovisuales, información y datos en redes que sean pornográficos, presenten apología a la violencia o al delito, promuevan o inciten al uso de tabaco, sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas o que atenten contra su integridad personal o su salud mental o moral*
> *(...) omisis (...)*
> ***Artículo 92. Prevención.***
> Está prohibido vender o facilitar, de cualquier forma, a los niños, niñas y adolescentes:
> *(...) omisis (...)*
> f) Informaciones o imágenes inapropiadas para su edad.
> *(...) omisis (...)"* (Subrayado de la Sala).

Debe concluirse entonces, que los medios de comunicación social, impresos en este caso, de libre acceso a niñas, niños y adolescentes, tienen la responsabilidad de transmitir información adecuada para este público, incluyendo la publicidad comercial que en ellos se difunda y una prohibición específica de publicar contenidos que atenten contra su adecuado desarrollo, tales como aquellos de contenido pornográfico.

En el presente caso, entre las pretensiones de la parte actora se encuentra que se prohíba cierto tipo de anuncios comerciales en el diario de circulación nacional "Meridiano", cuya comercialización y distribución no tiene ninguna restricción hacia niñas, niños y adolescentes, de allí que su contenido debe ser cónsono con la información adecuada a su nivel de desarrollo.

En este sentido, la Sala observa que los anuncios contenidos en los ejemplares del Diario Meridiano, C.A., consignados ante la Sala, no fueron impugnados por la parte demandada, lo cual de conformidad con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, los hacen reconocidos por esta y admisibles. Igualmente la representación judicial de la demandada el día de la Audiencia Constitucional reconoció que se trataba de publicaciones de su representada, por lo cual a dichas pruebas se les da plena validez.

Así, en los ejemplares del referido diario consignados en autos, se encuentran varios anuncios publicitarios con imágenes de jóvenes que por su poco vestuario y poses, asociadas a los textos escritos que en ellos aparecen, sugieren o incitan a la estimulación sexual para la promoción de servicios telefónicos o de páginas web, también relativos a la excitación sexual con fines comerciales.

Ahora bien, el Diccionario de la Real Academia Española define la pornografía como: "*Carácter obsceno de obras literarias o artísticas*", mientras que el vocablo obsceno es definido como: "*Impúdico, torpe, ofensivo al pudor*". Teniendo en cuenta estas definiciones, la Sala observa que el pudor es un tema relativo, ya que el mismo varía en cada cultura y momento histórico, siendo claro que existen sociedades con mayor apertura que otras a las manifestaciones relacionadas al sexo, así como que hoy en día es más aceptada la divulgación de contenidos de este tipo que en el pasado, siendo evidente su mayor presencia en manifestaciones del teatro, el cine, las revistas, la televisión y la internet, que ofrecen escenas que anteriormente podrían ser consideradas impúdicas y hoy en día son aceptadas de manera general.

En razón de ello, resulta una tarea delicada establecer qué debe entenderse por pornografía, sin que esto signifique que no pueda determinarse cuando se está en su presencia. De hecho, como demostración de la complejidad del tema, en el presente caso la representación judicial del Diario Meridiano alegó que los anuncios antes descritos no tienen carácter pornográfico, aduciendo que no existe en ellos desnudez, razón por la cual es necesario hacer una aproximación a su definición, más allá de la contenida en el diccionario que poco aporta a su delimitación.

Así, la pornografía, según el autor Lázaro Sirlin, citado por el español Luis Muñoz Sabaté (*Sexualidad y Derecho, elementos de sexología jurídica*, Editorial Hispano-Europa, Barcelona, 1976, p. 265) "*abarca toda producción escrita, dibujada o hablada que tenga por objeto o resultado primordial, esencial y hasta único el despertar o excitar en una forma normal o anormal los instintos sexuales*.".

Por otra parte, concuerda esta Sala con los criminólogos venezolanos Juan Manuel Mayorca H. y Nelson Pizzoti Mendes, que en una publicación del Ministerio Público de Sao Paulo, Brasil, ("A Pornografia da Violência" en revista *Justitia* N° 90, 1975, pp. 55-60), definen la pornografía como la especulación o manipulación mórbida de las pasiones humanas, con un fin lucrativo, señalando que por tanto la pornografía supone un proceso, tanto en quien la realiza como en quien la consume. Agregan que este proceso tiene una intencionalidad (elemento subjetivo difícil de valorar en abstracto, aunque fácilmente identificable en casos concretos) que es, precisamente, obtener un placer por lo que se representa, que tiene un fondo mórbido, un regocijo, un deleite prolongado hasta la saciedad. Sostienen que el objeto de la pornografía es excitar las pasiones humanas y aunque con demasiada frecuencia se insiste en que su objeto es el sexo; esto no sería cierto, toda vez que, aunque se acepte que la pornografía más difundida, más comercializada y hasta más contundente para la sociedad versa sobre la materia sexual, no obstante, el campo de las pasiones es más amplio que el del sexo. En conclusión, estos autores consideran indiscutible que el odio, la ira y la violencia también son manifestaciones pasionales del ser humano.

Para determinar qué contenidos sexuales son aptos para ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, esta Sala considera oportuno tomar en consideración la clasificación adoptada por el numeral 3 del artículo 6 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que puede ser aplicada analógicamente para identificar en el presente caso cuales elementos pueden o no estar contenidos en los anuncios publicitarios en los medios impresos de libre alcance para este grupo de especial protección. Al respecto, el mencionado artículo dispone:

> *"3. Son elementos de sexo:*
> *a) Tipo 'A'. Textos, imágenes o sonidos utilizados para la difusión de información, opinión y conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, maternidad, paternidad, promoción de la lactancia materna y de expresiones artísticas con fines educativos, que pueden ser recibidos por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables.*
> *b) Tipo 'B'. Textos, imágenes o sonidos utilizados para la difusión de información, opinión y conocimientos sobre sexualidad y reproducción humana y de expresiones artísticas con fines educativos, que de ser recibidas por niños, niñas y adolescentes, requieran la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables.*
> *c) Tipo 'C'. Textos, imágenes o sonidos sexuales implícitos sin finalidad educativa; o manifestaciones o aproximaciones de carácter erótico que no incluyan actos o prácticas sexuales explícitas.*
> *d) Tipo 'D'. Textos, imágenes o sonidos, sobre desnudez sin finalidad educativa, en las cuales no se aludan o muestren los órganos genitales; actos o prácticas sexuales dramatizados, en los cuales no se muestren los órganos genitales; mensajes sexuales explícitos; o dramatización de actos o conductas sexuales que constituyan hechos punibles, de conformidad con la Ley.*
> *e) Tipo 'E'. Textos, imágenes o sonidos sobre actos o prácticas sexuales reales; desnudez sin finalidad educativa en las cuales se muestren los órganos genitales; actos o prácticas sexuales dramatizados en los cuales se aludan o muestren los órganos genitales; actos o prácticas sexuales reales o dramatizados en los cuales se amenace o viole el derecho a la vida, la salud y la integridad personal o se menoscabe la dignidad humana; o actos o conductas sexuales reales que constituyan hechos punibles de conformidad con la Ley".*

Así pues, aunque es difícil identificar en abstracto que una representación gráfica alusiva al sexo sea apta para su presentación libre a toda clase de público, o por el contrario resulta pornográfica por incitar a la excitación sexual de manera mórbida, sí es posible identificar que ciertas manifestaciones, en este caso publicitarias, tienen un carácter pornográfico, no por una valoración estética, sino por su finalidad de atraer a los lectores, mediante imágenes y textos alusivos a la actividad sexual, con un propósito comercial, cual es vender un servicio igualmente orientado a la excitación sexual, a través de textos e imágenes sexuales implícitos o explícitos.

De los anuncios reproducidos en el Diario Meridiano y que son objeto de esta controversia, en los que si bien no hay necesariamente en todos ellos una manifestación explícita del sexo, se aprecia que su objetivo es la explotación comercial de la actividad sexual a través de llamadas telefónicas o páginas web, todo lo cual, por su fin, constituye pornografía, la cual no es ilícita, mas por mandato legal no debe ser presentada libremente a niñas, niños y adolescentes, a quienes el Estado tiene la obligación constitucional de proteger, en este caso, de la explotación lucrativa de sus pasiones e instintos y de la información que se les pueda suministrar sobre la actividad sexual.

De esta manera se observa, que se encuentran presentes los supuestos necesarios para limitar el derecho a la libertad de expresión

como lo son: a) que se establezca mediante ley; b) que la finalidad sea salvaguardar ciertos bienes jurídicos relevantes, como lo es en el presente caso el interés superior de los niños y las niñas en cuanto a su formación, educación y salud, que son bienes y valores jurídicos relevantes y tutelables, que poseen un interés general; c) que se trate de medidas necesarias en una sociedad democrática, en la cual se busca que las instituciones protejan los derechos esenciales de los habitantes; y d) existe la necesidad de imponer el límite o restricción de manera proporcional a la finalidad perseguida.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala debe declarar con lugar la pretensión de la parte actora relativa a que se prohíba la publicación de este tipo de anuncios publicitarios en el Diario Meridiano, en tanto que es una publicación de información deportiva de libre acceso a niñas, niños y adolescentes, por lo que dicho diario debe abstenerse de publicar anuncios publicitarios en los que mediante imágenes y textos sugestivos de la actividad sexual se promuevan servicios comerciales ligados a la explotación del sexo. Limitación ésta que se extiende a todos los medios impresos que sean de libre acceso a niñas, niños y adolescentes. Así se declara.

También alega el accionante, que el Diario Meridiano comercializa con las llamadas "*porno*" a través de las revistas españolas GTI Tuning, Max y Max Tuning que son vendidas al público en general, las cuales tienen unas portadas llamativas para sus defendidos y que sirven de "*veneno y trampa*" para inducirlos en la pornografía, siendo que estas revistas tienen concursos (de diseños "tuning" de carros) para jóvenes artistas en las que se encuentran dibujos de menores de edad, lo que los atrae tal como ocurría con su menor hijo de catorce años.

La Sala observa que constan en el expediente ejemplares de las revistas mencionadas por el accionante, en las cuales se aprecia que la revista europea "MAX Tuning", comercializada en Venezuela por Distribuidora Continental, en la que se hace publicidad a la pornografía y que posee un encartado denominado "Maxi Hot" que posee mujeres desnudas y en la portada aclara "*Parental Advisory Tuning Content*" (Advertencia a Padres, Contenido "tuning") ; un ejemplar de la revista europea "MAXI Tuning", también comercializada por Distribuidora Continental, en la que se hace publicidad de publicaciones de carácter pornográfico; un ejemplar de la revista europea "Tuning GTI", en la que de igual forma se hace publicidad a la pornografía y a números telefónicos de trabajadores sexuales en Europa.

Ahora bien, la representación judicial de Diario Meridiano C.A., en su escrito de contestación y el día de la Audiencia pública, alegó que no produce ni distribuye las mencionadas revistas y que, en consecuencia, correspondía al actor demostrar lo contrario, siendo que los distribuidores de éstas últimas no han sido notificados.

Al respecto, observa la Sala que ni el actor ni la representación de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público, demostraron que el Diario Meridiano C.A., produzca o distribuya las revistas "GTI Tuning", "MAX" y "MAXI Tuning".

En razón de lo anterior, esta Sala considera que no existe responsabilidad directa del Diario Meridiano C.A., sobre la distribución de las mencionadas revistas, no obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe observarse, la existencia de un grupo de empresas pertenecientes a la organización comercial Bloque De armas (ver www.bloquedearmas.com) compuesto por las sociedades mercantiles Continental Publishing Inc., C.A., «empresa Holding de la denominada 'Organización Bloque de Armas'»; Distribuidora Continental, S.A., inscrita el 28 de mayo de 1947, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 628, Tomo 03-B; compuesta por Editorial 2001, C.A., inscrita el 27 de noviembre de 1973, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 59, Tomo 156-A; Libros y Revistas E.A.S.A., S.A., inscrita el 19 de junio de 1997, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda; Distribuidora Escolar, S.A., inscrita el 28 de de junio de 1951, ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del otrora Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 22, Tomo 86-A-Cto.; Inversiones 39 TV, C.A., inscrita el 27 de diciembre de 2000, ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 22, Tomo 86-A-Cto.; Continental TV, C.A., inscrita el 18 de febrero del año 1992, ante el Registro Mercantil Segundo de esta Circunscripción Judicial, bajo el Nº 80, Tomo 63-A-Sgdo.; y Editorial Primavera, S.A., inscrita el 11 de mayo de 1967, ante el Registro Mercantil Segundo de esta Circunscripción Judicial.

En este sentido, la Distribuidora Continental S.A., posee las siguientes direcciones: 1) esquina Ferrenquín de La Cruz, Alinorma, Piso Planta Baja, Urbanización La Candelaria, Caracas, Distrito Capital, teléfono 0212-5781587; 2) Avenida San Martin, Esq. La Paz, Edificio Bloque de Armas, Piso 4, Local 1, Urbanización San Martín, teléfono 0212-4064111; y 3) calle Lebrún, Edificio Bloque de Armas, Urbanización Zona Industrial Lebrún, Caracas, Distrito Capital, teléfono 0212-4064004. De aquí se observa que, es un hecho notorio comunicacional, en tanto la propia página web del grupo empresarial Bloque de Armas hace mención a la pertenencia de la distribuidora mencionada a dicho grupo, el cual se encuentra conformado por diferentes empresas entre las que se encuentran aparte de la ya mencionada, la Distribuidora Escolar, S.A.; Editorial Primavera, C.A.; Meridiano C.A. (televisión y prensa); Diario 2001, C.A. y Libros y Revistas E.A.S.A., S.A. (Librería Las Novedades).

Efectivamente los grupos empresariales, grupos de empresas, grupo industrial, conglomerado empresarial, conglomerado industrial o Holding empresarial, son entendidos como un concepto jurídico-económico, en donde dependen todas de una misma empresa matriz, porque ésta tiene una participación económica suficiente en su capital como para tomar las decisiones, sin que esto sea en detrimento a que en derecho cada empresa es una persona jurídica diferente, realizándose este tipo de organización en razón del producto de fusiones, por motivos organizativos, establecer limitaciones a las responsabilidades o para facilitar su operación comercial, es decir, que además del vínculo de subordinación, debe existir entre las entidades unidad de propósito y dirección.

Así las cosas, el grupo empresarial está conformado por varias unidades operativas, que conservan su independencia jurídica y administrativa, pero que obedecen a los lineamientos de una matriz o controlante que fija las políticas del grupo, cuya relación supera la simple adición de los patrimonios y rentabilidades de las empresas individuales.

Sin embargo, en ocasiones, como en el presente caso, se tiene que tomar en cuenta las regulaciones especiales para los grupos de empresas para evitar fraudes a la ley que provoquen perjuicios a terceros, como ocurre con ciertos casos en materia laboral (artículos 45 y 134 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras) o de instituciones financieras (artículos 2, 10, 17, 22, 53, 161 a 170, 184, 185, 200, 217, 235,

249, 281, 309, 320, 322, 382, 397, 399, 413, 414, 416, 443, 462, 468, 474, 476, 481, 482, 484, 499 y 504 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras), (*vid.* S. 903 del 14 de mayo de 2004, caso Transporte Saet).

Ahora bien, más allá de que es un hecho notorio comunicacional, en tanto que así lo difunde en su propia página web el grupo De Armas, que efectivamente Diario Meridiano, C.A. y Distribuidora Continental C.A., están vinculadas al mismo grupo empresarial, por ser personas jurídicas que actúan concertada y reiterativamente, bajo un control unificado que puede imponer directrices, no pareciera plausible que esta última sociedad mercantil no estuviese en conocimiento de la presente causa. Así, esta Sala observa que constan en autos ejemplares de las revistas europeas comercializadas en Venezuela por Distribuidora Continental: "MAX Tuning", en el que se hace publicidad a la pornografía y que posee un encartado "Maxi Hot" que posee mujeres desnudas y en la portada señala "*Parental Advisory Tuning Content*"; "MAXI Tuning" en el que se hace publicidad a pornografía; "Tuning GTI" en el que se hace publicidad a la pornografía y a números telefónicos de trabajadores sexuales en Europa.

Asimismo, se observa que la publicidad contenida en estas revistas es de contenido sexual, aun más explícito que el de los anuncios comerciales publicados en el Diario Meridiano y que ya fueron objeto de análisis por esta Sala, por lo que se trata de material que no debe estar disponible al libre acceso de niñas, niños y adolescentes.

Tomando en consideración lo anterior, así como lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución, que establece un Estado democrático y social de derecho y de justicia y la orientación axiológica de todo nuestro texto fundamental que ordena a la prosecución de la justicia material y siendo esta Sala Constitucional el guardián por excelencia del cumplimiento de los mandatos constitucionales y por tanto obligada a garantizar su efectivo cumplimiento; ante la comprobación de los anteriores hechos que atentan contra el desarrollo armonioso de las niñas, los niños y adolescentes de nuestra patria, a quienes el Estado y por tanto este Tribunal Supremo de Justicia están en la obligación de proteger integralmente, se ordena a las sociedades mercantiles Continental Publishing Inc., C.A., y Distribuidora Continental, C.A. empresas Holding de la Organización Bloque De Armas y todas las empresas que lo conforman, a colocar una etiqueta o calcomanía suficientemente visible en la portada de las revistas anteriormente mencionadas en las que se señale que en parte del contenido de las mismas se encuentran imágenes y publicidad de servicios aptos solo para mayores de dieciocho (18) años, en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 78 de la Constitución de la República y el contenido del artículo 74 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se decide.

En este mismo orden de ideas, la parte accionante hace una serie de planteamientos relativos a: que los clasificados de los periódicos con avisos que solicitan lindas jovencitas para ganar mucho dinero, induce a las adolescentes con apremios económicos a prostituirse y efectuar "*trata de blancas*"; que la publicidad de los periódicos en general despiertan e inducen a la curiosidad sexual en los niños, niñas y adolescentes al ofrecer objetos sexuales obscenos, por lo que solicita que la Sala Constitucional ordene no publicar clasificados de contenido pornográfico. Al respecto, en virtud de que todos estos argumentos se encuentran estrechamente vinculados, esta Sala los analizará en conjunto.

Con vista en los anteriores alegatos, se debe destacar que los espectáculos, el cine, el teatro, la radio, las revistas, la prensa, la televisión y la internet, entre otros medios de comunicación masivos, contienen escenas más o menos explícitas, por lo que los padres, madres, representantes y educadores deben ser cuidadosos en la elección de los mismos ante la posibilidad de presenciar escenas que despiertan la sensualidad y sexualidad de jóvenes, niños y niñas, así como los eventuales peligros que ello conlleva, lo cual se ve reflejado en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas N° A/RES/51/205 del 28 de febrero de 1997, que sostiene la corresponsabilidad de los medios en la formación y educación.

Dentro de la libertad de expresión, se incluye el derecho de que nadie puede ser impedido de publicar o leer las obras que quiera con el pretexto de que su contenido es inmoral o desagradable, incluyendo la pornografía. La validez de este derecho se encuentra en que genera un valor constructivo en la sociedad en la que el Estado debe tratar a los ciudadanos como adultos responsables, con discernimiento, libre albedrío y como agentes morales responsables, que tienen la autonomía para ver, decir y pensar lo que deseen, por lo que es cada ciudadano quien decide si ve pornografía o no y la responsabilidad de esto le es propia.

Es indudable que en los últimos años han ocurrido mundialmente importantes cambios en el modo de percibir los valores éticos y morales, en la manera de pensar y actuar de las personas, jugando los medios de comunicación un rol primordial en ayudar a que la gente esté más informada y más consciente de su dignidad como ser humano, pero también han incurrido en la divulgación de otras cosas no tan loables, tal como podrían ser los anuncios que fomentan la explotación sexual de personas.

Así, la discusión se centra en si se debe limitar la libertad de expresión, como un principio moral abstracto, además de jurídico, en tanto está contenido en el artículo 57 de la Constitución y en diversos tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por la República.

Al realizar una interpretación que se fundamente en la libertad del hombre y la mujer, se debe concluir que cuantas más personas se informen y opinen, más garantías habrá de que la democracia funcione, en donde la voluntad general debe ser el producto de la deliberación, en la que todos y cada uno de los individuos que forman parte de una sociedad, deben opinar y discutir cada aspecto relacionado con la construcción de la misma, por lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en defensa de este derecho, debe proteger todos los discursos y posiciones, ya que dentro de una sociedad libre y comprometida con la responsabilidad moral y ética individual, cualquier censura previa sobre el fundamento del contenido es incompatible con la idea de que existe tal compromiso en nuestra sociedad. En tal sentido, está concatenado con el derecho a la información, consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se establece que todos los ciudadanos pueden comunicar o recibir libremente información oportuna, veraz e imparcial por cualquier medio de difusión, para expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier forma de expresión, asumiendo plena responsabilidad por el contenido de las mismas, ante lo cual esta Sala en sentencia N° 1013/12.06.2001, expuso "*Se trata de dos derechos diferentes, uno dirigido a garantizar la expresión de las ideas u opiniones, y otro, en beneficio de los ciudadanos, constituido por el derecho de ser informados de manera oportuna, veraz e imparcial y sin censura, por los medios de comunicación, ya que el artículo 58 se refiere a la comunicación. Es en relación con la información comunicacional que surge el derecho a la réplica y a la rectificación, como un derecho de los ciudadanos ante los medios de comunicación en general*", no es menos cierto, que cuando el primero de los derechos es ejercido por los medios de

comunicación y el segundo ejercido por los ciudadanos como consecuencia de la libertad de expresión de los primeros, existe una inter-relación entre el ejercicio de ambos derechos (*Vid.* Sentencia N° 1566/04.12.2012).

Así, se pretende que esta Sala Constitucional analice la idoneidad de la publicación de "*clasificados de contenido pornográfico*" y si esto constituye un ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, como mecanismo de ejercicio de la libertad de difundir la información y el derecho a recibir la información por parte de los usuarios de los diferentes medios de comunicación, o si en el ejercicio de dicho derecho, existe una libertad absoluta a su ejercicio o restringida en atención a los límites al ejercicio de dicho derecho por parte de la actividad periodística en atención a las responsabilidades consagradas en el mismo texto constitucional, aun cuando la Constitución expresamente establece que dichos derechos pueden ser ejercidos libremente "*sin censura*", la cual debe ser entendida como previa y no posterior (*Vid.* Sentencias N° 1013/12.06.2001 y N° 1942/12.07.2003).

Reitera esta Sala, que la información transmitida no ejerce la misma influencia, afectación o exposición psíquica o mental en un niño, niña o adolescente, que en cualquier otro ciudadano mayor de edad que posea una madurez intelectual y cultural que le permita valorar adecuadamente la publicidad y anuncios relativos a asuntos sexuales y su deseo informativo, ya que este último conscientemente busca o rechaza dicha publicidad de acuerdo a su formación intelectual y de valores éticos y morales que lo llevarán a considerarlos adecuados o inapropiados, por lo que su afectación, en principio, no abarca un derecho sensible o intrínseco al ser humano como lo puede ser en el caso de los niños, niñas y jóvenes, que reciben esa misma información sin ninguna guía.

Por lo tanto, si bien no todo hecho publicitario puede afectar la esfera individual de los miembros de la sociedad ya que la información y la libertad de expresión son derechos constitucionales, que gozan de una especial protección, la simple publicidad y ofrecimiento de actividades relacionadas con el sexo, así como la solicitud de personas para ser contratadas como modelos a través de los llamados anuncios clasificados, en principio, no vulneraría derecho constitucional alguno, lo que sí constituiría una infracción es la publicación de anuncios publicitarios con imágenes sexuales sin advertencia del público al cual está dirigido que transpasen el deseo de informar para realizar una explotación con fines de lucro sobre la base de los más básicos instintos, lo cual sí puede resultar sensible a la afectación del núcleo de otros derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes, lo que trae como consecuencia que el ejercicio del primer derecho se vea sujeto a una limitación, ya que dichas imágenes no son necesarias para ofrecer el servicio y al ser publicadas en periódicos de circulación nacional, que tienen como objetivo y fin principal hacer conocer las noticias y siendo que son de venta libre a personas de cualquier edad, sin restricción alguna, se permite que este grupo vulnerable tenga fácil acceso a los mismos.

Esta Sala, en su sentencia N° 1566/04.12.2012, aclaró que los medios de comunicación contribuyen al fortalecimiento de la conciencia social del colectivo por el grado de incidencia que tienen en la formación de la sociedad, pero que existen límites a su actividad y que no existe una insolvencia en su ejercicio puro, resguardada en la protección de la libertad de expresión, ya que lo relevante para apreciar el grado de tolerancia y afectación del derecho a la información, puede verificarse en atención a la proporcionalidad del fin ejercido, el cual, en el presente caso, pareciera ser la información de los servicios de una persona o el requerimiento de trabajadores con ciertas condiciones para el modelaje.

Sin embargo, cuando dicha información es acompañada con imágenes que son expuestas sin la debida advertencia y respeto de los derechos de un número indeterminado de ciudadanos que por su edad no deben apreciar esas imágenes explícitas, con un contenido de incitación sexual, ciertamente constituye un hecho de transgresión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de recibir una información adecuada y oportuna, que si bien atiende a criterios de apreciación subjetivos por quien los evalúe, existen unos elementos objetivos y éticos que deben regir la actuación de los medios de comunicación.

En este sentido, se aprecia como se ha expuesto, que la publicación de dichas imágenes constituye una deformación de la libertad de expresión y del derecho a la información, que pudiera atentar contra la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, al hacerse sin realizar la previa advertencia sobre la severidad de su contenido o ser una publicación especializada en la materia, lo cual permita al usuario el conocimiento de su contenido previamente (vgr. publicaciones pornográficas dirigidas a público adulto), facultando al ciudadano, en uso de su derecho a la información, escoger el medio que cubra las necesidades básicas para la satisfacción de su derecho constitucional sin menoscabar otros derechos.

Analizado lo anterior, esta Sala ordena eliminar toda imagen de contenido sexual, explícito o implícito, de los anuncios publicitarios en los medios impresos relativos a la promoción de servicios concernientes a la actividad sexual y se coloque en los mismos que se trata de servicios exclusivos para mayores de dieciocho años, motivo por el cual se debe remitir copia certificada del presente fallo a: A) al Colegio Nacional de Periodistas, ubicada en la Avenida Andrés Bello, Edificio CNP, piso 3, Caracas; B) la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias, ubicada en la Calle Los Laboratorios, Edif. Beta, Piso 4, Ofic. 401, Los Ruices, Caracas; C) la Asociación Nacional de Anunciantes, Urbanización Santa Eduvigis. Primera Av. de Santa Eduvigis, Residencia Primavera. PB. Oficina B. y Oficina 84; D) a la Sociedad Interamericana de Prensa Sección Venezuela; E) al Ministerio del Poder Popular para la Educación; F) al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información y G) al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así se decide.

Por otra parte, esta Sala observa que si bien no existen en autos elementos suficientes para determinar, como denuncia la parte accionante, que ciertos anuncios clasificados promueven la prostitución, como el contenido en el folio veintiuno (21) del expediente, cuyo texto indica: "*SOLICITO LINDAS JOVENCITAS para Trabajar en Bolívar Pto. Ordaz como acompañante de Ejecutivo, abstenerse chicas, no desean ganar.dinero, pagamos semanal 1800-2100Bsf, tiene vivienda 0414-(omissis)...*"(sic), resulta absolutamente razonable inferir que se puede estar ante la comisión del delito contenido en el artículo 381 del Código Penal, relativo a inducir a la prostitución a otras personas, o incluso del de trata de personas, por lo que se exhorta al Ministerio Público a investigar si tras la publicación de dichos anuncios clasificados existe la comisión de hechos ilícitos. Así se decide.

Lo anterior no es óbice ante la obligación de los padres, madres y representantes que deben multiplicar sus esfuerzos en orden a una completa formación moral de niñas, niños y jóvenes, la cual supone una educación en favor de una actitud sana hacia la sexualidad humana, basada en el respeto a la dignidad de la persona, a través de una vida familiar

equilibrada, en la que los padres y las madres sean verdaderos orientadores y formadores de sus hijos e hijas, así como la colaboración con los educadores, que en las escuelas y los programas educativos han de promover e inculcar los valores éticos y sociales, de cara a garantizar un sano desarrollo intelectual y emocional, formando junto con la familia una actitud crítica y capacidad de discernimiento en el uso de la los distintos medios de comunicación social. En este sentido, la familia, las escuelas y demás centros educativos deben poner de relieve el respeto a la persona humana y la importancia de la integridad moral personal.

En cuanto a la pretensión de la parte actora, relativa a que se remita a la Asamblea Nacional su proyecto de "Ley Especial Contra la Porno", la Sala debe reiterar la postura señalada en su sentencia N° 1.681 del 6 de diciembre de 2012, en la que señaló que:

> *"Ello así, resulta necesario puntualizar que conforme al artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la función legislativa es competencia de la Asamblea Nacional, la cual, a través del procedimiento constitucional y legalmente establecido le corresponde dictar las leyes de competencia nacional, pudiendo autorizar al Presidente de la República, mediante ley habilitante, para dictar decretos con rango, valor, y fuerza de ley en las materias que se deleguen. De igual forma, es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 204 constitucional la iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, a los electores y al Consejo Legislativo de los estados, cuando se trate de leyes referentes a estos, conforme a los procedimientos previstos a estos efectos. En razón de ello, mal puede el accionante de amparo pretender el reconocimiento por parte de esta Sala de una iniciativa legislativa como la que entiende está planteando, al solicitar la incorporación de los proyectos de normas que dice como suyos al ordenamiento jurídico venezolano, en claro desconocimiento de los preceptos constitucionales y legales sobre el proceso de formación de leyes (Derecho de iniciativa de ley -Asamblea Nacional, Poderes Nacionales, Estados en las materia de sus competencias, e iniciativa Popular-; presentación ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, y su conocimiento por la Plenaria; remisión a la Comisión Parlamentaria competente para las respectivas discusiones, etc.).*
> *En el presente caso, es evidente que el accionante pretende, por medio de la presente acción de amparo, obtener un pronunciamiento positivo respecto a la incorporación de los proyectos de normas propuestos y de la denominada 'jurisdicción especial del patrimonio moral' que arguye de su autoría, al ordenamiento jurídico y a la estructura de justicia del Estado, lo cual, además de carecer de toda lógica jurídica en los términos expuestos, no constituye objeto de violación de derecho constitucional alguno. Así se decide."*

Efectivamente, esta Sala ya le señaló al hoy accionante que la Constitución en sus artículos 202 al 224, establece el procedimiento, mecanismo y requisitos de formación de leyes nacionales, por lo que mal podría pretender por medio de un mecanismo judicial violentar dichos preceptos constitucionales, motivo por el cual la Sala rechaza la solicitud de aprobación, promulgación y publicación de su proyecto de "Ley Especial Contra la Porno", cuando lo pertinente es que utilice los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para lograr su objetivo, razón por la cual debe declararse improcedente la pretensión sobre este particular. Así se decide.

Observa esta Sala que, además de las pretensiones planteadas por la parte actora, ésta realizó una serie de consideraciones sobre otros temas, los cuales, si bien escapan de la *litis* trabada por no haberse realizado una pretensión concreta sobre ellos, por su trascendencia social y con fines didácticos, esta Sala hará algunas consideraciones al respecto.

En cuanto al reggaeton o reguetón y el contenido de su letra, que el accionante consideró de alto contenido sexual, observa la Sala que no puede considerarse que un género musical sea ilegal, no obstante, existen normas relativas al contenido de las transmisiones radiofónicas y los horarios en los que pueden transmitirse ciertos elementos de sexo y violencia entre otros, por lo que en todo caso, corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de conformidad con los artículos 1, 2, 6, 7 y 19 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en concordancia con los artículos 4, 7, 8, 41, 50, 55, 68, 73, 79 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, determinar si la letra de las canciones transmitidas es de contenido apto para todo usuario o deben ser transmitidas en un horario restringido, en aras de la protección del interés superior del niño y la niña, su derecho a la salud, su derecho a una información cónsona con su desarrollo y a una formación sexual adecuada en virtud de la corresponsabilidad que existe entre el Estado, los padres, las madres y la sociedad, por lo que se exhorta a la mencionada instancia administrativa a que en su actividad de supervisión de los medios de comunicación preste especial atención al contenido de las canciones de cualquier género musical que se transmiten en horario de difusión de contenido que debe ser apto para todos los usuarios. Así se declara.

Por otra parte, el accionante señaló que estudió las salas de internet y video juegos, en donde se permiten espacios reservados para adultos que manejan material pornográfico que puede imprimirse en una impresora general que está a la vista de niños, niñas y adolescentes.

Sobre este punto se observa que ni el accionante, ni la representación de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público o algún tercero, consignaron pruebas en el expediente que demostrasen las afirmaciones que se efectuaron en el libelo de demanda, motivo por el cual no pueden darse por ciertas.

No obstante, considera oportuno esta Sala referir que el Estado venezolano, en cumplimiento de su deber de corresponsabilidad en la crianza de los niños, niñas y adolescentes (artículos 75 y 78 de la Constitución y artículos 1, 4, 32, 43, 50, 69, 74 y 236 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) dictó la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedia, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.529 del 25 de septiembre de 2006, en donde se establece en su artículo 1 que se busca *"garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos humanos a una información adecuada que sea acorde con su desarrollo integral y a la salud, en el uso, alquiler, compra, venta y permuta de juegos computarizados, electrónicos o multimedia, especialmente en salas de Internet"*.

Igualmente el cuerpo normativo que se menciona, no excluye la responsabilidad que también poseen los familiares y la sociedad en general para orientar a los niños, niñas y adolescentes (artículos 3 y 4 *eiusdem*). Es así que las empresas, establecimientos, salas y personas que realizan actividades de uso, acceso, alquiler, compra, venta o permuta de los juegos computarizados, electrónicos, multimedia o servicios Internet tienen el deber de cumplir con lo previsto en dicha ley, así como con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación vigente en materia de protección integral a los niños, niñas y adolescentes (artículo 5 *ibidem*), estableciéndose las condiciones de ingreso y permanencia de éstos, donde se indica que los menores de siete años deben estar siempre acompañados de sus representantes y los mayores a esa edad con una restricción horaria, así como de indicar las condiciones que deben poseer dichos espacios para que permitan la supervisión, en donde los únicos que pueden tener espacios reservados son las personas adultas (artículos 6 y 7 *eiusdem*), so pena de incurrir en las responsabilidades que se encuentran establecidas en los artículos 12 al 17 de dicha ley, sin menoscabo de las sanciones establecidas en otras leyes especiales como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Penal, entre otros.

De allí que, nuestra legislación es clara al establecer que está prohibido el acceso a información y contenidos que promuevan, hagan

apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de hechos punibles, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación económica o social de las personas, al uso y consumo de cigarrillos y derivados del tabaco, de bebidas alcohólicas y demás especies previstas en la legislación sobre la materia y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como aquéllos de carácter pornográfico, que atenten contra la seguridad de la Nación o que sean contrarios a los principios de una sociedad democrática, quedando expresamente prohibido que las personas, en general, tengan acceso a pornografía de niños, niñas o adolescentes, así como a información que promueva o permita su abuso o explotación sexual, teniendo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través de su unidad técnica competente, la facultad de establecer mediante normas técnicas adicionales el acceso de los niños, niñas y adolescentes a información y contenidos que menoscaben su desarrollo integral, atendiendo a los elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, las cuales deben ser revisadas y actualizadas de forma regular y periódica.

También se encuentra la regulación establecida en la Ley Especial contra Delitos Informáticos, que en sus artículos 23 y 24 señala que todo aquel que, por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restrinja el acceso a niños, niñas y adolescentes, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. Así como también, si por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, utiliza a la persona o imagen de un niño, niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, será penada con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

Con motivo de lo anterior, esta Sala Constitucional ordena oficiar a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (creada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, G.O. N° 40.340 del 23 de enero de 2014) y a la Defensoría del Pueblo, para que en la supervisión de las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet, hagan especial énfasis en que cumplan con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedia. Así se decide.

Por otra parte, el accionante alegó que las fotos de personas desnudas efectuadas por Spencer Tunick en la Plaza Caracas, alrededor de la estatua del Libertador y que fueron exhibidas en el Ateneo de Caracas y diversos periódicos, como hecho cultural, son realmente actos inmorales.

Sobre esta consideración de la parte actora, si bien no realizó ningún pedimento al respecto, la Sala considera oportuno observar que el 12 de junio de 2007, el abogado Gilberto de Jesús Rúa Villa, titular de la cédula de identidad N° 24.796.710 y con inscripción en el I.P.S.A. bajo el N° 120.862, (quien es el accionante en esta causa) intentó, "*como miembro de la sociedad y en representación de esta* (sic)" ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, *"RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL COLECTIVO", "a favor de los valores morales y el honor patrio"*; contra *"EL NEOYORQIINO* (sic) *(FOTOGRAFO INTERNACIONAL) SPENCER TUNICK, EL MINISTERIO DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTECONTEMPORANEO* (sic) *DE CARACAS"*, signándose la causa con el número de expediente 2007-0854.

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2007, esta Sala dictó un auto en el cual ordenó al abogado Gilberto de Jesús Rúa Villa que corrigiera el escrito de solicitud de amparo, el cual no pudo ser notificado por "*cambio de domicilio*" del destinatario según informó el Instituto Postal Telegráfico de lo que dejaron constancia el Alguacil y el Secretario de esta Sala.

En dicho expediente se constató que el último acto de procedimiento del accionante fue del 12 de junio de 2007 y consistió en la presentación del escrito de solicitud de amparo, por lo que ante esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó la necesidad de la tutela urgente y preferente del amparo constitucional, fue calificada por esta Sala como abandono del trámite, luego de evidenciar que ese caso no involucraba afectación alguna al orden público y las buenas costumbres, mediante sentencia N° 1770 del 18 de noviembre de 2008, imponiéndole a su vez de conformidad con el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, una multa de cinco bolívares (Bs. 5,00), pagaderos, a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos, debiendo acreditar el pago mediante la consignación, ante esta Sala, del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, por estimar de suma gravedad el entorpecimiento de las labores de esta Sala con la presentación de demandas que posteriormente son abandonadas, lo cual la obligó al desvío de su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional.

Por lo anterior y ante las consideraciones hechas sobre los mismos hechos, más allá de que la parte actora no planteó ninguna pretensión concreta sobre este punto, esta Sala desestima y desecha los alegatos presentados por pretender el actor de alguna forma tratar de someter nuevamente al juicio de este máximo tribunal hechos que ante su propia negligencia hicieron que terminara dicha causa ante su abandono, ello al margen de las consideraciones, o valoraciones que sobre esta manifestación artística se pudiera tener. Así se declara.

Señaló también el accionante, entre sus consideraciones generales, que otro mecanismo de "depravación sexual" son las fotos y grabaciones que se envían los adolescentes a través de sus celulares, aunado al hecho, que consideró reprobable, de que algunas instituciones del Estado entregan preservativos a niños y adolescentes en escuelas y liceos.

Al respecto, la Sala observa que en la Ley Especial contra Delitos Informáticos, que en sus artículos 21 y 22, establece que "*toda persona que mediante el uso de tecnologías de información, acceda, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionada con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias*", así como que "*quien revele, difunda o ceda, en todo o en parte, los hechos descubiertos, las imágenes, el audio o, en general, la data o información obtenidos por alguno de los medios indicados en los artículos 20 y 21, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias*" y que "*si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro, o si resultare algún perjuicio para otro, la pena se aumentará de un tercio a la mitad*".

Además, los artículos 23 y 24 del mismo texto normativo podrían ser igualmente aplicables al presente señalamiento, en cuanto indican que todo aquel que por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restrinja el acceso a niños, niñas y adolescentes, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de

doscientas a seiscientas unidades tributarias. Así como también, si por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, utiliza a la persona o imagen de un niño, niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, será penada con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. Con lo cual se evidencia la existencia de una normativa que regula y puede servir para controlar este tipo de acciones a través de los distintos órganos y entes del Estado competentes para ello.

No obstante lo anterior, la Sala también debe indicar que escapa del control del Estado qué tipo de imágenes e información son transmitidas a través de los sistemas y equipos de telecomunicaciones de telefonía móviles por parte de los ciudadanos en casos en que no haya una contravención de normas legales, por lo que ante la situación de que sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes transmiten la data considerada ofensiva, se debe reiterar que los padres, madres, representantes y tutores son quienes tienen la principal obligación de vigilancia de estos materiales respecto a sus hijos y representados, siendo a estos en todo caso a quien corresponde controlar el material que manejan y se encuentre disponible por medio de los teléfonos celulares, sin que ello menoscabe la corresponsabilidad que existe para el Estado y el resto de la colectividad en la protección de los niños, niñas y adolescentes, el cual, a través de sus diferentes órganos y entes, combate y combatirá todo lo que se encuentre vinculado a los delitos y en especial a la pornografía infantil.

Por otra parte, no explica el accionante por qué considera reprochable la acción de algunas instituciones del Estado de repartir métodos anticonceptivos entre los jóvenes, ni probó tales afirmaciones, razón por la cual esta Sala se abstiene de emitir ningún pronunciamiento al respecto, especialmente cuando corresponde a la rama ejecutiva del Poder Público diseñar y aplicar los planes y políticas de salud pública y prevención que considere más adecuados para la protección de la población. Así se decide.

Finalmente, esta Sala, en virtud de que el presente fallo fija una interpretación vinculante de normas constitucionales, ordena publicarlo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, por razones de seguridad jurídica, los efectos de la decisión comenzarán a surgir a partir de esa publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así finalmente se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por intereses colectivos ha sido incoada por el ciudadano **GILBERTO RÚA**, actuando en representación de sus menores hijos (cuyas identidades se omiten en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) y de todos los niños, niñas y adolescentes del país, de conformidad con los artículos 26 y 51 de la Constitución, en contra del Diario Meridiano a "*FAVOR DE HACER CESAR LAS PUBLICIDADES DE CLASIFICADOS PORNO* (sic) *EN PERIODICOS* (sic) *Y REVISTAS PARA EL PUBLICO* (sic) *EN GENERAL*".

SEGUNDO: ORDENA eliminar toda imagen de carga o contenido sexual explícito o implícito de los anuncios publicitarios en los medios impresos de libre acceso a niñas, niños y adolescentes, relativos a los anuncios de estímulos de la actividad sexual que promuevan servicios comercialmente ligados a la explotación del sexo y se coloque en los mismos que se trata de servicios exclusivos para mayores de dieciocho (18) años, motivo por el cual se debe remitir copia certificada del presente fallo a: A) al Colegio Nacional de Periodistas, ubicada en la Avenida Andrés Bello, Edificio CNP, piso 3, Caracas; B) la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias, ubicada en la Calle Los Laboratorios, Edif. Beta, Piso 4, Ofic. 401, Los Ruices, Caracas; C) la Asociación Nacional de Anunciantes, Urbanización Santa Eduvigis, 1ra. Av. de Santa Eduvigis, Residencia Primavera. PB. Oficina B. y Oficina 84; D) a la Sociedad Interamericana de Prensa sección Venezuela; E) al Ministerio del Poder Popular para la Educación; y F) al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

TERCERO: ORDENA a la sociedad mercantil Continental Publishing Inc., C.A., empresa Holding de la denominada Organización Bloque de Armas y todas las empresas que lo conforman, a colocar una etiqueta o calcomanía en la portada de las revistas "GTI Tuning", "MAX" y "MAXI Tuning", en las que se señale que en parte del contenido de las mismas se encuentran imágenes y publicidad de servicios aptos solo para adultos mayores de dieciocho (18) años.

CUARTO: EXHORTA al Ministerio Público a investigar si tras los anuncios clasificados publicados en la prensa nacional referidos en el texto de este fallo, con posible relación con los delitos de trata de personas o inducción a la prostitución, efectivamente existe la comisión de hechos ilícitos.

QUINTO: RECHAZA la solicitud de aprobación, promulgación y publicación del proyecto de "Ley Especial Contra la Porno", presentado por el ciudadano Gilberto Rúa.

SEXTO: ORDENA oficiar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que supervise si el contenido de las canciones de cualquier género musical es adecuado para su transmisión en horario apto para todo usuario o deben ser transmitidas en un horario más restringido.

SÉPTIMO: ORDENA oficiar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, para que ejerza sus facultades legalmente establecidas en la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedia.

OCTAVO: ORDENA oficiar a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y a la Defensoría del Pueblo, para que supervisen que las salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet, cumplan con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedia.

NOVENO: DESESTIMA los alegatos del accionante respecto de las fotos efectuadas por el ciudadano estadounidense Spencer Tunick, de las fotos y grabaciones que se envían los adolescentes a través de sus teléfonos celulares y de la repartición de métodos anticonceptivos a los jóvenes por parte de instituciones del Estado.

DÉCIMO: ORDENA la publicación del texto íntegro del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyo sumario se expresará: "*Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija interpretación vinculante relativa a la limitación del derecho a la libertad de expresión en medios impresos de libre acceso al público en protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes*".

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de Mayo de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Vicepresidente,

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. 09-0066

Nº 281

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 10-1039

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 21 de septiembre de 2010 esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió el escrito contentivo de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad y solicitud de medida cautelar interpuesta por el abogado José Amando Mejía, titular de la cédula de identidad núm. 3.186.321, y acreditado en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 19.379, quien actúa con la condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil **HOTEL TAMANACO C.A.**, domiciliada en Caracas e inscrita el 26 de abril de 1948 en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el núm. 319, Tomo 2-C, posteriormente reformados sus Estatutos mediante acta protocolizada el 18 de abril de 1983 en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, bajo el núm. 85, Tomo 41-A. La referida demanda la ejerció contra los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 del Título IV, Capítulo IV, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 28 de septiembre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón.

Mediante diligencia del 19 de octubre de 2010, el abogado José Amando Mejía, antes identificado, consignó copias certificadas correspondientes al recurso de juridicidad anunciado por "*Tamanaco Suite I C.A.*" en fecha 22 de julio de 2010 ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

El 17 de noviembre de 2010, esta Sala dictó la sentencia núm. 1.149, por la cual, declaró:

> *"**PRIMERO:** Su **COMPETENCIA** para conocer de la demanda de nulidad ejercida conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado José Amando Mejía, actuando en su carácter de apoderado judicial de **HOTEL TAMANACO C.A.**, contra los artículos 23 cardinal 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 integrantes del Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del cardinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.*
>
> ***SEGUNDO: ADMITE** la demanda de nulidad ejercida.*
>
> ***TERCERO: ACUERDA LA MEDIDA CAUTELAR** y, en consecuencia, ordena la **SUSPENSIÓN** de los artículos impugnados y la inaplicación del recurso especial de juridicidad.*
>
> ***CUARTO: REMITE** el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que practique las citaciones de la Presidenta de la Asamblea Nacional, la Procuradora General de la República, la Defensora del Pueblo y la Fiscal General de la República.*
>
> ***QUINTO: ORDENA** la notificación de la actora y librar el cartel de emplazamiento a los interesados".*

El 23 de noviembre de 2010, el Juzgado de Sustanciación recibió las actuaciones procesales remitidas por esta Sala Constitucional.

El 25 de noviembre de 2010, esta Sala, visto lo decidido en la sentencia núm. 1149 del 17 de noviembre de 2010, dictó la decisión núm. 1194 para ordenar:

> *"(...) (i) la publicación del mencionado fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se deberá indicar: 'Sentencia de la Sala Constitucional mediante la cual se suspende la aplicación del recurso especial de juridicidad previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa'; (ii) que se realice mención especial de la referida decisión en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, bajo la anterior reseña; y (iii) que se remita copia certificada de la decisión in commento a la Sala Político Administrativa de este máximo juzgado".*

El 14 de diciembre de 2010, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional emitió el siguiente auto señalando:

> *"Mediante decisión N° 1149 del 17 de noviembre de 2010, la Sala Constitucional **admitió** el recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, ejercido por el abogado José Amando Mejía, apoderado judicial del **HOTEL TAMANACO C.A.**, contra los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, integrantes del Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del cardinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, **acordó** la medida cautelar solicitada y suspendió las normas impugnadas y, en consecuencia, la inaplicación del recurso especial de juridicidad previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Por cuanto fue promulgada una nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se establecen normas procedimentales en su Capítulo II denominado 'De los procesos ante la Sala Constitucional', este Juzgado de Sustanciación conforme a lo establecido (sic) los artículos 135, segundo*

*aparte y 132 de la referida Ley Orgánica, **acuerda notificar a la parte demandante** de la admisión del recurso, y **a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia**, de la medida cautelar acordada. Todo ello, para dar cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 139 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia".*

El 14 de diciembre de 2010, el Juzgado de Sustanciación emitió el Oficio TS-SC-10-207 dirigido al abogado José Amando Mejía, para notificarle de la decisión núm. 1149 del 17 de noviembre de 2010, en la cual, admite el recurso de nulidad interpuesto y acordó la medida cautelar solicitada. Dicho oficio fue recibido en la oficina del apoderado demandante el día 17 de diciembre de 2010.

El 14 de diciembre de 2010, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional emitió oficio TS-SC-10-209 y TS-SC-10-208 dirigidos al ciudadano Jefe de la Oficina del Consejo de Ministros de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y a la Presidencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En dicha comunicación, se indicó:

*" En cumplimiento de la decisión N° 1194 dictada por la Sala Constitucional el 25 de noviembre de 2010, me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle anexo a la presente, copia certificada de la sentencia N° 1149 del 17 de noviembre de 2010, mediante la cual la Sala Constitucional **admitió** el recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, ejercido por el abogado José Amando Mejía, apoderado judicial del **HOTEL TAMANACO C.A.**, contra los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, integrantes del Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del cardinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, **acordó** la medida cautelar solicitada y suspendió las normas impugnadas y, en consecuencia, la inaplicación del recurso especial de juridicidad previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Por tanto, se ordena su publicación inmediata en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se señalará lo siguiente: "Sentencia de la Sala Constitucional mediante la cual se suspende la aplicación del recurso especial de juridicidad previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".*

El 24 de febrero de 2011, el abogado José Amando Mejía presentó la siguiente diligencia ante el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional:

"Vencido como se encuentra el lapso de cinco días de despacho para que este Juzgado de Sustanciación libre los Oficios de notificación y el cartel de emplazamiento a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicito muy respetuosamente a este despacho para que el Juzgado de Sustanciación libre los oficios y el cartel de emplazamiento...".

El 2 de agosto de 2011, el abogado José Rafael Salazar Navas presentó diligencia para hacer constar su representación mediante documento original y copia simple del poder que lo acredita como apoderado judicial del Hotel Tamanaco C.A., con la finalidad de verificar debidamente su constancia *"ad efectum vivendi"*, certificada por el Secretario de esta Sala.

El 2 de agosto de 2011 y el 11 de enero de 2012, el abogado José Rafael Salazar Navas presentó sendas diligencias ratificando su solicitud de emisión del cartel de emplazamiento.

El 16 de febrero de 2012, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional acordó:

*"Este Juzgado de Sustanciación conforme a lo establecido los [sic] artículos 135, segundo aparte, y 136 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y por cuanto se encuentra verificada la estadía a derecho de la parte demandante, acuerda librar la citación del **Presidente de la Asamblea Nacional**, las notificaciones de la **Procuradora General de la República**, de la **Defensora del Pueblo** y de la **Fiscal General de la República**, así como el **cartel de emplazamiento**.*

La citación de la Procuradora General de la República, se practicará con arreglo a lo ordenado en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

*Todo ello para que **una vez transcurridos los lapsos previstos en los artículos 137 y siguientes** de la Ley que rige este Supremo Tribunal, en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, las partes presenten escritos para la defensa de sus intereses y promuevan pruebas si lo estiman pertinente, a los fines de que este Juzgado providencie los escritos de pruebas, se fije la audiencia pública y se remita el expediente a la Sala. En el caso de que no se promuevan pruebas, salvo las documentales, la causa entrará en estado de sentencia y se remitirá el expediente a la Sala Constitucional para que ésta decida en un plazo de veinte (20) días de despacho, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 139 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia".*

En esa misma oportunidad, 16 de febrero de 2012, el Juzgado de Sustanciación libró cartel de emplazamiento y libró los Oficios TS-SC-12-031/032/033/034, a los fines de notificar a la Procuraduría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República, así como la citación de la Asamblea Nacional sobre la interposición de la presente causa, La Procuraduría General de la República dio recibimiento del mencionado oficio el día 23 de marzo de 2012, mientras que los demás entes dieron acuse de recibo el día 12 de marzo de 2012. La Asamblea Nacional recibió la citación correspondiente el día 14 de marzo del 2012. Efectuado esto, los oficios de notificación de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República fueron recibidos en el Juzgado de Sustanciación los días 13, los dos primeros, y 27 de marzo de 2012, respectivamente. El oficio de citación a la Asamblea Nacional fue recibido en el referido Juzgado el 15 de marzo de 2012.

El 28 de febrero de 2012, el abogado José Rafael Salazar Navas, antes identificado, presentó diligencia en la cual dejó constancia del retiro del cartel emitido el 16 de febrero de 2012.

El 6 de marzo de 2012, el abogado José Rafael Salazar Navas presentó diligencia consignando un ejemplar del diario *El Nacional* publicado el 5 de marzo de 2012 y donde se imprimió el cartel de emplazamiento de fecha 16 de febrero de 2012.

El 2 de mayo de 2012, los abogados María Elena Delgado Graterol, Cruz Esteban Febres Despujols, Carlos Martín Ramírez Bracamonte, José Jesús Calzadilla, Johel Seijas, Jesús Millán y José Gregorio Rojas Ramírez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 64.949, 66.384, 92.948, 97.533, 109.373, 117.900 y 65.630, respectivamente, actuando en su carácter de representantes judiciales de la Asamblea Nacional, según se evidencia de instrumento poder suscrito por su Presidente y presentado en copia certificada, consignaron escrito contentivo de los alegatos del Organismo que representan.

El 26 de abril de 2012, los abogados José Ángel Mogollón N. y Laurie Meneses, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núm. 138.445 y 181.135, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la Procuraduría General de la República, según se evidencia del Oficio poder G.G.L.-C.C.C 0487, del 25 de abril de 2012, presentaron escrito de defensa.

Los días 3 y 22 de mayo de 2012, el abogado José Rafael Salazar Navas solicitó por escrito la ejecución urgente de la sentencia núm. 1.149, del 17 de noviembre de 2010, dictada por esta Sala Constitucional, en relación con la suspensión de los efectos de los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del ordinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 13 de junio de 2012, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional, dictó un auto señalando: *"Visto que el 26 de abril de 2012 se cumplió el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes consignaran sus escritos de defensas o promovieran pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; de la revisión del expediente se constata que no fue promovida prueba alguna, en consecuencia, se ordena la remisión de las presentes actuaciones a la Sala Constitucional a los fines del pronunciamiento correspondiente".*

En la misma fecha, 13 de junio de 2012, el abogado José Rafael Salazar Navas, presentó diligencia consignando copia certificada de la sentencia 00481 del 9 de mayo de 2012 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual difirió el pronunciamiento del recurso de juridicidad interpuesto por Tamanaco Suite I, C.A. y el ciudadano William Hernández Cova, hasta que esta Sala Constitucional resuelva el fondo de la presente demanda de nulidad.

El 28 de junio de 2012, los abogados Rafael Simón Arocha Urbina y José Rafael Salazar Navas, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Hotel Tamanaco C.A., presentaron escrito rechazando los escritos de defensa presentados el 26 de abril y el 2 de mayo de 2012 por la Procuraduría General de la República y la Asamblea Nacional.

El 13 de noviembre de 2012, se recibió del Juzgado de Sustanciación el expediente para su pronunciamiento correspondiente. Se designó ponente a la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán.

El 13 de marzo de 2013, el abogado Cruz Febres presentó diligencia solicitando se dicte sentencia de fondo en la presente causa.

El 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente manera: Gladys M. Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover; ratificándose en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 20 de junio de 2013, el abogado José Rafael Salazar Navas, actuando con el carácter de apoderado judicial del Hotel Tamanaco, C.A. presentó diligencia solicitando se dicte sentencia en el presente juicio.

El 17 de octubre de 2013, en reunión de Sala Plena, en virtud de la ausencia temporal del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se acordó que el ejercicio temporal de la Vicepresidencia de esta Sala Constitucional recayera en el Magistrado Juan José Mendoza Jover así como la incorporación del Magistrado suplente Luis Fernando Damiani, quedando constituida en consecuencia la Sala por la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su carácter de Presidenta; el Magistrado Juan José Mendoza Jover, en su carácter de Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani.

El 5 de febrero de 2014, vista la reincorporación del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López por haber finalizado la licencia que le fue concedida, esta Sala Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Doctores Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Efectuado el estudio de las actas procesales que integran este expediente, esta Sala procede a dictar decisión, previas las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO DE NULIDAD

El recurrente fundamentó su pretensión, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1.- Infracciones Constitucionales Denunciadas.

Artículo 259 de la Constitución de la República

Que "[e]*ste artículo constitucionaliza la jurisdicción contencioso administrativa y consagra su función principalísima de controlar la actividad administrativa desplegada por los órganos del poder público, en particular por los órganos que componen la administración pública*".

Que "[a]*quí la Constitución establece específicamente la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa y, en consecuencia, establece constitucionalmente los poderes del juez contencioso administrativo*".

Que "*...el legislador nacional no puede subvertir la estructura judicial que puede controlar los poderes del Estado y que, en consecuencia, no puede acordar a la jurisdicción contencioso administrativa poderes exclusivos de control judicial constitucional e igualmente, el orden de jurisdicción nacional ordinario no podría asumir poderes judiciales que corresponden en exclusividad al orden jurisdiccional constitucional ni al orden jurisdiccional contencioso administrativo*".

Que "[e]*l poder de revisión de sentencias, está solo acordado por el constituyente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y no puede el legislador trasladar poderes judiciales excepcionales y monopólicos de la Sala Constitucional al contencioso administrativo. Al acordar el legislador esos mismos poderes excepcionales de revisión de sentencias de segunda instancia por vía del recurso de juridicidad transgredió el principio constitucional de doble instancia. En efecto, si es principio de nuestra Carta Magna, como lo ha afirmado esta misma Sala, la doble instancia, resulta inconstitucional esa tercera instancia revisora, sólo puede admitirse las excepciones a ese principio de doble instancia que el propio constituyente haya acordado y esta Sala Constitucional solo ha admitido el juzgamiento en única instancia como excepción...*".

Que "[a]*l margen de los fundamentos que puedan corresponder a la Sala Constitucional para revisar sentencias, sabemos que sólo quiso el constituyente esa exclusiva función revisora contra sentencias acordársela a esta Sala Constitucional. Así, resulta inconstitucional en Venezuela una tercera instancia y/o formas de control judicial a sentencias distintas a la que conoce la práctica y desarrollo universal del derecho procesal como la Apelación, Casación o Invalidación, y estas dos últimas como se sabe no constituye fórmulas procesales ni sustantivas de tercera instancia. Aun cuando en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa afirmó que el Recurso de Juridicidad no constituye una tercera instancia, dispuso al mismo tiempo en su artículo 101 ejusdem que el juez de la juridicidad puede decidir el mérito de la causa, lo que es la característica esencial que define la existencia de la instancia, es decir, el poder de decidir el mérito de las causas...*"

Que "*...así invadió el legislador con el Recurso de Juridicidad poderes que sólo corresponde crear o modificar al constituyente, en efecto, y como adelante desarrollamos, los poderes de revisión acordados al Recurso de Juridicidad son inconcebibles e inconstitucionales al resultar completamente incompatibles con valores y preceptos constitucionales correspondientes a la seguridad jurídica, a la*

doble instancia, a la estabilidad de las decisiones del poder judicial, a la tutela judicial efectiva y en definitiva a la estructura judicial que para el control de los poderes del Estado estableció el Constituyente de 1999..."

Inconstitucionalidad de la tercera instancia

Que "[d]*e este modo, al establecer el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que la sentencia que resuelva el Recurso de Juridicidad podrá: 'declarar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando la reposición del procedimiento o resolver el mérito de la causa para restablecer el orden jurídico infringido', se constituye la decisión de la Sala Político Administrativa en un juzgamiento ex novo y en consecuencia en una nueva instancia de decisión, pues todo juez que tenga poderes de revisión ex novo de la causa, se constituirá indefectiblemente en un juez de instancia, lo cual está como se dijo proscrito en nuestro ordenamiento resultando a todas luces inconstitucional".*

Que "[d]*e este modo, el juzgamiento de mérito en dos instancias es una garantía judicial que tiene un contenido positivo y negativo*, es decir, *se garantiza a la parte desfavorecida con la sentencia de mérito la posibilidad de recurrir, pero al mismo tiempo se garantiza a la otra parte que la recurribilidad es limitada y que obtendrá la certeza judicial, en un plazo oportuno, lo contrario daría cabida a la práctica de recurrir de cuanta decisión dicte determinado juez, en abuso de la facultad de someter a un nuevo control judicial a la sentencia que desfavorezca, obstaculizando el normal desenvolvimiento del proceso y atentando contra la tutela judicial efectiva, la celeridad procesal y la obtención de una sentencia oportuna, que debe ser eficazmente ejecutada".*

En este punto se hace referencia al artículo 49.7 de la Constitución de la República, el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que "[l]*a Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa crea un poder de revisión de sentencias de segunda instancia en blanco, amplísimo, general, asombrosa y grotescamente más amplio y general que el otorgado a esta Sala Constitucional"* y que la primera instancia es la que produce la demanda y la segunda instancia la que motiva la apelación o acto procesal semejante que otorga poderes *ex novo* al juez, *"el resto de las formas de enervar la decisión de segunda instancia no son nuevas instancias o tercera instancia, cosa distinta sería y es inconstitucional".*

En este punto se hizo referencia a las sentencias de esta Sala Constitucional 918/2001, 95/2000, y 551/2005, las cuales -en su criterio- establecen *"la llamada garantía de juzgamiento en dos instancias"* e indican que *"sólo y únicamente es excepción a este principio la única instancia, excluyendo clara y expresamente la posible excepción de tercera instancia, o instancias ulteriores a la segunda".*

Que "[a]*sí las formas de enervar la autoridad de cosa juzgada de una sentencia deben estar expresamente previstas en la ley y sus causales ser taxativas, no pueden jamás constituirse terceras instancias por estar prohibido en la Constitución, en garantía de la seguridad jurídica que dimana de la sentencia revestida de autoridad de cosa juzgada".*

En este punto indicó que en el ordenamiento jurídico posee hasta el momento seis medios procesales capaces de enervar los efectos de la cosa juzgada, distintos a la tercera instancia, a saber: recurso de casación, recurso de revisión de sentencias penales, recurso de invalidación, control de legalidad, amparo contra sentencia y la solicitud de revisión constitucional.

Que "[a]*sí al no cumplir el inconstitucional recurso de juridicidad con las previsiones de especificidad y taxatividad de las causales de procedencia como medio de enervar la cosa juzgada, distintas a las que ocupan la instancia, devendría en una suerte de poder de revisión en blanco, toda vez que la Sala Político Administrativa en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en las normas impugnadas, podría revisar las sentencias de segunda instancia por cualquier trasgresión al ordenamiento jurídico, sin límites, como tercera instancia, con poderes abiertos y mayores a los de esta Sala Constitucional".*

Cosa juzgada

En torno a este punto, indica que la cosa juzgada *"es la necesidad de que la justicia ponga fin al proceso con una decisión investida de certeza procesal, decisión que debe producirse en un plazo razonable, toda vez que el derecho a recurrir no puede entenderse ad infinitum..."*

Refiere igualmente la sentencia de esta Sala 1826/2002, en la cual -según alega- se establece *"el valor de la cosa juzgada como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva".*

Que "[a]*sí, la certidumbre que deriva del agotamiento de la doble instancia, con lo cual "se satisface el derecho a recurrir de la parte desfavorecida con el fallo, no puede ser objeto de un medio de impugnación que constituya una tercera instancia...".*

Que en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se creó el recurso de casación, el cual no es aplicable en materia contencioso administrativa, así *"mal podría asimilarse el recurso de juridicidad a tal medio de impugnación...".*

Que los artículos impugnados de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa resultan inconstitucionales por violar los artículos 2, 26, 49, 257, 259, 262 y 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Invasión de competencias de la Sala Constitucional

Que "[i]ndica que de conformidad con los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión de sentencias es una competencia exclusiva de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicias; por ello el tratar de asimilar el recurso de juridicidad previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a la solicitud de revisión, violaría las competencias que constitucionalmente le han sido atribuidas a esa Sala del máximo tribunal de la República. Ello es así, ya que *"la delicada labor de establecer criterios con carácter vinculante y capaces de alterar incluso los derechos creados a favor de los justiciables por sentencias con autoridad de cosa juzgada, ha sido celosamente reservado por el Constituyente a esta Sala Constitucional".*

Medida Cautelar

De conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se solicitó la suspensión de los efectos y de la aplicación de

los artículos 23.8, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del artículo 26.18 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia *"denunciadas como han sido las violaciones a las normas constitucionales contenidas en los artículo 2, 26, 49, 250, 257, 259, 262, 266, 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela"*.

II
OPINIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

En la oportunidad procesal correspondiente, los abogados María Elena Delgado Graterol, Cruz Esteban Febres Despujols, Carlos Martín Ramírez Bracamonte, José Jesús Calzadilla, Johel Seijas, Jesús Millán y José Gregorio Rojas Ramírez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 64.949, 66.384, 92.948, 97.533, 109.373, 117.900 y 65.630 respectivamente, actuando en su carácter de representantes legales de la Asamblea Nacional, presentaron escrito contentivo de las defensas de fondo, correspondientes al recurso de nulidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, integrantes del Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del ordinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, conjuntamente con medida cautelar, a los fines de suspender los efectos legales de las normas cuya nulidad se demanda, con base en los términos que se exponen a continuación:

Que *"[l]os alegatos del recurrente se basan en argumentos relacionados con una supuesta inconstitucionalidad por consagrarse, mediante el Recurso Especial de Juridicidad, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una tercera instancia y una supuesta violación a las competencias de la Sala Constitucional, así como violación a la cosa juzgada"*.

Que *"[p]ara esta representación judicial el Recurso Especial de Juridicidad es un medio de impugnación que se interpone por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, como máxima instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, es un recurso contra sentencias definitivas..."*.

Que *"[l]a intención del legislador no fue entonces instaurar una tercera instancia sino un medio de impugnación porque el petitum es precisamente la anulación de una sentencia de segunda instancia, de esta manera, el Recurso Especial de Juridicidad constituye un recurso extraordinario y supremo, circunscrito a resolver cuestiones de derecho, sin juzgar en los términos en que se hizo en la primera o segunda instancia"*.

Que *"[e]sta representación judicial rechaza el alegato del recurrente en cuanto a la instauración de una tercera instancia por cuanto el Recurso Especial de Juridicidad no la constituye, no solo porque así lo establece expresamente la Ley en su artículo 95, sino porque mediante este recurso sólo se juzga acerca de la legalidad de la sentencia, a diferencia de la primera y segunda instancia en donde se analizan los hechos y se resuelve la controversia de fondo"*.

Que *"[m]ediante el Recurso Especial de Juridicidad se conocen cuestiones de derecho, no cuestiones de hecho, se ataca la sentencia de segunda instancia por razones jurídicas, no por razones fácticas por lo que quedaría por fuera del conocimiento del Recurso toda motivación que pretenda la sustitución del fallo impugnado por desajustes con los hechos, por lo que en opinión de esta representación judicial no se está en presencia de una tercera instancia, y así pedimos respetuosamente sea declarado"*.

Que *"[c]uando el recurrente plantea en su escrito que cuando se establece en el artículo 101 de la Ley que la Sala Político Administrativa puede resolver el mérito de la causa se está en franca contradicción con el principio de la doble instancia, esta representación opina que mediante el Recurso Especial de Juridicidad, a pesar de que está limitado a cuestiones de derecho, puede conocer sobre el denominado error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, por lo que la Sala Político Administrativa puede pronunciarse sobre el fondo para evitar así el procedimiento innecesario del reenvío, ya que convertir a la Sala Político Administrativa en un mero tribunal de reenvío desnaturaliza al máximo tribunal y limita a la Sala Político Administrativa quien en definitiva es la máxima instancia de la jurisdicción-contencioso-administrativa. La función de protección del ordenamiento y la unificación de los criterios jurídicos no se ve afectada por el no reenvío de la causa, además que se produce celeridad procesal eliminando las múltiples solicitudes de revisión a través del recurso"*.

Que *"[e]s errada entonces la aseveración del recurrente cuando plantea que un tribunal conoce de un recurso extraordinario y decide el mérito de la causa está creando con ello una instancia, en opinión de esta representación judicial es simplemente una decisión sin reenvío"*.

Que *"[c]uando se legisló sobre la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se plantearon varios escenarios que fundamentaron la inclusión del Recurso Especial de Juridicidad. Inicialmente el proyecto de ley contemplaba, en cuanto a la estructura orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, en este escenario no se planteaba el especial recurso por cuanto al existir un solo órgano nacional no se hacía necesaria una institución o recurso que tuviera como objetivo una función de protección de la ley o unificadora del derecho, ya que se planteaba un único órgano. A medida que avanzó la discusión de la Ley en la Asamblea Nacional se concluyó un proyecto que establecía, en cuanto a esta estructura orgánica, un escenario de varios tribunales nacionales de esta especial jurisdicción, escenario que en definitiva fue aprobado y sancionado"*.

Que *"[e]n vista de la multiplicidad de tribunales nacionales en la ley, sin ningún tribunal superior que se encargara de proteger el derecho y de unificar criterios jurídicos surge la propuesta del Recurso Especial de Juridicidad, no como una tercera instancia, tal como lo denuncia el recurrente, sino como una especie de casación en el contencioso administrativo con unos objetivos claros, tomando en cuenta siempre que el legislador consideró que era sano que ciertas causas (como las que conoce la jurisdicción contencioso administrativa) sean revisables por el máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en una de sus Salas. Entre los objetivos de la instauración del especial recurso estaba la protección de la ley, y como objetivo secundario la unificación de la jurisprudencia debido a esta multiplicidad de órganos en segunda instancia. Otro objetivo era facilitar a las partes un medio de impugnación cuando consideren violentados derechos por transgresiones al ordenamiento jurídico mediante una sentencia judicial"*.

Que *"[m]ediante el Recurso Especial de Juridicidad se protegen entonces la ley y el derecho ya que mantiene a los diferentes tribunales nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa en la esfera de sus atribuciones, el legislador consideró que los errores de los sentenciadores afectan el interés del Estado en mantener el ordenamiento jurídico, mediante este especial recurso se impide que los jueces vulneren el principio de la legalidad con la excusa de ser la*

última instancia o con la excusa de la cosa juzgada en detrimento del interés general en el mantenimiento del orden legal".

Que "[e]*l artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al establecer que una sentencia definitiva de segunda instancia puede revisarse por trasgresión al ordenamiento jurídico, lo que está es exhortando a los jueces de instancia de esta especial jurisdicción a decidir acorde con el derecho y la justicia, esta transgresión al ordenamiento jurídico, como sería por ejemplo una incorrecta interpretación de una norma jurídica, conduce a una falsa aplicación de la norma afectándose la justicia. Igualmente se exhorta a los sentenciadores a acoger la doctrina establecida para casos análogos emanada de la máxima instancia del Poder Judicial, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, evitando de esta manera la ilusoriedad de la unidad de la jurisprudencia en el contencioso administrativo ya que cada tribunal nacional pudiera adoptar interpretaciones opuestas o contradictorias entre sí. He aquí la importancia en cuanto a la función unificadora del Recurso Especial de Juridicidad".*

Que "[d]*e lo anterior se colige que el Recurso Especial de Juridicidad no constituye una tercera instancia como erróneamente lo expone en su libelo el recurrente sino un recurso procesal en interés de las partes por medio del cual se impugnan las actuaciones en segunda instancia de los tribunales que componen la jurisdicción contencioso administrativa que infrinjan disposiciones legales. Se constituye entonces el Recurso Especial de Juridicidad, (...), en un medio para que el máximo tribunal de la República fiscalice jurídicamente la aplicación exacta y uniforme del derecho".*

Violación del artículo 259 de la Constitución de la República

Que "[s]*eñala el recurrente que el legislador acordó a la jurisdicción contencioso administrativa poderes exclusivos de control judicial constitucional siendo este poder de revisión de sentencias exclusivo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, transgrediendo así el principio constitucional de doble instancia al decidir el mérito de la causa, alegato que ésta representación judicial rechaza y contradice por cuanto ésta no es la esencia del Recurso Especial de Juridicidad, recurso éste que tiene como modelo mas* (sic) *cercano el de casación y el Recurso de Control de Legalidad previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tal como sucede en el recurso de casación o en el Recurso de Control de Legalidad, a solicitud de parte, se puede conocer de aquellos fallos emanados de los tribunales de última instancia que sean contrarios al ordenamiento jurídico".*

Que "[p]*ara esta representación judicial el Recurso Especial de Juridicidad constituye un medio de impugnación y no una tercera instancia; tal como lo constituye el Recurso de Control de Legalidad, el Recurso Especial de Juridicidad es un recurso excepcional fundamentado, como lo planteó el Dr. Román Duque Corredor, en vicios de forma y de fondo, que no tipifica los motivos sino que los amplía, por lo que esta representación judicial rechaza tales alegatos".*

Inconstitucionalidad de la tercera instancia

Que "[s]*eñala el recurrente que el artículo 101 de la Ley establece que la sentencia que resuelve el recurso de juridicidad puede resolver el mérito de la causa, lo que constituye –al entender del recurrente- un juzgamiento ex novo y en consecuencia una nueva instancia de decisión, alegato éste que rechazamos por cuanto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se establece que solo se puede ejercer el Recurso Especial de Juridicidad en las sentencias de última instancia que a juicio del solicitante, y a tenor de lo establecido por el artículo 95 de la Ley, transgredan o violenten el ordenamiento jurídico, por lo que dicha revisión no puede versar sobre hechos sino sobre el derecho, además, expresamente esta norma establece que el recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de la causa, el Juez o Jueza Contencioso Administrativo no conoce la causa sino de un problema distinto al propio de la causa, es decir, revisa si la sentencia está o no afectada por los vicios denunciados que a tenor del artículo 95 de la Ley transgreden el ordenamiento jurídico. La Sala Político Administrativa, al anular la sentencia, no está decidiendo sobre el mérito de la controversia propiamente dicho, sino que está decidiendo si la sentencia recurrida debe ser o no anulada por los vicios alegados y no por los asuntos debatidos en primera o segunda instancia".*

Que "[l]*a Sala Político Administrativa no conocería de una controversia entre partes sino de la revisión de una sentencia de acuerdo a los vicios expresamente denunciados, estos vicios limitarían a la Sala Político Administrativa en el conocimiento del Recurso Especial de Juridicidad ya que no se podría apartar de dichas denuncias. La Sala conocerá entonces de las infracciones al ordenamiento jurídico en que haya podido incurrir la sentencia pero no el fondo de la controversia aún cuando resuelva el mérito de la causa para restablecer el orden jurídico transgredido".*

Cosa juzgada

Que "[a]*lega el recurrente que se violenta con el Recurso Especial de Juridicidad la cosa juzgada, alegato que rechazamos, ya que con el Recurso Especial de Juridicidad se intenta anular decisiones de tribunales de última instancia, que aún con carácter de cosa juzgada pueden ser anuladas e incluso decidirse el fondo de la controversia sin resultar esto inconstitucional ya que se trata de no proteger violaciones al ordenamiento jurídico mediante la figura de la cosa juzgada".*

Que "[l]*a cosa juzgada puede ser atacada, la cosa juzgada formal se ataca a través de los recursos ordinarios y la cosa juzgada material se ataca por vía de los denominados medios impugnativos extraordinarios o excepcionales, tal como lo constituye el Recurso Especial de juridicidad".*

Que "*... el Recurso Especial de Juridicidad, como todo sistema de impugnación busca controlar la sentencia judicial en cuanto su ajuste al derecho, así, cuando la sentencia altera el ordenamiento jurídico cobra importancia este sistema de impugnación para evitar daños a las partes, incluso en aquellas sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada...".*

Que "[t]*iene entonces el Recurso Especial de Juridicidad como objeto atacar la legalidad de la sentencia transgresora del ordenamiento jurídico que compromete la justicia y no vulnera la cosa juzgada como lo alega el recurrente".*

Que "[l]*o que se busca entonces es controlar la sentencia de segunda instancia para determinar la legalidad prevista en el ordenamiento jurídico que le sirve de fundamento al fallo proferido".*

Que "[m]*ediante el recurso de apelación la parte perdidosa busca la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia, y, mediante el Recurso Especial de Juridicidad la parte recurre ante el máximo tribunal en su Sala Político Administrativa para controlar la legalidad de la sentencia de la última instancia, pudiendo anular el fallo y reenviar o decidir el fondo de la controversia judicial sin reenvío, según lo prescrito en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".*

Invasión de competencias de la Sala Constitucional

Que "[i]*ndica el recurrente que se trata de asimilar el Recurso Especial de Juridicidad a la solicitud de revisión constitucional, cuestión ésta mas* (sic) *apartada de la realidad, por lo que negamos y contradecimos este alegato*".

Que "[e]*ntre los fines de la revisión constitucional están principalmente: 1) Garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, por ser la Sala Constitucional su máximo y último interprete; 2) Garantizar la eficacia de la Constitución, con especial énfasis en materia de derechos constitucionales; y 3) Garantizar la seguridad jurídica, porque se puede controlar la actividad jurisdiccional de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y de todos los tribunales de la Republica* (sic)".

Que "[e]*l Recurso Especial de Juridicidad no tiene los fines antes mencionados sino el de ejercer un control de la sentencia judicial en cuanto a su ajuste al derecho para evitar lesiones al sistema de legalidad. Es decir, y tal como se planteó antes, el Recurso Especial de Juridicidad constituye un medio de impugnación excepcional y no una tercera instancia ni mucho menos un recurso que emula al recurso de revisión constitucional*".

Que "[p]*or todas las consideraciones anteriormente expuestas el Recurso de* (sic) *Especial de Juridicidad no emula ni pretende emular al Recurso de Revisión Constitucional, por lo que esta representación judicial niega y rechaza tal alegato*".

Que "[c]*iudadana Presidenta y demás miembros de la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en estos términos queda expuesta la defensa de la Asamblea Nacional con respecto a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, integrantes del Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del ordinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, interpuesta por el ciudadano José Amando Mejía, antes identificado, por lo que pedimos sea agregado el presente escrito a los autos, valorado y declarado* **sin lugar** *el presente recurso de nulidad, ya que de la Ley demandada no se desprenden violaciones al texto constitucional, normas, principios o valores garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*".

III
OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En la oportunidad procesal correspondiente, el abogado José Ángel Mogollón N., y Laurie Meneses, titulares de las cédula de identidad núm. 18.131.323 y 15.617.903 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núm. 138.445 y 181.135 respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, presentaron escrito contentivo de las defensas de fondo, correspondiente al recurso de nulidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, integrantes del Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del ordinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con base en las siguientes consideraciones:

Violación del artículo 259 Constitucional

Que "[s]*eñaló el accionante, que el referido artículo de la Carta Magna '(...) constitucionaliza la jurisdicción contencioso administrativa y consagra su función principalísima de controlar la actividad administrativa desplegada por los órganos del Poder Público, en particular por los órganos que componen la Administración Pública'. Indicó que la Constitución establece específicamente la competencia en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa y, en consecuencia, establece constitucionalmente los poderes del juez contencioso administrativo*".

Que "[i]*gualmente, señaló que '(...) no puede el legislador nacional subvertir la estructura judicial que pueda controlar los poderes del Estado', y que, en consecuencia, no puede acordar a la jurisdicción contencioso administrativa poderes exclusivos de control judicial constitucional, así como tampoco, el orden de jurisdicción nacional ordinario no podría asumir poderes judiciales que corresponden con carácter de exclusividad al orden jurisdiccional constitucional ni al orden jurisdiccional contencioso administrativo*".

Que "[d]*e lo expuesto, se desprende que, a criterio del recurrente, el legislador supuestamente subvierte la estructura constitucional judicial, pues los poderes otorgados al juez contencioso, en razón del establecimiento del recurso de juridicidad, sobrepasan los que constitucionalmente le son otorgados estimando que se invade las funciones de la Sala Constitucional*".

Que "[a]*hora bien, resulta oportuno señalar que uno de los avances más importantes que ha traído la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, ha sido el paso de la legalidad a la justicia material, transformación que se ve reflejada en los poderes de los que disponen los jueces en el curso de los procesos judiciales*".

Que "[e]*n ese sentido, en el contencioso administrativo el juez se erige como director del proceso, facultado plenamente para la búsqueda de la verdad y conocimiento pleno de las situaciones sometidas a su competencia, en Venezuela se puede apreciar que existe una gran amplitud en cuanto al ámbito de actuación que el juez contencioso administrativo puede ejercer, y ello se desprende de la lectura del artículo 259 Constitucional, citado ut supra, que otorga al juez las más amplias facultades para controlar a la Administración Pública*".

Que "*...de la misma norma Constitucional se desprende que ningún acto de la Administración Pública queda excluido del control, pues la intención del Constituyente fue la de abarcar todos los actos que emita la Administración, y a la luz de esta nueva concepción se impone la necesidad de interpretar y de asumir de una manera diferente la función de los jueces. En efecto, según el nuevo modelo de Estado, la figura del juez cobra un rol vital, éste debe garantizar una tutela judicial efectiva, una justicia eficiente y un verdadero Estado de Derecho y de Justicia*".

Que "[d]*e lo anterior, se deriva entonces, que la amplitud de poderes otorgados por la Constitución al juez contencioso administrativo, tal como fuere señalado por el recurrente, se convierte en un punto de partida para la consecución de los fines del Estado, en este caso, la justicia; así, al consagrar la Carta Fundamental en su artículo 259, que el juez contencioso administrativo podrá '(...) disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa', otorga una serie de potestades discrecionales que le permiten, dentro de los límites establecidos, realizar lo conducente para garantizar la realización de la justicia de forma efectiva y material*".

Que "[d]*e esta forma, si bien la posibilidad de revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que transgredan el ordenamiento jurídico, no se encuentra directamente mencionada entre las potestades constitucionales atribuidas al juez contencioso administrativo, no puede negarse*

que tal mecanismo se estatuyó como un medio para lograr los (sic) dispuesto por el artículo 259, en el sentido de garantizar el restablecimiento del derecho lesionado por la administración; entonces, el Legislador Nacional solamente estableció el medio, en este caso el Recurso Especial de Juridicidad, que permitiría el logro de los fines que constitucionalmente han sido consagrados".

Que "[a] *propósito de la revisión de juridicidad, éste mecanismo constituye una novedad dentro del sistema contencioso administrativo venezolano, en el sentido de representar una forma de aseguramiento del orden jurídico en materia contencioso administrativa, por lo que se trata de un recurso especial o extraordinario toda vez (sic) exige para su interpretación motivos determinados y concretos, además el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa, sino únicamente aquellos sectores de ella que permitan deducir la transgresión del ordenamiento jurídico".*

Que "[s]*obre el particular, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 290, del 23 de abril de 2010, al reconocer la figura del recurso especial de juridicidad, en el fallo que declaró que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene el carácter orgánico que le fuera atribuido por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela...".*

Que "*...la juridicidad es la calidad de ciertas conductas que cumplen con lo prescrito por la norma jurídica que las regula; de allí que se entienda el mencionado recurso como una necesidad lógica para que una acción pueda ser clasificada como lícita (adecuada a la norma jurídica que la regula) o como ilícita (violatoria de la norma jurídica)".*

Que "[e]*ntonces, al ser éste un medio extraordinario de impugnación contra las decisiones definitivas de segundo grado de jurisdicción, que a juicio del administrado recurrente transgredan el ordenamiento jurídico, lo que se busca es subsanar la posible disparidad entre el juzgamiento y una norma legal que resulta violada, todo ello en pro de salvaguardar los derechos subjetivos de los administrados y en procura de una sana y correcta administración de justicia".*

Que "[s]*obre la base de las anteriores consideraciones, resulta infundado el argumento esgrimido por el recurrente al señalar que el recurso especial de juridicidad constituye una invasión a las potestades de la Sala Constitucional al erigirse, en su criterio, como un recurso de revisión constitucional cuya competencia le es atribuida exclusivamente a la Sala Constitucional, no pudiendo el legislador trasladar poderes judiciales excepcionales y monopólicos de la Sala Constitucional al contencioso administrativo".*

Que "[e]*n tal sentido, se tiene que la competencia objetiva de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para revisar los fallos definitivamente firmes se hace con base en lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 Constitucional que dispone lo siguiente:*

> *'Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:*
>
> *(...)*
>
> *10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva".*

Que "[d]*el artículo parcialmente transcrito, se desprende que la potestad de revisión a la cual se hace referencia se encuentra reservada sólo para aquellos pronunciamientos judiciales definitivamente firmes que se hayan producido en virtud de acciones de amparo constitucional, o bien en aquellas que versen sobre el control de la constitucionalidad de normas jurídicas, lo cual representa en principio el límite de la potestad revisora previsto en la Constitución; además, la Sala Constitucional realizando una exégesis del mencionado artículo, ha interpretado mediante Sentencia de fecha 6 de febrero de 2011, ha interpretado tal límite de forma más amplia, estableciendo que dicha facultad debe extenderse a la generalidad de las sentencias emanadas de los Tribunales de la República cuando se hayan apartado de las interpretaciones establecidas por la Sala, mediante cualquiera de sus decisiones (Jurisprudencia vinculante) o bien cuando haya transcurrido en una violación flagrante en la interpretación del Texto Constitucional".*

Que "[d]*e lo anterior, se desprende que no puede asimilarse el Recurso Especial de Juridicidad con el Recurso de Revisión Constitucional, en virtud de que el objeto en ambos difiere sustancialmente, puesto que el primero de ellos trata de corregir violaciones que se produzcan en una sentencia referida a la materia contencioso administrativa, cuyas transgresiones estén vinculadas con el ordenamiento referido a la misma y que generen una lesión en la esfera jurídica particular con motivo de la actuación de la Administración Pública; y el segundo persigue preservar el orden jurídico constitucional y salvaguardar los preceptos que de ella surgen, además de que se trata pues de una competencia amplísima conferida a la Sala Constitucional con carácter de exclusividad y para la cual se establecen unos supuestos fácticos bien definidos, sólo a objeto de regular el ejercicio del control de la constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como un mecanismo de protección de la integridad del Texto Fundamental; así, no puede se (sic) igualmente de la potestad que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el establecimiento del Recurso Especial de Juridicidad".*

Que "[e]*n ese orden de ideas, se insiste, resulta ilógico pensar en una invasión a las competencias de la Sala Constitucional, en virtud de las diferencias existentes entre ambos recursos, ya que el Legislador Nacional, con la finalidad de cumplir el mandato constitucional contenido en el artículo 259 y proveer lo conducente para el restablecimiento de las posibles situaciones infringidas, creó un medio para que el Juez Contencioso logrará realizar tal mandato, lo que lleva a la certeza de que tal mecanismo no puede ser inconstitucional, puesto que en ningún momento violenta la estructura judicial, ni mucho menos invade potestades exclusivas establecidas por la misma Carta Magna, sino que por el contrario, en pro de la salvaguarda de los valores constitucionales y los fines que ésta persigue, creo un medio eficaz que permita controlar la actividad administrativa sin romper el esquema jurídico, permitiendo que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho que tiene todo ciudadano a que se restablezca la situación jurídica perturbada por la actividad de la Administración se convierta en un deber del juez contencioso".*

Que "[s]*obre la base de las consideraciones anteriores, se debe señalar que las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del Título IV De los Procedimientos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, referidas al Recurso Especial de Juridicidad de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, objeto del recurso aquí debatido, no contrarían las disposiciones constitucionales referidas a las competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Constitucional, contenidas en los artículos 259 y 336 numeral 10 de la Carta Magna, en razón de tratarse del ejercicio de las potestades discrecionales otorgadas por el mismo Texto Constitucional, a fin de salvaguardar los derechos de los particulares frente a la actividad administrativa".*

Violación al principio de la doble instancia

Que "[s]eñaló el recurrente que el poder que se le otorga a la Sala Político Administrativa es '(...) un poder de revisión de sentencias de segunda instancia en blanco, amplísimo, general, asombroso y grotescamente más amplio y general que el otorgado a esta Sala Constitucional', que al establecer el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que la sentencia que resuelva el recurso de juridicidad puede resolver el mérito de la causa, constituye a la decisión de la Sala Político Administrativa en un juzgamiento ex novo y, en consecuencia, en una nueva instancia de decisión'(...) pues todo juez que tenga poderes de revisión ex novo de la causa, se constituirá indefectiblemente en un juez de instancia, lo cual está como se dijo proscrito en nuestro ordenamiento resultando a todas luces inconstitucional', y que el resultado de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, podrían permitir 'revisar las sentencias de segunda instancias por cualquier trasgresión al ordenamiento jurídico, sin límites, como tercera instancia, con poderes abiertos y mayores a los de esta Sala Constitucional".

Que "[d]el análisis de las denuncias antes transcritas, se deduce que a entender del recurrente, el Recurso Especial de Juridicidad se constituye en una suerte de quebrantamiento del principio de la doble instancia que impera en Venezuela, permitiendo la existencia de una nueva instancia de juzgamiento en el contencioso administrativo, que amplía, en supuesta violación de la Constitución de 1999, las potestades que ésta otorga a la Sala Político Administrativa, equiparándola a la Sala Constitucional y su potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes".

Que "[e]l Recurso Especial de Juridicidad, en principio denominado Recurso de Control de Legalidad en el proyecto presentado ante la Asamblea Nacional, está inspirado más en el Recurso de Control de Legalidad previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que en el Recurso de Revisión Constitucional; pero esta posibilidad de solicitar la revisión de las sentencias de última instancia, que a juicio del solicitante transgredan o violenten el ordenamiento jurídico, constituye la reforma del proceso contencioso administrativo venezolano, pues como se ha mencionado antes, lo que se busca con este nuevo mecanismo es dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 259 Constitucional, y es que el propio artículo 101 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece la razón fundamental de existencia de este medio especial de impugnación, al señalar que se repondrá el procedimiento o se resolverá el mérito de la causa para restablecer el orden jurídico infringido".

Que "...no se pretende constituir una tercera instancia de juzgamiento, pero sí resguardar los derechos constitucionalmente establecidos al particular frente a la Administración, la consecución de los fines del Estado se entrelaza entonces con un derecho amplísimo, como lo es la tutela judicial efectiva, pues en un Estado Social de Derecho de Justicia la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando de que si bien el proceso sea una garantía los órganos de administración de justicia conozcan a fondo la pretensión del particular y puedan determinar el contenido y la extensión del derecho deducido, con la finalidad última de alcanzar la justicia material del caso que se trate".

Que "[d]e lo expuesto, se desprende que las reglas que sujetan la actividad del Tribunal Supremo de Justicia, constituyen la reiteración de que el Máximo Órgano Jurisdiccional del país es un tribunal de derecho, cuyo control en el examen de las denuncias por las cuales tal recurso debe versar, no constituye un medio de gravamen y, por ende, no reproduce la controversia, así lo establece la propia Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al disponerse en su artículo 95, que el recurso especial de juridicidad podrá ejercerse sólo contra los fallos dictados por los tribunales que conocen en grado de jurisdicción, que a juicio del Administrado recurrente transgredan el ordenamiento jurídico".

Que "[d]e esa forma, se entiende que dicho recurso no busca estatuirse como una tercera instancia de juzgamiento, sólo se transforma en el medio idóneo creado por el legislador para que la jurisdicción contencioso administrativa proceda a consolidar el mandato constitucional, garantizando los medios necesarios para el restablecimiento de la situación jurídica infringida".,

Que "[e]n ese mismo orden de ideas, la revisión de juridicidad constituye un recurso especial o extraordinario, pues aparece de forma excepcional y limitado, en tanto que exige para su interposición motivos determinados y concretos respecto a la sentencia, que deben ser sometidos a criterio del juez para su admisibilidad, otorgándole una (sic) amplio poder discrecional, por cuanto el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa, sino que en base a las denuncias realizadas deberá considerar si cabe una reposición del proceso o un mérito distinto en la causa".

Que "[e]n razón de lo anterior, se considera que los alegatos expuestos por el recurrente carecen de fundamento, en virtud de que el Recurso Especial de Juridicidad no constituye una tercera instancia de juzgamiento, puesto que no se busca el cambio de una decisión favorable o desfavorable para quien lo ejerza, sino que se trata de un medio extraordinario de control de juridicidad de la sentencia emanada de segunda instancia y, en tal sentido, se niega la inconstitucionalidad de las normas impugnadas".

Cosa juzgada

Que "[s]eñaló el recurrente que, '[l]a materialización de la cosa juzgada en una sentencia, hace incontrovertible el derecho declarado, no pudiendo un nuevo juez por el análisis de los hechos emitir una declaración diferente, toda vez que la vinculación de la cosa juzgada a la situación fáctica debatida en el juicio hace inmutable el mandato judicial'. Igualmente indicó que '[a]l atribuir la Ley de la Jurisdicción Contenciosos (sic) Administrativa en su artículo 103 la posibilidad que [sic] resolver el 'mérito de la causa' en el contenido de la sentencia que se pronuncie sobre el Recurso de Juridicidad, vulnera el debido proceso constitucionalmente establecido pues sujetaría el juicio a un tercer examen de mérito, que sería contrario al principio de non bis in idem, pues se juzgarían hechos en virtud de los cuales ya se ha emitido un pronunciamiento en dos instancias'".

Que "[d]e lo alegado por el recurrente, se observa que a su entender se establece un quebrantamiento de la cosa juzgada por la existencia de un medio especial de impugnación, de tal forma que se rompe el principio de 'non bis in idem' que da certeza y seguridad jurídica a los administrados por la imposibilidad de que se juzguen los mismos hechos dos veces".

Que "[e]n ese sentido, es menester recordar que la institución de la cosa juzgada en Venezuela ha de entenderse como el efecto impeditivo que, en determinado proceso, ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial definitivamente firme dictada sobre el mismo objeto, así la Carta Magna lo establece en el artículo 49 numeral 7, en los siguientes términos:

> 'Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

(omisis)

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente".

(omisis)

Que "[d]*el artículo citado, se infieren dos consecuencias importantes: i) los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional y; ii) el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las sentencias que se dicten respecto a determinada situación jurídica, es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De esta manera, se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los órganos de la jurisdicción conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto; y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico".*

Que *"...es importante destacar que la eficacia de la autoridad de la cosa Juzgada se traduce en tres aspectos: **a) Inimpugnabilidad**, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos y cada uno de los recursos que otorgue la ley, **b) Inmutabilidad**, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada; y, **c)Coercibilidad**, que consiste en la eventual ejecución forzada en los casos de sentencias de condena, en otras palabras, se trata de la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales, traducida en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso".*

Que "[c]*omo consecuencia de lo anterior, no puede considerarse un quebrantamiento de la cosa juzgada cuando exista medios que permitan atacar las decisiones definitivas que aún no han quedado firme, pues se tiene que una sentencia es firme cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan modificarla; de esta forma, al estar previsto el recurso de juridicidad en la Ley del Contencioso Administrativo, indica la posibilidad de impugnación atribuida a una sentencia definitiva en dicha materia, cuyo establecimiento impide que se materialice la cosa juzgada hasta tanto no se ejerzan los recursos permitidos, aún cuando estos sean medios especiales".*

Que "[i]*gualmente, es necesario destacar que el recurso especial de juridicidad, no abre la posibilidad de un nuevo juzgamiento, tal como lo prevé el artículo 49 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que no se trata de un nuevo proceso con identidad de partes y objeto, se trata pues de un mecanismo especialísimo que permite la revisión de una sentencia que aún no* (sic) *quedado firme respecto de las posibles violaciones legales que vicien la validez de la misma".*

Que "[e]*n ese mismo orden de ideas, es de destacar el error en el que incurre el recurrente al señalar que en virtud de la posibilidad de resolver el mérito de la causa, establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se quiebra la cosa juzgada ya que considera 'que sería contrario al principio de non bis in idem, pues se juzgaría hechos en virtud de los cuales ya se ha emitido un pronunciamiento en dos instancias'".*

Que "[e]*l principio de 'non bis in idem', se orienta en el mismo sentido del precepto constitucional que consagra la cosa juzgada, es decir, busc* (sic) *la* (sic) *proteger a los ciudadanos de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y aplica precisamente como un impedimento para la apertura de un nuevo proceso cuando exista una sentencia firme anterior que juzgue los mismos hechos, con las mismas partes y el mismo objeto; razón por la cual, como se ha explicado en reiteradas oportunidades, el recurso especial de juridicidad sólo podrá versar sobre puntos de derecho y no sobre los hechos acontecidos durante el proceso; a tales fines, el artículo 95 de la ley in comento, dispone que 'La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, **revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que transgredan el ordenamiento jurídico.**' (resaltado de la Procuraduría General de la República)".*

Que "[e]*n tal sentido, el recurso especial de juridicidad no reproduce la controversia ante el Tribunal Supremo de Justicia, tampoco permite que sean examinadas pruebas ni fijados hechos para declarar con o sin lugar la demanda, sino por el contrario, constituye un medio extraordinario de impugnación, que persigue el respeto del ordenamiento jurídico preexistente, sin que eso constituya replantear la controversia ante una tercera instancia de juzgamiento".*

Que "[c]*omo consecuencia de lo anterior, se niega la presunta inconstitucionalidad del recurso de juridicidad, pues no hay quebrantamiento de la cosa juzgada, toda vez que una sentencia que no ha quedado firme debido a la existencia de medios de impugnación que posibiliten su modificación no puede dar lugar a la cosa juzgada y, por tanto, no puede haber una violación a la garantía de la seguridad jurídica y no habría contradicción al principio de prohibición de juzgado dos veces por los mismos hechos establecido* (sic) *en la Constitución de 1999".*

Que "[p]*or todo lo dicho, se entiende que el Recurso Especial de Juridicidad. No puede ser considerado como una tercera instancia, puesto que no se trata de un medio que permite conocer los hechos nuevamente y decidir sobre ellos, sino que por el contrario se trata de un medio de impugnación extraordinario de protección del ordenamiento jurídico administrativo, ni tampoco puede asemejarse a una especie de Recurso de Revisión, en los términos establecidos en el artículo 336 de la constitución, puesto que este procede aún contra sentencias definitivamente firme que transgredan el orden constitucional. Así respetuosamente solicitamos sea declarado".*

Que "[f]*inalmente, Honorables Magistrados, esta representación de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, señala que no tiene pruebas que promover en el presente proceso, por considerar que este asunto es de mero derecho, y así solicitamos sea decidido".*

Que "[e]*n virtud de lo expuesto, esta Procuraduría General de la República solicita a esta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declare **SIN LUGAR** la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida por la Sociedad Mercantil Hotel Tamanaco C.A., contra los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como el numeral 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.522, de fecha 01 de octubre de 2010, respectivamente".*

IV
PUNTO PREVIO

Esta Sala debe realizar unas consideraciones previas a la resolución del fondo de la demanda interpuesta, en los términos siguientes:

El artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé:

> Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez que conste en autos hacerse efectuado la última de las notificaciones, el Juzgado de Sustanciación se pronunciará, dentro del lapso de tres días de

despacho, sobre la participación de los intervinientes; y concluido este lapso comenzará a transcurrir un lapso de diez días de despacho para que consignen los escritos para la defensa de sus intereses y promueva las pruebas, si lo estiman pertinente. En esa oportunidad los intervinientes deberán evacuar las pruebas documentales.

Se hará constar en el expediente la fecha en que venza el plazo para la consignación de los escritos.

Dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción, las partes podrán ponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que consideren manifiestamente ilegales o impertinentes.

El 13 de junio de 2012, el Juzgado de Sustanciación dictó, con base en esta disposición, el siguiente auto: *"Visto que el 26 de abril de 2012 se cumplió el lapso de diez (10) días de despacho para que las partes consignaran sus escritos de defensas o promoviera pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; de la revisión del expediente se constata que no fue promovida prueba alguna, en consecuencia, se ordena la remisión de las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional, a los fines del pronunciamiento correspondiente"*.

Posteriormente, el 28 de junio de 2012, los abogados Rafael Simón Arocha Urbina y José Rafael Salazar Navas, apoderados judiciales de Hotel Tamanaco C.A., presentaron escrito de defensa cuando ya habría precluido el lapso para introducir cualquier argumentación en pro o en contra de la nulidad del instrumento denunciado; siendo así, esta Sala no oirá los señalamientos expuestos en esa oportunidad vista la intempestividad en que fueron consignados. Así se declara.

V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Acordada la competencia de esta Sala en el fallo 1149/2010, se procede a emitir la siguiente decisión:

Se impetra la presente demanda de nulidad contra los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (G.O. núm. 39.451 del 22 de junio de 2010), y el artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (G.O. núm. 39.483 del 9 de agosto de 2010), las cuales prevén:

a. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

"Artículo 23: La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

[...]

18. Del Recurso especial de juridicidad, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

[...]

Recurso especial de juridicidad

Artículo 95. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que trasgredan el ordenamiento jurídico.

El recurso de juridicidad podrá intentarse contra las decisiones judiciales de segunda instancia que se pronuncien sobre destitución de jueces o juezas.

Este recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de causa.

Oportunidad para interponer el recurso

Artículo 96. El recurso especial de juridicidad deberá interponerse dentro de los diez días de despacho siguientes a la publicación de la sentencia, ante el tribunal que la haya dictado. El escrito del recurso especial de juridicidad deberá hacer mención expresa a las normas trasgredidas.

Remisión del expediente

Artículo 97. El tribunal que dictó la sentencia deberá remitir inmediatamente el expediente con el recurso a la Sala Político-Administrativa, dejando constancia en el auto que ordena la remisión de los días de despacho transcurridos para su interposición.

Admisión del Recurso

Artículo 98. La Sala Político-Administrativa se pronunciará sobre la admisión del recurso dentro de los diez días de despacho siguientes a su recibo.

Escrito de contestación

Artículo 99. Admitido el recurso, la contraparte dispondrá de diez días de despacho para que consigne por escrito que no exceda de diez páginas su contestación.

Lapso para dictar sentencia

Artículo 100. Transcurrido el lapso establecido en el artículo anterior, la Sala Político Administrativa dictará la decisión dentro de los treinta días de despacho siguientes.

Contenido de la sentencia

Artículo 101. En la decisión del recurso especial de juridicidad, la Sala Político-Administrativa podrá declarar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando la reposición del procedimiento o resolver el mérito de la causa para restablecer el orden jurídico infringido.

Multas

Artículo 102. El recurrente, el abogado o abogada asistente o el apoderado o apoderada que interponga el recurso temerariamente podrá ser multado por un monto entre cincuenta unidades tributaria (50 U.T) y ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T). La decisión que imponga la multa deberá motivarse".

b. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:

"Artículo 26. Son competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

[...]

18. Del recurso especial de juridicidad, de conformidad con lo establecido en la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa".

Los fundamentos por las cuales se plantea la nulidad de los dispositivos antes mencionados, son:

- Las normas transcritas incordian disposiciones constitucionales al subvertir la estructura constitucional del Poder Judicial, por violentar la

garantía de la doble instancia para juzgar la actividad administrativa del Estado.

- Que se transgrede la inmutabilidad de la cosa juzgada como garantía a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva y se establece la implementación de un sistema que representa una invasión de las funciones de la Sala Constitucional previstas en el Texto Fundamental.

Las disposiciones denunciadas implementan la conformación del denominado *recurso especial de juridicidad*. El artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa delimita, dentro del régimen de competencias de la Sala Político Administrativa, la potestad para *revisar* las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que contraríen el ordenamiento jurídico.

En criterio de la parte demandante, la mencionada institución jurisdiccional representa un quebrantamiento del principio de la doble instancia que debe regir en los procedimientos judiciales. Señala que el mencionado recurso de juridicidad pueden intentarse contra decisiones de alzada, y si bien advierte que la Ley hace mención en su parte *in fine* del artículo 95 que *"Este recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de la causa"*, denuncia que de manera contradictoria el artículo 101 *eiusdem* prevé que la Sala Político Administrativa puede declarar la nulidad de la sentencia recurrida y resolver el mérito de la causa, comprendiendo una tercera instancia no permitida constitucionalmente.

La representación judicial de la Asamblea Nacional alega que el recurso especial de juridicidad es, apoyándose en la opinión de la doctrina: *"...una especie de 'recurso de casación que procede ante vicios de forma y fondo..."*, a su vez que *"...no tipifica los motivos, sino que los amplía, lo cual, para esta representación judicial no es inconstitucional"*.

Exponen que la intención del legislador no fue instaurar una tercera instancia sino un medio de impugnación porque la finalidad que se procura es anular la sentencia de segunda instancia: *"...de esta manera el Recurso Especial de Juridicidad constituye un recurso extraordinario y supremo, circunscrito a resolver cuestiones de derecho..."*; argumento que emula la Procuraduría General de la República al señalar que dicho instrumento es *"...un medio extraordinario de impugnación contra las decisiones de segundo grado de jurisdicción, que a juicio del administrado recurrente transgreden el ordenamiento jurídico, lo que se busca es subsanar la posible disparidad entre el juzgamiento y una norma legal que resulta violada, todo ello en pro de salvaguardar los derechos subjetivos de los administrados..."*.

Los argumentos de nulidad y las defensas de fondo opuestas por las representaciones judiciales intervinientes ameritan que esta Sala proceda a estimar correlativamente y de forma conjunta la aludida prohibición constitucional de implementar modos recursivos que impongan el establecimiento de una tercera instancia; o si se está en presencia de una garantía judicial extraordinaria de impugnación cuya naturaleza determinaría la ausencia de la tercera instancia por guardar características similares a la casación.

Simultáneamente, esta Sala debe analizar si la implementación en los términos expresos de la norma del recurso especial de juridicidad implican en sentido alguno una invasión de las competencias previstas en el Texto Fundamental en materia de revisión, adjudicada a esta Sala Constitucional.

En primer orden, mediante decisión dictada por esta Sala en sentencia núm. 95 del 14 de marzo de 2000 (caso: ELECENTRO y CADELA), determinó el cese de la primera y única instancia para los procedimientos llevados ante la entonces única Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La consideración que en su momento fue expuesta estuvo en prevalecer el sentido y alcance de los principios procesales determinados en instrumentos internacionales suscritos por la República, eliminando por razones de incompatibilidad, los efectos del artículo 185, último aparte, de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Sobre este particular, se estableció:

> *"Es el caso que, de conformidad con la disposición prevista en el último aparte del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, las decisiones que dicte la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo, en los asuntos señalados en los ordinales 1° al 4° de la disposición en referencia, entre los cuales se hallan acciones de nulidad como la interpuesta en primera instancia por las sociedades mercantiles* ***C.A. ELECTRICIDAD DEL CENTRO (ELECENTRO) y COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ELECTRICIDAD DE LOS ANDES (CADELA)****, son irrecurribles.*
>
> *La disposición en referencia hace que, mientras la providencia denegatoria de la pretensión de amparo cautelar pueda ser revisada por vía de apelación o consulta, la sentencia que juzgue sobre el mérito de la pretensión de nulidad no pueda ser recurrida, en sede contencioso administrativa, en forma alguna. Por otra parte, de ejercerse acción de amparo contra la sentencia de mérito que pronuncie la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de dicha acción no estaría a cargo de la Sala Político Administrativa sino de la Sala Constitucional. Los efectos perniciosos que derivarían de la división de la continencia de la causa, integrada ésta por pretensiones conjuntas, una en única instancia a cargo de la citada Corte Primera, y la otra en segunda instancia a cargo de la Sala Político Administrativa o de la Sala Constitucional, así como el riesgo de pronunciamiento de sentencias contradictorias, una sobre el recurso de apelación ejercido contra la providencia denegatoria del amparo cautelar, a cargo de la Sala Político Administrativa o de la Sala Constitucional, y la otra sobre la acción de amparo que pudiera ejercerse contra la sentencia de nulidad, eventualmente a cargo de la Sala Constitucional, autorizan a examinar el régimen jurídico que antecede, a cuyo efecto esta Sala encuentra necesario analizar, en el marco del ordenamiento constitucional vigente, la disposición que prohíbe la revisión, por vía de recurso, de la sentencia que habrá de juzgar sobre el mérito de la pretensión de nulidad.*
>
> *3. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley (artículo 49, numeral 1). Esta disposición se halla precedida por otras, según las cuales, la defensa es derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso (artículo 49, numeral 1, encabezamiento), y la justicia, así como la preeminencia de los derechos humanos, forman parte de los valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 2).*
>
> *La consideración en conjunto de las disposiciones que anteceden autoriza a reconocer que, si bien el derecho a la defensa forma parte del radical derecho a la justicia, si bien el derecho a recurrir del fallo forma parte del derecho a la defensa, y si bien éste es inviolable en todo estado y grado del proceso, la Constitución y la ley pueden limitar, por excepción, el citado derecho a recurrir del fallo. Sería el supuesto de la negativa a oír recurso que contempla el ya citado artículo 185, último aparte, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, supuesto constitutivo de una limitación excepcional al ejercicio del derecho a la defensa, así como a la vis expansiva del radical derecho a la justicia.*
>
> *4. Sin embargo, sobre la base de la preeminencia de los derechos humanos, reconocida como valor superior del ordenamiento jurídico, la Constitución de la República declaró que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional; que prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y la ley; y que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.*
>
> *Según las disposiciones previstas en el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela (G.O. N° 31.256 de fecha 14.06-77),* ***" 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior".***
>
> *Puesta en relación esta norma con la disposición prevista en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República, en la cual el derecho a recurrir del fallo se atribuye únicamente a la persona declarada culpable, y se autoriza el establecimiento de excepciones al citado derecho, cabe interpretar que la norma de la convención es más favorable al goce y ejercicio del citado derecho, puesto que consagra el derecho de toda persona a ser oída, no sólo en la sustanciación de cualquier acusación penal, sino también en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; establece el derecho a recurrir del fallo, sin excepción alguna; le atribuye la naturaleza de garantía mínima; otorga su titularidad a toda persona, con independencia de su condición en el proceso; y establece que el titular del citado derecho ha de ser tratado bajo el principio de igualdad plena.*
>
> *Puesta en relación la norma en referencia con la disposición prevista en el último aparte del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, cabe interpretar que esta última es incompatible con aquélla, puesto que niega, en términos absolutos, el derecho que la convención consagra,*

siendo que el ordenamiento constitucional no atribuye a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el rango de tribunal supremo.

Por las razones expuestas, esta Sala reconoce y declara, con fundamento en la disposición prevista en el artículo 23 de la Constitución de la República, que el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, forma parte del ordenamiento constitucional de Venezuela; que las disposiciones que contiene, declaratorias del derecho a recurrir del fallo, son más favorables, en lo que concierne al goce y ejercicio del citado derecho, que la prevista en el artículo 49, numeral 1, de dicha Constitución; y que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

*En consecuencia, visto que el último aparte, primer párrafo, del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente: **"Contra las decisiones que dicte dicho Tribunal en los asuntos señalados en los ordinales 1 al 4 de este artículo no se oirá recurso alguno"**; visto que la citada disposición es incompatible con las contenidas en el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las cuales están provistas de jerarquía constitucional y son de aplicación preferente; visto que el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de la República establece lo siguiente: **"En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente"**; esta Sala acuerda dejar sin aplicación la disposición transcrita, contenida en el último aparte, primer párrafo, del artículo 185 de la Ley Orgánica en referencia, debiendo aplicarse en su lugar, en el caso de la sentencia que se pronuncie, de ser el caso, sobre el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la parte actora ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (expediente N° 99-22167), la disposición prevista en el último aparte, segundo párrafo, del artículo 185 eiusdem, y la cual es del tenor siguiente: **"Contra las sentencias definitivas que dicte el mismo Tribunal ... podrá interponerse apelación dentro del término de cinco días, ante la Corte Suprema de Justicia** (rectius: Tribunal Supremo de Justicia)**"**. Así se decide" [resaltado del fallo original].

La anterior decisión implicó un desarrollo proveniente de la jurisprudencia constitucional que modificó la noción de única instancia en el contencioso administrativo –salvo lo conducente a la Sala Político Administrativa- reconociendo el alcance del principio de la doble instancia dentro del ámbito de la función jurisdiccional que controla a la Administración. En tal sentido se pronunció la sentencia núm. 1929 dictada por esta Sala, el 5 de diciembre de 2008, al establecer:

"el derecho a la doble instancia en materia penal, es obligatorio y es un derecho humano reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cual ha sido ampliado a varios procesos judiciales que se tramitaban en única instancia, conforme lo ha señalado la Sala Constitucional, como en la sentencia Nº 95/15.03. 2000, ya que la apelación es el medio a través del cual se patentiza ese derecho fundamental, toda interpretación que se haga en tal sentido debe hacerse de manera progresiva, esto es, procurando la solución que aparezca más garantista de ese derecho, tal como lo ordena el artículo 23 de la propia Constitución.

Por otra parte, el literal 'H' del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de aplicación prevalente en el orden interno por indicarlo así el artículo 23 de la Constitución, establece, como garantía judicial, el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior y considera que dicha norma no acepta limitación alguna y se aplica con preferencia a la parte final del numeral 1 del artículo 49 de la Constitución, según el cual 'toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley'. Asimismo el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra la garantía de revisión de la sentencia o el derecho a la doble instancia, en particular para el proceso penal.

De ambas normativas, la primera es efectivamente más favorable que la segunda, en cuanto no contempla expresamente excepciones legales. Ahora bien, tales garantías se circunscriben al proceso penal, pues así expresamente lo señala el encabezamiento del numeral 2 del artículo 8 del Pacto de San José y, así se desprende del propio texto constitucional cuando garantiza ese derecho, no irrestricto, a 'toda persona declarada culpable' (subrayado de la Sala).

Asimismo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 5, consagra la garantía de revisión de la sentencia o el derecho a la doble instancia, no en el proceso civil sino en el proceso penal.

Esta Sala, en aplicación del principio de interpretar a favor del goce y del ejercicio de los derechos fundamentales, ha extendido, en muchos casos, al proceso civil y al contencioso administrativo tal garantía –del doble grao [sic] de la jurisdicción-,lo cual es posible siempre que con ello no se esté lesionando otro derecho fundamental u otro principio preponderante, como lo es el de la aplicación por el juez del ordenamiento procesal predeterminado por la ley, que deberá ser aplicado -salvo inconstitucionalidad declarada o manifiesta- en aras de la seguridad jurídica. Ha señalado la Sala como excepción al ejercicio del derecho a la doble instancia, los procesos para los que la ley adjetiva circunscribe la competencia de su conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, constituyen otras excepciones no excluyentes, aquellas decisiones dictadas, de acuerdo con la ley procesal aplicable, por tribunales colegiados, ello en atención a que, partiendo del supuesto que con la doble instancia se pretende reforzar la idoneidad y justeza de la decisión dictada, ello también puede lograrse, en principio, cuando es un tribunal colegiado quien la dicta. (Vid. Entre otras sentencias la Nº 2661/25.10.2002 y 5031/15.12.05).

Por otra parte, el derecho a recurrir supone, necesariamente, la anterior previsión legal de un recurso o medio procesal destinado a la impugnación del acto, ya que no toda decisión judicial dentro del proceso puede ser recurrida. Ello atentaría, también, contra la garantía de celeridad procesal y contra la seguridad jurídica y las posibilidades de defensa que implica el conocimiento previo por los litigantes de las reglas procesales. El derecho a la doble instancia requiere entonces del preestablecimiento legal de la segunda instancia, así como del cumplimiento por quien pretende el acceso a ella, de los requisitos y presupuestos procesales previstos en la ley aplicable"

El anterior criterio, reiterativo de la decisión previa núm. 2661 del 25 de octubre de 2002 (caso: Thaís Gloria Molina Casanova), asienta el esquema procedimental instaurado, al determinar dentro de su enfoque que no pueden haber procedimientos de primera y única instancia en el contencioso administrativo. Tal conclusión comprende la extensión del derecho al debido proceso entendido como uno de los distintos principios e instituciones que integran y dan sustancia a la noción de orden público constitucional, por cuanto aquél es el que permite articular válidamente conforme a la Constitución, las etapas, formas, actos y fines que componen e informan a todos y cada uno de los diferentes procedimientos judiciales que habrán de ser empleados por los justiciables cuando requieran de los órganos jurisdiccionales la tutela de sus derechos e intereses (vid. s.S.C. núm. 2807/2002, del 14 de noviembre).

El sentido de lo expuesto comprende la operatividad del principio previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo contexto se exige el cumplimiento pleno del mandato de optimización, con plena vigencia frente a cada asunto en concreto donde se aplique, en su sentido lógico, todas las garantías que estructuren la correcta idoneidad de los modelos procedimentales cuyo objeto sea la de integrar, racionalmente, la correcta aplicabilidad de las instituciones relativas a la Teoría General del Proceso, tanto en su modo, como en su adecuación.

Este ejercicio de cada uno de estos esquemas deben estar siempre referidos a la exigencia de la disposición del artículo 257 constitucional *"El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales"*; por lo que toda causa judicial debe estar debidamente estatuida por razones de seguridad jurídica, y los preceptos que aseguran la preexistencia de las formas procesales deben cumplir con una adecuación lógica y proporcional que tutelen integral y eficazmente los derechos de los individuos. En palabras de esta Sala (s.S.C. 2807/2002, del 14 de noviembre, reiterada en decisión 429 del 5 de abril de 2011), se indicó:

"Esta disposición constitucional, además de insistir en la naturaleza instrumental simple, uniforme y eficaz que debe observar todo proceso judicial llevado ante los Tribunales de la República, establece de manera clara y precisa que el fin primordial de éste, es garantizar a las partes y todos los interesados en una determinada contención, que las decisiones que se dicten a los efectos de resolverlo no sólo estén fundadas en Derecho, en atención a lo alegado y probado en autos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva de quien haya demostrado su legítima pretensión en el asunto a resolver".

Como se indicó, en aplicación del Texto Constitucional, la Sala ha establecido la preeminencia de la doble instancia en el contencioso administrativo, eliminando el conocimiento de juicios en único grado de la causa con la expresa salvedad de aquellas materias adjudicadas directamente a la Sala Político Administrativa. Sin embargo, este asunto no es equiparable al caso de autos, a todo evento de que el planteamiento efectuado es acerca de si una tercera instancia puede ser considerada inconstitucional; o si en verdad se está ante la presencia de un verdadero medio de impugnación, tal como lo aseveraron las representaciones judiciales de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General de la República.

En el Derecho Procesal la doctrina se ha debatido entre inclinar y asumir posiciones relacionadas con la distensión que se plantea entre quienes defienden

la concentración de los procedimientos en defensa de la tutela judicial efectiva, ejemplificando las ventajas de una instancia única que resuelva con rapidez los asuntos sometidos ante la jurisdicción; pensamiento que se encuentra en contraposición con quienes sostienen una identificación garantista (amparados en una doble instancia), reflejada en el ejercicio de recursos que permitan una mejor manifestación del debido proceso y también de la tutela judicial efectiva, pero entendida en términos de mejor certeza sobre el asunto juzgado, procurando, en la medida de lo posible, una correcta subsunción del fallo en relación con la situación jurídico sustantiva.

Esta Sala debe proceder al estudio de todas las previsiones normativas que preceptúan el recurso especial de juridicidad, para los cual, debe analizar la primera disposición contenida en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual estimó la creación del referido medio adjetivo: *"La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, revisar las sentencias definitivas..."*; el empleo del verbo que opera como núcleo rector del tipo normativo tiene una connotación en nuestro país propia e inherente en el ámbito del derecho procesal constitucional, por ser la *revisión* una garantía adjetiva que el Constituyente creó y confirió, con carácter de exclusividad, en el régimen de potestades de esta Sala Constitucional, en atención a lo dispuesto en el artículo 330, cardinal 6: *"Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva"*.

La representación judicial de la Asamblea Nacional especificó, con mayor detalle, un potencial carácter casacional de forma y fondo que sería el verdadero sentido del recurso especial de juridicidad. Al respecto, atendiendo bien al sentido invocado por los apoderados judiciales, lo aseverado en el escrito de informes no puede equipararse a una voluntad del marco normativo requerido por el Legislador. Si esa hubiese sido la intención, se habría previsto la implementación de un auténtico recurso de casación, con los presupuestos de procedencia que le corresponden, sea en la propia Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o mediante una remisión expresa al Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, esta Sala observa un vacío en el Capítulo IV del Título IV de la Ley, al no prever taxativamente las causales que darían lugar a la interposición y consecuente análisis del recurso especial de juridicidad. En su contexto, no se establece de modo alguno los límites de control que deberían regir a este medio adjetivo, específicamente, sobre qué vicios, deficiencias y violaciones daría lugar a la impugnación y consecuencia anulación de la sentencia; indeterminación que, a su vez, hace imposible estimar si efectivamente se trata de una tercera instancia. Tal inobservancia genera un problema desde la perspectiva de la validez y eficacia de las normas que conforman esta incipiente institución; su ambigüedad e indeterminación en su alcance da lugar a entender que su amplitud es sumamente vasta, con una aplicabilidad que no solo podría adoptar la función nomofiláctica de la casación; abarca también la potestad de revisión constitucional, al no preceptuarse las causales que darían lugar a la nulidad de los fallos.

La falta de previsión normativa de los supuestos de procedencia establece una contravención al principio de legalidad sobre las formas procesales (art. 156.32 CRBV), al pretenderse, por falta de regulación y delimitación, un medio impugnativo o de gravamen, cuya auténtica naturaleza tampoco puede precisarse debido a su indeterminación, dado que, en sus efectos, contraviene tanto el régimen de competencias de esta Sala Constitucional, en materia de revisión, como otros principios fundamentales de índole procesal constitucional. El conferimiento de una potestad dentro de los parámetros de la revisión, como lo menciona el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dan a entender que el recurso especial de juridicidad invade la función de control de esta Sala Constitucional y estaría generando una doble revisión a través de distintas Salas, infringiendo las potestades exclusivas determinadas en el artículo 336 constitucional.

Claro señalamiento de esto se manifiesta en el criterio expuesto en la decisión núm. 00997 dictada el 20 de octubre de 2010 por la Sala Político ...ro que el recurso especial de juridicidad debe ser ...a siguiente manera:

> *"De lo antes expuesto, se observa que para proceder a verificar la admisión del recurso especial de juridicidad, esta Sala deberá examinar la concurrencia de requisitos objetivos contenidos en la normativa transcrita, los cuales constituyen las causales generales de admisibilidad, además de las previstas en el artículo 35 de la referida ley, en cuanto sean aplicables. Por lo tanto, para su admisión se requiere que el recurso: 1) sea ejercido mediante solicitud de la parte interesada, 2) verse sobre "sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que transgredan el ordenamiento jurídico" o se pronuncie sobre la destitución de jueces y juezas, 3) que se incoe ante el tribunal que dictó la sentencia, dentro de los diez días de despacho siguientes a su publicación, y 4) que con ocasión a su anuncio se haga mención expresa de las normas violadas en la sentencia.*
>
> *No obstante lo anterior, se advierte que dada la amplitud de los supuestos en que dicho recurso podría interponerse y por cuanto no constituye una tercera instancia, debe atenderse a la potestad discrecional otorgada por el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa cuando dispone "podrá". Por lo tanto, la Sala considerará de manera restrictiva su admisibilidad, en los casos de cuyo análisis preliminar se evidencie la presunción grave de trasgresión del ordenamiento jurídico, que pueda alterar el orden público y afectar de nulidad la sentencia recurrida.*
>
> *Ello obedece a que este recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de la causa, a través de la cual la parte interesada pretenda la modificación de una decisión desfavorable a su pretensión. Es una facultad excepcional que permite a la Sala revisar las posibles violaciones legales que vicien la validez de la decisión objeto del recurso de juridicidad, con el fin primordial de mantener la uniformidad de los criterios que emitan los órganos judiciales con competencia en materia contencioso-administrativa y así garantizar sus principios"*.

El sentido considerado por la Sala Político Administrativa en función de *"...la amplitud de los supuestos en que dicho recurso podría interponerse..."* y aquel referente a *"...debe atenderse a la potestad discrecional otorgada por el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa cuando dispone 'podrá' "*; así como el señalamiento relacionado con *"Es una facultad excepcional que permite a la Sala revisar las posibles violaciones legales que vicien la validez de la decisión objeto del recurso..."*; sumados a la ausencia de lapsos para la interposición, permiten entender que existe una completa identidad entre la potestad de revisión constitucional y el recurso especial de juridicidad que atentaría contra la estructura procesal, y la correlación que debe existir entre el control constitucional y los medios impugnativos inherentes a los jueces de la legalidad, todo lo cual atenta contra el principio constitucional de celeridad previsto en el artículo 26 constitucional.

A diferencia de lo que puede ocurrir en casación, huelga decir que esta institución histórica, suficientemente enraizada y estructurada en nuestro país, tiene su correcta delimitación en las normas adjetivas que la determinan; aspecto que se repite en lo referente a una correcta demarcación de los supuestos en materia de la denominada *revisión penal* (art. 462 COPP), que si bien, tiene la misma denominación de la revisión constitucional, es un medio impugnación estrictamente condicionado por los supuestos previstos el referido artículo, sin que proceda otra causal más allá que aquellas expuestas imperativamente.

Los medios impugnativos antes mencionadas entendidos como garantías y remedios preliminares destinados a solventar anomalías tutelables dentro del ámbito de la Teoría General de los Recursos, por su carácter legal y su efectividad no permiten entender que los mismos sean equiparados ni elevados al rango de los mecanismos directos proplamente dichos de la protección de derechos y principios fundamentales, como ocurre en el caso de la revisión constitucional, potestad única de control de esta Sala cuya finalidad persigue la incoluminidad del Texto Fundamental. La naturaleza del poder discrecional de supervisión en protección de la Constitución constituye un elemento que diferencia sustancialmente a esta institución de las demás garantías procesales, tanto ordinarias como extraordinarias.

Incluso, en lo que a este punto se refiere, esta Sala rebajó el poder de control de la Casación en materia laboral, al dejar sin efecto el supuesto de hecho del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, respecto a *"Los Jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia"* (s.S.C. 1264 del 1 de octubre de 2013; caso: Henry Pereira Gorrín). En esa decisión se acordó la nulidad del citado texto por considerarse invasivo en lo que a ese punto se refiere, por haberse extendido el poder de la Casación hacia el ámbito competencial de esta Sala Constitucional, contrario al artículo 335 constitucional; nulidad que, inclusive, se basó en otro precedente de esta Sala (s.S.C. 1380 del 29 de octubre de 2009; caso: José Martín Medina López), cuando se especificó que el artículo 177 de la LOPT *"...es contrario a lo dispuesto en el artículo 335 de la Carta Magna al pretender obligar o vincular a los sujetos de instancia a que sigan la doctrina de Casación, siendo que las únicas decisiones que tienen tal carácter vinculante son las dictadas por esta Sala..."*.

La posición que ha mantenido la jurisprudencia constitucional es que exista una correcta delimitación de los recursos dentro de los supuestos precisos de procedencia, sin que exista invasión de competencias –lo que no debe confundirse con el control incidental constitucional que ejercen los recursos- sea por disposición expresa –como ocurrió en el supuesto del artículo 177 de la LOPT- sea por falta de establecimiento de supuestos expresos de procedencia, cuya imprecisión genera una aplicación indeterminada capaz de vulnerar potencialmente las competencias de esta Sala Constitucional, tal como se ha señalado en este fallo, y que podría especificarse también en la posición asumida por la doctrina (VESCOVI, 1988): *"Así, como hemos dicho, se puede partir de la base de que el medio impugnativo extraordinario es aquel que, por salirse de la normalidad, sólo se concede en casos extremos, se rodea de formalidades especiales, se refiere a causales taxativamente numeradas y determina, en el órgano decisor, facultades excepcionales, lo que significa que, a la vez de ser restrictivas, son, por otro lado, muy profundas"*.

La ausencia de supuestos de procedencia y la presencia de un ámbito de control tan amplio como lo expone el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: *"La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud de parte, revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que transgredan el ordenamiento jurídico"*; aunado a la connotación de *revisión* dado al recurso especial de juridicidad y sumado al carácter de *"potestad discrecional"* y *"facultad excepcional"* (s.SPA 997/2010, referida anteriormente), permiten determinar que existe una completa identidad entre el recurso especial de juridicidad y la potestad de revisión constitucional inherente a esta Sala Constitucional, siendo elementos que, en su conjunto, traen como consecuencia la invasión de las competencias establecidas en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Como consecuencia de lo anterior, esta Sala observa que los términos en que se pretende establecer el recurso especial de juridicidad también atentan contra el *principio de singularidad de los recursos*, en el sentido señalado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil: *"...el principio de la singularidad del recurso indica que en cada caso corresponde un recurso y no puede ser impuesto sino uno por vez. Es una consecuencia del sistema de legalidad de los recursos, en el sentido de que los medios impugnativos deben estar determinados por la Ley, y cuando corresponda uno, normalmente no se admitirá el otro..."* (s.S.C. núm. 143 del 22 de mayo de 2001; caso: Félix Simón Torres Blanco).

El establecimiento del recurso especial de juridicidad mimetiza en su objeto y alcance a la revisión constitucional, subrogando las potestades de control de esta Sala Constitucional, y generando un desequilibrio, no solo por la invasión de competencia antes señalada, sino por interponer como carga para los justiciables, el ejercicio de otro medio recursivo que se confunde con la potestad de control de esta Sala prevista en el artículo 336.10 constitucional. Establecer un medio procesal de idéntica función contraviene el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al pretender un desvío del juez natural constitucional y atentando contra la celeridad procesal. Desde este ámbito, no solo vulnera la estructura constitucional de la función jurisdiccional, también influye negativamente en los derechos y garantías de los ciudadanos. Desde ambas perspectivas, la implementación del recurso especial de juridicidad, en los términos en que se propone, debe ser considerado inconstitucional.

Dentro de este contexto también debe tenerse en cuenta la posición de la Sala de Casación Social. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no estima la aplicabilidad del recurso especial de juridicidad con respecto a las competencias contencioso administrativas eventuales que ejerce esa Sala, sino que limita su ejercicio a nombre de la Sala Político Administrativa (vid. art. 95), y no considera las atribuciones contencioso especiales en materia agraria y laboral, tal como puede observarse que la decisión 311/2013 dictada por la referida Sala, quien en la actualidad se encuentra pendiente de resolver varios de estos recursos y ha manifestado su improponibilidad por razones de temporalidad hasta tanto se dice decisión definitiva con respecto al presente recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido. Para ello, esa Sala ha declarado sostenidamente lo siguiente:

> *"Ahora bien, visto que la improponibilidad del recurso de juridicidad deviene de la suspensión acordada por la Sala Constitucional en sentencia número 1.1149 de 17 de noviembre del año 2010, y considerando que la presente causa fue intentada el 4 de agosto de 2011, esta Sala de Casación Social aplica el cambio de criterio a la causa bajo examen, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos"*.

Debe considerar la Sala que la amplitud que tiene la implementación de este recurso abarca más allá de las competencias y estructuras ordinarias del contencioso administrativo general, teniendo efectos incidentales en la Sala de Casación Social y en un universo de justiciables quienes no tienen certeza acerca de la factibilidad de interponer en esa instancia el recurso especial de juridicidad, o

si simplemente están sometidos al ámbito de la casación que maneja esa instancia, esto último, si se atiende a la posición de los informes presentados por la Asamblea Nacional y la Procuraduría General de la República que sostienen que el recurso de juridicidad en realidad implementa la institución de la casación para el contencioso administrativo.

Así entonces, al violentar la normativa impugnada los principios y normas constitucionales relacionados con el ámbito competencial de esta Sala Constitucional, se declara la nulidad con efectos *ex tunc* los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que pierden validez, tanto la norma que estipuló la conformación del referido recurso, como todas las disposiciones relativas a su procedimentalización. En lo que respecta al artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala estima que vistos los términos en que se plantea la nulidad de las normas precedentes, resulta pertinente declarar también la nulidad de la disposición atributiva de competencia del mencionado instrumento adjetivo debiendo entenderse también la pérdida de validez y eficacia, ambas entendidas con efectos *ex tunc* y sin que haya existido alcance alguno del aludido precepto en cuestión. Así se decide.

En función de la anterior decisión, esta Sala debe considerar dentro de los efectos del fallo el planteamiento expresado por el abogado representante de la parte demandante, ciudadano José Rafael Navas, en su escrito consignado el 3 de mayo de 2012, en el que denunció:

> *"La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental 'D' y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia incumplen y desacatan el mandato cautelar, ordenado por esta honorable Sala, al haber aplicado el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no obstante estar cautelarmente suspendido y por ello sin efectos".*
>
> [...]
>
> *"Mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2011 (que anexamos marcado 'A'); ante la interposición del Recurso de Juridicidad presentado por dos de las partes perdidosas Tamanaco Suite I, C.A. y otros; la Corte Primera Accidental 'D', desacatando el mandato cautelar de suspensión de efectos antes citado, ordenó la remisión a la Sala Político Administrativa de la totalidad del expediente AP42-R-2010-000918. En efecto, mediante oficio N° D-0008 del 12 de diciembre de 2011 (que anexamos marcado 'B'), a decir de la Corte Primera Accidental 'D': 'de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa' [...]".*
>
> *"Ciudadanos Magistrados, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental 'D' ni ningún otro tribunal de la República está facultado para aplicar el suspendido artículo 97 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tampoco la Sala Político Administrativa puede recibir el expediente y designar ponente para que decida dicha causa teniendo como sustento legal de dicha remisión el suspendido artículo 97 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Las normas que regulan la interposición, remisión, admisión, tramitación y decisión del recurso especial de Juridicidad no surten efectos al encontrarse, reiteramos, suspendidas por efecto del mandato cautelar dictado por esta honorable Sala Constitucional".*
>
> [...]
>
> *"La remisión del expediente AP42R-2010-000918 en virtud de la interposición del Recurso de Juridicidad ha producido retardos al orden procesal del juicio, tal como alertamos en varias oportunidades a la Corte Primer de lo Contencioso Administrativo Accidental 'D'. Sobre la aplicación de las normas que crean el Recurso de Juridicidad [...]".*
>
> *"En efecto, al haberse remitido el expediente, se hizo imposible la ejecución de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2011 dictada por la Corte Primera Accidental 'D', por cuanto la Sala Político Administrativa actualmente en casos similares, conserva los enviados expedientes y así paraliza las causas al decidir 'diferir' los pronunciamientos de los Recursos de Juridicidad hasta tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie de manera definitiva en el Recurso de Nulidad por inconstitucionalidad [...]" Todo esto se evidencia de las sentencias de la Sala Político Administrativa antes reseñadas, ambas que acompañadas marcadas con las letras 'E' y 'F'".*
>
> *"La Sala Político Administrativa en las decisiones antes reseñadas, ambas de fecha 03 de noviembre de 2011, y luego de la suspensión cautelar del Recurso de Juridicidad, ha decidido en circunstancias procesales similares a las que hoy ocurre en esta causa, diferir el pronunciamiento sobre la decisión del Recurso de Juridicidad Interpuesto; es decir, suspendido el Recurso de Juridicidad por sentencia de eta Sala Constitucional, la Sala Político Administrativa aplicando el suspendido el [sic] artículo 97 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha decidido diferir su propio pronunciamiento sobre el Recurso de Juridicidad para el momento en que sea decidido por esta Sala Constitucional la impugnación por inconstitucionalidad que se presentó contra dicho Recurso de Juridicidad. De este modo la Sala Político Administrativa conserva inconstitucionalmente el expediente respectivo y con ello paraliza de hecho la causa en que se dictó sentencia contra la que se pretendió el Recurso de Juridicidad. En nuestro caso, al haberse enviado a la Sala Político Administrativa el expediente y causa donde fue dictada la sentencia por parte de la Corte Primera Accidental 'D', en aplicación de la disposición del artículo 97 suspendido por esta Sala Constitucional, se producen efectos suspensivos plenos sin que ninguna ley o recurso los establezca. La señalada causa en la que se emitió sentencia definitiva no puede ser en este momento ejecutada, lo que implica una vía de hecho de la Sala Político Administrativa y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental 'D' que impiden la tutela judicial efectiva. Este efecto de hecho es justamente el que predijimos, y la situación es hoy aún peor, no corre actualmente lapso procesal alguno, la cusa [sic] está virtualmente 'congelada', y con ello se nos coloca en incertidumbre e inseguridad que violenta elementales y sagrados derechos constitucionales procesales. Así este Recurso de Juridicidad produce en este causa efectos suspensivos plenos luego de haber transcurrido dos instancias íntegras".*

Al respecto, el representante de la recurrente consignó copia simple de la sentencia 00481 publicada el 9 de mayo de 2012 por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. En esa decisión se acordó lo siguiente con respecto a la causa contencioso administrativa en la cual HOTEL TAMANACO, C.A. es parte recurrente:

> *"[...] previo a cualquier pronunciamiento, debe advertirse que respecto al mencionado recurso, el cual se encuentra consagrado en el Capítulo IV del Título IV atinente a 'Los Procedimientos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa' (artículos 95 al 102) de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal acordó '...la suspensión de las normas [que desarrollan el recurso especial de Juridicidad] y, en consecuencia, la inaplicación del [mismo]...'.*
>
> *En efecto, con ocasión a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad incoada conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la representación de la sociedad mercantil Hotel Tamanaco C.A., contra los artículos 18, 23 (numeral 18), 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal mediante sentencia N° 1149 publicada en fecha 17 de noviembre de 2010, señaló lo siguiente:*
>
> [...]
>
> *En orden a lo expuesto en la sentencia antes transcrita, esta Sala Político-Administrativa difiere el pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso especial de Juridicidad de autos, hasta tanto la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal dicte la decisión de mérito que resuelva el fondo de la demanda de nulidad interpuesta o cese le medida de suspensión de efectos decretada contra los artículos 18, 23 (numeral 18) y del 95 al 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Vid. sentencia SPA N° 01211 del 6 de octubre de 2011). Así se decide.*
>
> IV
> DECISIÓN
>
> *Sobre la base de los razonamientos antes expresados, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Se DIFIERE el pronunciamiento respecto a la admisibilidad del recurso especial de Juridicidad interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil TAMANACO SUITE 1, C.A. y el ciudadano WILLIAMS HERNÁNDEZ COVA, contra la sentencia N° D-2011-000001 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Accidental 'D' el 19 de octubre de 2011, hasta que la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal dicte la decisión de mérito que resuelva el fondo de la demanda de nulidad interpuesta o cese la medida de suspensión de efectos decretada contra los artículo 18, 23 (numeral 18) y del 95 al 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa".*

Sobre este particular, la Sala Constitucional en su decisión 1149, del 17 de noviembre de 2010, acordó la suspensión de los artículos que prevén el recurso especial de juridicidad por lo que no pueden hacerse efectiva su normativa hasta que se dicte la presente decisión que ahora decide el fondo de la pretensión.

La orden impartida por esta Sala trae por consecuencia que no pueda tramitarse ni emitirse pronunciamiento al fondo de ninguno de los recursos que se encuentren en estado de sentencia pues el alcance de la protección cautelar suponía declarar la prejudicialidad o improponibilidad del recurso especial de juridicidad para aquellos interpuestos con posterioridad, sin que pudiera interpretarse el dispositivo acordado como la posibilidad de que se emitieran decisiones que, por el contrario a lo deseado, incurrieran en una absolución de la instancia al suspenderse, a condición, la función decisoria.

Por tanto, lo conducente en este caso es que aquellas causas que hayan sido decididas en los términos expuestos por parte de la Sala Político Administrativa sean objeto de un nuevo pronunciamiento declarando

expresamente la culminación y que se den por terminadas totalmente su tramitación desde el punto de vista de la fase cognitiva del juicio y se pase a su fase de ejecución –en aquellos supuestos donde se tenga a bien a su realización- con la consecuente remisión del expediente a sus instancias de origen.

Por ende, se declara *con lugar* la demanda de nulidad interpuesta. Se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial con el siguiente intitulado: *"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la nulidad de los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en materia del recurso especial de juridicidad"*. Así se decide.

VI
DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara **CON LUGAR** la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por abogado José Amando Mejía Betancourt en su condición de representante judicial de **HOTEL TAMANACO C.A.** contra los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 del Título IV, Capítulo IV, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En consecuencia:

PRIMERO: ANULA los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

SEGUNDO: ANULA el artículo 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

TERCERO: ORDENA a la Sala Político Administrativa dicte nueva decisión, declarando la culminación del procedimiento y su consecuente remisión al tribunal del origen, sobre todas aquellas causas que haya declarado el diferimiento de pronunciamiento. Asimismo, aquellos expedientes que se encuentren pendiente de decisión por el mismo motivo deben ser enviados a su instancia correspondiente con las consecuencias que correspondan a la fase de tramitación que le atañe, de ser procedente su continuación.

CUARTO: ORDENA la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, con el intitulado: *"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la nulidad de los artículos 23.18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en materia del recurso especial de juridicidad"*.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de abril dos mil catorce. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

Vicepresidente,

FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp.- 10-1039

[redacted]

IV-0170

N° 278.

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente N.° 11-0038

El 13 de diciembre de 2010, se recibió Oficio n.° 10-2540 remitido por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual se remitió el *"Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad"* incoado por los ciudadanos **JULIO CÉSAR DÍAZ VALDEZ** y **ROMÁN GEORGE AZIZ TUFIC**, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.387.571 y 13.452.444, respectivamente, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 146.634 y 84.072, en el mismo orden, actuando en sus propios nombres, así como también en su carácter de apoderados judiciales de la **CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL ESTADO BOLÍVAR**, asociación civil inscrita por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Heres de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 27 de septiembre de 1968, bajo el N.° 51, Tomo 05, Protocolo Primero, tercer trimestre de ese año; y procediendo el segundo en su carácter de representante judicial de **INVERSIONES TRINIVEN S.A.**, sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 1° de febrero de 2001, bajo el N.° 11,

Tomo 16-A, contra los artículos 6, 12, numeral 14; 48, parágrafo primero; 51, parágrafo único; 117, parágrafo único; e ilegalidad de los artículos 11, 12, parágrafo primero; 99, parágrafos primero, segundo y tercero; 101, parágrafos primero y segundo; 102, parágrafos primero y segundo; y 103, parágrafos primero y segundo de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 0328 del 23 de noviembre de 2009. Dicho Oficio fue remitido en virtud de la decisión dictada por ese Juzgado Superior en fecha 22 de noviembre de 2010, en la cual se declaró incompetente para el conocimiento de la presente causa, por lo cual declinó la competencia en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El 11 de enero de 2011 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.

El 24 de febrero de 2011, Julio César Díaz Valdez y Román George Aziz Tufic, en su condición de accionantes, acudieron a esta Sala Constitucional a los efectos de insistir en la urgencia de la procedencia de la medida cautelar solicitada en el escrito de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad.

El 3 de octubre de 2012, los abogados Larry Devoe Márquez, Jesús Antonio Mendoza Mendoza y Eneida Fernández Da Silva, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 93.897, 41.755 y 79.059, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la Defensoría del Pueblo, en resguardo de los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en el artículo 26 constitucional, y *"(...) sin ánimo de pronunciarse en cuanto a la presunta inconstitucionalidad"*, solicitaron a esta Sala Constitucional se pronuncie sobre la admisión o inadmisión de la presente causa.

El 31 de octubre de 2012, los abogados Julio César Díaz Valdez y Román George Aziz Tufic, en su carácter de autos, acudieron a esta Sala Constitucional a los efectos de insistir en la urgencia de la procedencia de la medida cautelar solicitada en el escrito de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad.

Mediante sentencia n.° 144 del 26 de marzo de 2013, esta Sala se declaró competente para conocer de la acción de nulidad ejercida, admitió la misma y acordó parcialmente la medida cautelar y, en consecuencia, se suspendieron los efectos del cardinal 14 del artículo 12 de la Ordenanza bajo análisis, el cual establece: "*Para quienes realicen actividades económicas bajo la denominación de servicios profesionales, la base imponible estará constituida por los ingresos brutos que se generen por concepto de honorarios, en ocasión de la prestación de servicios, no se consideran servicios, los prestados bajo relación de dependencia*"; así como del clasificador de actividades económicas incorporados al final de la Gaceta donde fue publicada La Ordenanza, bajo los códigos de actividad 22-15 y 22-16, denominadas *'Personas Naturales que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades'* y *'Personas Jurídicas que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades'*; así como la obligación de obtener licencia por parte de quien realice actividades profesionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de La Ordenanza en cuestión.

Constituida esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 8 de mayo de 2013, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

El 4 de junio de 2013, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional expidió el cartel de emplazamiento de los terceros interesados, el cual fue retirado el 11 de junio de 2013, por el abogado Julio César Díaz Valdez, actuando en su carácter de autos.

Mediante escrito consignado el 12 de junio de 2013, el abogado Román George Aziz Tufic, ya identificado, consignó la publicación del cartel de emplazamiento efectuada el 12 de junio de 2013, en el Diario "El Nacional".

El 18 de septiembre de 2013, el abogado Jesús Roberto Villegas Montero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 148.442, actuando en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, consignó escrito de alegatos respecto a la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad.

Mediante escrito entregado el 8 de octubre de 2013, la abogada Elena Ángela González Piña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 100.437, actuando en su condición de Síndica Procuradora Municipal del Municipio Heres del Estado Bolívar, consignó sus respectivos alegatos respecto a la acción ejercida.

El 8 de octubre de 2013, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia del vencimiento del plazo para la presentación de escritos, establecidos en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 17 de octubre de 2013, en virtud de la licencia otorgada al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Magistrado Juan José Mendoza Jover, como Vicepresidente, y los Magistrados: Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos, según consta del Acta de Instalación correspondiente.

El 30 de octubre de 2013, el Juzgado de Sustanciación visto el vencimiento del lapso -8 de octubre de 2013- para que las partes consignaren los escritos de defensa o promovieran pruebas, y constatado que no fue promovida prueba alguna, se ordenó la remisión del expediente a la Sala Constitucional, a los fines de la continuación del procedimiento.

El 7 de noviembre de 2013, se dio por recibido del Juzgado de Sustanciación el expediente a los fines del pronunciamiento correspondiente y se reasignó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Antonio Francisco Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I
DE LA ACCIÓN POPULAR DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD

La parte actora pretende la declaratoria de nulidad de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar emitida por el Concejo Municipal del Municipio Heres del estado Bolívar, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinario N.° 0328, el 23 de noviembre de 2009, por cuanto *"(...) han visto mermados sus derechos legales [y] vulneradas sus garantías constitucionales, siendo en consecuencia gravemente afectados en sus intereses particulares por la entrada en vigencia de La (sic) Ordenanza objeto del presente recurso, cuando establece una definición, contraria a derecho, de lo que debe entenderse por 'Ingresos Brutos Efectivamente Percibidos'; cuando impone un período de imposición fiscal distinto al establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; cuando tipifica sanciones pecuniarias y clausura de establecimientos de manera desproporcionada, mayores en algunos casos a las establecidas en el Código Orgánico Tributario, y con inobservancia de los procedimientos y formalidades legales para la notificación de dichos actos; cuando concede a los funcionarios de la Administración Pública poderes discrecionales para la corrección inmediata de las declaraciones a criterio del funcionario receptor, en flagrante violación de derechos fundamentales y de principios y garantías constitucionales (...), y en evidente contravención de lo expresamente establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. De la misma manera se han visto afectados los profesionales independientes de las diferentes áreas (médicos, contadores, abogados, administradores, ingenieros, etcétera), cuando dicha Ordenanza considera gravable las actividades de carácter civil realizadas por los profesionales bajo la denominación de 'Servicios Profesionales', sin el más mínimo pudor en el desacato del cuadro normativo constitucional"* (Negrillas del original).

En tal sentido señalaron:

1.- La inconstitucionalidad e ilegalidad de pretender tomar los ingresos brutos no cobrados como base imponible del impuesto a las actividades económicas, ya que la Ordenanza bajo análisis, en su artículo 6, señala que *"[s]e entiende por Ingresos Brutos efectivamente percibidos todos aquellos proventos y caudales que se devenguen aún cuando no hayan sido cobrados dentro del periodo fiscal a declarar"*; lo cual *"(...) lesiona, sin lugar a dudas, el derecho que tienen los contribuyente de contribuir según la capacidad económica o contributiva establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo 316 establece: 'El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas Públicas (sic) según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos"*.

Que *"(...) se infiere claramente, que las disposiciones constitucionales limitan la imposición exagerada de cargas tributarias que sobrepasan la capacidad económica de un sujeto frente al órgano del Estado, que en su afán de que concurran los particulares con los gastos públicos, dejan a un lado el elemento principal revelador de enriquecimiento, como lo es la obtención de la renta generada solamente por los ingresos. Pechar ingresos sin que éstos hayan sido percibidos por el sujeto, obliga a éste a responder con su patrimonio, lo que se traduce en confiscatoriedad del tributo, situación expresamente prohibida por nuestra Constitución"*.

Que "[l] *a base imponible, entendida como magnitud susceptible de una expresión cuantitativa definida por la ley [haciendo referencia al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal], que mide alguna dimensión económica del hecho imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto a los efectos de la liquidación del impuesto (Diccionario de Derecho Tributario 2006 - Efraín Sanmiguel, pág. 133), es la cantidad sobre la cual debe aplicarse la alícuota del impuesto, cantidad constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos por el ejercicio de las actividades gravadas. Es un índice, un parámetro de medición. La expresión 'efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente' significa que sólo serán objeto de gravamen los ingresos brutos causados y cobrados en dicho período y no como pretende la ordenanza de gravar los ingresos brutos no cobrados"*.

2.- La inconstitucionalidad de gravar los ingresos por servicios profesionales, ya que el artículo 12, numeral 14 de la Ordenanza bajo análisis, al señalar que se aplicará: "[p]*ara quienes realicen actividades económicas bajo la denominación de servicios profesionales, la base imponible estará constituida por los ingresos brutos que se generen por concepto de honorarios, en ocasión de la prestación de servicios, no se consideran servicios, los prestados bajo relación de dependencia"*.

Señalan al respecto que *"[c]onforme a lo estatuido en este artículo se pretende pechar los ingresos brutos producto de las actividades de servicios profesionales; es decir, los que ejercen profesiones acreditados por un título de educación superior [Abogados (sic), Contadores (sic), Ingenieros (sic), Médicos (sic), etc.] que se hace aun más patente en el clasificador de actividades económicas incorporados al final de la Gaceta donde (sic) fue publicada La (sic) Ordenanza, bajo los códigos de actividad 22-15 y 22-16, denominadas 'Personas Naturales que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades' y 'Personas Jurídicas que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades', respectivamente"*.

Que esa disposición *"(...) considera base imponible del Impuesto (sic) a las Actividades Económicas (sic) los ingresos brutos que se realicen bajo la denominación de servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades, [y] los califica como sujetos pasivos en calidad de contribuyente, tal y como se desprende del artículo 8 de La (sic) Ordenanza, cuyo tenor es: Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes: 1. Las personas naturales o jurídicas y las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio o tengan autonomía funcional, que realicen una o varias de las actividades gravadas en esta Ordenanza, en jurisdicción del Municipio Heres. (...) En virtud de ello, al ser gravables los Ingresos Brutos (sic) provenientes de la actividad profesional, <u>están obligados a obtener previamente una licencia provisional o patente</u> dichos profesionales, lo cual constituye, según lo dispone el artículo 22 de La (sic) Ordenanza, un acto administrativo mediante el cual el Municipio autoriza al titular, la instalación y ejercicio en el sitio, establecimiento o inmueble determinado"* (Subrayado del texto).

Señalaron que *"(...) la disposición del numeral 14 del artículo 12 invade la reserva legal establecida en el artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reserva al Poder Nacional la regulación y disciplina de las profesiones que requieran título"*, así como la *"(...) Disposición Transitoria Decimo Quinta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela"*.

Que *"(...) el impuesto de patente, hoy impuesto a las Actividades Económicas (sic) tradicionalmente, ha gravado sólo el ejercicio de actividades comerciales e industriales o de índole similar en jurisdicción de un determinado Municipio. También tradicionalmente el ejercicio de actividades profesionales (medicina, contaduría, abogacía, ingeniería, educación, etc.) no ha sido gravado con este impuesto, por considerarse (y así expresamente las califican los diferentes textos legales especiales en la materia de cada profesión) actividades eminentemente de carácter civil. La intención de nuestro legislador constitucional (sic) cuando incluye en su artículo 179 la palabra 'servicios', lo que persigue es abarcar actividades que si bien no están definidas necesariamente como actos objetivos de comercio, sin embargo, por el desarrollo doctrinal y jurisprudencial puedan ser consideradas como actos comerciales con arreglo al concepto de los llamados actos subjetivos de comercio, concepto que por razones históricas y por los textos legislativos no se extienden a los profesionales liberales o independientes"*.

Que *"[l]as actividades comerciales e industriales gravadas con la patente municipal deben entenderse en su cabal acepción económica, es decir, según el significado de los vocablos industria y comercio en la ciencia económica, los cuales comprenden modernamente los servicios industriales y comerciales. En tal sentido, la expresión 'índole similar' contenida en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución y utilizada en La (sic) Ordenanza, denotaría la extensión de los conceptos económicos utilizados, calificados por su carácter industrial o comercial, por lo que en sana lógica jurídica no podrían referirse a cualquier actividad calificable como 'servicio' por la prevalencia de la prestación de hacer, como las actividades profesionales civiles o las actividades sin fines de lucro, porque en tal caso se desbordaría la limitación de la asignación de las fuentes de ingresos"*.

3.- La necesidad de garantizar el debido proceso a través del desarrollo normativo del procedimiento administrativo y así evitar las ambigüedades referidas a la determinación y liquidación del referido tributo, ya que el artículo 48 de la Ordenanza bajo análisis establece que: *"Los sujetos pasivos a que se refiere esta Ordenanza deberán presentar la declaración de Ingresos Brutos Anual (DIBA) correspondiente, dentro de los NOVENTA (90) días continuos siguientes a la fecha de cierre fiscal del contribuyente, por cada una de la actividades o ramos a que se refiere el Clasificador de Actividades Económicas (sic), en la cual la Dirección de Hacienda Municipal o el ente para tal fin, determinará y liquidará el monto del impuesto municipal correspondiente, y se informará para que el contribuyente proceda al pago, en las oficinas receptoras de impuestos municipales que la Alcaldía designe. Parágrafo Primero (sic): El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la Administración Tributaria Municipal. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración. Los pagos realizados fuera de la fecha indicada en este Parágrafo (sic), incluso los provenientes de ajustes y reparos se consideraran extemporáneos y generaran los intereses moratorios y sanciones previstos en esta Ordenanza. Así como el artículo 51 de la misma Ordenanza establece: El monto del impuesto previsto en esta Ordenanza, se determinará y pagará de la siguiente manera:(...) Parágrafo Único (sic): Los datos suministrados en la declaración anual por el contribuyente, sólo se considerarán como un indicador y que podrán servir de base para el cálculo y fijación provisional del impuesto a pagar del año siguiente, y para la determinación de la capacidad contributiva del contribuyente en el lapso que declaró, a los fines de calcular el ajuste impositivo anual. Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, difiere del procedimiento establecido en esta ordenanza, la administración tributaria o los funcionarios que ésta designe, procederá a la corrección inmediata"* (Mayúsculas del original).

Al respecto señalaron que *"[e]s indiscutible cómo el contenido de estas disposiciones violan el Derecho a la Defensa (sic) y al Debido Proceso (sic) de los contribuyentes del Municipio Heres, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también atenta contra los artículos 177 y siguientes del Código Orgánico Tributario y desarrollado por la Jurisprudencia (sic) de los Tribunales (sic) de la República"*.

Que *"[n]o establece el artículo 48 arriba transcrito, por ante quién debe consignarse la Declaración de Ingresos Brutos Anual (DIBA) (...) [lo que] permite realizar*

a la autoridad municipal (...) arbitrariedades, con las consiguientes consecuencias lesivas de derechos y principios constitucionales y legales que en nuestro Municipio Heres ha originado".

Que *"[d]icho artículo 48 de La (sic) Ordenanza establece como lapso para presentar las declaraciones, los noventa (90) días continuos siguientes a la fecha de cierre fiscal del contribuyente (...) lo cual constituye una franca contradicción con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que dispone que el período fiscal de este tributo Coincidirá (sic) con el año civil y los ingresos gravables serán los percibidos en ese año"* (Subrayado del original).

Que *"[c]onforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, (...) 'el período impositivo de este impuesto coincidirá con el año civil', lo cual tal y como arriba se explicó, corresponde del 1° de Enero (sic) al 31 de Diciembre (sic) de cada año; es decir, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal no deja a discreción de las Ordenanzas Municipales (sic) establecer el período impositivo, sino que dicha ley lo impera"* (Negrillas del original).

Que *"[n]o obstante, el artículo 11 de La (sic) Ordenanza contradice lo establecido en el artículo 204 citado, debido a que discrimina el año civil común al del contribuyente, y lo define como 'el período fiscal indicado en su registro estatutario o registro mercantil'. Es importante destacar que el período o giro económico de las empresas lo convienen los socios u accionistas a su libre arbitrio, haciendo uso del pleno derecho de libertad económica, privando en ello la libre voluntad de los accionistas en el momento de constitución o modificación estatutaria de la empresa, tal y como lo disponen los artículos 213 y 214 del Código de Comercio vigente, razón por la cual las fechas del cierre del ejercicio económico tiende a ser diferente, e indubitablemente puede o no coincidir con el año civil"* (Negrillas del original).

Que *"[e]l legislador municipal confunde el deber formal de declarar el impuesto previsto en el artículo 48, con el deber material de pagarlo (...) [ya que] la Ordenanza no distingue entre el momento de declarar el impuesto y el momento de pagarlo, hecho que pone en completo y absoluto estado de indefensión a los administrados, en tanto en cuanto, en la práctica, no es sino hasta que el empleado de la empresa privada PROYECTOS INTEGRADORES, C.A., receptor de la declaración, determina y liquida el impuesto correspondiente, que le es devuelta la planilla de la Declaración Jurada al contribuyente"* (Mayúsculas del original).

Que de acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, *"(...) en el caso de las declaraciones, las mismas se presumen ciertas (Juris (sic) tantum), no obstante, como ya lo manifestamos y está destacado en la inspección judicial supra citada, las declaraciones del impuesto a las actividades económicas, en la práctica, son sometidas a una suspensión (sin mediar constancia de que se está presentando tal declaración) hasta que un empleado de la empresa privada encargada del 'proceso de determinación y liquidación' verifique si los datos suministrados por el contribuyente son ciertos, con potestades incluso de modificar tal declaración, de considerar dicho empleado receptor que la declaración no es fidedigna, sin que exista un acto administrativo formal, empeorando más aún la situación de indefensión del contribuyente, cuando a todas estas no se tiene como cumplida la obligación de declarar sino hasta tanto se emita el recibo de liquidación correspondiente y éste sea pagado por el sujeto pasivo, truncando la posibilidad para el contribuyente de ejercer las acciones de defensa consagradas en el artículo 49 de la Carta magna, en los casos que difiera de la determinación que este ciudadano realizó, o simplemente existan ingresos que no sean gravables según el criterio del contribuyente, pero lo sea según el de la persona o ente encargado por parte del sujeto activo"* (Subrayado del original).

Que *"[l]a determinación y liquidación del impuesto, según lo dispuesto en este artículo 48, está reservado para la Dirección de Hacienda Municipal o el ente para tal fin; no obstante, carece de un procedimiento administrativo claro y garante de los derechos del administrado (artículo 51)".*

Que *"[e]l artículo 48 de La (sic) Ordenanza (...), exige que los contribuyentes de este tributo deban 'presentar la declaración de Ingresos Brutos Anual (DIBA)' y luego dispone que 'la Dirección de Hacienda Municipal o el ente para tal fin, determinará y liquidará el monto del impuesto municipal correspondiente. Ahora bien, si lo que persigue La (sic) Ordenanza es que el ente municipal sea quien determine y liquide el impuesto a las actividades económicas, entonces debe garantizarse el debido proceso en sus articulados, con prevalencia de las garantías y principios constitucionales, como lo es el principio contradictorio. La determinación abarca la liquidación, y en efecto, se ha concebido a la liquidación como el último paso de la determinación, consistiendo la misma en la cuantificación de la obligación a través de la aplicación de la alícuota a la base imponible"* (Subrayado del original).

Que *"[e]l procedimiento administrativo constituye un cauce formal de una serie de actos que se siguen unos a otros, los anteriores condicionando la validez de los ulteriores, dirigidos a originar un acto jurídico definitivo que materialice la voluntad de la administración, representando, simultáneamente en su discurrir, una garantía en sí mismo, de los derechos del administrado. Es importante señalar, que aún en los casos en que la administración (sic) actúe según su prudente arbitrio, debe mantener su actuación ajustada a ciertos parámetros legales; así, si bien es cierto que La (sic) Ordenanza otorga al ente administrativo la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de los deberes formales y materiales (artículo 79), ello no implica que para esos casos la administración (sic) pueda escapar a las formalidades legales correspondientes".*

Que *"(...) el parágrafo único del artículo 51 de La (sic) Ordenanza, al establecer que el funcionario procederá a la corrección inmediata en la práctica, constituye una arbitrariedad, violatoria del debido proceso y denegación de justicia, pues esta corrección la realiza la persona o funcionario, modificando la declaración del contribuyente sin que medie un acto administrativo que permita al contribuyente recurrirlo y plantear los argumentos que a bien tenga ejercer y demostrar, con sus respectivos plazos y oportunidades, lo cual se hace imposible dada la inmediatez de la corrección que impone La (sic) Ordenanza, inaudita parte, inmotivada y sin acto administrativo alguno que refleje la actuación del funcionario"* (Subrayado del original).

Que *"[e]l vicio normativo de La (sic) Ordenanza, se pone de relieve, cuando su imprecisión legislativa permite que en la práctica todo ello (expresamente aclarado por nuestro máximo Tribunal en cuanto a la incompetencia que resultaría del funcionario) sea realizado ni siquiera por un funcionario público sino, como agravante de esta serie de vicios prácticos desprendidos de La (sic) Ordenanza, por un empleado de una empresa privada (Proyectos Integradores C.A.) a la cual el Municipio Heres delegó la fiscalización, gestión y recaudación de sus tributos".*

4.- La desproporcionalidad y ausencia de formalidades en la tipificación de las sanciones, producto de lo establecido en el artículo 117, parágrafo primero, en el cual se establece que: *"Los actos que produzcan efectos particulares, emanados de órganos o funcionarios indicados en esta Ordenanza, deberán ser notificados al sujeto pasivo para que tengan eficacia. Las notificaciones se practicarán en la forma prevista en el Código Orgánico Tributario, excepto los casos previstos en esta Ordenanza, y deberán contener el texto íntegro de la respectiva resolución, indicando si el acto es o no es definitivo, los recursos a intentar, así como las instancias ante los que hubiere de presentarse, los plazos para imponerlos y los requisitos de pago o afianzamiento que en su caso, deben cumplir los contribuyentes. Cuando la notificación no sea practicada personalmente, sólo surtirá efectos después del décimo (10) día hábil siguiente de ser verificada. Parágrafo Único (sic): Se exceptúan de las formalidades previstas en este Capítulo, las órdenes de cierre de negocios por las causales previstas en los artículos 99°, 101°,102°,103°, 104°, 107° y 127° de esta ordenanza, las cuales podrán ejecutarse de inmediato, sin perjuicio de que la parte afectada ejerza su recurso".*

En tal sentido, señalan que denuncian *"(...) la inconstitucionalidad del Parágrafo Único (sic) del artículo 117 de La (sic) Ordenanza, toda vez que suprime la Notificación (sic) a que se refiere el encabezamiento del artículo, a cualquier sujeto afectado por la aplicación de algunas de las sanciones de cierre previstas en la Ordenanza; y siendo la notificación el elemento que comporta la eficacia de los Actos Administrativos (sic) por naturaleza, pues a partir de la misma los interesados se hacen parte en el debido proceso, tal supresión deja al sujeto en estado de indefensión, sin capacidad para ejercer los recursos de defensa necesarios, lo que constituye una violación flagrante del artículo 49 del (sic) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".*

Que, en ese sentido, *"(...) toda actuación de la Administración Pública (sic), en cualquiera de sus manifestaciones (por ende se incluye la Administración Municipal) (sic), requiere de un procedimiento para llevarse a cabo y exteriorizarse, especialmente cuando ello comporta, de una u otra forma, una limitación, reducción o extinción de un derecho en cabeza del administrado. La aplicación de la pena de clausura no puede ser la excepción, y es por ello que el Código Orgánico Tributario prevé un procedimiento de imposición para*

tal pena, en virtud de lo cual (...), no puede exceptuar La (sic) Ordenanza los efectos de la notificación en los ilícitos formales so pena de violación al debido proceso consagrado en nuestra carta magna y ser además contrario a lo dispuesto en los artículos 162 y 163 del Código Orgánico Tributario".

Que *"[e]s así flagrante (...), la violación a los artículos que más adelante se enumeran, y al procedimiento legal y constitucionalmente previsto para que sea aplicado por la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones, cuando el parágrafo único del artículo 117 establece que 'se exceptúan de las formalidades previstas en este Capítulo (refiriéndose a la notificación), las órdenes de cierre de negocios (...)".*

Que *"[n]o cabe duda de que (sic) ante el acto de cierre inmediato del establecimiento con ausencia absoluta de notificación del sujeto pasivo, se vulnera esta garantía constitucional, dejándola sin efecto, y aun cuando el artículo 117 establece al final de su parágrafo único sin perjuicio de que la parte afectada ejerza su recurso, ello se convierte en letra muerta (...), en tanto en cuanto para ejercer un recurso requiero del acto administrativo objeto de impugnación, que a falta de notificación no existirá, y no conocerá el sujeto pasivo las razones que motivaron el cierre para efectos de esgrimir sus argumentos de defensa".*

Que *"[p]or otra parte, es reiterada la doctrina que define a la clausura de establecimientos como una pena impeditiva que evita la utilización de ciertos inmuebles, en los cuales debe cesar la actividad (Héctor Villegas); y siendo así la clausura considerada una pena, implica en su caracterización jurídica, necesariamente, su sujeción a los principios fundamentales del Derecho Penal, como rama de la ciencia jurídica que regula el derecho del estado de castigar las conductas contrarias al ordenamiento que lesionan bienes jurídicos tutelados, y que son castigados –precisamente- con penas. A nuestros efectos, los lesionados por La (sic) Ordenanza son los siguientes: 1) La reserva de ley, que implica que la clausura puede únicamente ser establecida en una ley formal (aquellas a las que se refiere el artículo 202 de la Constitución) en garantía de lo establecido en el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución; 2) La proporcionalidad, toda vez que la pena debe responder en forma racional y proporcionada a la entidad del mal causado por el hecho ilícito; 3) Inejecutabilidad de la pena con carácter previo a su declaratoria como definitivamente firme: las penas, en tanto tales, son consecuencias jurídicas únicamente aplicables a aquellos sujetos que, en forma definitiva, son catalogados como culpables por la comisión de un determinado ilícito, en razón de lo que –y por aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia– se relaja el principio de ejecutabilidad y ejecutoriedad de los actos administrativos para impedir la ejecución del acto que impone la pena de clausura hasta que éste queda definitivamente firme; y 4) Mínima intervención y ultima ratio: el Derecho Penal es un derecho contingente y excepcional, que constituye la última respuesta de ordenamiento al quebrantamiento de su orden, y no una medida que puede utilizarse alegremente como mecanismo de presión para el cumplimiento de determinados objetivos"* (Resaltado del original).

Que *"[a]unado a todas estas razones de derecho (...), de orden constitucional, a la falta de proporcionalidad entre la pena de clausura o cierre y las faltas previstas en La (sic) Ordenanza que las motivan, con el agravante de que se omite el acto de notificación, y cuya desproporcionalidad se hace más evidente en casos como: sacar la Carta Patente o informar algún cambio fuera del plazo (núm. 2 y 3 art. 99); declarar fuera del plazo o en formato no autorizado (núm. 2 y 4 art. 101); no exhibir la Carta Patente perfectamente visible (núm. 2 art. 102); pagar con retraso los tributos (art. 107); y a las razones de derecho que de orden legal abordaremos en el próximo capítulo, es que solicitamos a su competente autoridad la nulidad del Parágrafo (sic) único del artículo 117 de La (sic) Ordenanza".*

Por su parte, en cuanto a la ilegalidad de distintas normas contenidas en la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar emitida por el Concejo Municipal del Municipio Heres del estado Bolívar, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinario N.° 0328, el veintitrés (23) de noviembre del año 2009, señalan que:

1.- El artículo 12, parágrafo primero de la Ordenanza establece que: *"A los efectos de esta Ordenanza se entiende por ingresos brutos, todos los proventos y caudales que de manera regular, accidental o extraordinaria, recibe una persona natural, jurídica, entidad o colectividad que constituya una unidad económica, disponga de patrimonio o tenga autonomía funcional, que ejerza actividades industriales, comerciales, de servicios o de índole similar, por cualquier causa relacionada con las actividades a que se dedique, siempre que su origen no comporte la obligación de restituirlo en dinero o en especie, a las personas de quienes los ha recibido o a un tercero y que no sean consecuencia de un préstamo o de un contrato semejante"* (Negrillas del original).

Que la mencionada disposición, *"(...) que se refiere a la constitución de la base imponible, abarca dentro del concepto de los ingresos todo provento o caudal recibido de manera accidental o extraordinaria, contraviniendo los artículos 204 y 210 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal vigente, que al definir qué se entiende por hecho imponible e ingresos brutos respectivamente, ratifica el carácter de habitualidad que deben poseer las actividades en territorio del Municipio"* (Negrillas del original).

Que *"[l]a habitualidad ha sido vinculada con la presencia permanente o continua en el territorio del municipio exactor, pero como lo señala la doctrina especializada, debe asociarse más bien con el carácter ordinario, constante y prolongado en el tiempo de la actividad que realiza el contribuyente y que deja entender que esa es su actividad económica usual. No obstante, a la hora de calificar el carácter habitual de determinada actividad, no debe mirarse sólo la prolongación en el tiempo con que ésta se lleva a cabo, sino que la misma forme parte del giro comercial del contribuyente".*

Que *"(...) por lo anterior, quedan excluidos todos los ingresos que de forma eventual, accidental o extraordinaria pudiera obtener el contribuyente, tal como lo dejó asentado nuestra jurisprudencia en el caso Envases Internacional, S.A. Vs. (sic) Concejo Municipal del Distrito Guácara (sic) del Estado Carabobo, en decisión del 25 de Enero (sic) de 1989, del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte"* (Subrayado del original).

Y que *"(...) más recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de Julio (sic) de 2010, Expediente N° 1999-16407, con ponencia de la Dra. Yolanda Jaimes Guerrero, dejó claro, en referencia a los ingresos no continuos o periódicos dentro de la actividad comercial del contribuyente, que éstos no forman parte del Impuesto a las Actividades Económicas"* (Negrillas del original).

2.- En cuanto al artículo 99 parágrafos primero, segundo y tercero; artículo 101 parágrafos primero y segundo; artículo 102 parágrafos primero y segundo; artículo 103 parágrafos primero y segundo; artículo 104 parágrafo único; y, el artículo 107 de la Ordenanza impugnada, señalan que *"(...) contienen supuestos de hechos de ilícitos formales, cuyas consecuencias jurídicas implican sanciones flagrantemente desproporcionadas con el ilícito normativo, viciadas además por sobrepasar los límites establecidos en el Código Orgánico Tributario para la imposición de penas, y en consecuencia, en franca contravención con el mismo".*

Que *"[e]n el capítulo de los Ilícitos Formales (sic), La (sic) Ordenanza contiene disposiciones sancionatorias a los ilícitos tributarios que consisten en CLAUSURAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS, pena o sanción esta completamente desproporcionada con la falta que se pretende sancionar, tal y como más adelante se demuestra, toda vez que la pena debe responder en forma racional y proporcional a la entidad del mal causado por el hecho ilícito. La clausura de establecimiento es una de las penas principales aplicables por la comisión de ilícitos tributarios, de conformidad con lo establecido en el Artículo (sic) 94 numeral 4 del Código Orgánico Tributario; como quiera que ella es únicamente aplicable a ilícitos tributarios formales, la autoridad que tiene atribuida la competencia para imponerla es la Administración Tributaria"* (Mayúsculas del original).

Que *"[n]o dudamos en afirmar que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al establecer que la cuantía y proporción de las sanciones establecidas en ordenanzas no pueden exceder de las previstas en el Código Orgánico Tributario, protegió fundamentalmente las garantías fundamentales de la proporcionalidad o razonabilidad y de no confiscatoriedad, quebrantadas muy frecuentemente por las Ordenanzas Municipales (sic) al momento de establecer las sanciones por ilícitos tributarios".*

Que *"[e]n este marco de referencia, es evidente como la normativa contenida en los Parágrafos Primero, Segundo y Tercero (sic) del artículo 99, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 101, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 102, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 103, de La (sic) Ordenanza todas, contravienen la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en tanto y en cuanto suponen la sanción de clausuras de los establecimientos en situaciones similares a las previstas en el Código Orgánico Tributario, y que el mismo no las sanciona con tamaña pena, con todas las consecuencias y perjuicios que de ella dimanan, especialmente en el perjuicio*

económico para el sancionado, por hechos que no lesionan efectivamente el bien jurídico tutelado".

Que *"[e]n efecto (...), inscribirse en los registros de contribuyente o responsables del IMAE (sic) fuera del plazo establecido (Artículo (sic) 99); no proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria Municipal informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio o actualización (Artículo (sic) 99); presentar con retardo o fuera del plazo la DIBA (Artículo (sic) 101); no exhibir, en un lugar perfectamente visible del establecimiento, la carta patente (artículo 102); no proporcionar información que sea requerida, dentro de los plazos establecidos (Artículo (sic) 103), no implican en modo alguno que la Administración Tributaria Municipal pierda la posibilidad de ejercer efectivamente sus facultades de control; la información está presente, puesta a disposición de la Administración de fiscalizar el cumplimiento de la obligación material, fin último de las competencias que en la materia tiene la Administración. No hay afectación al bien jurídico tutelado, por lo que en consecuencia no hay ilícitos en estos casos, resultando así la pena de clausura completamente irracional y desproporcionada en estos supuestos".*

Que *"[p]or otra parte (...), La (sic) Ordenanza genera una situación de inseguridad e incertidumbre jurídica, cuando a través del parágrafo segundo del artículo 99 pretende sancionar con cierre temporal, el haberse inscrito en el registro de contribuyente fuera del plazo; esto quiere decir (...), que si un contribuyente se inscribe por ejemplo, un día después de vencido el plazo establecido en La (sic) Ordenanza (3 meses posteriores a la inscripción del RIF) (sic), quedará sujeto 'indefinidamente' a que en cualquier momento, ante una fiscalización o procedimiento de verificación, le sea clausurado el establecimiento por cuanto este hecho (...), no es subsanable, y al no tener certeza el contribuyente del destino de su situación fiscal frente al municipio, estará siempre a la expectativa de ser cerrado, colocándole en una especie de limbo jurídico, atentatorio contra el principio de Seguridad Jurídica (sic) que debe caracterizar toda gestión administrativa propia de un verdadero Estado de Derecho".*

Que *"[l]o mismo sucede en el caso del parágrafo segundo del artículo 101, cuando a través de él La (sic) Ordenanza pretende sancionar con cierre temporal del establecimiento o hasta que solvente la situación fiscal con el municipio, el haber presentado con retardo o fuera del plazo la declaración anual de ingresos Brutos (sic), con la agravante de que esta norma faculta al municipio a suspender las actividades del contribuyente 'hasta tanto no solvente la situación'; esto quiere decir (...), que si un contribuyente declaró por ejemplo, un día después de vencido el plazo establecido en La (sic) Ordenanza, pudiera ser cerrado de manera 'permanente', toda vez que no habrá forma de subsanar el hecho de haber declarado fuera del plazo, por estar esta exigencia basada en un factor efímero-temporal, sujeta así a la invariabilidad cíclica y sucesiva del tiempo".*

Que *"[m]ás contundentemente excesivo aún resulta lo dispuesto en el artículo 107 de La (sic) Ordenanza (...), en cuanto castiga con pena de clausura o cierre, el incumplimiento de un 'deber material' como lo es el pago del impuesto, cuando el mismo se realiza fuera del plazo (...), que siendo el Código Orgánico Tributario un cuerpo normativo continente de las distintas tipologías de tributos (nacionales, sobre la renta, licores, IVA, etcétera), prevé sanciones de cierre exclusivamente para la parte de impuestos indirectos (en nuestro caso el Impuesto al Valor Agregado), y en los casos de incumplimiento de pago o pago con retraso, simplemente se sanciona con multa y la generación de intereses moratorios sobre el capital adeudado; no obstante ello (...), la Alcaldía del Municipio Heres pretende sancionar a través de La (sic) Ordenanza en el Impuesto a las Actividades Económicas (que no constituye un impuesto indirecto) con orden de cierre del establecimiento, además de todas las sanciones pecuniarias de multas e intereses moratorios, violentando así flagrantemente lo expresamente prohibido por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en tanto en cuanto establece la imposibilidad tributaria municipal de superar las sanciones previstas en el Código Orgánico Tributario".*

Requirieron que *"[c]on fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en concordancia con lo establecido en el artículo 130 (anterior artículo 19 Párrafo 11) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respetuosamente solicitamos a este competente Tribunal, que mientras se sustancie y decida en forma definitiva el presente recurso, **acuerde medida cautelar –con efectos erga omnes– a favor de los miembros de la Cámara de Comercio e Industria del Municipio Heres del Estado Bolívar, comerciantes y contribuyentes del Municipio Heres en general y profesionales liberales, y suspenda, en consecuencia, los efectos de los Artículos (sic): 6, 11, Ordinal (sic) 14 y Parágrafo Primero (sic) del artículo 12, 48 y su Parágrafo Primero (sic), Parágrafo Único (sic) del Artículo (sic) 51, 52, Parágrafos Primero, Segundo y Tercero (sic) del artículo 99, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 101, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 102, Parágrafo Primero y Segundo (sic) del artículo 103, 107, 117 y su Parágrafo Único (sic), y los Códigos del Clasificador (sic) de actividades económicas identificados con los números 22-15 y 22-16 denominados 'Personas Naturales que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades' y 'Personas Jurídicas que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades', todas contenidas en la Reforma Total Ordenanza de Impuestos a las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, cuya anulación se pretende mediante esta acción"* (Negrillas del original).

Finalmente, en apoyo a su pretensión de tutela cautelar, la parte actora afirmó que en *"(...) relación con la presunción de buen derecho (...), ella deriva, por una parte, de la reserva contenida en el artículo 105 de la Constitución, conforme a la cual es exclusivo del Poder Público Nacional (sic) establecer el régimen vinculado al ejercicio de las profesiones liberales y de la Disposición Transitoria Decimoquinta Constitucional (sic), que mantiene vigente el ordenamiento jurídico aplicable antes de la Constitución, hasta tanto se apruebe la ley especial; por otra parte, de la norma contenida en el artículo 179, numeral 2 de la Constitución, que sólo se refiere a actividades industriales y comerciales, excluyendo a las profesiones liberales dado su carácter esencialmente civil. En este sentido, indudablemente, los clasificadores de actividades económicas cuya nulidad se demanda, ciudadano Juez, transgreden tales límites constitucionales al arrogarse la potestad tributaria de gravar y establecer un nuevo régimen para el ejercicio de las profesiones liberales".*

Del mismo modo *"[t]ambién alegan como demostración de buen derecho, la prohibición expresa en el numeral 4 del artículo 162 del Código Orgánico Tributario, de que las multas e infracciones excedan a las contempladas en dicho Código; y más aún nuestro tan consagrado derecho a la defensa y al debido proceso, que constituyen garantías constitucionales fundamentales y que tal y como se expuso (...), La (sic) Ordenanza esquematiza sus procedimientos con inobservancias de los mismos".*

En cuanto al requisito del *periculum in mora*, señalaron que el mismo *"(...) podría quedar determinado por la sola verificación del requisito anterior, tal como lo estableció la Sala Constitucional del máximo Tribunal* (sic), *en la frecuentemente invocada sentencia Nº 4311/2005, pues sólo la circunstancia de que exista una presunción grave y tan contundente de violaciones constitucional* (sic) *y legales, conduce a la convicción que debe preservarse ipso facto la integridad de los textos constitucionales y legales, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a los comerciantes, contribuyentes y profesionales liberales del Municipio Heres, y miembros de nuestra representada. Pero más aún, en el caso de narras está presente también el periculum in mora en el sentido clásico de daños de difícil reparación, toda vez que se trata del cobro de impuestos por ingresos brutos aún no percibidos; por servicios profesionales que son eminentemente de carácter civil, tratadas como actividades económicas, además de imposición de sanciones, reparos o diferencias sin que medie el debido proceso y en detrimento del derecho a la defensa"* (Subrayado del original).

Asimismo, expusieron que de no acordarse la medida cautelar solicitada, se pudiera *"(...) causar un gravamen irreparable (...) para todos los contribuyentes y profesionales liberales del Municipio, pues se verían obligados a pagar un impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole Similar (sic) que es, a todas luces, inconstitucional e ilegal. Ello afectaría directamente el patrimonio de los mismos y el desarrollo normal de sus actividades lucrativas, al exigírsele un pago indebido y no permitirles el derecho a recurrir eventuales errores de la Administración Tributaria Munteipal bien en la calificación del aforo por parte del ente recaudador, o bien en el monto calculado e impuesto a pagar por la Administración misma, como requisito sine qua non para entonces aceptar recibir la respectiva declaración. Además, es un hecho notorio y así lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que la institución del reintegro tributario no funciona debidamente en nuestro país, por lo que de procederse al pago de los citados conceptos no sólo representaría un sacrificio y un esfuerzo económico por parte de los afectados arriba determinados, sino que su recuperación o reintegro oportuno es incierto. Por lo tanto, son evidentes los perjuicios que se les pueden causar en caso de no acordarse la medida cautelar solicitada (...). Por*

otra parte, en el caso de los comerciantes del Municipio Heres, aún y cuando puedan eventualmente obtener la devolución de lo pagado, es indudable que el pago repercutirá negativamente en sus patrimonios, e incluso en el encarecimiento de sus productos".

Por su parte, en cuanto a la ponderación de intereses, señalaron que *"[l]a desaplicación de las normas impugnadas no sólo se ve amparada por la verificación de los extremos antes analizados, sino que además ella no implica una merma sustancial de los ingresos municipales a obtener por la vía de estos tributos y, en consecuencia, una mínima afectación respecto del financiamiento de los servicios públicos que les compete encarar al Municipio cuyo ordenamiento ha sido cuestionado. Ello es así porque la suspensión solicitada sólo está referida –dentro del amplio espectro de actividades tributables– a los clasificadores específicamente referidos al ejercicio de las profesiones liberales, y a los artículos que contienen el procedimiento de declaración y pago (y no pago en sí) del impuesto a las Actividades Económicas, y a los ya suficientemente señalados, y sólo en lo que a ellos específicamente se refiere".*

II
DEL ESCRITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El 18 de septiembre de 2013, el abogado Jesús Roberto Villegas Montero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 148.442, actuando en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República en atención a la notificación ordenada por esta Sala el 4 de junio de 2013, consignó escrito de alegatos respecto a la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad, mediante el cual expuso:

Respecto a las denunciadas de ilegalidad expusieron que "(...) *no pasará* (...) *a pronunciarse sobre las mismas dado que* (...) *es exclusivo de la Jurisdicción Constitucional la confrontación directa del acto de rango legal con el Texto Constitucional y a tal efecto es clara la Constitución al señalar competencias expresas a la Sala Constitucional de declarar la nulidad total o parcial de textos de rango legal cuando colidan con la Constitución*".

En relación a la denuncia de presunta inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ordenanza impugnada exponen que "(...) *los términos percibir y recibir en las normas tributarias municipales para definir los ingresos brutos no están referidos al dinero efectivamente cobrado y enterado en caja, sino que debe entenderse como aquel monto causado o facturado aunque no haya sido cobrado de manera inmediata, es decir, que cuando la Ordenanza se refiere a la categorización de ingresos brutos efectivamente percibidos establece que dentro de la misma se encuentran comprendidos incluso los que no hayan sido cobrados dentro del período fiscal a declarar, se aclara que cuando se alude a los vocablos recibir o percibir los mismos no necesariamente implican el hecho de tener el dinero efectivamente ingresado en caja, sino que debe entenderse como aquel dinero que está devengado o causado, es decir, el ingreso que ha sido facturado, independiente a que no haya sido cobrado de manera inmediata o de contado*".

Que "(...) *el artículo denunciado establece la posibilidad de que se entienda por ingresos brutos efectivamente percibidos aquellos proventos y caudales que se devenguen aún cuando no hayan sido cobrados dentro del período fiscal a declarar, lo cual advertimos desde un punto de vista contable no implica una relación de identidad con la expresión efectivamente cobrados, ya que los ingresos brutos tal como lo definen los principios de contabilidad generalmente aceptados corresponden a las ventas facturadas y no a las cobranzas realizadas. Los ingresos efectivamente percibidos son aquellos productos de la facturación mediante la cual la propiedad se transfiere al comprador, incluso aún cuando la mercancía no haya sido entregada o no esté en posesión del adquirente siendo de esa forma que no existe ningún fundamento para entender que percibir es recibir dinero*".

Que "(...) *en el sentido en el cual está expresado en la ordenanza, efectivamente percibido, o realmente percibido, y de acuerdo con la terminología contable para los ingresos brutos, éstos están efectivamente percibidos cuando se devengan aunque no se cobren de inmediato, en ese sentido no se trata de que el legislador haya querido imponer cargas fiscales exorbitantes ya que los tributos así establecidos atienden estrictamente a los ingresos brutos efectivamente percibidos, y como ya vimos, ello desde el punto de vista contable no está directamente relacionado a la expresión efectivamente cobrado en razón de lo cual solicitamos a esa Sala que así lo aprecie y en consecuencia desestime el presente alegato de inconstitucionalidad*".

En relación al artículo 12 de la Ordenanza exponen que el "(...) *objeto del impuesto de patente sobre industria y comercio es toda actividad industrial, comercial o de índole similar, ejercida con fines de lucro, donde el hecho imponible o hecho generador del impuesto lo constituye el ejercicio con fines lucrativos de una industria y comercio en el territorio de un Municipio, y la base imponible de los ingresos brutos o el monto de las ventas o de las operaciones de industria o comercio efectuadas (capital), al tomarse tal elemento como índice para medir la actividad lucrativa. Dicho esto, nada obsta para que sean gravadas las actividades prestadas con ocasión de servicios profesionales ya que la normativa constitucional no específica en su redacción si cualquier tipo de servicio prestado está sujeto a imposición, o si es necesario, por el contrario atender a la naturaleza jurídica del servicio prestado y, en particular, al objeto mercantil o civil que el mismo pueda tener*".

En cuanto a la presunta violación del derecho a la defensa y al debido proceso de los artículos 48 parágrafos primero y segundo y parágrafo único del artículo 51 de la Ordenanza, expusieron que dichos derechos se encuentran garantizados al consagrarse en la referida normativa "(...) *en primer lugar, el órgano competente de liquidar el impuesto correspondiente representado por la Dirección de Hacienda Municipal aún y cuando de manera subsidiaria expresa la posibilidad de que sea otro ente, es esa Dirección y no otro órgano el establecido por la Ordenanza para determinar y liquidar el monto del impuesto municipal correspondiente* (...)".

Igualmente alegan que del artículo 48 de la Ordenanza "(...) *se desprende el requerimiento que sea la Dirección de Hacienda Municipal quien determine y liquide el monto del impuesto municipal correspondiente, en ese sentido el contribuyente sabe quien es el órgano, la forma y manera que debe pagar el tributo, el lapso del cual dispone, y en el caso de que los pagos se hagan por ante una persona distinta a la Dirección de Hacienda Municipal deberán efectuarse a nombre de la Alcaldía del Municipio Heres con lo cual siempre el destinatario va a ser el Municipio Heres lo cual quiere decir que el Municipio siempre va a ser el sujeto activo de la relación tributaria y en virtud del cual la ley faculta para administrar y percibir el tributo* (...)".

Asimismo, respecto a la presunta inconstitucionalidad del artículo 117 eiusdem, exponen que "(...) *si bien es cierto que la notificación es el elemento que comporta la eficacia de los actos administrativos no es menos cierto que la sanción de cierre temporal comporta una medida preventiva en el marco del procedimiento de verificación que realiza la Administración Municipal constituyéndose en un acto que persigue el cese de la continuidad de los incumplimientos a los deberes formales por parte de cualquier persona natural o jurídica y por tanto no se puede asumir que la falta de notificación daría lugar a un supuesto de indefensión puesto que iría en contra de su naturaleza que es la del carácter de urgencia con el cual se adoptan estas medidas lo cual a su vez implica que se dicten de manera inmediata en un procedimiento sumarísimo que impida la continuidad de los incumplimientos y todo ello significaría asumir una versión estrictamente formalista del procedimiento administrativo*".

Que "(...) *la Ordenanza recurrida lo que dispone en su articulado es el establecimiento* (sic) *de cierres temporales que en nada lesionan el derecho a la defensa y al debido proceso puesto que lo que sí sería atentatorio a ello sería* (sic) *si la Ordenanza establecería* (sic) *cierres indefinidos, que repetimos no es el caso además de que los cierres previstos en la Ordenanza tienen su justificación en la Ordenanza en el incumplimiento por parte del particular de los ilícitos formales que la misma consagra. Finalmente visto que no contiene tampoco el contenido de la norma disposiciones genéricas o ambiguas toda vez que el particular puede saber muy bien cuál es la autoridad competente de imponer la respectiva sanción en este caso el Director o Directora de Hacienda Municipal, cuando se configura la infracción administrativa que da lugar a la sanción siendo de esta manera improcedente también el alegato de violación al derecho a la defensa en razón de lo cual encuentra esta representación debe ser desestimado el presente alegato* (...)".

Finalmente, solicita que la presente acción de inconstitucionalidad sea declara sin lugar.

III
DEL ESCRITO DEL SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR

Mediante escrito consignado el 8 de octubre de 2013, la abogada Elena Ángela González Piña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 100.437,

actuando en su condición de Síndico Procurador Municipal del Municipio Heres del Estado Bolívar, consignó sus respectivos alegatos, en los cuales expuso:

Que "(...) *la Ordenanza recoge los términos efectivamente percibidos o realmente percibidos de acuerdo a la terminología contable para los ingresos brutos, ya que los tributos así establecidos atienden estrictamente a los ingresos brutos efectivamente percibidos por el contribuyente, por consiguiente alegar que la Ordenanza establece una definición contraria a derecho de lo que debe de entenderse por Ingresos Brutos efectivamente percibidos, resulta improcedente* (...)".

Que "[l]*a Ordenanza Municipal bajo análisis, en su artículo 12, numeral 14, indica que la base imponible para los que ejercen actividades económicas bajo la denominación de servicios profesionales, estará constituida por los ingresos brutos que se generen por concepto de honorarios, en ocasión de la prestación de servicios, hecho éste a fin con el objeto de la Ordenanza de Industria y Comercio de nuestro Municipio. En tal sentido la Ordenanza al medir la actividad lucrativa del servicio profesional prestado bajo la denominación de profesionales no subordinados a una relación laboral su base imponible será los ingresos que generen por concepto de honorarios, lo que está en sintonía con el hecho de que los profesionales liberales obtengan lucro o beneficios económicos desarrollando una actividad económica es motivo suficiente para que en vista de su capacidad contributiva colaboran* (sic) *con los gastos municipales del mismo modo que lo hacen los comerciantes e industriales, por consiguiente solicitamos se declare lo improcedente del presente alegato*".

Que "(...) *la ordenanza bajo análisis, en su artículo 48 garantiza dicho derecho a los contribuyentes del Municipio Heres del Estado Bolívar, estableciendo en primer lugar el órgano competente en liquidar el impuesto correspondiente en su caso está representado por la Dirección de Hacienda Municipal, expresando la posibilidad de que sea otro órgano u ente, es esa Dirección y no otro órgano el establecido por la ordenanza para determinar y liquidar el monto del impuesto municipal correspondiente, siendo la indicada oficina administrativa quien pone a disposición los formularios que previamente autoriza y elabora la Dirección de Hacienda Municipal, igualmente señala el pago deberá efectuar* (sic) *en el lugar y la forma que indique la administración tributaria municipal. Como se puede observar del artículo anteriormente indicado, el contribuyente sabe quién es el órgano, la forma y manera que debe de pagar el tributo, el lapso del cual dispone y en el caso que el pago se haga por ante una persona distinta a la Dirección de Hacienda Municipal deberán efectuarse a nombre de la Alcaldía del Municipio Heres, con lo cual siempre el destinatario será el Municipio Heres como sujeto activo de la relación tributaria, por consiguiente no resulta procedente alegar indefensión en el presente caso* (...)".

Con respecto a la disposición contenida en el artículo 117 de la Ordenanza exponen que "[l]*a sanción a que hace referencia la Ley local es de cierre temporal como una medida preventiva, hecho éste perfectamente permitido de aplicar en el marco de procedimiento de verificación que realiza la administración tributaria del Municipio Heres, lo cual persigue un cese a la continuidad de los incumplimientos a los deberes formales por parte del contribuyente, en consecuencia pretender alegar que la falta de notificación en este tipo de medidas de carácter preventivo daría lugar a un supuesto estado de indefensión iría en contra de la propia naturaleza de carácter cautelar de urgencia, situación esta que no lesiona el derecho a la defensa y debido proceso del contribuyente, el cual cuenta con los recursos administrativos y jurisdiccionales a interponer en caso de verse lesionados sus derechos ante la Dirección de Hacienda del Municipio Heres, cuando se configura la infracción administrativa que da lugar a la sanción respectiva, resultando improcedente lo alegado por la recurrida* (...)".

Finalmente, solicita que sea declarada sin lugar la acción de constitucionalidad ejercida.

IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de la Sala para conocer de la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad mediante sentencia n.° 144 del 26 de marzo de 2013, le corresponde pronunciarse acerca de la materia debatida, a cuyo efecto observa:

En primer lugar, los accionantes alegaron la violación del artículo 6 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, de los derechos constitucionales a la capacidad económica del contribuyente, establecido en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la infracción del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por cuanto la misma toma como base imponible de la generación del tributo los ingresos brutos aún cuando no hayan sido cobrados, lo cual no solo contradice palmariamente las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sino que desnaturaliza el elemento del tributo que es el enriquecimiento, por cuanto en estos casos, se encuentran pechados unos ingresos que no han sido percibidos efectivamente obligándolos a responder con su patrimonio, lo cual se traduce en una confiscatoriedad del tributo.

Al efecto, el artículo 6 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, señala lo siguiente:

> "*Artículo 6. Se entiende por Ingresos Brutos efectivamente percibidos todos aquellos proventos y caudales que se devenguen aun cuando no hayan sido cobrados dentro del período fiscal a declarar*".

Al respecto, se aprecia que la norma en cuestión se configura en un desarrollo de la potestad tributaria municipal, destacándose que el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, debe ser entendido como un impuesto de carácter objetivo que no grava rentas, ventas, capital o ingresos brutos.

El hecho generador del tributo se vincula al desarrollo de una actividad mercantil previamente autorizada por el Municipio, sin la cual, no podría realizarse dentro de su perímetro territorial, en la cual su gravamen no recae directamente en la renta, sino en el ejercicio de una determinada actividad comercial dentro del territorio municipal, donde los elementos empleados -vgr. ingresos brutos, bienes aprovechables, entre otros- fungen solo como valores presuntivos y externos de medición sobre lo cual se estima el mayor o menor grado de relevancia económica que pueda retribuir el ejercicio de ese sector de la industria o del comercio dentro de esa zona, arrojando una base de cálculo estimativa a partir de la cual delimita la correlación entre la alícuota con el hecho generador y su base imponible que se originan al desenvolverse la actividad lucrativa dentro de la jurisdicción del Municipio.

En tal sentido, el referido impuesto se vincula a la cancelación de un tributo por el ejercicio de una determinada actividad comercial dentro de un municipio que no puede ser desarrollada sin la autorización por parte del Municipio. Siendo así, la mera actividad que ha sido permitida, entendida en su sentido más estricto, prescinde de cualquier otro elemento que pueda estimarse como hecho generador del impuesto que en ese caso solo vendrían a fungir como factores de medición hipotéticos para permitir la cuantificación a efectos de la base imponible y de la alícuota aplicable (Vid. Sentencia de la Sala nros. 105/2013 y 1345/2013, entre otras).

Conforme a lo expuesto, el hecho generador (la mera realización de una actividad lucrativa entendida en su sentido más objetivo), es deslindable y armonizable con la aplicación de otros tributos que gravan la renta, sin embargo del contenido de la norma se aprecia que la misma cuando define el término de Ingresos Brutos incluye dentro de éstos a "*aquellos proventos y caudales que se devenguen aun cuando no hayan sido cobrados dentro del período fiscal a declarar*", lo cual no atiende al concepto contable de ingresos brutos sino que igualmente no se corresponde con la capacidad económica del contribuyente, por cuanto los conceptos por cobrar no forman parte del patrimonio del contribuyente sino una cantidad estimable de las cuentas por cobrar, en el cual se encuentra pendiente su ingreso pudiendo ser efectivo o no dentro del ejercicio fiscal.

Así pues, se aprecia que no existe una identidad en cuanto a la noción jurídica de los "*ingresos brutos efectivamente percibidos*" como establece el enunciado inicial de la norma y la definición de los mismos en el cual se incluyen a las cuentas por cobrar, lo cual forma parte de la base imponible del impuesto, ya que el mismo grava la actividad y no la renta, por lo cual mal puede incluirse dentro de dicho concepto, el aspecto temporal de la facturación y no el ingreso del patrimonio del contribuyente, tal como a manera referencial se encuentra actualmente establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 210, el cual establece: "*La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los ingresos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción de acuerdo con los criterios previstos en esta Ley o en los acuerdos o convenios celebrados a tales efectos*" (Negrillas de esta Sala).

En este sentido, si bien es cierto que dentro de la regulación constitucional –artículo 179, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- se encuentra incluido el referido impuesto como un ingreso municipal "(...) *los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución*", a fin de garantizar su autosuficiencia económica, sin establecerse a nivel constitucional una mayor regulación salvo las limitaciones a la potestad tributaria establecidos en el propio, no es menos cierto, que su constitucionalidad no se encuentra delimitada en función al incumplimiento o al desconocimiento de los límites propios, sino a la invasión de competencias propias del Poder Nacional o la limitación injustificada o desproporcionada de los derechos constitucionales del contribuyente.

Sobre la potestad tributaria municipal, en jurisprudencia de esta Sala se ha señalado que la misma está:

> *"(...) prevista en el artículo el artículo 179, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [y] establece la posibilidad para los Municipios de gravar la actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a éstos potestad tributaria originaria para pechar (...) a aquellas derivadas del ejercicio o desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil"* (*Vid.* sentencias Nos. 3.241 del 12 de diciembre de 2002, caso: *'Compañía Venezolana de Inspección, S.A.'* y 781 del 6 de abril de 2006, caso: *'Humberto Bauder F. y otros'*).

Entre estos límites, debe destacarse el principio de la capacidad económica del contribuyente –aludida por la recurrente–, toda vez que el tributo no puede resultar confiscatorio del patrimonio de los contribuyentes, de conformidad con los artículos 316 y 317 constitucionales, que establecen:

> "*Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.*
>
> *Artículo 317. No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.*
> *No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente.*
> *En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de la pena.*
> *Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución.*
> *La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada por el Presidente o Presidenta de la República, de conformidad con las normas previstas en la ley*".

///

De las disposiciones constitucionales referidas, se observa que la producción de normas tributarias no debe responder a un ejercicio arbitrario o indiscriminados de las potestades legislativas, en el desarrollo y ejecución de su autonomía tributaria, sino por el contrario sometido a una actuación acorde con las limitaciones constitucionales, las cuales no se restringen única y exclusivamente a las consagradas en el artículo 179 del Texto Constitucional, sino que aunado a ello, debe sumarse las restricciones establecidas en el resto del ordenamiento constitucional, es decir, las prohibiciones contempladas en el artículo 183 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los principios de legalidad tributaria, el principio de capacidad contributiva y progresividad –artículo 316 y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- así como el principio de territorialidad y el principio de igualdad.

En igual orden, cabe incluir dentro de ellas las consustanciales o ínsitas a la propia esencia y naturaleza del tributo, así como las derivadas y propias de la potestad tributaria nacional, municipal y estadal, en atención a ello, debe destacarse que el artículo 156.13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: "*Es de la competencia del Poder Público Nacional: ...omissis... 13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias; para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales; así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial*".

Al efecto, se aprecia que si bien el legislador nacional no dictó una ley de armonización de tributos sí estableció de manera expresa en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, una serie de disposiciones referidas al Impuesto sobre Actividades Económicas que viene a fungir como normas armonizadores y de coordinación de la regulación de la potestad tributaria consagrada en el artículo 179.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que las mismas se constituyan en un control material de su disconformidad directa, ya que ello corresponde a un recurso de colisión de normas y no a una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, su control puede ser verificado de manera incidental cuando versen: i) sobre la propia naturaleza del tributo que lo deslegitime, ii) sobre la forma procedimental en la promulgación de la Ordenanza respectiva o iii) cuando ésta vulnere a su vez otros principios constitucionales al vaciar de esencia de otros derechos constitucionales –vgr. Derecho a la propiedad-.

En este orden de ideas, debe destacarse que al ser el impuesto sobre actividades económica un tributo municipal cuya gravabilidad versa sobre el ejercicio de una actividad lucrativa de manera independiente dentro de un Municipio determinado, su incidencia varía según los elementos de estimación del mismo, siempre y cuando éstos sean congruentes con la propia normativa municipal y los elementos propios a éste, por ende, las normas armonizadoras establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal si bien no se erigen como un control de adecuación de la norma si fungen como principios básicos de la mismas, que buscan garantizar unas normas bases sobre la concepción, recaudación y exención del tributo en aras de salvaguardar el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes.

Así, si bien puede decirse que la autonomía tributaria implica una autorregulación, organización y funcionamiento en la recaudación del tributo respectivo, su ordenación mediante normas armonizadoras por parte del legislador nacional al consagrar las disposiciones relativas al Impuesto sobre Actividades Económicas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, no implica *a priori* un carácter exclusivo de control y adecuación por parte de los respectivos municipios en ejercicio de sus potestades legislativas, sin embargo, si envuelven una serie de lineamientos y parámetros que deben regir el desarrollo legislativo municipal del referido impuesto, todo ello con la finalidad garantizar, se insiste, la seguridad jurídica del contribuyente y a una racionalización del sistema tributario municipal mediante la búsqueda de una uniformidad en su consagración a su nivel.

De esta forma, las normas y principios armonizadores son efectivamente una creciente necesidad en materia de tributación municipal, en virtud no solo de la multiplicidad de tributos, sino en cuanto a los mecanismos, formas de consagración y recaudación propios del ejercicio de la autonomía tributaria y a la incipiente voracidad fiscal de los Municipios respecto al gravamen de la renta y de la actividad de los particulares, por lo que, tal potestad armonizadora fue asignada a la Asamblea Nacional en búsqueda de una racionalidad en cuanto a su establecimiento y a una proporcionalidad respecto a su ejercicio. Al respecto, esta Sala en sentencia n.° 1453/2004, expuso:

> "*A estos efectos, poco importa –que es un aspecto al que sí da importancia la parte demandante- que la actividad desarrollada por la empresa exceda del territorio local. En Venezuela no existe tal límite, aunque en tales casos sí se hace imprescindible que la legislación nacional de armonización tributaria –ausente hasta el momento entre nosotros- determine unos parámetros a fin de moderar el poder tributario local y evitar excesos impositivos.*
> *Es necesario, pues, que la Asamblea Nacional ejerza la competencia prevista en el número 13 del artículo 156 de la Constitución, y con ello armonice la tributación local, al menos en lo referido al impuesto más importante de todos, fuente principal de ingresos municipales, como es el que grava las actividades lucrativas.*
> *Armonizar, y no excluir, es lo que debe prevalecer en la materia. Los posibles excesos locales no se pueden evitar a través de la negación del poder tributario de las entidades menores, sino mediante el establecimiento de determinados factores que permitan distribuir el poder entre los diferentes municipios que tengan en principio derecho a exigir el impuesto. Algo similar a lo ocurrido, si bien ello fue por vía jurisprudencial, con la figura del establecimiento permanente, que sirvió para precisar a qué municipios correspondería gravar. No es labor de la Sala fijar ahora esos factores de conexión, por lo que se insiste en la posibilidad de que la Asamblea Nacional lo haga, en ejercicio de sus potestades constitucionales.*
> *En fin, como en todo lo que guarde relación con los tributos, la prudencia debe ser la guía, pues debe evitarse incurrir en el error de sobrecargar a los contribuyentes con exigencias tributarias que tal vez le aconsejen trasladarse de lugar. Por ello, la doctrina ha advertido de la necesidad de impedir los casos de tributación excesiva, sin que ello implique la prohibición a los entes territoriales para constreñir al pago de los tributos que constitucional o legalmente le correspondan*".

En este orden de ideas, se aprecia que la norma objeto de impugnación se refiere a la definición legal en la Ordenanza de la base imponible del tributo, la cual es el ingreso

bruto estableciendo dentro éste, dos elementos identificadores del concepto que incongruentemente se excluyen entre sí, ya que se expone que "*Se entiende por Ingresos Brutos efectivamente percibidos todos aquellos proventos y caudales que se devenguen*", para adicionar luego una excepcionalidad temporal y a su vez material dentro de la definición, cuando expone "*aun cuando no hayan sido cobrados dentro del período fiscal a declarar*".

La norma en cuestión claramente establece una definición legal, la cual delimita el contenido del ingreso bruto, lo cual a su vez se constituye en la base imponible del tributo, por ende tenemos que la presente definición tiene un valor identificativo del significado del término señalado en otros artículos de la Ordenanza, incluyéndose elementos materiales y temporales que abarcan la concepción del mismo, y que amplían su contenido.

Así, cabe advertir que si bien existe diferentes tesis bajo las cuales concurre cierta discusión sobre el carácter normativo o no de las definiciones legales, lo cierto es que las mismas atienden a una unidad conceptual en las cuales se aluden a acciones, sujetos u objetos con la finalidad de dotar de claridad al derecho y eliminar las ambigüedades y vaguedades del lenguaje (Vid. Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin, *Definiciones y normas* en Eugenio Buligyn, Martín D. Farrel, Carlos S. Nino y Eduardo Rabopssi (Comps): El lenguaje del Derecho. Homenaje a Genaro Carrió, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, citado por Josep Aguiló Regla en *Sobre Definiciones y Normas*, Doxa n.° 8, 1990).

El problema que ello plantea, es cuando su finalidad resulta desvirtuada y por el contrario no elimina o procura eliminar las múltiples ambigüedades y vaguedades que rodean el mundo jurídico, sino que incluye dentro de la misma conceptos contradictorios que dotan de oscuridad e imposibilitan su ejecución, llegando incluso a incorporar confusiones en cuanto a la interpretación y su cumplimiento, y por ende a desnaturalizar su contenido (Vgr. Victor Ferreras Comella, *Justicia Constitucional y Democracia*, CEPC, 2012, pp.22-27).

Así pues, la definición legal impugnada como se expuso anteriormente contempla dos elementos diferenciales dentro de su contenido que la hacen inaplicable, jurídica y económicamente, por cuanto expone lo que debe entenderse por **ingresos brutos efectivamente percibidos**, lo cual implica, de inicio, un ingreso efectivo al patrimonio del contribuyente, al acompañar el sustantivo "ingreso bruto" del verbo y su consecuente adjetivo "**efectivamente percibido**".

Sin embargo, y he aquí donde se denota la incongruencia normativa, al establecer la inmediata excepción -"aun cuando éstos no hayan sido cobrados"- que genera una incompatibilidad manifiesta en su conceptualización respecto a estos ingresos no cobrados, y confronta palmariamente tanto adjetiva como sustantivamente i) con la naturaleza del impuesto, entendido como el objeto del mismo, en el cual se grava una actividad lucrativa y no la renta, y ii) al establecer que forman parte de los ingresos brutos aquellos no cobrados, ya que se estaría gravando una renta que aún no ha ingresado económicamente al patrimonio del particular, independientemente de su ingreso jurídico -facturación-.

En tal sentido, la excepcionalidad anotada no implica un elemento de modificación en cuanto al cobro o su percepción, sino atiende más bien a una disimilitud conceptual que se forma a través de una contradicción gramatical, económica y jurídica, cuestión por demás bastante compleja, y cuya disconformidad se resolvía claramente de dos formas, independientemente de la sujeción o no a las normas tributarias que pudo haber observado el Municipio Heres del Estado Bolívar, mediante i) la supresión del adjetivo "efectivamente percibido", o ii) la sujeción a la armonización de manera plena al suprimir la excepcionalidad conceptual al contemplar que formaban parte de estos ingresos efectivamente percibidos aquellos que aun no hayan sido cobrados.

En consecuencia, se aprecia que lo que procede no es la nulidad absoluta de la norma impugnada sino una supresión parcial y la consecuente interpretación de ella, la cual no deviene del ejercicio arbitrario e irrestricto de un determinado órgano jurisdiccional sino por el contrario de la efectiva congruencia de una norma armonizadora promulgada por el Poder Legislativo Nacional al haber sido dictado el artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en aras de salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes ante el desfase definitorio establecido en el artículo impugnado, todo ello, a través de la supresión de la excepcionalidad sobre la inclusión de las cuentas por cobrar.

Aunado a ello, se advierte que la precitada interpretación no genera un perjuicio económico de los intereses patrimoniales del Municipio ni una limitación de su autonomía tributaria, en primer lugar, por cuanto no se genera un menoscabo económico en el patrimonio del Municipio al no ser incluido dentro los ingresos brutos efectivamente percibido las cuentas por cobrar (x_1) ya que si bien su percepción y gravamen no son enteradas en el período tributario respectivo (t_1), su percepción procede inmediatamente en el período consecutivo o cuando se haga efectivo su cobro total o parcial en el determinado período en el cual se haga efectivo su ingreso al patrimonio municipal ($t_2.t_x$), así que la diferencia no se prevé en cuanto a la concepción de tributo sino en cuanto al elemento temporal de su percepción.

En este orden de ideas, se aprecia que la normativa constitucional afecta profundamente el derecho a la seguridad jurídica en cuanto a la vinculación de certeza que debe otorgar el Estado a los particulares y la correspondiente correlación de estos de poseer una expectativa de derecho sobre el razonamiento de una determinada decisión o sobre las consecuencias jurídicas de su aplicación, en atención a la existencia o búsqueda de una identidad u homogeneidad entre los principios o lineamientos básicos concebidos en ella.

Así, indefectiblemente la seguridad jurídica se encuentra aparejada o trata de lograr un fin primordial del derecho el cual es la búsqueda de la justicia, en este sentido interesa destacar a Radbruch en cuanto a que no es suficiente con el deber jurídico sino que es necesario que sus contenidos sean justos en cuanto a su contenido (Vid. G, Radbruch, *Filosofía del Derecho*, Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, 1944).

En consecuencia, en el presente caso se verifica una afectación a la dimensión valorativa de la seguridad jurídica, entendida en el presente caso en la coherencia de la disposición normativa objeto de análisis, ya que la misma en un símil gramatical no puede exponer que la bandera venezolana tiene tres franjas de los colores amarillo, azul y rojo conjuntamente con 8 estrellas en la franja azul, y consecutivamente, se adicione "aun cuando las estrellas puedan estar dispuestas en la primera franja es decir la amarilla", en virtud que ello desnaturaliza la definición inicial, al existir dentro de una misma norma definitoria elementos diferenciales que afectan al sustrato esencial de la definición.

La verificación de la congruencia normativa y su definición o verificación del principio de seguridad jurídica, no responde a un examen autónomo y abstracto de la Sala respecto a la norma en el cual se valore el grado de veracidad o no de ésta, sino por el contrario resulta de una interpretación hermenéutica del sistema normativo en materia tributaria, siendo reconocido ese grado de vinculación por la propia Ordenanza impugnada cuando en diferentes artículos se consagran diversas remisiones a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal no solo para su competencia sino para la interpretación o la aplicación supletoria de diferentes normas, destacándose entre ellas, el artículo 12, parágrafo segundo, el cual se refiere directamente a la base imponible, cuando se dispone en el mismo:

> "*Artículo 12. La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los Ingresos Brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del Municipio Heres, del Estado Bolívar, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley o en los Acuerdos o Convenios celebrados a tales efectos, y en la forma siguiente:*
> *...omissis...*
>
> *PARÁGRAFO SEGUNDO: Para determinar la base imponible conforme a lo previsto en esta Ordenanza, no se permitirá la deducción de ninguno de los ramos que constituyan dicho ingreso, ni de las erogaciones hechas para obtenerlos, ni ninguna otra deducción que no esté expresamente prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en esta Ordenanza (...)*".

En tal sentido, se aprecia que el referido artículo 6, al contemplar en la definición legal elementos contradictorios, hacen procedente la adecuación constitucional de la norma mediante la interpretación de la norma y no a través de la supresión absoluta o total de la misma, de manera de ajustar su contenido a la concepción material de lo que es el "ingreso bruto efectivamente percibido", en tal sentido, visto que el principio de supremacía constitucional implica asimismo, la interpretación no solo del contenido normativo sino de los efectos de su aplicación a los principios y reglas constitucionales como el principio de seguridad jurídica, ello conlleva a que del artículo se suprima la excepción definitoria que modifica sustancial y procedimentalmente la definición legal contemplada en ella, de manera de que su contenido sea coherente con la naturaleza del tributo y con las normas armonizadoras contempladas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, quedando redactado de la siguiente forma:

"Artículo 6. Se entiende por Ingresos Brutos efectivamente percibidos todos aquellos proventos y caudales que se devenguen dentro del período fiscal a declarar".

Dicha interpretación no solo resulta coherente y congruente con el principio de supremacía constitucional mediante la ejecución y protección de la seguridad jurídica de los contribuyentes, sino que, aunado a ello, de admitir la interpretación a contrario y mantener la norma impugnada en su contenido original implicaría la presunta afectación de la capacidad contributiva del contribuyente por cuanto se estaría gravando una alícuota de la base imponible sobre un patrimonio que efectivamente no ha percibido dentro de su patrimonio, sino que se encuentra dentro de unos ingresos por cobrar que no son efectivos y que más grave aun es que no existe una realidad sobre su percepción sino hasta su efectivo ingreso, pudiendo ser disímil el ingreso facturado del ingreso real de una actividad mercantil.

En consecuencia, la Sala decide que el artículo 6 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, resulta atentorio al principio de seguridad jurídica y se procede a la estimación parcial del argumento de inconstitucionalidad formulado. Así se declara.

§

En segundo lugar, los accionantes exponen que el artículo 12.14 de la Ordenanza impugnada, al consagrar la inclusión de los servicios profesionales como sujetos pasivos del impuesto sobre actividades económicas, y señalando como base imponible de su actividad los ingresos brutos que se generen por concepto de honorarios profesionales, viola el principio de reserva legal, ya que le impone a éstos, la expedición de una licencia para su ejercicio que colide con lo establecido en el artículo 105 del Texto Constitucional, así como con la naturaleza del tributo que se encuentra dirigido a pechar las actividades mercantiles y los servicios profesionales conforme a lo establecido en las diferentes legislaciones que regulan su actividad y funcionamiento (Vgr. Ley de Ejercicio de la Contaduría, Ley de Abogados, entre otras) son actividades de naturaleza civil, lo cual vulnera a su vez el artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al efecto, la señalada disposición, establece:

"Artículo 12. La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los Ingresos Brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del Municipio Heres, del Estado Bolívar, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley o en los Acuerdos o Convenios celebrados a tales efectos, y en la forma siguiente:
...omissis...
14. Para quienes realicen actividades económicas bajo la denominación de servicios profesionales, la base imponible estará constituida por los ingresos brutos que se generen por concepto de honorarios, en ocasión de la prestación de servicios, no se consideran servicios, los prestados bajo relación de dependencia".

En atención a lo expuesto, se aprecia que el impuesto sobre actividades económicas se encuentra dirigido al gravamen de una actividad lucrativa de manera independiente, y que como ha establecido la jurisprudencia de esta Sala, la interpretación sobre las actividades gravadas bajo el referido impuesto en ejercicio de la potestad constitucional atribuida en el artículo 179.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ser acometida de manera restrictiva y literal en el sentido que la actividad objeto de gravamen tenga una naturaleza mercantil o aquellas de índole similar a las industriales o comerciales. En este sentido, interesa citar sentencia de esta Sala n.° 781/2006, en la cual desarrollando el precedente contenido en el fallo n.° 3241/2002, se dispuso:

"Tal esquema plantea un orden lógico para abordar la temática, orden que pasa, necesariamente, por aceptar que la posible inconstitucionalidad de los artículos impugnados depende de que esta Sala acepte o rechace la potestad tributaria de los municipios sobre las profesiones liberales, ya que tales preceptos, en sustancia, lo que hacen es regular los términos en que la actividad económica está sujeta al impuesto creado por la Ordenanza en cuestión.
Acerca de este punto, la Sala, en sentencia n° 3241/2002, ha tenido oportunidad de pronunciarse señalando expresamente '(...) que cuando el artículo 179, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la posibilidad para los Municipios de gravar la actividad económica generada con motivo de la prestación de servicios, les confiere a éstos potestad tributaria originaria para pechar solo a aquellas derivadas del ejercicio o desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil (...)', por lo que los Municipios pueden '(...) gravar únicamente aquellos servicios cuya prestación implique el desarrollo de una actividad económica de naturaleza mercantil por parte de la persona natural o jurídica que brinde tales asistencias, quedando excluidas del hecho generador del impuesto municipal contemplado en el numeral 2 del artículo 179 del Texto Constitucional, todas aquellas actividades económicas de naturaleza civil, como las desempeñadas con motivo del ejercicio de profesiones liberales como la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, por constituir un supuesto de no sujeción al referido tributo (...)'.
No obstante tal precedente, los defensores del acto sostienen la constitucionalidad de la Ordenanza alegando que la máxima jurisprudencial citada se produjo dentro de un contexto distinto al hoy discutido. En aquella oportunidad se trataba de una Ordenanza previa a la Constitución de 1999, refieren, mientras que en esta se trata de una Ordenanza dictada con ocasión a la interpretación del artículo 179.2 constitucional hecha por el legislador municipal; sin embargo, se trata de un argumento que riñe con lo que ha sido la concepción histórica del aludido impuesto y con el principio de división de poderes que reserva al Poder Público nacional todo lo concerniente a la regulación de las profesiones liberales.
En efecto, en el precedente citado se indicó que lo que es hoy el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio y servicios y otras actividades de índole similar siempre ha estado vinculado de forma directa con el desempeño de actividades económicas de naturaleza mercantil. Ese sustrato histórico permite afirmar que sólo las actividades realizadas con fines de lucro -y no de honorarios- que tienen su causa en el desempeño de una industria o comercio, o en una actividad de servicio que sea afín con cualquiera de éstas, en tanto actividad de naturaleza mercantil o de interposición en el tráfico económico, han sido objeto del antiguo impuesto de patente sobre industria y comercio, sin que se tuviera conocimiento, destacó en esa oportunidad la Sala, que actividades de naturaleza civil hayan sido gravadas en Venezuela por esta vía tributaria con fundamento en alguna Constitución o en la Ley.
Por otra parte, las profesiones liberales jamás han tenido naturaleza mercantil, el Código de Comercio, publicado en Gaceta Oficial n° 475 Extraordinario del 26 de julio de 1955, establece de forma expresa cuáles actividades son en Venezuela consideradas de naturaleza mercantil al enumerar, en su artículo 2, todas las actuaciones económicas que según el legislador nacional son actos objetivos de comercio, y al señalar, en su artículo 3, que se repuntan como actos subjetivos de comercio cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo, o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil.
Tal regulación mercantil permite afirmar, como ya se hizo en la sentencia aludida, que todos los demás actos o negocios jurídicos cuyo objeto sea valorable económicamente que no puedan ser subsumidos en ninguno de los dispositivos legales referidos, bien porque no sean actos objetivos de comercio, bien porque no sean realizados por comerciantes o bien porque aun siendo comerciante el sujeto que la realiza cae en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 3, son de naturaleza esencialmente civil y, por tanto, se encuentran regulados por las disposiciones del Código Civil, como es el caso de las profesiones liberales.
No desconoce la Sala, y este fue un argumento que trajo a colación la representación del Municipio Chacao del Estado Miranda, que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal trae una definición de aquello que debe entenderse por actividad económica de servicio en el mismo sentido que lo hace la Ordenanza impugnada, pero se trata de un argumento que dilucidarlo a fondo implicaría excederse del objeto de esta causa, pues amerita analizar la constitucionalidad del precepto de esa Ley nacional. En todo caso, lo importante a retener aquí es que la concepción histórica del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios y actividades de índole similar obliga a entender que el término servicio se refiere a servicios conexos a actividades industriales y comerciales, pues es ese tipo de actividad, en definitiva, la que genera verdadera riqueza, al extremo que doctrinariamente el beneficio económico que se obtiene de cada una de ellas se denominan de forma diferente si se trata de una u otra. Al de las primeras se les llama ganancias; mientras que al de los servicios profesionales se les denomina honorarios.
Por otro lado, la constitucionalidad del precepto riñe también con la distribución de competencia a que alude nuestra carta Magna en su artículo136. Toda la regulación de las profesiones liberales pertenece al Poder Público nacional por una razón fundamental: la necesidad de unificar el régimen y evitar arbitrariedades al momento de estipular los requisitos que se deben cumplir para ejercer cualquier profesión, que por sus características son indispensables para la buena marcha de la sociedad. En definitiva, el Constituyente fue previsivo al resguardar de posibles regulaciones dispares los requisitos para ejercerlas" (Negrillas de esta Sala).

En concordancia con lo expuesto, en el caso de autos se hace impretermitible argumentar que el vocablo "*actividad económica*" contenido en el artículo 179.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se refiere exclusivamente a aquellas actividades conexas al ejercicio de la industria, comercio, servicios o de índole similar, estando circunscritas por la naturaleza mercantil, de manera que no tiene cabida su aplicación a las profesiones liberales no siendo, en consecuencia, legítima su aplicación a aquellos profesionales que desarrollan su actividad en el municipio, ya que las profesiones liberales encuentran su regulación constitucional en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara (Vid. En idénticos términos, sentencias de esta Sala nros. 1034/2010, 420/2012 y 835/2012, entre otras).

En lo que respecta a los Códigos de Actividades nros. 22-15 y 22-16 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, debe la Sala advertir su franca inconstitucionalidad, por violación del principio de reserva

legal del Poder Nacional consagrado en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al someter a los profesionales que decidan ejercer su actividad en ese Municipio a la exacción que sólo recae sobre actividades económicas de tipo industrial o comercial, razón por la cual se declara la nulidad de los referidos clasificadores denominados "*Personas Naturales que prestan servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades*" y "*Personas Jurídicas que presten servicios profesionales en cualquiera de sus modalidades*", por violar el principio de reserva legal al ser exclusiva la regulación del ejercicio de las profesiones liberales por la Asamblea Nacional. Así se declara.

Finalmente esta Sala, aprecia que el artículo 22 de la Ordenanza impugnada al establecer una licencia para el ejercicio de las actividades profesionales resulta igualmente violatorio del principio de reserva legal, ya que el ingreso al ejercicio de las actividades profesionales se encuentra regulado en la ley de adscripción y regulación de las determinadas profesiones por ser ello una potestad exclusiva del legislador nacional -artículo 105 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- (Vgr. Ley de Abogados, Ley del Ejercicio de la Medicina, entre otras), en consecuencia, se excluye de la exigencia de solicitar la referida licencia a los profesionales que ejerzan su profesión dentro del referido Municipio y así se declara.

§

En tercer lugar, alegan que los artículos 48 parágrafo primero y 51 parágrafo único de la referida Ordenanza, violan el derecho a la defensa y al debido proceso constitucional por cuanto no se especifica la autoridad competente para la consignación de la Declaración de Ingresos Brutos Anual, así como existe una contradicción en cuanto al lapso de presentación de la declaración y a lo establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

En igual orden de ideas, exponen que existe una confusión en la norma impugnada entre el deber formal de declaración y el deber de cancelación del mismo, así como la existencia de un procedimiento administrativo en el cual se garanticen los derechos del contribuyente, por cuanto la Administración Municipal, según alegan, no tiene cumplida la obligación de declaración sino solo cuando se paga el tributo, y no existe un procedimiento para recurrir de la disconformidad que pueda declarar la referida Administración, en virtud que la norma se refiere a una corrección inmediata "(...) *sin que medie un procedimiento administrativo previo como lo es verificación* (...)", así como "(...) *sin mediar un acto administrativo debidamente suscrito por un funcionario competente y sin fundamentar las razones de hecho y de derechos* (...)" viola los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso constitucional, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, los artículos impugnados señalan:

> "*Artículo 48. Los sujetos pasivos a que se refiere esta Ordenanza deberán presentar la Declaración de Ingresos Brutos Anual (DIBA) correspondiente, dentro de los NOVENTA (90) días continuos siguientes a la fecha de cierre fiscal del contribuyente, por cada una de las actividades o ramos a que se refiere el Clasificador de Actividades Económicas, en la cual la Dirección de Hacienda Municipal o el ente para tal fin, determinará y liquidará el monto del impuesto municipal correspondiente, y se informará para que el contribuyente proceda al pago, en las oficinas receptoras de impuestos municipales que la Alcaldía designe.*
> *PARÁGRAFO PRIMERO: El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la Administración Tributaria Municipal. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración. Los pagos realizados fuera de la fecha indicada en este Parágrafo, incluso los provenientes de ajustes y reparos se considerarán extemporáneos y generaran los intereses moratorios y sanciones previstos en esta Ordenanza.*
>
> *Artículo 51. El monto del impuesto previsto en esta Ordenanza, se determinará y pagará de la siguiente manera:*
> *... omissis...*
> *PARAGRAFO ÚNICO: Los datos suministrados en la declaración anual por el contribuyente, solo se considerarán como un indicador y que podrán servir de base para el cálculo y fijación provisional del impuesto a pagar del año siguiente, y para la determinación de la capacidad contributiva del contribuyente en el lapso que declaro, a los fines de calcular el ajuste impositivo anual. Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, difiere del procedimiento establecido en esta ordenanza, la administración tributaria o los funcionarios que esta designe, procederá a la corrección inmediata*".

Se aprecia respecto a la primera denuncia que a diferencia de lo expuesto por el accionante, el sujeto activo del tributo así como el ente receptor del mismo se encuentran claramente identificados en la norma, cumpliendo de esta forma con los elementos generales del tributo y el grado de especificación previo y determinación del ente municipal como ente recaudador.

En efecto, el precitado artículo así como en el resto de la normativa contenida en la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, se encuentran claramente estructurados: i) el elemento material, ii) el aspecto personal que es la individualización del sujeto pasivo y activo de la obligación tributaria, iii) el elemento temporal –año calendario- y iv) el elemento espacial –actividades lucrativas de naturaleza mercantil desarrolladas dentro del Municipio- (Vid. Dino Jarach, *Curso de Derecho Tributario*, Ediciones Liceo Profesional Cima, Buenos Aires, 1969. pp. 174-175 y R. Calvo Ortega, *Curso de Derecho Financiero*, Tomo I –Derecho Tributario (Parte General)-, Edit. Civitas, 3° edición 1999, pp. 174-178).

Así pues, no se aprecia la violación constitucional a la defensa y al debido proceso, ya que en el propio artículo se establece expresamente que la Declaración de Ingresos Brutos Anual (DIBA) debe ser consignada ante la "Dirección de Hacienda Municipal o el ente para tal fin", razón por la cual, se encuentra claramente identificada la autoridad encargada de recibir la presentación de la declaración de ingresos, independientemente que el ente respectivo ejerza de manera directa o indirecta la referida potestad.

Igualmente, debe destacarse que la adecuación constitucional de la norma deviene de la identificación del sujeto activo que en el caso concreto se cumple a cabalidad no solo mediante la designación expresa sino incluso atribuyendo en el ejercicio de la autonomía organizativa del Municipio la designación de otra autoridad u otro ente encargado de la recaudación, especificándose en su parágrafo primero que "*El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la Administración Tributaria Municipal*", razón por la cual no se aprecia la violación constitucional denunciada, en primer lugar, al estar claramente identificados se insiste los elementos estructurales del tributo y en segundo lugar, al establecerse expresamente en ejercicio de la autonomía organizativa de los Municipios, la designación de la autoridad competente para la recepción del mismo y así se declara.

Seguidamente, exponen que existe una confusión en la norma impugnada entre el deber formal de declaración y el deber de cancelación del mismo, así como la existencia de un procedimiento administrativo en el cual se garanticen los derechos del contribuyente, por cuanto, la Administración Municipal según alegan, no tiene cumplida la obligación de declaración sino solo cuando se paga el tributo, y no existe un procedimiento para recurrir de la disconformidad que pueda declarar la referida Administración, en virtud que la norma se refiere a una corrección inmediata "(...) *sin que medie un procedimiento administrativo previo como lo es verificación* (...)", así como "(...) *sin mediar un acto administrativo debidamente suscrito por un funcionario competente y sin fundamentar las razones de hecho y de derechos* (...)" viola los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso constitucional, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto al argumento de fondo respecto a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso por la existencia de una presunta confusión en la norma, se aprecia que la Ordenanza impugnada regula la diferencia entre varios actos cuando en el encabezado del Título VII identifica claramente la individualización de cada acto a saber: i) la declaración, ii) la determinación, iii) la liquidación y iv) el pago del impuesto, si bien cada uno tiene un elemento sucesivo y temporal al otro, existe una clara identificación en su objeto.

Así, el Capítulo I, denominado "De la Declaración del Ajuste Impositivo Anual", se establecen los elementos temporales, materiales y procedimentales para la declaración y consignación del impuesto sobre actividades económicas, posteriormente en el Capítulo II denominado de la "Determinación, Fijación, Pago del Impuesto", se identifican cada uno de los actos, estableciendo en el artículo 51 de la Ordenanza la determinación del impuesto y en los subsiguientes artículos la fijación y el pago del impuesto.

En atención a ello, no se aprecia la violación constitucional denunciada, ya que a esta Sala le corresponde el control objetivo de la constitucionalidad de las normas y su contrariedad a derecho y no a la actuación material de determinada Administración Tributaria, en cuyo caso, el accionante dispone de los mecanismos judiciales ordinarios para controlar la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública, en virtud que la referida Ordenanza contempla en su Título XI la existencia de los recursos administrativos

contra los actos de efectos particulares dictados por los funcionarios de la Administración Municipal, que pudiesen vulnerar algún derecho constitucional, por lo que resulta plenamente garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso, en virtud de no existir la confusión denunciada y de estar consagrado efectivamente la presencia de normas procedimentales destinadas a regular la declaración y pago del impuesto sobre actividades económicas.

Asimismo, respecto a la temporalidad de la reclamación debe acotarse que el artículo 51 en su parágrafo único cuando se consagra la corrección inmediata se refiere a la deficiencia en cuanto al procedimiento establecido en la Ordenanza y no al elemento sustantivo del mismo, el cual se genera a través de un acta de reparo, que está regulado su procedimiento en los artículos 84 y siguientes de la Ordenanza, razón por la cual, a diferencia de lo indicado por éste la norma impugnada es clara cuando se refiere a elementos procedimentales sobre la determinación del tributo y no a la fiscalización cuantitativa del tributo, cuando expone: "(...) *Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, difiere del procedimiento establecido en esta ordenanza, la administración tributaria o los funcionarios que esta designe, procederá a la corrección inmediata*" (Subrayado de esta Sala).

De esta manera, se aprecia que el ser la divergencia sobre un elemento procedimental en cuanto a la determinación del tributo, éste puede ser corregido de manera inmediata por el funcionario instructor respectivo, y de considerar violados o amenazados sus derechos constitucionales, el contribuyente puede ejercer los recursos administrativos pertinentes o la acción contencioso tributaria respectiva ante el órgano jurisdiccional competente conjuntamente con el amplio catálogo de medidas cautelares disponibles a los administrados.

En consecuencia, se declara improcedente la denuncia formulada sobre la presunta afectación del derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, respecto a los artículos 48 parágrafo primero y 51 parágrafo único de la referida Ordenanza impugnada y así se declara.

Por último, alegan los accionantes como fundamentos de inconstitucionalidad que el artículo 117 de la Ordenanza, al establecer un régimen de excepcionalidad sobre la notificación del acto de cierre de establecimiento, vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, así como la violación de los artículos 162 y 163 del Código Orgánico Tributario, por cuanto aunado al hecho de carecer de eficacia, el contribuyente desconoce los motivos de la sanción, los cuales pueden ser discrecionales destacando entre ellos la exhibición de la licencia de patente en un lugar visible, lo cual si bien la norma establece que no es un impedimento para el ejercicio del recurso, si limita el ejercicio de sus derechos constitucionales por cuanto desconoce los motivos que originaron el cierre.

Asimismo, exponen que tal excepcionalidad limita el derecho a la igualdad, ya que ello implica "(...) *una desigualdad para con los contribuyentes y comerciantes del Municipio Heres del Estado Bolívar (...) frente a los demás contribuyentes municipales cuyas Ordenanzas si se encuentran enmarcadas dentro de los parámetros y límites previstos en la Constitución y las Leyes* (...)".

Al efecto, el artículo 117 de la Ordenanza impugnada contempla que:

> *"Artículo 117. Los actos que produzcan efectos particulares, emanados de órganos o funcionarios indicados en esta Ordenanza, deberán ser notificados al sujeto pasivo para que tengan eficacia. Las notificaciones se practicarán en la forma prevista en el Código Orgánico Tributario, excepto los casos previstos en esta Ordenanza, y deberán contener el texto íntegro de la respectiva resolución, indicando si el acto es o no definitivo, los recursos a intentar, así como las instancias antes los que hubiere de presentarse, los plazos para imponerlos y los requisitos de pago o afianzamiento que en su caso, deben cumplir los contribuyentes. Cuando la notificación no sea practicada personalmente, sólo surtirá efectos después del décimo (10) día hábil siguiente de ser verificada.*
> *PARÁGRAFO ÚNICO: Se exceptúan de las formalidades previstas en este Capítulo, las órdenes de cierre de negocios por las causales previstas en los artículos 99°, 101°, 102°, 103°, 104°, 107° y 127° de esta ordenanza, las cual podrán ejecutarse de inmediato, sin perjuicio de que la parte afectada ejerza su recurso".*

En atención a lo expuesto, se aprecia que esta Sala juzgó la constitucionalidad de una norma similar en el fallo n.° 808 del 14 de mayo de 2008, en el cual se analizó la vinculación existencial entre el derecho a la defensa y el debido proceso respecto a la notificación de la decisión administrativa dictada en contra de sus intereses patrimoniales y derechos constitucionales.

En este orden de ideas, se aprecia que el derecho a la defensa y al debido proceso no solo implica la participación en el procedimiento administrativo previo a la emisión del acto administrativo, así como el acceso al expediente administrativo, el derecho a promover prueba o al ejercicio de los medios impugnatorios contra los mismos, sino que implica igualmente el conocimiento del texto íntegro del acto que otorgó o limitó los derechos constitucionales del administrado, no solo con la finalidad de conocer cuáles son los recursos o medios impugnativos contra éste sino con el objeto de plantear los respectivos argumentos de hecho y derecho de impugnación, fundamentándose en la motivación del acto administrativo impugnado.

Mal podría garantizarse el ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, si el administrado no conoce el texto íntegro del acto objeto de impugnación, por cuanto su ejercicio se fundaría en meras presunciones de los actos de la administración, sin conocer si fueron objeto de resolución o no los argumentos formulados en el procedimiento administrativo –principio de la globalidad de la decisión- o si por el contrario fueron valorados o no los medios probatorios promovidos oportunamente.

Al efecto, los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, disponen:

> *"Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos, debiendo contener la notificación el texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse.*
>
> *Artículo 74. Las notificaciones que no llenen todas las menciones señaladas en el artículo anterior se considerarán defectuosas y no producirán ningún efecto".*

Congruente con tales aseveraciones, se destaca que la Sala Constitucional en el mencionado fallo n.° 808/2008, estableció respecto a la omisión de la notificación de los actos administrativos de cierre temporal, que:

> *"En realidad, estima la Sala que el artículo impugnado lo que pretende es que la notificación de las órdenes de cierre de establecimiento no requieran de las formalidades mencionadas (texto íntegro de la decisión, indicación de recursos, así como de autoridades ante las que se pueden ejercer los correspondientes recursos y plazos para su interposición). No se obvia la notificación, sino las referidas menciones, pues nunca un acto administrativo puede surtir efectos sin ser notificado, ya sea de modo personal o por los medios sustitutivos que prevé el ordenamiento. En tal virtud, también la orden de cierre requiere notificación para poder ejecutarse.*
> *No niega la Sala que el artículo 87 está redactado de una manera que se presta a confusiones, toda vez que en él se lee que las órdenes de cierre de comercios y/o industrias 'podrán ejecutarse de inmediato, sin perjuicio de que la parte afectada ejerza sus recursos legales con posteridad', como si una cosa tuviera que ver con la otra. Como todo acto administrativo, las órdenes de cierre se ejecutan de inmediato (salvo suspensión ordenada por la ley, por la propia Administración o por un juez) y ello no impide el ejercicio de recursos en su contra. Visto así, se insiste en que la disposición impugnada sólo puede ser entendida como la omisión de lo que la ordenanza califica como 'formalidades' que acompañan la notificación.*
> *En efecto, una notificación no es más que la puesta en conocimiento de una decisión administrativa a sus interesados, pero –derivado de las exigencias del Estado de Derecho, una de cuyas bases es el control judicial-, no puede limitarse a transmitir el hecho de la emisión del acto, sino que debe contener todo aquello que sirva para convencerse de la razones de la Administración y, de contrariarlas, para que se impugne.*
> *Por eso, es fundamental que la notificación venga acompañada por el texto de la decisión, a la cual de todos modos tiene acceso el interesado en el expediente que se lleve al efecto. Asimismo, desde el punto de vista constitucional es imprescindible la indicación de los recursos en contra de la resolución, los órganos competentes para conocerlos y los plazos para interponerlos, todo ello como parte de la garantía del derecho a la defensa.*
> *Así lo recogió la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y además constituye jurisprudencia de la Sala, tal como se observa en el fallo N° 1738/2006, en el que se lee:*
> *'En efecto, los extremos descritos por la ley para que la notificación de un acto administrativo sea eficaz, no se convierte en el mero cumplimiento de un formalismo, sino que ello tiene como propósito garantizar al interesado, sea éste parte en una relación jurídico-administrativa o sea un tercero afectado de forma refleja por la actividad administrativa, que tenga el conocimiento pleno de aquellos recursos que le brinda el ordenamiento jurídico procesal para controlar la legalidad o constitucionalidad de la actuación administrativa, ello como una manifestación del derecho a la defensa postulado por el artículo 49 constitucional y, desde una perspectiva extra procesal, como condición previa a la instauración del procedimiento jurisdiccional idóneo para la satisfacción de la tutela específica que se invoque'.*

Como se ha visto, el aparte único del artículo 87 de la ordenanza impugnada no exime de procedimiento previo ni de notificación, pero sí del cumplimiento de los requisitos mencionados. Por cuanto la omisión de tales formalidades implica una violación al efectivo ejercicio del derecho a la defensa, en los términos expuestos, la Sala declara su inconstitucionalidad.

En consecuencia, la Sala anula el referido aparte, con lo que todas las decisiones a las que se refiere la Ordenanza impugnada deberán cumplir las mismas formalidades. Así se decide".

En atención al precitado criterio jurisprudencial ya que la falta de notificación del acto administrativo, ocasiona una evidente indefensión al contribuyente, en virtud que desconoce los motivos de hecho y de derecho en que fundó la administración así como la racionalidad y oportunidad de la misma en el ejercicio de las potestades discrecionales, esta Sala estima procedente el argumento expuesto y, en consecuencia, se declara la nulidad de la referida disposición y, se suprime el parágrafo único del artículo 117 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, y así se declara.

Finalmente, la parte accionante alegó motivos de ilegalidad de las normas contenidas en la Ordenanza respecto a la confrontación en relación a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los cuales no son objeto del análisis mediante una acción de inconstitucionalidad sino propio del análisis de un recurso de colisión de normas o de la adecuación administrativa a las potestades tributarias contenidas en la Ordenanza respectiva o en la Ley nacional y así se declara.

Sin embargo, debe esta Sala hacer un llamado de reflexión a la Administración Tributaria Municipal así como al Poder Legislativo Municipal, sobre el ejercicio de la autonomía tributaria en las leyes locales, ya que si bien no tiene más límites que los establecidos en los principios y normas constitucionales, las mismas deben velar y procurar la uniformidad de las normas tributarias contempladas en la Ley Nacional –Ley Orgánica del Poder Público Municipal- en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes, ya que su congruencia resulta esencial para el desarrollo y protección de los principios en materia tributaria.

Por último, estima la Sala oportuno referir que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 32 y 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dados los múltiples actos que eventualmente pudieron haber sido dictados por la Administración del Municipio Heres del Estado Bolívar en aplicación de las normas cuya nulidad fueron acordadas de forma definitiva, con el ánimo de preservar la seguridad jurídica, fija el inicio de los efectos del presente fallo a partir de su publicación, salvo la nulidad declarada respecto a los artículos 12.14 de la Ordenanza y los Códigos de Actividades nros. 22-15 y 22-16 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar. Así se decide.

Como consecuencia de la resolución del fondo de la presente causa, mediante su estimación parcial, se deja sin efecto la medida cautelar acordada mediante sentencia n.° 144 del 26 de marzo de 2013. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara **PARCIALMENTE CON LUGAR** la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por los ciudadanos **JULIO CÉSAR DÍAZ VALDEZ** y **ROMÁN GEORGE AZIZ TUFIC**, titulares de las cédulas de identidad Nos. 10.387.571 y 13.452.444, respectivamente, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 146.634 y 84.072, en el mismo orden, actuando en sus propios nombres, así como también en su carácter de apoderados judiciales de la **CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL ESTADO BOLÍVAR**, asociación civil inscrita por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Heres de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 27 de septiembre de 1968, bajo el N.° 51, Tomo 05, Protocolo Primero, tercer trimestre de ese año; y procediendo el segundo en su carácter de representante judicial de **INVERSIONES TRINIVEN S.A.**, sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 1° de febrero de 2001, bajo el N.° 11, Tomo 16-A, contra los artículos 6, 12, numeral 14; 48, parágrafo primero; 51, parágrafo único; 117, parágrafo único; e ilegalidad de los artículos 11, 12, parágrafo primero; 99, parágrafos primero, segundo y tercero; 101, parágrafos primero y segundo; 102, parágrafos primero y segundo; y 103, parágrafos primero y segundo de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N.° 0328 del 23 de noviembre de 2009.

1. Se **ANULAN** los artículos 12.14 y 117 parágrafo único de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar y los Códigos de Actividades nros. 22-15 y 22-16 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar.

2. Se **ANULA PARCIALMENTE** el artículo 6 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar.

3. Se declara **SIN LUGAR** la pretensión de nulidad de los artículos 48 parágrafo primero y 51 parágrafo único de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar.

4. **SE DEJA SIN EFECTO** la medida cautelar acordada mediante sentencia n.° 144 del 26 de marzo de 2013.

5. **SE ORDENA** la publicación del texto íntegro de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Oficial del Municipio Heres del Estado Bolívar y en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, con la siguiente mención en su sumario: *"Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declara la nulidad absoluta de los artículos 12.14 y 117 parágrafo único de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar y los Códigos de Actividades nros. 22-15 y 22-16 del Clasificador de Actividades Económicas de la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar, así como la nulidad parcial del artículo 6 de la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar".*

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los Veintinueve (29) días del mes de – Abril – de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Vicepresidente,

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados,

LUIS ESTEBAN ORTIZ LAMUÑO
Ponente

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. n.° 11-0038

Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal y el artículo 53 del Reglamento de Reuniones, presenta el siguiente voto salvado en la decisión dictada por esta Sala Constitucional en el expediente n° 11-0038, que declaró *parcialmente con lugar* la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por la representación judicial de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Bolívar e Inversiones Triniven S.A. contra la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o Índole Similar del Municipio Heres del Estado Bolívar.

Quien disiente considera que existen falencias con respecto al parágrafo único del artículo 51 de la referida Ordenanza, cuyo contenido se expone a continuación:

> *"Artículo 51. El monto del impuesto previsto en esta Ordenanza, se determinará y pagará de la siguiente manera:*
>
> [...]
>
> *PARÁGRAFO ÚNICO: Los datos suministrados en la declaración anual por el contribuyente, solo se considerarán como un indicador y que podrán servir de base para el cálculo y fijación provisional del impuesto a pagar del año siguiente, y para la determinación de la capacidad contributiva del contribuyente en el lapso que se declaró, a los fines de calcular el ajuste impositivo anual. Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, difiere del procedimiento establecido por esta ordenanza, la administración tributaria o los funcionarios que esta designe, procederá a al corrección inmediata".*

Con respecto a la mencionada disposición, la mayoría sentenciadora determinó lo siguiente:

> *"Asimismo, respecto a la temporalidad de la reclamación debe acotarse que el artículo 51 en su parágrafo único cuando se consagra la corrección inmediata se refiere a la deficiencia en cuanto al procedimiento establecido en la Ordenanza y no al elemento sustantivo del mismo, el cual se genera a través de un acta de reparo, que está regulado su procedimiento en los artículos 84 y siguientes de la Ordenanza, razón por la cual, a diferencia de lo indicado por éste la norma impugnada es clara cuando se refiere a elementos procedimentales sobre la determinación del tributo y no a la fiscalización cuantitativa del tributo, cuando expone: '(... Si los datos suministrados por el contribuyente en la declaración anual, <u>difiere del procedimiento establecido en esta ordenanza</u>, la administración tributaria o los funcionarios que ésta designe, procederá a la corrección inmediata' (subrayado de esta Sala".*

En criterio de esta decisión, se considera que la divergencia que pueda suscitarse con respecto a un elemento procedimental relacionado con la determinación del tributo puede ser corregido de manera inmediata por el funcionario instructor y si el contribuyente considera vulnerado sus derechos puede ejercer los recursos administrativos y contencioso tributario ante los tribunales especializados en la materia.

Se considera necesario apartarse de la presente conclusión por cuanto se advierte que la Ordenanza objeto de impugnación tiene serias deficiencias con respecto a la forma como se practica el cómputo del impuesto, por cuanto la normativa permite prescindir de las informaciones presentadas por el contribuyente, fungiendo las mismas como un mero indicativo para la estimación de la base imponible.

A modo de ejemplo, el Código Orgánico Tributario –que si bien es de aplicación supletoria para los Estados y Municipios- delimita correctamente (arts. 130 y ss.) la modalidad del cálculo del impuesto en atención a las denominadas *base cierta* y *base presuntiva*. Se hace esta acotación por cuanto en materia tributaria general el cálculo sobre base presunta solamente procede cuando el contribuyente, de manera artera o involuntaria, oculta datos de información para la determinación del monto del pago.

En el presente caso, no se comparte el contenido del parágrafo único del artículo 51, por establecer que, independientemente de la información suministrada por el contribuyente, el Municipio elaborará su propia determinación (*"...los datos suministrados en la declaración anual por el contribuyente, solo se considerarán como un indicador y que podrán servir de base para el cálculo y fijación provisional del impuesto a pagar del año siguiente..."*), esta preposición normativa es fallida constitucionalmente toda vez que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el único que puede, dentro de su margen de libertad, determinar cuál es su verdadero ingreso bruto (entendido como base imponible) lo que abarca tanto el total de lo obtenido, como <u>el procedimiento</u> a partir de la cual, dicho resultado arroja posteriormente el pago del impuesto. No puede el Fisco local implementar una norma que decida libremente si la cantidad definitiva arrojada por el sujeto pasivo, y los <u>mecanismos para computarla</u>, son correctos o no para así luego proceder a modificar cualquier aspecto de la declaración que éste aporta para fijar una cantidad a sufragar en los términos que ella misma considere. Solo cuanto existen discrepancias, la Administración Fiscal sí tiene el derecho de llevar a cado el procedimiento de fiscalización (en el cual el administrado podrá defenderse presentado todas las documentaciones en las que sostiene haber cumplido cabalmente con todos los aspectos del tributo), donde analizará si hubo estricto apego a las normas contables (aquellas relacionadas con la procedimentalización para el cálculo del impuesto), así como de los resultados obtenidos, siendo la última decisión la que es factiblemente analizable en el contencioso tributario.

En opinión de quien suscribe el presente voto, el Fisco local no puede constreñir *a priori* la manera como el administrado determine el tributo, objetándole y rechazándole la declaración sobre la cual procede al pago. Establecer un

impedimento de esta índole generaría indirectamente –así sea por un cuestionamiento procedimental en la estimación- que deba "pagar primero y reclamar después" (*solve et repete*), tan cuestionado en la doctrina fiscal.

El criterio establecido en el fallo también incurre en otra deficiencia al concluir que los únicos aspectos que puede el Fisco local cuestionar y refrenar el sufragio del tributo es cuando se presente inconexidades de índole procedimental por cuanto las mismas no inciden en los otros aspectos del impuesto. Resulta lógico indicar, que si se cuestiona el procedimiento de determinación bajo las normas contables, el efecto inmediatamente posterior es un cambio matemático de la cantidad a pagar, siendo un elemento que el Fisco no *puede modificar directamente*, sino que debe realizar los procedimientos de fiscalización y determinación correspondientes –con las defensas expuestas por el contribuyente- para así cuando su decisión tenga carácter de título ejecutivo, proceder a exigir el pago de manera conjunta con las multas e intereses que diera lugar.

En atención a la anterior consideración, se estima que la presente decisión debió estimar la intromisión que representa la norma sobre los derechos fundamentales de los contribuyentes, por lo que la disposición debió anularse, y no salvaguardar la misma asumiendo que esa incidencia solo es permisible sobre el *"diferimiento del procedimiento establecido en la ordenanza"*, pues pueden existir discrepancias de esta índole entre el destinatario pasivo y el Fisco local que potencialmente tendrían ser resueltas ante los tribunales contenciosos tributarios. Por tanto, no puede conferirse normativamente ese poder por ser excesivamente invasivo de los derechos constitucionales de los contribuyentes.

Queda así expuesto el presente voto salvado.

Caracas, fecha *ut supra*.

La Presidenta,

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

Vicepresidente,

FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Disidente

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

V.S.Exp.- 11-0038

NOTA: No firma la presente sentencia el Magistrado [illegible], quien por motivos [illegible].

Nº 284

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 13-0332

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 17 de abril de 2013, los abogados GIOVANNI GÓMEZ SOBI y VANESSA MEJIA LOVERA, titulares de las cédulas de identidad Números V-12.626.005, V-17.907.634 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 137.072, 137.205, respectivamente; actuando en su condición de apoderados judiciales de la ciudadana **RUTH DESIRÉ PATRIZZI GÓMEZ**, residenciada actualmente en la ciudad de Barcelona, en el Reino de España y titular de la cédula de identidad Nro. V-14.274.163, conforme a instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Décima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, el 19 de diciembre de 2012, inserto bajo Núm. 6 del Tomo 121 de los Libros de Autenticaciones llevados por la Notaría anteriormente mencionada; interpusieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional del 3 de diciembre de 2012.

El 25 de abril de 2013, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

En reunión de Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente manera: Gladys M. Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover; ratificándose en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 22 del mismo mes y año, compareció ante la Secretaría de esta Sala el abogado Giovanni Gómez Sobi, a los fines de consignar copia certificada de la sentencia impugnada.

El 17 de octubre de 2013, en reunión de Sala Plena, en virtud de la ausencia temporal del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, se acordó que el ejercicio temporal de la Vicepresidencia de esta Sala Constitucional recayera en el Magistrado Juan José Mendoza Jover, así como la incorporación del Magistrado suplente Luis Fernando Damiani, quedando constituida en consecuencia la Sala por la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su carácter de Presidenta; el Magistrado Juan José Mendoza Jover, en su carácter de Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani.

El 5 de febrero de 2014, vista la reincorporación del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López por haber finalizado la licencia que le fue concedida, esta Sala Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Doctores Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

Efectuado el análisis del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Alegaron los apoderados judiciales de la ciudadana Ruth Desiré Patrizzi Gómez como fundamento de la demanda de amparo constitucional los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que, el 24 de septiembre de 2012, su representada, madre del niño cuya identificación se omite conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, realizó una solicitud graciosa de ejercicio unilateral de la patria potestad, ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional; correspondiendo conocer de dicha solicitud al Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del referido Circuito Judicial.

Que la solicitud del ejercicio unilateral de patria potestad fue básicamente fundamentada *"en el desconocimiento del paradero, domicilio o ubicación física del ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.874.325, padre del niño (...), acompañando los medios probatorios pertinentes al caso"*; que la misma fue declarada con lugar por el aludido Tribunal de primera instancia, el 28 de septiembre de 2012.

Que, el 10 de octubre de 2012, *"...ocho (8) días hábiles después de dictada la sentencia en jurisdicción graciosa, el abogado WILLIAM GUSTAVO URIBE en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA, ejerció un recurso de apelación contra la decisión antes mencionada, razón por la que se remitió el expediente al Tribunal Superior, donde se llevó a cabo todo el procedimiento, se presentó la formalización del recurso y se celebró una audiencia de apelación, actos que no fueron notificados a nuestra representada, todo lo cual trajo como resultado que en fecha 3 de diciembre de 2012 se declarara con lugar la apelación interpuesta por el abogado del ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA y revocada la sentencia del Tribunal a quo"*.

Que *"...intempestivamente, sin mediar algún tipo de comunicación con nuestra representada, el ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA ejerce una solictud (sic) de restitución internacional de patria portestad (sic) ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que al momento de la presentación del presente Amparo los tribunales del Reino de España, porcesan (sic) una solicitud de restitución internacional de patria portestad (sic) en contra de [su] representada"*.

Seguidamente, se refirió a los derechos constitucionales vulnerados por la decisión judicial, a saber: el debido proceso y la tutela judicial efectiva, contemplados en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, explicó que *"...siendo que la solicitud interpuesta para el ejercicio unilateral de la patria potestad presentada por nuestra representada; constituye en su esencia una acción de jurisdicción voluntaria, ya que en la misma no constituye una demanda ni existe contención: es una solicitud que presenta un interesado ante el órgano jurisdiccional a los fines del reconocimiento de la ocurrencia de una serie de hechos en particular, que pueden otorgar, previa verificación de los elementos que lo demuestren, el ejercicio de un derecho en particular; mal pudo pretender el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, tramitar un recurso de apelación para que posteriormente se dictara sentencia que anulara la del a quo, amén del hecho de que ya se había otorgado un derecho a nuestra representada que luego fuera revocado sin haber que a nuestra representada no se le notificó en ningún momento del proceso de apelación tal y como si estuviera en un procedimiento contencioso"*.

Luego de señalar doctrina al respecto indicó que al no existir *"...contención en la solicitud para el ejercicio unilateral de la patria potestad, el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional debió notificar a nuestra representada sobre la interposición de la ilegal apelación, y cuando menos sobre la anulación de la sentencia del Tribunal a quo, por respeto al derecho constitucional del debido proceso y a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de nuestra representada para que pudiera ejercer los recursos previstos en la ley, cercenando de esta forma el principio del debido proceso"*.

Destacó que su defendida, *"...en su carácter de solicitante en el procedimiento de jurisdicción graciosa, obtuvo una sentencia que le otorgó un derecho, el derecho de ejercer unilateralmente la patria potestad sobre su menor hijo, y en el entendido de que precisamente por tratarse de jurisdicción voluntaria, no de un proceso contencioso, una vez dictada la sentencia nuestra representada adquirió la seguridad jurídica sobre la titularidad de ese derecho, era imposible preveer que apareciera un tercero a hacer oposición a ello, en este caso el representante judicial del progenitor de su hijo, más aun cuando precisamente su solicitud deviene de la imposibilidad de ubicado o desconocer su paradero. Es por esta razón que insistimos en que nuestra representada debió notificarse de ese hecho, y denunciamos la violación a su derecho a la defensa derivada de la violación del debido proceso por la ausencia de notificación tanto de la oposición del tercero como de la sentencia definitiva"*.

En cuanto a la violación al derecho a la defensa, regulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegó que, en el caso

de marras, lamentablemente para su representada, *"la Jueza de Alzada no le garantizó su derecho a comparecer a la audiencia de apelación, no brindó oportunidad de desvirtuar a través de sus pruebas los alegatos del recurrente y por último no notificó de la decisión fuera del lapso, para que pudiera ejercer los recursos que la Ley establece en estos casos"*.

Asimismo, denunció la violación a la "Doctrina de la Protección Integral". En tal sentido, precisó que *"[e]l artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela recoge varios postulados que fueron proclamados en la Convención de los Derechos del Niño, como un instrumento de alcance universal, que a todo evento debe ser observado por las autoridades en el mundo, ello lo recalco (sic), porque la esencia de todo este proceso radica en el incumplimiento de los deberes del progenitor del niño, quien posterior a una decisión judicial, es que se da cuenta que debe estar presente en todo lo que le concierne al niño en cuanto a la responsabilidad de crianza, no es posible que ahora pretenda desdibujar su entorno cuando el niño ha tenido que viajar para someterse a unos tratamientos médicos, la madre por el contrario ha tenido que asumir todos los gastos para brindarle bienestar a su hijo en su sano desarrollo físico y mental, ahora además se debe someter a un proceso de restitución que en cierto modo carece de soporte, en virtud que conforme al Instrumento Internacional (Restitución Internacional y Sustracción Ilícita de Menores) existen una serie de excepciones y defensa que en definitiva darían lugar a una declaratoria sin lugar de la Restitución, y el padre está conciente (sic) de eso, pero la madre quiere dejar bien claro la situación de su hijo, reconoce su obligación para que su desarrollo sea digno, y que jamás se cuestione su rol, por eso actúa con probidad y se sujeta a cualquier decisión que se tome, pero siempre en el marco de la legalidad, por eso acudimos ante este Máximo Tribunal a solicitar justicia, y que se reponga la causa al estado en que se celebre nuevamente la audiencia de apelación donde pueda estar presente nuestra representada y así garantizar sus derechos y los derechos de su hijo"*.

Resaltó que la acción es admisible, según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por último, solicitó que con base en lo expuesto, se admita y sustancie la presente acción de amparo constitucional, se fije la audiencia constitucional y se declare con lugar en la definitiva y se ordene la restitución inmediata de los derechos y garantías constitucionales de nuestra representada mediante la revocatoria de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, del 3 de diciembre de 2012, por haber violado flagrantemente el derecho del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa de la ciudadana Ruth Desire Patrizzi Gómez.

II
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer del presente amparo y, a tal efecto, observa:

Que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en el artículo 25, numeral 20, que la Sala es competente para el conocimiento de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en materia contenciosa administrativa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Ello así, visto que el amparo bajo examen tiene por objeto una decisión dictada por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, esta Sala Constitucional se declara competente para su conocimiento y decisión. Así se establece.

III
DE LA DECISIÓN ACCIONADA EN AMPARO

La sentencia accionada fue dictada por el Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 3 de diciembre de 2012, a propósito del recurso de apelación ejercido por el ciudadano Miguel Ángel Rangel Ojeda, el cual declaró con lugar, contra la sentencia dictada por la Jueza Décima de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de ese Circuito Judicial, el 28 de septiembre de 2012, que declaró con lugar la solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad de su hijo (cuya identificación se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), realizada por la quejosa, ciudadana Ruth Desiré Patrizzi Gómez, revocando esta última.

En este sentido, el fallo impugnado describió el proceso de apelación, a saber:

> *"Ratificaron en toda y cada una de sus partes el escrito de apelación interpuesto por su representado en el cual apeló de la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 2012, por cuanto la misma según su afirmación le violó su derecho a la defensa y al debido proceso, y a quien el Tribunal debió oír su opinión, y notificarle, al igual que al Fiscal del Ministerio Público, así como también la opinión del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, refiere el mencionada (sic) ciudadano que la sentencia dictada por el a quo, se fundamentó principalmente en fraude procesal, falsa atestación ante funcionario público, al manifestar la ciudadana RUTH DESIRE PATRIZZI, que desconocía su ubicación por cuanto los mismos vivieron en pareja y en todo momento tuvo contacto con él, razón por la cual solicitó se declare con lugar el recurso. En la misma fecha consignaron pruebas documentales y fue promovida la prueba de posiciones juradas, al igual que solicitaron se decretaran medidas. (Folios 17 al 21).*
>
> *En fecha siete (07) de noviembre de 2012, el Abogado WILLIAM GUSTAVO URIBE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 54.049, apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ANGEL RANGEL OJEDA, presentó diligencia por medio de la cual renuncia a la prueba de posiciones juradas. (Folio 24).*
>
> *En fecha 08 de noviembre de 2012, este Tribunal se pronunció sobre las medidas solicitadas.*
>
> *En fecha 20 de noviembre de 2012, MARÍA FERNÁNDEZ COLMENARES, en su carácter de Fiscal Nonagésima Sexta (96) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas mediante escrito adujo lo siguiente:*
>
> *Que había comparecido ante la Fiscal Superior el ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA, titular de la cédula de identidad Nº V-14.874.325, quien denunció irregularidades en un procedimiento judicial, por parte del Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, quien dictó sentencia de fecha 28 de septiembre de 2012, privándolo unilateralmente de la Patria Potestad, que ejercía sobre su hijo (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), y el mismo Tribunal, mediante procedimiento separado, autorizó además la salida del país del prenombrado niño, todo ello sin consentimiento, ni autorización del progenitor. Que si bien era cierto que se encontraba vencido el lapso para ejercer Recurso de Apelación, no era menos cierto que en la causa principal no constaba notificación alguna del Fiscal del Ministerio Público, al igual que de los alegatos realizados por la madre del niño, el Tribunal a quo no realizó las diligencias pertinentes en cuanto a la búsqueda de la verdad y no agotó, ni indagó con relación a la ubicación y notificación del progenitor. Igualmente consignó documentales a los fines que fueran analizadas y siguió exponiendo que la madre del niño se limitó a consignar copias simples de documentos y exámenes médicos. Que en fecha 28 de septiembre de 2012, se celebró la audiencia donde se declara con lugar el ejercicio de la unilateralidad de los efectos de la Patria*

Potestad, indicando que se celebraba simultáneamente con la misma parte, en el mismo Tribunal y a la misma hora la causa correspondiente a la Autorización para viajar. Que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes conjuntamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se lograron compromisos fundamentales en materia de derechos humanos de la infancia y la adolescencia, así como la corresponsabilidad del estado en defensa y garantía de esos derechos. Que el artículo 262 del Código Civil, el cual no fue derogado taxativamente, puede considerarse una disposición contraria a la Carta magna y a la ley especial, por prever el artículo 75 la importancia de la familia en el desarrollo integral, así como el 76 que establece que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos. Que el artículo 262 del Código Civil, ya no era norma supletoria por no existir ausencia, ni vacío en la ley especial y siendo que solo se suple lo que no existe, razón por la cual solicitó sea declarada la NULIDAD de la sentencia de ejercicio Unilateral de la Patria Potestad, a favor del niño (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), dictada en fecha 28 de septiembre de 2012".

Seguidamente, la actuación judicial impugnada resuelve sobre la base de las siguientes consideraciones:

"La petición formulada por la ciudadana RUTH DESIRE PATRIZZI GÓMEZ, a través de una acción mero declarativa del ejercicio de unilateral de la patria potestad, está destinada a que la ciudadana RUTH DESIRE PATRIZZI GÓMEZ, pueda ejercer de manera unilateral y eficaz la patria potestad de su hijo (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en virtud de la no presencia de su progenitor el ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA, fundamentando su solicitud en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 262 del Código Civil, para quien suscribe es importante destacar lo que dice a la letra el 262 y 420 eiusdem, lo siguiente:

Artículo 262: "En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare alguno de ellos sometido a tutela del entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo sólo la patria potestad; pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo tribunal.".(Negritas de esta Corte Superior).

El artículo 420 del Código Civil establece:
Artículo 420: "Desde que ocurra presunción de ausencia de uno de los padres, el otro ejercerá la patria potestad, y si éste ha fallecido, o estuviere en la imposibilidad de ejercerla, se abrirá la tutela." (Negritas del Superior Primero).
Ahora bien, se colige de las normas transcritas, elementos de procedencia para que pueda operar el ejercicio exclusivo de la patria potestad por parte de un sólo progenitor, en el presente caso la peticionante alega la presunción de no presencia del padre de su hijo. En este sentido, la ley en su artículo 418 del Código Civil, presume no presente a la persona cuando concurren las dos circunstancias siguientes:

A. Que la persona haya desaparecido de su último domicilio o residencia.
B. Y de quien no se tengan noticias de la persona.

Es de hacer notar que en el régimen ordinario de ausencia, la ley distingue tres fases claramente reguladas en el Título XII, Capítulo II, a saber: Sección I. La ausencia presunta; Sección II. La ausencia declarada y, Sección III. La muerte presunta; en la primera, es decir, en la ausencia presunta no se requiere declaración judicial pues solamente es presunta, siendo ésta una presunción 'iuris tantum', o sea que admite prueba en contrario. En este caso en particular fue alegada la no presencia establecida en el artículo 262 eiusdem.
Al respecto, esta Alzada considera oportuno señalar que la acción mero declarativa está orientada al reconocimiento de una situación que opera de pleno derecho, por cuanto a través de ella no se puede constituir, modificar o extinguir un derecho, así nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, le reconoce la potestad a las partes de acudir al órgano jurisdiccional a legitimar la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica cuando el demandante no puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente y sobre todo cuando se trata de adjudicar derechos en protección de niños, niñas y adolescentes.
Ahora bien, con respecto al caso que nos ocupa es importante destacar que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA, en su carácter de progenitor del niño (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), se hizo presente por medio de sus apoderados judiciales en la persona de WILLIAM GUSTAVO URIBE y WILLIAM GUSTAVO URIBE REGALADO, y consignó documentaciones que fueron analizadas Ut supra y las cuales forman parte de la prueba en contrario que indica la presunción luris tantum que considera que un determinado hecho, o un determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello. La presunción de hechos y derechos, faculta a los sujetos a cuyo favor se da, a prescindir de la prueba de aquello que se presume cierto ope legis. Todo esto favorece de entrada a una de las partes del juicio (el que se beneficia de la presunción) que normalmente es el que se encuentra en una posición defensiva, y cuya verdad formal presumida, tendrá que ser destruida aportando para ello pruebas en contra, por quien sostenga otra verdad distinta a la presumida. Y el caso que nos ocupa eso ocurrió, es decir compareció el progenitor posteriormente de haberse efectuado las decisión por el a quo a los fines de introducir prueba en contrario, que necesariamente quien suscribe tiene que considerarlas ya que bajo esta premisa cambian los supuestos.
Es importante señalar que la institución familiar de la Patria Potestad, recogida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en sus artículos 347 y siguientes, se ejerce en interés de los hijos y no como un derecho de los padres, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 eiusdem, por lo que debe garantizarse el disfrute pleno de los derechos del niño (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
El artículo 349 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que la patria potestad y su ejercicio son compartidos por los padres, sin embargo, la patria potestad se puede otorgar a uno solo de ellos si un tribunal declara la privación de la titularidad o si se produce una causal de exclusión que suspende el ejercicio de la patria potestad artículo 352, 353 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 262 del Código Civil.
La doctrina ha señalado con respecto a la exclusión absoluta del ejercicio de la patria potestad lo siguiente:
'...La ley establece ciertos supuestos de exclusión absoluta del ejercicio de la patria potestad, en los cuales el titular de la misma queda impedido de ejercerla mientras subsista la causa de exclusión.
La exclusión es llamada por La Roche SUSPENSIÓN y la define como una interrupción espontánea, automática, de hecho, como resultado de ciertas condiciones y circunstancias que afectan el ejercicio de la misma y que impiden a los padres ejercer esa institución. Cita como ejemplos precisamente: el entredicho, el ausente, el no presente.....Cuando cesan las causas nuevamente el padre ejerce la patria potestad.
4 (sic) Observándose que no se trata de hechos o conductas que impliquen maltrato o abandono hacia el menor, (sic) a diferencia de las circunstancias que constituyen causales de privación de patria potestad...'. DOMINGUEZ GUILLEN, María Candelaria, Ensayos sobre Capacidad y otros Temas de Derecho Civil. Colección Nuevos Autores. N° 1. Tribunal Supremo de Justicia. 2001. Pág 116)...'. Destacado del Tribunal Superior Primero.
Asimismo con respecto a la titularidad y el ejercicio de la Patria Potestad Anabella del Moral, en el artículo 'Derecho al Libre Transito (sic) de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el libro '...Quinto Año de Vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente...', aduce lo siguiente:

> *'...Respecto a la titularidad y ejercicio de la patria potestad debe señalarse que la ley en estudio, utiliza como sinónimos ambos términos, cuando en realidad tienen implicaciones diferentes (...) el ejercicio supone la titularidad, pero no viceversa. Así un progenitor puede ser titular de la patria potestad, pues no la ha perdido por extinción o privación pero no ejercita las facultades-deberes en ella comprendido...'.*

Igualmente la Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, mediante sentencia de fecha 18 de febrero de 2011, explica de manera muy precisa la diferencia entre extinción, privación y exclusión de la patria potestad de la siguiente manera:

> *'...la patria potestad se pierde por extinción y por privación, esta última es la pérdida de la titularidad que tiene el progenitor por conductas u omisiones graves que atentan contra el infante o el adolescente.*
> *En cambio, la exclusión se refiere a la suspensión del ejercicio de la patria potestad debido a que el padre no puede ejercerla por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte la titularidad de la patria potestad, pues, aun cuando no la ejerza, LA MANTIENE.*
> *Por tanto, la exclusión es distinta a la privación o a la extinción, pues se refiere solamente al ejercicio de la patria potestad del progenitor que no puede cumplir con sus deberes y facultades.*
> *Ahora bien, una vez que ocurra la exclusión de un progenitor, el ejercicio de la patria potestad recaerá exclusivamente en el otro progenitor, pues deberá asumir o continuar ejerciendo sólo la patria potestad (salvo que se le haya privado de ella) hasta que cese la situación de hecho que lo afecta....' (subrayado de este Tribunal)*

Ahora bien debido a lo que (sic) expuesto por la doctrina, la jurisprudencia, la normativa legal, este Tribunal Superior Primero, evidenció con respecto al caso que nos ocupa que el ciudadano MIGUEL ANGEL RANGEL OJEDA, en su carácter de progenitor del niño (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), se hizo presente, demostrando prueba en contrario y al hacerlo decae la presunción de no presencia alegada por la ciudadana RUTH DESIRE PATRIZZI GOMEZ, por lo que necesariamente tienen que enervarse el derecho declarado con lugar del ejercicio unilateral de los efectos de la patria potestad, de la decisión de fecha 28 de septiembre de 2012, suscrita por la Jueza del Tribunal Décimo (10°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, por lo que este recurso debe prosperar y así se declara.
Por último con relación a las medidas solicitadas, tanto en el escrito de formalización de la apelación, como en la audiencia de apelación, se ratifica lo decidido por este (sic) Superior Primero en auto de fecha 08 de noviembre de 2012 y acta de fecha 26 de noviembre de 2012 respectivamente".

Por las consideraciones expuestas, declaró:

"PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por los abogados WILLIAM GUSTAVO URIBE y WILLIAM GUSTAVO URIBE REGALADO, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nos: 54.049 y 163.998 respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA, titular de la cédula de identidad N° V-14.874.325, contra la decisión de fecha 28 de septiembre de 2012, dictada

por la Jueza del Tribunal Décimo (10°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Se anula la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2012, dictada por la Jueza del Tribunal Décimo (10°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, en consecuencia se enervan los derechos declarados. TERCERO: El ejercicio de la Patria Potestad del niño (Se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), la continuarán ejerciendo de manera conjunta los progenitores ciudadanos: RUTH DESIRE PATRIZZI GOMEZ y MIGUEL ÁNGEL RANGEL OJEDA. CUARTO: Se ratifica el auto de fecha 08 de noviembre de 2012, donde se negaron las medidas solicitadas por el recurrente. QUINTO: Con relación a la prohibición de salida del país solicitada en este acto por el apoderado judicial de la parte recurrente, el Tribunal la niega, por tratarse de un hecho futuro que no puede ser determinado por esta juzgadora".

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Para decidir, esta Sala observa:

Que la presente acción de amparo constitucional fue incoada ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por los apoderados judiciales de la ciudadana Ruth Desiré Patrizzi Gómez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional del 3 de diciembre de 2012, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Miguel Ángel Rangel Ojeda, contra la sentencia dictada por la Jueza Décima de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de ese Circuito Judicial, el 28 de septiembre de 2012, que declaró con lugar la solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad de su hijo (cuya identificación se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), realizada por la quejosa, ciudadana Ruth Desiré Patrizzi Gómez, revocando esta última.

Debe esta Sala como punto previo señalar que de las actas que conforman el expediente se observa una ausencia de actividad de la parte actora en el presente procedimiento de amparo constitucional desde el 22 de mayo de 2013, oportunidad en la cual consignó copias certificadas de la decisión impugnada, transcurriendo desde su última actuación más de seis (6) meses sin que se haya verificado actuación alguna en el expediente.

Advierte esta Sala que la falta de actividad de las partes en una causa evidencia la pérdida del interés procesal, lo que ha sido considerado como una circunstancia que produce indefectiblemente el abandono del trámite, conforme al criterio jurisprudencial de esta Sala Constitucional sentado en su decisión N° 982 del 6 de junio de 2001 (caso: *José Vicente Arenas Cáceres*),

En efecto, si bien en el caso que nos ocupa se advierte que la accionante realizó su última actuación el 22 de mayo de 2013, lo que supone la inactividad de la parte actora por mucho más de seis (6) meses, esta Sala estima que no resulta posible considerar que se produjo el abandono del trámite, por cuanto en la presente causa se encuentra involucrado el orden público, toda vez que el juicio en el que se dictó la decisión accionada consiste en una solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad realizada por la parte actora, conforme a la cual el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional había acordado en primera instancia el ejercicio exclusivo y excluyente de esta institución familiar en uno sólo de los progenitores, la solicitante. De tal modo que se trata de una institución regulada por la legislación de protección de niños, niñas y adolescentes, en cuya observancia se encuentra interesado el Estado, por tanto, observa esta Sala que al encontrase involucradas normas de orden público, el presente proceso constitucional debe continuar, no siendo aplicable frente a la inactividad procesal en que incurrió la parte interesada, la consecuencia jurídica del abandonado su trámite y su correspondiente terminación del proceso. Así se establece.-

Establecido lo anterior, procede esta Sala a referirse a la admisibilidad de la acción, motivo por el cual observa, luego del análisis de la pretensión de amparo, se observa que la misma cumple con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

Asimismo, la demanda de amparo *sub examine,* no se halla incursa ***prima facie*** en las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual la Sala concluye que resulta admisible dicha demanda. Así se declara.

Ahora bien, debe esta Sala reiterar una vez más su criterio en cuanto a que este tipo de demanda contra actuaciones judiciales, constituye un mecanismo procesal con características que la diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de las otras vías existentes para la impugnación de los actos que emanen de los órganos jurisdiccionales, razón por la cual a las demandas de amparo constitucional contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le han señalado especiales presupuestos para su procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso ***in limine litis,*** en atención a los principios de celeridad y economía procesal. En este sentido, la norma señalada expresa:

> *"Artículo 4.- Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.*
>
> *En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva".*

Ha establecido esta Sala también, en innumerables oportunidades, que de la disposición transcrita, se colige que para considerar procedente una acción de amparo contra un acto jurisdiccional, deben estar presentes las siguientes circunstancias: a) que el Juez de quien emanó la decisión presuntamente lesiva haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder, es decir, que hubiese actuado fuera de su competencia; y b) que con fundamento en la incompetencia manifiesta se ocasione la violación de un derecho constitucional.

Con el establecimiento de tales extremos de procedencia se ha pretendido evitar la interposición de solicitudes de amparo como la de autos con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme; y, por otra parte, para que la tutela constitucional no se convierta en sucedánea de los demás medios procesales (ordinarios y extraordinarios) existentes.

Se observa que la actuación señalada como lesiva se produjo con ocasión de una solicitud para el ejercicio unilateral de la patria potestad por parte de la ciudadana Ruth Desiré Patrizzi Gómez, actual accionante, conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del Código Civil, alegando el desconocimiento del paradero, domicilio o ubicación física del ciudadano Miguel Ángel Rangel Ojeda, de la que

conoció el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, la cual declaró con lugar, por sentencia del 28 de septiembre de 2012.

Tal decisión fue impugnada a través del recurso de apelación ejercido por el ciudadano Miguel Ángel Rangel Ojeda contra dicho fallo, y fue declarado con lugar, a través de la decisión actualmente cuestionada, dictada por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el 3 de diciembre de 2012.

Advierte la Sala, del análisis efectuado a la situación *sub judice*, la problemática de que en la práctica forense se esté desviando el especial propósito que persigue el mecanismo regulado en el artículo 262 del Código Civil, y se use el referido precepto para conseguir efectos diferentes a los perseguidos por el Legislador, en fraude a la Ley, para evitar que se aplique el procedimiento establecido para obtener las autorizaciones con el propósito de cambiar la residencia del niño o para viajar, siendo el objetivo real del dispositivo, ofrecer un instrumento útil, cuando no se tiene la presencia física de uno de los titulares de la patria potestad.

En este sentido, considera esta Sala preciso realizar algunas advertencias respecto a la situación planteada, a los fines de que los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes apliquen el referido artículo con mucho celo a aquellos casos donde realmente se produzcan los supuestos establecidos en la norma y no se equivoque su verdadera finalidad, pues destaca que la impugnada en su parte narrativa señale que la Fiscal del Ministerio Público que participó en el procedimiento alegue que el padre resaltó que mediante procedimiento separado se haya autorizado la salida del país del menor de edad, hijo de las partes involucradas, sin su consentimiento.

Cabe destacar que en el caso examinado, la parte accionante había centrado sus denuncias en el hecho de que la sentencia dictada por el Tribunal Superior Primero, con ocasión de la referida solicitud, vulneró los derechos constitucionales referidos al debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, contemplados en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; toda vez que, según alegó la parte accionante, el mencionado Juzgado Superior debió considerar que la apelación fue interpuesta en un juicio en el que no hubo contención; que debió notificarse a su representada *"sobre la interposición de la ilegal apelación, y cuando menos sobre la anulación de la sentencia del Tribunal a quo (...) para que pudiera ejercer los recursos previstos en la ley, cercenando de esta forma el principio del debido proceso"*; que la sentencia dictada en primera instancia (apelada ante el Tribunal señalado como agraviante) le otorgó *"el derecho de ejercer unilateralmente la patria potestad sobre su menor hijo, y en el entendido de que precisamente por tratarse de jurisdicción voluntaria, no de un proceso contencioso, una vez dictada la sentencia nuestra representada adquirió la seguridad jurídica sobre la titularidad de ese derecho"*, por lo que le era *"imposible preveer (sic) que apareciera un tercero a hacer oposición a ello (...) más aun cuando precisamente su solicitud deviene de la imposibilidad de ubicarlo o desconocer su paradero"*.

Adicionalmente, la accionante adujo que *"la Jueza de Alzada no le garantizó su derecho a comparecer a la audiencia de apelación, no brindó oportunidad de desvirtuar a través de sus pruebas los alegatos del recurrente y por último no notificó de la decisión fuera del lapso, para que pudiera ejercer los recursos que la Ley establece en estos casos"*. Asimismo, denunció la violación a la *"Doctrina de la Protección Integral"*.

Advierte la Sala que es preciso determinar cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento que se sigue para hacer efectiva la *"solicitud de ejercicio unilateral de la patria potestad"*. En este sentido, es importante dejar establecido que este instituto encuentra su regulación en el dispositivo contenido en el artículo 262 del Código Civil, norma de vieja data que no fue derogada por la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, ni por la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Instrumentos éstos que sustituyeron el antiguo sistema regulado por la Ley Tutelar del Menor, y que si bien la primera de las referidas Leyes recopiló, clasificó, desechó o reprodujo en el nuevo instrumento legislativo, no derogó el precepto que comentamos, limitándose a abrogar por ejemplo los artículos 261, 263 y 264 del referido Código (Véase artículo 684), mas no el artículo 262, que no sólo mantuvo vigente si no que entonces no incorporó ni codificó en la ya derogada Ley de Protección del Niño y del Adolescentes.

Así entonces el artículo 262 del Código Civil dispone:

> *"En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella,* ***el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo solo la patria potestad****; pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo tribunal"*.

En este sentido, es preciso aclarar, por una parte, que el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estatuye la obligación del Estado de proteger a las familias como asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas; expresa también el Texto Fundamental que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes y que el Estado debe protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Y, de igual forma, el artículo 76 *eiusdem* reconoce el deber compartido e irrenunciable que el padre y la madre tienen de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas.

De otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niños, aprobada por la República, en su artículo 5 establece:

> "Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

En tanto que el artículo 9 de ese mismo instrumento normativo dispone:

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona

esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas".

De donde se advierte que esa situación que vincula a los hijos con sus padres se expresa a través de la institución de la patria potestad que, conforme a nuestra legislación se entiende como *"...el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas..."* (Artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

La patria potestad comprende entonces la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes de los hijos e hijas sometidos a ella (artículo 348 *eiusdem*).

De tal modo que la institución de la patria potestad es el estadio donde y como se materializan y se implementan las normas constitucionales mencionadas, a través de la cual padres e hijos interactúan. En otras palabras, el ejercicio de la patria potestad por los padres es el reconocimiento que realiza el ordenamiento jurídico para atribuirle a éstos facultades, derechos y deberes en beneficio de los hijos e hijas y que caracterizan la relación parental, de tal manera que, garantiza la mejor forma de emprender la dirección y orientación por sus padres de sus hijos menores de edad. Su ejercicio en Venezuela recae conjuntamente en ambos progenitores, por ordenarlo así el artículo 349 de la mencionada Ley Orgánica, siendo el caso que solamente de manera excepcional puede perderse, bien por uno solo de ellos o por ambos, sin que medie una forma que extinga su ejercicio (mayoridad, emancipación o muerte del hijo; reincidencia en cualquiera de las causales de privación de la patria potestad, previstas en el artículo 352 de la aludida Ley Orgánica o consentimiento para la adopción. Véase artículo 357).

Corolario de ello es que la patria potestad constituye una institución particular en cuya vigencia el estado se encuentra especialmente interesado, siendo la regla generalizada el que todos los niños, niñas y adolescentes estén sometidos a ella y sólo de manera excepcional se encuentren sujetos a un régimen distinto.

Es por ello que las causas de cesación de la patria potestad estén determinadas y se les conozca como causas de extinción o de privación de la patria potestad. Las primeras se encuentran estatuidas en el artículo 356 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que establece la patria potestad se extingue en los siguientes casos:

a) Mayoridad del hijo o hija.
b) Emancipación del hijo o hija.
c) Muerte del padre, de la madre, o de ambos.
d) Reincidencia en cualquiera de las causales de privación de la patria potestad, previstas en el artículo 352 de esta ley.
e) Consentimiento legal para la adopción del hijo o hija, excepto cuando se trate de la adopción del hijo o hija por el otro cónyuge.

En tanto que para que opere su privación, se exige que medie un juicio y una resolución judicial que lo acuerde, con estricta sujeción en una de las causales previstas de manera taxativa en el artículo 352 de la misma Ley Orgánica; a saber:

a) Maltrato físico, mental o moralmente.
b) Exposición a cualquier situación de riesgo o amenaza a los derechos fundamentales del hijo o hija.
c) Incumplimiento de los deberes inherentes a la Patria Potestad.
d) Corrupción o prostitución (o consientan tales)
e) Abuso sexual o exposición a la explotación sexual.
f) Dependencia a sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas u otras formas graves de fármaco dependencia que pudieren comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos o hijas, aun cuando estos hechos no acarreen sanción penal para su autor o autora.
g) Condenatoria por hechos punibles cometidos contra el hijo o hija.
h) Declaración de interdicción
i) Negativa a prestar la obligación de manutención.
j) Incitación, facilitación o conducta permisiva para que el hijo o hija ejecute actos que atenten contra su integridad física, mental o moral.

Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente artículo 262 del Código Civil, se observa que aparte de la cesación por causa de extinción y privación de la patria potestad, existe una figura intermedia que admite la posibilidad de su ejercicio de manera unilateral, por parte de un solo progenitor, por causas específicas. En efecto, de esta última norma se desprenden cinco supuestos que dan lugar al ejercicio exclusivo de la patria potestad por uno solo de los progenitores; es decir, se trata de situaciones donde si bien no existe una privación del ejercicio de la patria potestad de uno de los padres, uno de los progenitores lo asume en soledad; salvo en lo que respecta al supuesto del entredicho, que requiere la apertura del procedimiento de interdicción respectivo, supuesto éste que recientemente fue incluido expresamente entre las nuevas causales de privación de la patria potestad de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con lo que dicho supuesto quedó derogado implícitamente y, por lo tanto, excluido de este elenco de situaciones que dan lugar al ejercicio unilateral de la patria potestad.

El primero de dichos supuestos, anteriormente señalado, no ofrece duda, pues, explica la extinción por el solo hecho de la muerte. Sin embargo, los demás casos requieren de la intervención judicial para su comprobación. En efecto, en el caso del declarado ausente se requiere que medie previamente el juicio de ausencia y los últimos dos casos, relativos al *no presente* o a un motivo que imposibilite al progenitor su ejercicio, sin que pueda subsumirse en cualquiera de los casos mencionados, requieren también de un procedimiento con una actividad probatoria intensa ante un juez competente. Estando dentro de este último supuesto, por ejemplo, el caso de una persona hospitalizada en terapia intensiva o una persona privada de su libertad, víctima de un secuestro, o de quién se desconozca absolutamente su paradero, etcétera.

Ahora bien, los distintos supuestos que comprende el referido artículo 262 del Código Civil deben tramitarse a través de una solicitud no contenciosa o de jurisdicción voluntaria, o simplemente graciosa y, por tanto, dicha solicitud se encuentra sometida y goza de los caracteres que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha elaborado para su definición.

Ha establecido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a esta norma, en fallo Núm. 0065 del 18 de febrero de 2011, que *"...la legislación interna de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la patria potestad y su ejercicio son compartidos por los padres (artículo 349 de la LOPNNA). Sin embargo, la patria potestad se puede otorgar a uno solo de ellos si un tribunal declara la privación de la titularidad o si se produce una causal de exclusión que suspenda el ejercicio de la patria potestad (artículos 352, 353 eiusdem y 262 del Código Civil, respectivamente).*

Ha dejado claro dicha Sala en el referido fallo que *"...en nuestro ordenamiento jurídico la patria potestad se pierde por extinción y por privación, esta última es la pérdida de la titularidad que tiene el progenitor por conductas u omisiones graves que atentan contra el infante o el adolescente"*. Mientras que la exclusión se refiere *"...a la suspensión del ejercicio de la patria potestad debido a que el padre no puede ejercerla por encontrarse en una situación de hecho que le impide hacerlo, sin que ello afecte la titularidad de la patria potestad, pues, aun cuando no la ejerza, LA MANTIENE*. Que *"...por tanto, la exclusión es distinta a la privación o a la extinción, pues, se refiere solamente al ejercicio de la patria potestad del progenitor que no puede cumplir con sus deberes y facultades"*.

Así las cosas, explica la Sala de Casación Civil en el fallo que se comenta cuanto sigue:

> *"Ahora bien, una vez que ocurra la exclusión de un progenitor, el ejercicio de la patria potestad recaerá exclusivamente en el otro progenitor, pues deberá asumir o continuar ejerciendo sólo la patria potestad (salvo que se le haya privado de ella) hasta que cese la situación de hecho que lo afecta.*
> *A tal efecto, la doctrina ha señalado:*
> *'...La ley establece ciertos supuestos de exclusión absoluta del ejercicio de la patria potestad, en los cuales el titular de la misma queda impedido de ejercerla mientras subsista la causa de exclusión. La exclusión es llamada por La Roche SUSPENSIÓN y la define como una interrupción espontánea, automática, de hecho, como resultado de ciertas condiciones y circunstancias que afectan el ejercicio de la misma y que impiden a los padres ejercer esa institución. Cita como ejemplos precisamente: el entredicho, el ausente, el no presente... Cuando cesan las causas nuevamente el padre ejerce la patria potestad.*
> *'4 Obsérvese que no se trata de hechos o conductas que impliquen maltrato o abandono hacia el menor, a diferencia de las circunstancias que constituyen causales de privación de la patria potestad...'. (Vid. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria. Ensayos sobre Capacidad y otros Temas de Derecho Civil. Colección Nuevos Autores. Nº1. Tribunal Supremo de Justicia. 2001. Pág. 116)...".*
> *Asimismo, Anabella Del Moral, en el artículo "Derecho al Libre Tránsito de Niñas, Niños y Adolescentes", publicado en el libro "...Quinto Año de Vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente...". Coordinadores Cornieles Cristóbal y Morais María G. expresa, lo siguiente:*
> *"...Respecto a la titularidad y ejercicio de la patria potestad debe señalarse que la ley en estudio, utiliza como sinónimos ambos términos, cuando en realidad tienen implicaciones diferentes (...) **el ejercicio supone la titularidad, pero no viceversa. Así un progenitor puede ser titular de la patria potestad, pues no la ha perdido por extinción o privación pero no ejercita las facultades-deberes en ella comprendido...".***
> *El legislador patrio consagró la exclusión en el artículo 262 del Código Civil (derogado parcialmente por el artículo 352 en su literal "h" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes) que establece, lo siguiente:*
> *"...Art. 262. • En caso de muerte del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, si se hallare alguno de ellos sometido a tutela de entredicho, de haber sido declarado ausente, de no estar presente o cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella, **el otro progenitor asumirá o continuará ejerciendo sólo la patria potestad**, pero si había sido privado de la misma por sentencia o decisión judicial, no podrá hacerlo sino después que haya sido autorizado o rehabilitado por el mismo Tribunal..." (Negrillas de la Sala).*
> *En nuestro derecho uno de los supuestos de hecho que permiten el **ejercicio exclusivo del progenitor que ejerce la patria potestad sobre el infante es la no presencia** de uno de los progenitores. El no presente es aquella "...persona que no se encuentra en el país en un momento dado, sin que exista motivo legal para dudar de su existencia...", y cuyo efecto causa "...1º la exclusión del no presente de la patria potestad sobre sus hijos (Código Civil. art. 262), norma que no está incorporada expresamente a la LOPNA; pero que esta ley no deroga (LOPNA, art 684)...". (Vid. José Luis Aguilar Gorrondona. Personas, Derecho Civil I. Universidad Católica Andrés Bello. 22º edición. Caracas. 2009. Pág. 393 y 394).* (véase sentencia Sala de Casación Civil/Tribunal Supremo de Justicia Núm. 0065 del 18-02-2011).

Adviértase entonces que para que un progenitor pueda considerarse *no presente* ninguna duda debe existir acerca de su existencia; en tanto que para que opere el último de los supuestos que se analiza de la norma, esto es, *"cuando por cualquier motivo se encuentre impedido para cumplir con ella"*, es menester que surja cualquier motivo (de salud, por ejemplo, como se expuso) que habilite al otro a ejercer la patria potestad de manera exclusiva sin que se trate de su extinción o de la muerte del sujeto que no puede ejercer el instituto.

Ahora bien, este tipo de solicitudes que se realizan con fundamento en la referida norma del Código Civil, que autoriza a un progenitor a ejercer unilateralmente la patria potestad, que tal como se estableció, no fue derogada por la Ley que rige la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, es decir, a asumir exclusivamente los atributos que ella comprende, exceptúa el régimen normal, tradicional y deseable de ejercicio conjunto de la patria potestad, fundado en razones extraordinarias y excepcionales, cabe preguntarse, cuál podría ser el interés jurídico o la utilidad práctica de obtener un reconocimiento judicial de este tipo, basado en esta norma. A esta interrogante la Sala concluye que no es otro que se habilite al progenitor que realiza tal solicitud, para que prescindiendo del consentimiento del otro o sin su autorización, pueda realizar libremente actos que incumben e interesan a ambos padres; que exceden la simple administración de los bienes de él o los menores de edad, para los cuales normalmente se requiere de la autorización de ambos padres; realizar alguna enajenación de algún bien del infante; solicitar la tramitación de documentos importantes (como el pasaporte); realizar viajes al exterior; cambiar la residencia del menor de edad al extranjero; en fin, cualesquier gestión para la que normalmente se requiere de la autorización de ambos y acerca de las cuales los entes públicos o privados, son muy celosos al solicitar el acuerdo y la manifestación conjunta de voluntad de los padres para los trámites de que se trate.

De lo expuesto se colige que tratándose de un régimen esencialmente atípico, su utilización está orientada exclusivamente a casos excepcionales y absolutamente comprobables, que lo justifiquen.

Así entonces, una situación ejemplificante de esta advertencia sería si un progenitor o progenitora se encuentra en terapia intensiva y el o la impúber o adolescente requiere realizar algunas actividades para cuya ejecución se exige la autorización de éste o ésta, se trata naturalmente de una circunstancia excepcional, frente a la cual no resulta procedente la privación de la patria potestad, pues no ha lugar a ello. Es allí donde cabe invocar la aplicación de esta modalidad, prevista por el Legislador en el Código Civil para que, sin perturbar la titularidad de la patria potestad, se permita al otro progenitor y específicamente al niño, niña o adolescente de que se trate, realizar normal y expeditamente las actuaciones de la vida cotidiana que precise realizar.

Por otra parte, este mecanismo en modo alguno autoriza a que se evada un juicio de privación de patria potestad, que impone un trámite más largo, pues se tergiversaría la utilidad práctica del instituto y lo desnaturalizaría, de tal manera que el Juzgador o Juzgadora debe ser cauteloso para circunscribir ese tipo de autorizaciones de ejercicio unilateral de la patria potestad a casos específicos, documentados y urgentes que no entorpezcan el régimen legal tradicional, pero que garantice al mismo tiempo su efectividad.

Desde luego que una situación como la ofrecida en el ejemplo es perfectamente demostrable, con lo que el juzgador o la juzgadora puede resolver de manera satisfactoria una petición sobre la base del analizado artículo 262 del Código Civil, además de manera netamente temporal y sin que la decisión que se dicte al respecto cree cosa juzgada material.

Es importante tener en cuenta que esta modalidad se define como un mecanismo rápido y versátil, capaz de desarrollarse de manera inmediata en caso de ser necesario, pero al mismo tiempo garantista, en el sentido de que la rapidez en su tramitación no desconoce el régimen legal tradicional por excelencia.

Valga destacar que, si un progenitor o progenitora hace uso de este instrumento porque pretende evadir sucesivas autorizaciones para viajar, para vender, etcétera, o sencillamente quiere sustraerse deliberadamente del régimen normal de ejercicio conjunto de la patria potestad, este mecanismo no puede servirle de fundamento; recuerda la Sala, en este sentido que es un derecho fundamental reglado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Convención de los Derechos del Niño, el que los niños, niñas y adolescentes tengan una relación parental sólida, estrecha, de calidad, que redunde en una situación afectiva sana durante la niñez o adolescencia de la persona humana con ambos padres y es un deber del Estado garantizar tal. De tal modo que, validar el uso impropio de este instrumento violaría tales propósitos.

Si bien ello es cierto, debe advertir la Sala que no es concebible limitar el alcance y las bondades que ofrece el aludido mecanismo legislativo, ni hacer más complicada su tramitación, para aquellas personas que de buena fe desean hacer uso de la analizada norma.

De tal modo que, estima esta Sala que es preciso que los progenitores circunscriban sus pretensiones a las categorías diseñadas y creadas por el ordenamiento jurídico para cada caso en concreto, así: si se trata de evitar que un padre o madre que no ha cumplido con los deberes inherentes a la patria potestad y ha abandonado afectivamente a su hijo o hija, con respecto al cual se agotaron todas las fórmulas de acercamiento posible para asegurar al niño, niña o adolescentes su derecho a una relación parental consolidada, quedando entonces incurso en una causal de privación de patria potestad, el otro progenitor puede demandar la privación de patria potestad, si tal modo le conviene en atención a su estilo de vida y a sus necesidades y las del infante para no soportar la carga de concurrir numerosas veces a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para solicitar autorizaciones.

Debe quedar claro que, si un progenitor o progenitora quiere excluir caprichosamente al otro u otra del ejercicio de la patria potestad, aun cuando no se verifica una causal de privación de patria potestad de las previstas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no puede invocar residualmente la solución contemplada en el citado artículo 262.

La previsión de esta norma del Código Civil, exclusión hecha de la muerte del progenitor o progenitora y el caso de la interdicción, hace entonces posible que, en las condiciones reguladas en ese mismo dispositivo, se le reconozca la posibilidad de ejercicio de la patria potestad a un solo progenitor verificados los supuestos recogidos en el dispositivo normativo. Así las cosas, observa la Sala que la invocación de la norma contenida en el artículo 262 del Código Civil como sustento de una solicitud de este tipo, obligan al juez a examinar, a través del material probatorio suministrado por la parte interesada, la verificación del hecho que da lugar a la autorización.

Advierte la Sala, en este sentido, que como quiera que con el dispositivo legal que comentamos, no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la patria potestad, ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla, y habida consideración de que el Legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo, ni puede tener contención, amén de que bajo ningún concepto puede una resolución judicial dictada con base en este artículo crear cosa juzgada material.

En este sentido advierte la Sala que, en ausencia de una reglamentación legal para su tramitación, su propia naturaleza exige un trámite dinámico y expedito, pues, vista su utilidad práctica y sus limitaciones, no puede pretenderse que el mismo se tramite a través del mismo procedimiento que se emplea para los juicios ordinarios de privación de patria potestad, en vista de la necesidad inminente que eventualmente planteará el o la solicitante, cuyas circunstancias no permiten una demora. Es decir que, lo correcto con la finalidad perseguida por el dispositivo es recurrir para su trámite a los procedimientos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria.

Con respecto a estos procedimientos el artículo 898 del Código de Procedimiento Civil establece: *"Las determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria no causan cosa juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable"*, de allí pues que no resulte procedente que se oponga contra quien se comparte la titularidad de la patria potestad el ejercicio de ésta con carácter exclusivo, derivado de una resolución judicial basada en el artículo 262 del Código Civil.

De otra parte, estima esta Sala que la mera posibilidad de producirse contención hace que la solicitud tramitada en un procedimiento de jurisdicción voluntaria cese de inmediato; el solo hecho de que comparezca ante el tribunal respectivo el otro progenitor determina que el juez, mediante decisión, ordene inmediatamente el cierre y archivo del expediente, si para el momento no ha emitido decisión definitiva, pues una interpretación armoniosa del dispositivo permite concluir en la imposibilidad de que se planteen o admitan contradicciones o disconformidades entre las potenciales contrapartes (progenitores), de tal modo que, la simple verificación por el juez del hecho objetivo reglado en el dispositivo legal, es lo que permite sin más consideraciones el otorgamiento de la habilitación; y es que ni siquiera la norma admite un contencioso eventual, pues de haberlo expiraría *ipsofacto* el procedimiento, del mismo modo que cesa el juicio del no presente cuando quien se tenía como tal, comparece o se obtienen en forma auténtica noticias de su existencia (véase artículo 424 del Código Civil), toda vez que de su contenido se desprende que debe plantearse una mera solicitud y no un juicio contencioso, ni siquiera con un contencioso eventual.

Como corolario de lo expuesto es preciso considerar lo señalado en el artículo 901 del Código de Procedimiento Civil, que no es más que una consecuencia lógica de la ausencia de contención que debe gobernar los procedimientos de jurisdicción voluntaria o graciosa. En efecto, dispone esta norma:

> "Artículo 901
> En conformidad con el artículo 895, y dentro de los tres días siguientes al vencimiento de la articulación, el Juez dictará la resolución que corresponda sobre la solicitud; pero **si advirtiere que la cuestión planteada corresponde a la jurisdicción contenciosa, sobreseerá el procedimiento para que los interesados propongan las demandas que consideren pertinentes**".

De donde se sigue que, por su propia naturaleza, estos procedimientos graciosos no permiten controversia, al punto de que si la hubiese deviene de manera inmediata la imposibilidad de un trámite de este tipo, razón por la cual los interesados deberán debatir sus pretensiones –contrarias- en juicio contencioso.

En este mismo sentido, una autorización de este tipo, fundamentada en el tantas veces aludido artículo 262 del Código Civil, al gozar de las mismas características de todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria o graciosa

deben presumirse de buena fe *"...hasta prueba en contrario, los terceros adquirientes de derechos que hayan sido objeto de la declaración judicial"* (artículo 898 *eiusdem*). Del mismo modo, la resolución que se dicta no es oponible a terceros, pues como se dijo no crea cosa juzgada.

De lo todo lo expuesto, puede colegirse que en modo alguno puede impedirse a un tercero con un derecho que se haga parte en un asunto de su pleno interés, ni se le puede exigir del mismo modo una determinada conducta en atención a un juicio en el que no fue parte.

La mera aparición de aquél, de quien se dijo expresamente no encontrarse presente, esto es, el otro progenitor, hace que la alegación y la necesidad de suplir el consentimiento de éste cese. Por tanto, la resolución que, basada en ese supuesto de hecho, de la no presencia, se erija, pierde la base, su fundamento, y en ese sentido carece de utilidad práctica.

Cabe preguntarse: ¿Para qué se quiere una sentencia que autorice el ejercicio de la patria potestad por un solo progenitor, de conformidad con el artículo 262 del Código Civil si ya apareció el otro progenitor?; ¿Acaso el solicitante pretende sustraerse del régimen normal, de ejercicio conjunto simulando una no presencia? Y si el alegato fuese que ese progenitor o progenitora no se ocupa de su hijo: conviene incoar un juicio de privación de patria potestad, donde se debata si está incurso o no en un motivo que haga procedente la privación de este instituto, empero en modo alguno puede invocarse el mecanismo contenido en la referida norma.

Por otra parte, y en cuanto al alegato principal de la accionante respecto a la falta de su notificación de la apelación ejercida por el ciudadano Miguel Angel Rangel Ojeda, que calificó de "ilegal", observa esta Sala que no existe obstáculo alguno para que en un juicio en el que no haya contención pueda ejercerse recurso de apelación. De hecho el artículo 896 del Código de Procedimiento Civil, instrumento legal que disciplina las relaciones de derecho común, norma que las determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria son apelables, salvo disposición especial en contrario y, por lo general, rige como principio que, de existir resistencia de algún tercero, no es ésta la vía adecuada para resolver tal diferencia, de donde se colige que no es que no pueda existir controversia, si no que, si la hubiera, cesa la posibilidad de que el asunto se resuelva a través de un proceso de este tipo. Además se observa que dada su condición de solicitante en la causa no hubo interrupción del principio de la estadía a derecho de las partes, pues los lapsos en la sustanciación de dicha causa fueron cumplidos a cabalidad.

De cualquier modo, considera esta Sala que el hecho de que aparezca el progenitor cuya no presencia se alegó y sirvió de justificación para que se le atribuyera al otro progenitor el ejercicio exclusivo de la patria potestad sobre su hijo o hija, comporta un hecho sobrevenido con incidencia relevante sobre la situación jurídica, cuya sola ocurrencia hace desaparecer *ope legis* o, en otras palabras, desvirtúa por si solo los alegatos y la situación jurídica reconocida en el fallo; ello debido a la naturaleza de la institución de la patria potestad, su ejercicio y sus formas de extinción, en cuyo respeto y vigencia se encuentra interesado el orden público. Todo ello aunado al surgimiento de un evento que modificó sustancialmente la situación de hecho existente para el momento en que se dictó la declaratoria judicial, conforme a la cual ésta se produjo.

Valga aquí la importancia y el interés que tiene el Estado y su ordenamiento jurídico en la permanencia, el mantenimiento y fomento del óptimo funcionamiento de las instituciones familiares; entre ellas, la patria potestad y su incumbencia al orden público. De donde se colige que el Estado debe tutelar el magnífico funcionamiento de las relaciones familiares y sus instituciones. Cabe destacar entonces, que el juez debe ser cauteloso en el tratamiento de este tipo de institutos, como el previsto en el artículo 262 del Código Civil, a los fines de evitar el empleo de dicha norma para fines distintos a los en ella previsto o por lo menos a las exigibles de acuerdo a una interpretación armoniosa de las normas aplicables. Sin que al mismo tiempo se coarte la posibilidad de hacer uso de ese mecanismo de manera rápida y efectiva a quien realmente necesita o le urge hacerlo valer.

En efecto, considera esta Sala que no obstante esa anhelada protección al ejercicio de la patria potestad como una expresión del derecho de ambos padres de interactuar con sus hijos y el deber del Estado proveer de mecanismos óptimos para honrar y fortalecer las relaciones parentales, dignificadas en el Texto Constitucional, no escapa a la Sala una lamentable realidad y es que, en ocasiones, la paternidad o maternidad irresponsables obligan al otro progenitor a asumir la difícil jefatura de conducir y educar a sus hijos o hijas, sin la presencia y cooperación del otro progenitor, siendo el caso que para determinadas decisiones importantes de la vida del niño, niña o adolescente, el padre o madre que posee la custodia individual de éstos se encuentra en una situación de minusvalía si no cuenta con la aprobación del otro a quien la patria potestad le incumbe para asumir compromisos inmediatos, optar a programas, realizar trámites, en fin, para decidir acerca de aspectos importantes para cuya validez se requiere la intervención y aquiescencia del otro.

Ciertamente, para suplir esa necesidad es preciso el uso del dispositivo contenido en el artículo 262 del Código Civil, para aquellas ocasiones en que aun no tratándose de esta misma situación fáctica el progenitor custodio no cuente con la presencia del otro, sin que se trate de un supuesto o de privación de patria potestad. Pero siempre, se insiste, ha de tratarse de casos en que el padre o madre sencillamente por alguna razón temporal (que naturalmente puede llegar a prolongarse haciéndose indefinida) no está presente. Son tales supuestos, por ejemplo, los que reguló el Legislador en la referida norma.

De tal manera que, y atendiendo a las consideraciones antes expuestas esta Sala considera que la actuación judicial impugnada está ajustada a Derecho y no se advierten violaciones constitucionales; por el contrario, resulta evidente que el Tribunal señalado como agraviante tuteló y mantuvo incólume el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, respetando los derechos a la defensa y al debido proceso del apelante, garantizando las normas constitucionales relativas a la tutela de aquellos, debe esta Sala desestimar la protección de tutela solicitada. En tal virtud, la Sala declara improcedente *in limine litis* la acción de amparo constitucional incoada por los apoderados judiciales de la ciudadana Ruth Desire Patrizzi Gómez, contra la decisión dictada el 3 de diciembre de 2012. por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del ciudadano Miguel Ángel Rangel Ojeda contra la decisión dictada el 28 de septiembre de 2012, por el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial y revocó tal. Así se decide.

Por último, considera esta Sala preciso advertir a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, en aras de hacer más útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes, de ejercicio unilateral de la patria potestad, se tramiten conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, empero, como se estableció, será preciso que el Juzgador o juzgadora sea acucioso y exhaustivo con el material probatorio, y deberá tener como norte la búsqueda de la verdad, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria que caracterizan los procedimientos previstos y regulados por la aludida Ley Orgánica. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece con carácter vinculante para todos los tribunales de la República la utilización del referido procedimiento para tramitar la solicitud a que se refiere el artículo 262 del Código Civil. En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como también, se ordena anunciar en el portal web de este Tribunal una referencia de este fallo a los fines de su divulgación. Así se ordena.

V
DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana Ruth Desire Patrizzi Gómez, contra la decisión dictada el 3 de diciembre de 2012, por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, que declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del ciudadano Miguel Ángel Rangel Ojeda contra la decisión dictada el 28 de septiembre de 2012, por el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

SEGUNDO: ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con la siguiente indicación: "Sentencia de la Sala Constitucional que ordena, con carácter vinculante, que las solicitudes efectuadas para el ejercicio unilateral de la patria potestad, conforme al artículo 262 del Código Civil, deben tramitarse conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Se ordena igualmente hacer una referencia de este fallo en el portal web de este Alto, a los fines de su divulgación.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de abril de dos mil catorce (2014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

Vicepresidente,

FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CARRELLO

GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DEPÓSITO LEGAL: ppo 187207DF1

AÑO CXLI — MES VIII Número 40.421

Caracas, miércoles 28 de mayo de 2014

Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria
Caracas – Venezuela

Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003
en la Gaceta Oficial Nº 37.818
http://www.minci.gob.ve

Esta Gaceta contiene 96 Págs. costo equivalente a 38,85 % valor Unidad Tributaria

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES
(22 DE JULIO DE 1941)

Artículo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial

Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

AVISOS

Exp.: 3898/lore
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, siete (07) de octubre de dos mil trece (2013)
202° y 153°

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

SE HACE SABER:

A los ciudadanos **MARIA ISABEL RODRIGUEZ de ROMERO, JULIO CESAR ROMERO, JOSE ROMERO ROMERO y RITA CONSUELO ROMERO viuda de GARCIA**, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nos. **V-3.468.081, V-3.197.426, V-3.272.979, y V-2.867.465** respectivamente, domiciliados en el Municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, para que comparezcan dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a darse por citado; a cualquiera de las horas destinadas por este Tribunal para despachar de ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 am) a tres y treinta minutos de la tarde (03:30 pm). Se le advierte a la parte solicitante que de no comparecer en el término señalado por la Ley, se le designara **Defensor Público Agrario** con quién se entenderá la citación, todo de conformidad con lo previsto en el Artículo 202 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario; a fin de dar contestación a la demanda incoada en su contra dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes a la constancia en actas de la citación, más tres (03) días que se le conceden como término de distancia. Todo en el juicio que por **SIMULACIÓN** sigue la ciudadana **CECILIA COROMOTO ROMERO de HUERTA** contra los ciudadanos **MARIA ISABEL RODRIGUEZ de ROMERO, JULIO CESAR ROMERO, JOSE ROMERO ROMERO y RITA CONSUELO ROMERO viuda de GARCIA**. Publíquese en el diario **La Verdad** de esta localidad y en la **Gaceta Oficial Agraria**, de conformidad con los Artículos 202 de la Ley de Tierra y Desarrollo.-

El Juez

Mgs. Luis Enrique Castillo Soto

La Secretaria

Mgs. María José Gómez Rojas

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 10 de abril de 2014
203° y 155°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano **JOHANN GONZALEZ BUSTAMANTE,** titular de la Cédula de Identidad Nº 6.066.944, con motivo de la **MEDIDA DE PROTECCION A LOS CULTIVOS** decretada el 13 de marzo de 2012, en un lote de terreno de una hectárea (1 has), el cual se encuentra ubicado en el Sector Parque Caiza, Parroquia Caucaguita, Municipio Sucre del Estado Miranda, a favor del ciudadano **LUIS RAMÓN GARCÍA ROA,** venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.094.845, debidamente asistido por la Defensora Pública Agraria del Estado Miranda, abogada **LISBETH ARREZA,** venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.391.522, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 96.883; que una vez conste en autos la publicación, fijación y consignación del presente cartel, comenzará a computarse el lapso tres (03) días de despacho para oponerse a la medida decretada, lo cual podrá hacer en el horario comprendido de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8:30 am a 3:30 pm), exponiendo las razones o fundamentos que tuviere a bien alegar. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 246 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

EL JUEZ,

Dr. JOHBING RICHARD ALVAREZ ANDRADE

LA SECRETARIA,

Abg. DAYANA TAPIA CARABALLO